ACTO: DECRETO Nº 11.990/62.-

MATERIAS: CASA DE MONEDA - PROMOCIONES - VACANTES - CONCURSOS - JUNTA EXAMINADORA

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1962.-

Visto las presentes actuaciones por las cuales la Casa de Moneda solicita autorización para cubrir por un sistema similar al establecido por el artículo 1º del Decreto nº 7.920/61 (+), 30 cargos del Grupo I y 30 del Grupo II de la Clase E, que fueran incorporados al presupuesto de la cuenta especial "Trabajos por Cuenta de Terceros" por Decreto nº 1.452/62; y

CONSIDERANDO:

Que por el decreto citado en primer término se autorizó a la Secretaría de Hacienda para cubrir, por un procedimiento especial y como excepción a las normas vigentes, las vacantes existentes en su jurisdicción al 30 de setiembre de 1961, como así también las producidas como consecuencia de dicho acto;

Que no obstante haberse autorizado con fecha 26 de julio de 1961 por el Instituto Superior de Administración Pública, la habilitación de los cargos referidos en el preámbulo del presente y haber elevado la Casa de Moneda las propuestas de designación respectivas dentro del plazo establecido por el recordado Decreto nº 7.920/61, no

//.

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.442.-

pudo llegarse a la concreción de las correspondientes promociones, por encontrarse en trámite la incorporación de dichos cargos a la planta presupuestaria de la cuenta especial citada;

Que la relación de hechos enunciada en el considerando anterior, como así también los antecedentes agregados en autos, actualizan las razones tenidas en cuenta para el dictado del Decreto nº 7.920/61, toda vez que la provisión de los cargos creados por el Decreto nº 1.452/62 reviste carácter de urgente, a fin de no lesionar el eficaz desenvolvimiento de las respectivas tareas y normalizar el cuadro de personal especializado, asignándoles sueldos que respondan al valor de su profesión o artesanía;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Autorízase a la Casa de Moneda de la Nación para que proceda a cubrir, como caso de excepción y por un sistema similar al instituído por el artículo 1º del Decreto nº 7.920 del 8 de setiembre de 1961, 30 cargos del Grupo I y 30 del Grupo II de la Clase E, incorporados al presupuesto de la cuenta especial "Casa de Moneda - Trabajos por Cuenta de Terceros" por Decreto nº 1.452 del 13 de febrero de 1962, como así también las vacantes que se produzcan como consecuencia directa de este acto.

ARTICULO 2º.- Las promociones previstas por el artículo anterior, se ajustarán a las disposiciones del artículo 30 de la Ley nº 15.796 (º).

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray - Rafael R. Ayala

(º) Ver D.A. nº 1.330.-

ACTO: DECRETO Nº 12.198/62.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 34) - SANCIONES - CESANTIAS - EXONERACIONES - INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1962.-

Visto el Decreto nº 5.723/62 (+) y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se establece que la medida expulsiva adoptada contra un agente por un organismo estatal, fundada en indignidad moral o inobservancia de conducta decorosa y digna, ya sea en el servicio o fuera de él, dará lugar a la automática separación del causante de todos los empleos que desempeñe en dicho ámbito, sin que para ello resulte necesario la sustanciación de nuevos sumarios;

Que las cesantías o exoneraciones producidas en estas condiciones deben ser conocidas por los distintos organismos de la Administración Pública, a fin de que puedan dar cumplimiento a las expresas disposiciones del citado decreto;

Que en consecuencia, debe dictarse una norma que fije el procedimiento a seguir;

//.

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.669.-

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, en base a las facultades resultantes del Decreto-Ley nº 797/58 (°) (Ley nº 14.467) (-) y Art.20, inciso 12, de la Ley nº 14.439 (¹),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- En los casos en que se deje cesante o se exonere a un agente de la Administración Pública Nacional, en todas sus ramas estando fundada la medida en indignidad moral, inobservancia de conducta decorosa y digna, ya sea en el servicio o fuera de él, o cualquier otra que implique realizar o propiciar actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres, la repartición a la que pertenece el causante deberá, dentro de las 48 horas de dictada la medida, poner esa circunstancia en conocimiento del o los organismos en que aquél desempeñe otros cargos o funciones, según surja de la correspondiente declaración jurada de incompatibilidades, formulada en base al Régimen aprobado por Decretos nº 8.566/61 (") y complementarios.

ARTICULO 2ª.- Dicha comunicación que deberá ir acompañada de copia autenticada del acto administrativo que dispuso la baja del agente, será considerada de inmediato a los fines de la aplicación de las normas del decreto nº 5.723/62, incorporado a la reglamentación del art. 34 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional.

ARTICULO 3ª.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4ª.- Comuníquese, publíquese, desé a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

(°) Ver D.A. nº 419.-
(-) Ver D.A. nº 609.-
(¹) Ver D.A. nº 505.-
(") Ver D.A. nº1460.-

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray - Rafael R. Ayala.-

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, en base a las facultades resultantes del Decreto-Ley nº 797/58 (°) (Ley nº 14.467) (-) y Art.20, inciso 12, de la Ley nº 14.439 (¹),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- En los casos en que se deje cesante o se exonere a un agente de la Administración Pública Nacional, en todas sus ramas estando fundada la medida en indignidad moral, inobservancia de conducta decorosa y digna, ya sea en el servicio o fuera de él, o cualquier otra que implique realizar o propiciar actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres, la repartición a la que pertenece el causante deberá, dentro de las 48 horas de dictada la medida, poner esa circunstancia en conocimiento del o los organismos en que aquél desempeñe otros cargos o funciones, según surja de la correspondiente declaración jurada de incompatibilidades, formulada en base al Régimen aprobado por Decretos nº 8.566/61 (") y complementarios.

ARTICULO 2ª.- Dicha comunicación que deberá ir acompañada de copia autenticada del acto administrativo que dispuso la baja del agente, será considerada de inmediato a los fines de la aplicación de las normas del decreto nº 5.723/62, incorporado a la reglamentación del art. 34 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional.

ARTICULO 3ª.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4ª.- Comuníquese, publíquese, desé a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

(°) Ver D.A. nº 419.-
(-) Ver D.A. nº 609.-
(¹) Ver D.A. nº 505.-
(") Ver D.A. nº1460.-

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray - Rafael R. Ayala.-

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1803.-



ACTO: RESOLUCION DEL TRIBUNAL FISCAL S/N.

MATERIAS: TRIBUNAL FISCAL - RECURSO DE APELACION

Buenos Aires, 30 de octubre de 1962.-

Visto la Resolución General nº 821 (I.E.I.N.J.), dictada por la Dirección General Impositiva (B.O. nº 19.960 de fecha 27 de octubre de 1962), y

CONSIDERANDO:

Que la citada resolución adapta las disposiciones oportunamente dictadas por la Dirección General Impositiva, en cuanto al término en que deben presentarse las declaraciones generales del patrimonio, al nuevo vecimiento a que se hace mención;

Que resulta de todo punto de vista conveniente adecuar las normas dictadas por este Tribunal, referentes a los términos legales y reglamentarios, a la nueva situación creada, con el objeto de evitar inconvenientes a los contribuyentes que tienen juicios pendientes de trámite en este Tribunal;

Por ello y de acuerdo con las facultades conferidas en el artículo 124 de la ley 11.683 (t.o. en 1960),

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los recursos de apelación contra determinaciones de oficio alcanzadas por el decreto nº 6.480/62,

//.

que se encuentren en trámite ante este Tribunal, quedarán paralizados hasta el 31 de octubre de 1962, inclusive.
ARTICULO 2º.- Los plazos de ley, del reglamento de procedimiento y los señalados en las causas cuya paralización corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, quedarán suspendidos a partir del 16 de octubre de 1962, hasta el día 31 de octubre de 1962, inclusive, sin perjuicio de la validez de las actuaciones ya cumplidas.
ARTICULO 3º.- A los efectos de la presentación de escritos, pedido de desistimiento de los recursos y el archivo de las causas, se procederá en la forma establecida en los artículos 3º y 4º de la resolución de esta Presidencia, del 18 de julio de 1962.
ARTICULO 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial.-

Fdo. BENJAMIN T. BAVIO

ACTO: RESOLUCION Nº 1.775/62.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - COMISION ESPECIAL

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1962.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 11.452/62 dictado con fuerza de Ley, se creó en jurisdicción de esta Secretaría de Estado una Comisión Especial Honoraria a fin de que efectúe una revisión integral del sistema impositivo nacional vigente y proponga al Poder Ejecutivo las innovaciones y modificaciones necesarias para reestructurarlo en base a los principios técnicos más modernos, a fin de que consulte en forma armónica las necesidades y características de los distintos sectores de la actividad del país y sirva como instrumento para cumplir los grandes objetivos que orientan la política de expansión y desarrollo;

Que conforme a dicho decreto la reestructuración del sistema fiscal ha de lograrse partiendo de la idea de que es posible obtener mayores ingresos fiscales con impuestos más bajos pero más difundidos por eliminación de la evasión fiscal, para atender un presupuesto reducido a límites realmente indispensables;

Que el mismo decreto dispone que la Comisión Especial Honoraria se integrará con representantes de las

//-

entidades que agrupan a los sectores del comercio, de la industria y de la producción y de todo otro sector cuya colaboración se considere útil; con representantes de las instituciones especializadas en el estudio del derecho fiscal; con profesionales y expertos en materia tributaria; y con funcionarios oficiales, designados directamente por las reparticiones respectivas, bajo la presidencia del titular de la cartera de Hacienda.

Que, en cumplimiento de dicho decreto, y dado que la Comisión debe comenzar a funcionar antes del 1° de diciembre de 1962, es conveniente establecer desde ya los organismos oficiales que estarán representados en el seno de dicha Comisión e invitar a las entidades que agrupan a los sectores privados, a los profesionales y expertos que deseen colaborar a designar sus representantes u ofrecer su colaboración a la mayor brevedad;

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y EL SECRETARIO DE HACIENDA,

R E S U E L V E N :

1°.- La Comisión Especial Honoraria creada por Decreto N° 11.452/62 para aconsejar la reestructuración del sistema impositivo nacional estará integrada por representantes de cada uno de los siguientes entes públicos:

a) Ministerio de Economía
-Dirección Nacional de Política Económica y Financiera.

b) Secretaría de Estado de Hacienda
-Dirección General de Impuestos y Contribuciones
-Dirección General Impositiva
-Dirección Nacional de Aduanas.

2º.- Los organismos indicados en el artículo anterior deberán designar dentro de los diez días de la notificación de la presente, dos representantes titulares y dos representantes suplentes para integrar la Comisión.

La Comisión queda facultada para solicitar la designación de representantes de los Ministerios y Secretarías de Estado cuya colaboración, por la naturaleza de sus funciones, resulte necesaria.

3º.- Invitar públicamente a las universidades, a las entidades que agrupan a los sectores del comercio, de la industria, de la producción y del trabajo, a las instituciones especializadas en el estudio del derecho fiscal y a los profesionales y expertos en materia tributaria, que deseen colaborar en la reestructuración del régimen tributario, a designar sus representantes u ofrecer su colaboración dentro de los quince días de la fecha en que se publique esta resolución en la prensa diaria.

4º.- Publíquese, comuníquese y archívese.

Fdo. Alvaro C. Alsogaray
Rafael R. Ayala

ACTO: RESOLUCION Nº 12.018/62.-

MATERIAS: AUTOMOTORES OFICIALES - AUTOMOTORES ADSCRIPTOS - PROHIBICIONES

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1962.-

Visto el Régimen de Automotores Oficiales aprobado por Decretos Nros. 8.534 (¹), 11.182/61 (") y 9.353/62 (+), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3°, inciso c), del primero de esos decretos establece que el automóvil deberá quedar adscripto al servicio oficial mientras el agente reviste en la Administración, quedando entendido que el vehículo estará a disposición del funcionario titular de su propiedad, en los horarios habituales de labor del mismo, quien además está obligado a utilizarlo en los actos de servicio;

Que a su vez el artículo 8° del mismo acto de gobierno estipula que cuando un funcionario, por causa de reparaciones o por cualquier otra causa, se viera impedido de utilizar el automóvil, no le será facilitado otro en su reemplazo, y proveerá a su movilidad con sus propios recursos;

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1459.- //-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1516.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1774.-

Que la realización de comisiones de servicio dentro del territorio del país, cualquiera sea la distancia que separe al lugar donde se realicen aquéllas de la sede habitual de funciones del agente, no puede dar lugar a establecer distingos en la utilización de los Automotores afectados al régimen en cuestión, ya que éste no los efectúa;

Por ello, atento a lo informado por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 23° del Decreto N° 8.534/61,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1°.- Aclárase, a los fines de la aplicación del Régimen de Automotores Oficiales aprobado por Decretos nros. 8.534/61, 11.182/61 y 9.353/62, que los vehículos afectados a servicios generales y de inspección no pueden ser utilizados bajo ningún concepto por agentes comprendidos en dicho régimen a los que se les hubiere adscripto el respectivo automóvil, debiendo hacer uso de éste para el cumplimiento de cualquier comisión de servicio que les sea encomendada dentro del territorio del país.

2°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA

ACTO: DECRETO Nº 12.296/62.-

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - PROMOCIONES - VACANTES - CONCURSOS - JUNTA EXAMINADORA

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1962.-

Visto las presentes actuaciones por las cuales la Intervención en la Dirección Nacional de Aduanas solicita autorización para aplicar un sistema especial de promociones en su jurisdicción, y

CONSIDERANDO:

Que al respecto, tal como se señala, la medida en cuestión tiende a solucionar el problema que traería aparejado efectuar las mencionadas promociones por medio de concursos;

Que, es del caso hacer notar que el presupuesto de la citada Dirección Nacional cuenta actualmente con un número de vacantes que supera los quinientos cargos, como asimismo, que su estructura orgánica está constituida por dependencias ubicadas generalmente en el interior del país y distantes entre sí, de tal modo que realizar concursos desde la Capital obligaría a destacar comisiones examinadoras con la consiguiente erogación que tales desplazamientos implican;

Que en atención a lo expuesto procede autorizar a la Dirección Nacional de Aduanas a cubrir, por está única vez y como caso de excepción, los cargos vacantes en

//-

su jurisdicción, siguiendo para ello los lineamientos generales establecidos en el Decreto N° 7.920/61 (1);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Autorízase a la Dirección Nacional de Aduanas, para que por esta única vez y como excepción a las normas vigentes, proceda a cubrir las vacantes existentes en su jurisdicción y las que se produzcan como consecuencia directa de este acto, debiendo seguir a tal fin los lineamientos generales previstos en el régimen aprobado por Decreto N° 7.920/61.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray
Rafael R. Ayala

---

(1) Ver Digesto Administrativo N° 1442.-

ACTO: DECRETO Nº 12.297/62.-

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1962.-

Visto el Régimen de acumulación de cargos, funciones y/o pasividades, aprobado por Decreto nº 8.566 (+) y 9.677/61 (°), y

CONSIDERANDO:

Que el plazo fijado en el mismo para la presentación de las declaraciones juradas de acumulaciones, tras sucesivas prórrogas, ha quedado fijado en el 30 de junio para la generalidad de los organismos, el 31 de agosto para el personal del Ministerio de Educación y Justicia, y el 19 de setiembre para los organismos dependiente de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Defensa y Universidades Nacionales;

Que distintas jurisdicciones gestionan el otorgamiento de nuevas prórrogas, invocando la imposibilidad material de dar cumplimiento a las fijadas;

Que a tales fines resulta conveniente unificar las distintas fechas prefijadas, y prorrogarlas hasta una común a todas las jurisdicciones;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda,

//.

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.460.-
(°) Ver Digesto Administrativo nº 1.461.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1962, inclusive, el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de acumulación de cargos, previstas en el Art. 14 del Régimen aprobado por Decreto nº 8.566/61, para todos los que ocupen un cargo o puesto público civil remunerado dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, sin distinción de jurisdicciones.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray
Rafael R. Ayala.-

ACTO: DECRETO Nº 12.327/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - OBRAS PUBLICAS - CONTRATACIONES - OBRAS ARQUITECTONICAS

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1962.-

Visto que por el artículo 4º del Decreto nº 4.760 del 29 de mayo de 1962 (+) se suspende la aplicación del régimen establecido por Decreto nº 8.495/61 (º), por el término de 90 días laborables administrativos, plazo dentro del cual el Ministerio de Obras y Servicios Públicos deberá proponer las medidas pertinentes de centralización en la Dirección General de Arquitectura dependiente de la Secretaría de Estado de Obras Públicas de todas las obras arquitectónicas que actualmente realizan los distintos organismos nacionales, con excepción de las obras de carácter militar, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto nº 6.904 del 17 de julio de 1962 (ª), se dispuso la creación de una Comisión para el estudio de las citadas medidas;

Que en razón de la importancia y complejidad de los estudios que debe realizar la mencionada comisión, resulta necesario prorrogar el plazo establecido en el artículo 4º del decreto nº 4.760/62, dentro del cual el Ministe

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.640.- //..
(º) Ver Digesto Administrativo nº 1.463.-
(ª) Ver Digesto Administrativo nº 1.715.-

rio de Obras y Servicios Públicos, propondrá las medidas a que haya lugar;

Por ello, atento a lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prorrógase por el lapso de noventa (90) días laborables administrativos el plazo establecido por el artículo 4º del Decreto nº 4.760/62, dentro del cual el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, propondrá las medidas de centralización a que se refiere dicho pronunciamiento.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Obras y Servicios Públicos y de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Obras Públicas y Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a sus efectos.-

GUIDO - Julio C. Crivelli - Alvaro C. Alsogaray - Rafael R. Ayala.-

ACTO: DECRETO Nº 12.328/62.-

MATERIAS: PATRIMONIO DEL ESTADO - INMUEBLES DEL ESTADO
MUEBLES Y UTILES

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1962.-

Visto el Decreto Nº 3.660/61 (') que dispone la venta de los inmuebles del dominio privado del Estado Nacional y el Decreto Nº 8.563/62 (") por el que se encomienda la misma al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y

CONSIDERANDO:

Que tal venta se realiza con facilidades de pago garantizadas con hipoteca en primer grado sobre los bienes enajenados y a un interés anual del diez por ciento (10%);

Que por tal motivo los recursos que se obtengan se encontrarán inmovilizados y por consiguiente sustraidos a la dinámica y desplazamiento económico;

Que, en consecuencia, se hace necesario que el Poder Ejecutivo, por nuevo acto de gobierno, permita la utilización de los créditos que surjan de las referidas ventas, sin alterar su destino final, vale decir el que fija el Decreto Nº 3.660/61;

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1395.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1721.-

Que para ello resulta necesario que el Estado Nacional, titular de los respectivos créditos hipotecarios pueda negociar esos créditos con lo cual recuperaría esos fondos en forma más o menos inmediata;

Que la modalidad que podría agilizar ese tipo de transacción en operaciones financieras, ya sea de garantía o de venta de crédito, lo ofrece el pagaré hipotecario;

Que no existe inconveniente legal para la constitución de las hipotecas en primer grado, por los saldos de precio, complementadas con dichos pagarés a la orden del Estado Nacional Argentino, por igual número de cuotas con sus intereses sobre los saldos deudores de lo cual se dejará expresa constancia en las escrituras hipotecarias;

Que por otra parte los pagarés hipotecarios así logrados, que se inscriban junto con el título respectivo en el Registro de Hipotecas jurisdiccionales, no implican una mayor erogación a cargo del deudor, porque están exentos de sellados, ya que éste se abona en el contrato principal;

Que esos documentos pueden ser dados en garantía o cedidos por el simple procedimiento del endoso por el Estado Nacional acreedor, rigiendo en esta materia lo dispuesto por el artículo 624 y concordantes del Código de Comercio;

Que en cuanto a la naturaleza del sistema indicado se halla determinado en el artículo 3202 del Código Civil y en general, en lo dispuesto sobre hipoteca;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Establécese que el saldo de precio adeudado por la venta de los inmuebles comprendidos en el régimen del Decreto N° 3.660/61 y garantizados con hipotecas en

primer grado sobre los mismos en favor del Estado Nacional Argentino, se documentarán con pagarés hipotecarios a su orden.

ARTICULO 2°.- En todos los casos la cantidad de documentos que deberá suscribir el deudor será igual al número de cuotas semestrales de amortización, debiendo incluirse en el valor de los mismos los intereses que correspondan.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto, del Interior, de Economía, de Educación y Justicia, de Asistencia Social y Salud Pública, de Trabajo y Seguridad Social y de Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, de Hacienda, de Comercio, de Industria y Minería, de Energía y Combustibles, de Obras Públicas, de Comunicaciones y de Transporte.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Carlos M. Muñíz - Rodolfo Martínez - Alvaro C. Alsogaray - Alberto Rodríguez Galán - Tiburcio Padilla - Galileo Puente - Julio C. Crivelli - Gabriel Perren - Rafael R. Ayala - Jorge N. Zaefferer Toro - Fernando Meijide - Jorge Bermudez Emparanza - Pedro J. Maristany - Roberto S.J. Servente

ACTO: DECRETO Nº 12.360/62.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - PERSONAL - HORARIO REDUCIDO

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1962.-

Visto que en el Artículo 4 del Decreto nº 8.725/61(+) se determinaron los requisitos que los organismos de la Administración Pública comprendidos en el Escalafón para el Personal Civil (Decreto nº 9.530/58), deberían cumplimentar para ampliar la jornada de labor de los agentes escalafonados en las Clases "B" o "C" en Grupos de horario reducido, y

CONSIDERANDO:

Que ese procedimiento se estableció a efectos de posibilitar la solución expeditiva de los problemas que pudieran crearse con motivo del eventual incremento de las tareas inherentes a los sectores especializados, que están principalmente integrados por dichas Clases;

Que los técnicos y profesionales que revistan en las Clases "B" y "C", para la realización de las tareas de su competencia, necesitan en la mayoría de los casos contar con la cooperación de agentes subprofesionales, como así también de empleados administrativos y aun de personal de maestranza y servicios auxiliares, que revistan en las

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.472.-

//

Clases "D", "E" y "F" respectivamente;

Que en consecuencia es dable admitir, atendiendo a razones de racionalización, que en la eventualidad de aprobarse, mediante la aplicación del recurso previsto en la aludida cláusula, la ampliación de la jornada de labor de agentes de la Clases "B" y "C", pueda resultar conveniente adoptar igual temperamento con el personal afectado a horario reducido que revista en otras Clases;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del Decreto-Ley nº 797/58 (°) (Ley nº 14.467) (') y del Artículo 20º, inciso 12 de la Ley nº 14.439 ("),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Déjase establecido que el procedimiento previsto en el Artículo 4º del decreto nº 8.725/61, para posibilitar la eventual ampliación de la jornada de labor de los agentes escalafonados en Grupos de horario reducido de las Clases "B" y "C" del Escalafón aprobado por el Decreto número 9.530/58, podrá hacerse extensivo al personal que revista en las Clases "D", "E" y "F".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray
Rafael R. Ayala.-

(°) Ver Digesto Administrativo nº 419.-
(') Ver Digesto Administrativo nº 609.-
(") Ver Digesto Administrativo nº 505.-

ACTO: DECRETO Nº 12.577/62.-

MATERIAS: INCOMPATIBILIDADES - DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1962.-

Visto el Régimen de acumulación de cargos, funciones y/o pasividades aprobado por decreto nº 8.566/61 (*), y

CONSIDERANDO:

Que la fiscalización centralizada que el mismo encomienda a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación corresponde que sea cumplida por ésta mediante la aplicación del procedimiento o sistema que mejor convenga a su organización de acuerdo con la finalidad perseguida, conciliando, al propio tiempo, las exigencias técnicas con las posibilidades y la economía del sistema, ofreciendo asimismo a la citada Dirección General, la elasticidad necesaria para el oportuno cambio o ajuste del método en concordancia con el comportamiento futuro del hecho fiscalizado;

Que en otro orden de cosas resulta oportuno modificar el trámite que para la autorización de acumulación de cargos estipula el "duplicado" del formulario aprobado en el artículo 14º de dicho Régimen, por cuanto razones de orden práctico aconsejan eliminar la comunicación, entre las Reparticiones intervinientes, de la resolución adoptada, trámite que debe

//..

(*) Ver Digesto Administrativo nº 1.460.-

quedar limitado a la notificación del causante y la información por cuerda separada a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación para su verificación final;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el art. 17º del Régimen de acumulación de cargos, funciones y/o pasividades, aprobado por decreto nº 8566/61, el que deberá considerarse redactado en la siguiente forma:

"Artículo 17º.- La Dirección General del Servicio Civil tendrá a su cargo la centralización de la fiscalización del estricto cumplimiento de las disposiciones del presente, a cuyo fin procederá a verificar que las Direcciones de Administración u Organismos que haga sus veces adopten las medidas establecidas a fin de regularizar las situaciones incompatibles.

En los casos que la Dirección General del Servicio Civil compruebe situaciones de incompatibilidad no regularizadas, las comunicará al Poder Ejecutivo por intermedio de los Ministerios o Secretarías de Estado que corresponda, a los fines de las sanciones que corresponda aplicar a los responsables que hayan consentido tales situaciones".

ARTICULO 2º.- Déjase establecido que las autorizaciones para acumular cargos, funciones y/o pasividades que se acuerden en base al Régimen aprobado por decretos nº 8.566/61, 9.677/61 (º) y sus modificatorios y complementarios, deberán ser notificadas por escrito a los interesados y comunicadas por cuerda separada a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, exclusivamente, quedando sin efecto

(º) Ver Digesto Administrativo nº 1.491.-

la comunicación entre los organismos en que se declaran los cargos acumulados, prevista en el duplicado del formulario de declaración jurada aprobado en el art. 14 de dicho Régimen.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray
Rafael R. Ayala

ACTO: DECRETO Nº 12.578/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - ECONOMIAS - LIMITACION DE SERVICIOS - CESANTIAS - INDEMINIZACIONES - VACANTES - C.E.P.R.A.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1962.-

Visto el decreto-ley nº 10.582, del 10 de octubre de 1962 (+), que aprueba el Presupuesto para el Ejercicio 1962/63, y

CONSIDERANDO:

Que el art. 26º de dicho cuerpo legal autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar medidas tendientes a lograr economías en los gastos públicos mediante distintas normas de racionalización administrativa;

Que dicha prescripción legal da nueva vigencia a las similares anteriores resultantes del art. 36º de la Ley número 15.796 (º) y art. 49º de la Ley nº 16.432 (');

Que siendo necesario reglamentar su aplicación resulta conveniente mantener la vigencia de las disposiciones que, acerca de aquéllas, se aprobaran por decreto nº 6295/61 ("), se prorrogaran por el nº 6.630/62 (=), y se aclararan en lo pertinente por el nº 9.061/62 ("');

//.

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.776.-
(º) Ver Digesto Administrativo nº 1.333.-
(') Ver Digesto Administrativo nº 1.552.-
(") Ver Digesto Administrativo nº 1.426.-
(=) Ver Digesto Administrativo nº 1.670.-
('") Ver Digesto Administrativo nº 1.726.-

Que deben asignarse a la Secretaría de Estado de Hacienda las funciones que el art. 3º del decreto nº 6.295/61 atribuyera al C.E.P.R.A., organismos disuelto por decreto nº 6.863/62 (*), para la aplicación de determinadas excepciones al régimen en cuestión;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 31 de octubre de 1963 la vigencia de las normas de los decretos nº 6.295/61 y 9061/62, las que se considerarán como reglamentarias del artículo 26º del decreto-ley nº 10.582/62.

ARTICULO 2º.- La Secretaría de Estado de Hacienda tomará a su cargo las atribuciones que el art. 3º del decreto número 6.295/61 asignaba al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.).

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray
Rafael R. Ayala.-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1.672.-

ACTO: EXPEDIENTE Nº 62.293/60.-

MATERIAS: EMPRESAS PERIODISTICAS - CREDITOS - EMPRESAS INTERDICTAS - PATRIMONIO DEL ESTADO

Señor Secretario de Estado de Hacienda:

Empresas Periodísticas Hearst solicita el pago de un crédito de alrededor de $ 98.000 proveniente del aumento de precio de los servicios informativos prestados al diario "Noticias Gráficas" durante el período diciembre 1955-agosto 1956 y originado, según afirma, en la alteración del valor del dólar por medidas tomadas por el Poder Ejecutivo.

En la época en que se prestaron esos servicios, la "Editorial Democracia S.A." a la que pertenecía el diario "Noticias Gráficas", se encontraba intervenida por el Estado y administrada por un interventor administrador designado por el mismo (decreto-ley 5148/55; decreto 93, del 23/IX/55), y también dentro de ese período se produjo la transferencia de la empresa al patrimonio fiscal (resolución de la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial de 28 de febrero de 1956). Hay, pues, en ese período, dos etapas: desde diciembre de 1955 hasta el 28 de febrero de 1956 la empresa estuvo administrada por el Estado; a partir de esta última fecha éste actuó en calidad de dueño.

En principio y dejando por el momento de lado el problema derivado de ese doble carácter que invistió el

//-

Estado en sus relaciones con la reclamante en el período considerado, estimo que la petición debe ser resuelta favorablemente. Por aplicación de la cláusula 8a. del contrato celebrado en agosto de 1952, éste venció el 31 de julio de 1954, quedando renovado automáticamente por períodos anuales a partir del 1° de agosto de 1954 y del 1° de agosto de 1955 al no ser denunciado, con noventa días de anticipación, por ninguna de las partes. La comunicación del aumento del precio de los servicios se hizo en noviembre de 1955 (ya en rigor la segunda renovación automática) y el Estado, sin objeción normal y fehaciente, siguió utilizando los servicios, por lo que debe admitirse que consintió tácitamente la alteración del precio (arts. 1145, 1146 y concordantes código civil), que, por otra parte, y según resulta del informe de fs. 62, se produjo simultáneamente para otros servicios similares prestados por la Empresa. Esta, por su parte, hizo reserva en los recibos cuyas copias fotográficas obran a fs. 12/26, de la falta de pago del saldo, documentado en facturas por la diferencia (véase informe de fs. 28). Por otra parte, a partir del 1° de setiembre de 1956, la intervención del diario empezó a pagar el nuevo precio, quedando pendientes las facturas por los meses de diciembre 1955 a agosto 1956.

Por lo que hace al período en que el diario "Noticias Gráficas" estuvo bajo administración y no bajo dominio estatal, originariamente la Procuración del Tesoro sostuvo que podían considerarse a cargo del Estado las deudas contraídas por éste durante la administración y/o dominio de los bienes de las empresas interdictas que pasaron a integrar el patrimonio del Estado Nacional hasta la fecha en que dichos bienes fueron adjudicados por licitación según lo dispuesto por el decreto-ley 5830/57 (expte. 76.987/58, Hacienda, Dictámenes t.67, p.207; véase en igual sentido expte 60.225/59, Hacienda, Dictámenes t.68,p.221). Posteriormente, a partir del dictamen recaído en el expediente

62.786/59 (') Hacienda, Dictámenes t. 71, pág. 138; véase también p.147 y t. 73, p.218), se sostuvo la tesis de que el Estado no responde por las deudas contraídas durante el período de intervención ya que en esa emergencia actuó como interventor administrador, sometido a las normas del derecho común.

El actual titular de esta Procuración ha ratificado la doctrina de su antecesor (ver Dictámenes t.74, p.232 y 237; t. 75, p. 94), con cita incluso del dictamen del expediente 62.786/59. Pero en este caso en que específicamente debo pronunciarme acerca de la responsabilidad del Estado - por deudas contraídas por administradores estatales en empresas que posteriormente se incorporaron a su patrimonio, deseo manifestar que mi adhesión a la doctrina de aquel - dictamen se limita a los casos en que el patrimonio administrado por el Estado volvió a sus dueños particulares y no se convirtió en propiedad estatal.

Si bien es cierto que el régimen de los bienes interdictos está sujeto a una legislación especial y no a las - normas comunes, ello es así en lo que respecta a las relaciones con la persona interdicta y con sus acreedores. Pero con referencia a los terceros que contrataron con los - administradores estatales la prestación de elementos o servicios gracias a los cuales pudo continuar la explotación de empresas posteriormente incorporadas al patrimonio del Estado, la situación no se encuentra prevista en la legislación especial y entiendo que el problema debe resolverse de conformidad al régimen común, como se señalaba en el - dictamen del expediente 62.786/59. Sobre este particular, encuentro que la situación del Estado-administrador es equiparable a la del gestor de negocios (artículos 228 y ss., código civil) que entendió hacer un negocio propio o común a él y a otro, teniendo sólo en mira su propio interés, la intervención de las empresas interdictas fué una medida -

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1125.-

precautoria tendiente a asegurar los fines y previsiones del decreto-ley 5148/55 (artículo 1º), encontrándose entre ellos la devolución de los bienes mal habidos al patrimonio del Estado (considerandos 1º y 7º; artículo 4º). De modo que en la gestión de negocios emprendida por el Estado a raíz de ese decreto-ley, existía un eventual interés directo del mismo, que se materializó cuando los bienes a los que se refería la gestión se incorporaron al patrimonio estatal. En tales condiciones, de conformidad al art. 2302 del código civil, existe una responsabilidad directa del gestor por las nuevas obligaciones contraídas durante su gestión y en cuanto exceda de la utilidad obtenida por el dueño; en este caso, dada la transferencia de los bienes al Estado, no parece haber obtenido utilidad el ex dueño de los servicios de cuyo pago se trata.

Esta solución jurídica coincide, por otra parte, con la solución de equidad. Los proveedores de las empresas intervenidas por el Estado, que sabían sujetas a la eventualidad muy probable de que sus bienes -prenda común de los acreedores- fueran transferidos al Estado, no habrían dado crédito alguno a los administradores estatales de no estar convencidos de que el poder público asumiría el cumplimiento de las obligaciones contraídas, de producirse dicha transferencia, y a que lo contrario habría supuesto prácticamente la pérdida del crédito. Esa creencia tenía un fundamento jurídico, como se ha visto, ya que era evidente que el Estado realizaba una gestión en que tenía interés directo y no la hacía puramente en beneficio del dueño; y en tales condiciones, la norma antes citada establece la responsabilidad del gestor.

Por lo expuesto, considero que deben hacerse lugar al pago reclamado.-

PROCURACION DEL TESORO, 6 de noviembre de 1961.-

Fdo. CARLOS MARIA BIDEGAIN
Procurador del Tesoro de la Nación.

Estado en sus relaciones con la reclamante en el período considerado, estimo que la petición debe ser resuelta favorablemente. Por aplicación de la cláusula 8a. del contrato celebrado en agosto de 1952, éste venció el 31 de julio de 1954, quedando renovado automáticamente por períodos anuales a partir del 1° de agosto de 1954 y del 1° de agosto de 1955 al no ser denunciado, con noventa días de anticipación, por ninguna de las partes. La comunicación del aumento del precio de los servicios se hizo en noviembre de 1955 (ya en rigor la segunda renovación automática) y el Estado, sin objeción normal y fehaciente, siguió utilizando los servicios, por lo que debe admitirse que consintió tácitamente la alteración del precio (arts. 1145, 1146 y concordantes código civil), que, por otra parte, y según resulta del informe de fs. 62, se produjo simultáneamente para otros servicios similares prestados por la Empresa. Esta, por su parte, hizo reserva en los recibos cuyas copias fotográficas obran a fs. 12/26, de la falta de pago del saldo, documentado en facturas por la diferencia (véase informe de fs. 28). Por otra parte, a partir del 1° de setiembre de 1956, la intervención del diario empezó a pagar el nuevo precio, quedando pendientes las facturas por los meses de diciembre 1955 a agosto 1956.

Por lo que hace al período en que el diario "Noticias Gráficas" estuvo bajo administración y no bajo dominio estatal, originariamente la Procuración del Tesoro sostuvo que podían considerarse a cargo del Estado las deudas contraídas por éste durante la administración y/o dominio de los bienes de las empresas interdictas que pasaron a integrar el patrimonio del Estado Nacional hasta la fecha en que dichos bienes fueron adjudicados por licitación según lo dispuesto por el decreto-ley 5830/57 (expte. 76.987/58, Hacienda, Dictámenes t.67, p.207; véase en igual sentido expte 60.225/59, Hacienda, Dictámenes t.68,p.221). Posteriormente, a partir del dictamen recaído en el expediente

62.786/59 (') Hacienda, Dictámenes t. 71, pág. 138; véase también p.147 y t. 73, p.218), se sostuvo la tesis de que el Estado no responde por las deudas contraídas durante el período de intervención ya que en esa emergencia actuó como interventor administrador, sometido a las normas del derecho común.

El actual titular de esta Procuración ha ratificado la doctrina de su antecesor (ver Dictámenes t.74, p.232 y 237; t. 75, p. 94), con cita incluso del dictamen del expediente 62.786/59. Pero en este caso en que específicamente debo pronunciarme acerca de la responsabilidad del Estado - por deudas contraídas por administradores estatales en empresas que posteriormente se incorporaron a su patrimonio, deseo manifestar que mi adhesión a la doctrina de aquel - dictamen se limita a los casos en que el patrimonio administrado por el Estado volvió a sus dueños particulares y no se convirtió en propiedad estatal.

Si bien es cierto que el régimen de los bienes interdictos está sujeto a una legislación especial y no a las - normas comunes, ello es así en lo que respecta a las relaciones con la persona interdicta y con sus acreedores. Pero con referencia a los terceros que contrataron con los - administradores estatales la prestación de elementos o servicios gracias a los cuales pudo continuar la explotación de empresas posteriormente incorporadas al patrimonio del Estado, la situación no se encuentra prevista en la legislación especial y entiendo que el problema debe resolverse de conformidad al régimen común, como se señalaba en el - dictamen del expediente 62.786/59. Sobre este particular, encuentro que la situación del Estado-administrador es equiparable a la del gestor de negocios (artículos 228 y ss., código civil) que entendió hacer un negocio propio o común a él y a otro, teniendo sólo en mira su propio interés, la intervención de las empresas interdictas fué una medida -

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1125.-

precautoria tendiente a asegurar los fines y previsiones del decreto-ley 5148/55 (artículo 1º), encontrándose entre ellos la devolución de los bienes mal habidos al patrimonio del Estado (considerandos 1º y 7º; artículo 4º). De modo que en la gestión de negocios emprendida por el Estado a raíz de ese decreto-ley, existía un eventual interés directo del mismo, que se materializó cuando los bienes a los que se refería la gestión se incorporaron al patrimonio estatal. En tales condiciones, de conformidad al art. 2302 del código civil, existe una responsabilidad directa del gestor por las nuevas obligaciones contraídas durante su gestión y en cuanto exceda de la utilidad obtenida por el dueño; en este caso, dada la transferencia de los bienes al Estado, no parece haber obtenido utilidad el ex dueño de los servicios de cuyo pago se trata.

Esta solución jurídica coincide, por otra parte, con la solución de equidad. Los proveedores de las empresas intervenidas por el Estado, que sabían sujetas a la eventualidad muy probable de que sus bienes -prenda común de los acreedores- fueran transferidos al Estado, no habrían dado crédito alguno a los administradores estatales de no estar convencidos de que el poder público asumiría el cumplimiento de las obligaciones contraídas, de producirse dicha transferencia, y a que lo contrario habría supuesto prácticamente la pérdida del crédito. Esa creencia tenía un fundamento jurídico, como se ha visto, ya que era evidente que el Estado realizaba una gestión en que tenía interés directo y no la hacía puramente en beneficio del dueño; y en tales condiciones, la norma antes citada establece la responsabilidad del gestor.

Por lo expuesto, considero que deben hacerse lugar al pago reclamado.-

PROCURACION DEL TESORO, 6 de noviembre de 1961.-

Fdo. CARLOS MARIA BIDEGAIN
Procurador del Tesoro de la Nación.

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	N° 1814.-

ACTO: DECRETO-LEY Nº 12.530/62.-

MATERIAS: PARTIDOS POLITICOS - PROHIBICIONES - PERSONAL FUNCIONARIOS PUBLICOS

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1962.-

Visto lo dispuesto por decreto 9.747/1962 (')

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Apruébase el adjunto "Estatuto de los Partidos Políticos" y la "Exposición de Motivos" que lo fundamenta.

ARTICULO 2º.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a las normas de dicho estatuto y, en particular, los decretos 4.420/62 (") , 7.162/62 (°) y 8.162/62.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior y de Defensa Nacional.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Rodolfo Martínez (h).
José M. Astigueta.

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1738.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1628.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1692.-

EXPOSICION DE MOTIVOS

La vida de los partidos políticos se rige por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que acuerda a todos los habitantes de la Nación el derecho de "asociarse con fines útiles".

Ningún derecho es, sin embargo, absoluto, porque si lo fuera significaría opresión para los demás. Los derechos - individuales -y, entre ellos, el de asociación- están sometidos "a las leyes que reglamentan su ejercicio", porque - deben ser incorporados y subordinados a la comunidad.

Pero no es ésta la principal razón para reglamentar el derecho de asociación en el terreno político. Es difícil, a esta altura de los tiempos, asimilar a las asociaciones partidarias a una sociedad del derecho civil. Los partidos políticos no son solamente grupos de personas congregadas en torno de un objetivo común. Son órganos esenciales de la democracia representativa. Ellos tienen el monopolio de las candidaturas. A través de sus estructuras desfilan los hombres y las ideas que determinan el ejercicio del poder. La Nación, como consecuencia de una larga evolución por la - que han atravesado todos los regímenes democráticos, ha confiado el dominio y la administración de su vida pública a los partidos. De ellos depende el éxito o el fracaso de la empresa común y es a ellos, pues, en gran medida, que corresponde la grave responsabilidad de llevar adelante el país en estos tiempos de confusión y de crisis nacional.

No debe extrañar, por lo tanto, que la primera preocupación de todo gobierno que actúa en medio de crisis como la actual sea la reglamentación de la vida partidaria. En - 1956 y en 1962 el Poder Ejecutivo ha debido ocuparse de - los partidos mediante decretos-leyes. El estatuto de 1956 rigió la vida partidaria por seis años. Simple en sus previsiones, pecó quizás por no prever sanciones contra la violación de las normas que establecía. El estatuto sancionado en agosto de este año constituía un verdadero códi

go político y electoral susceptible, quizás, de aplicación en tiempos normales, pero, como los hechos lo demostraron, impotente para ordenar razonablemente la vida partidaria - hacia una rápida normalización institucional.

Ambos extremos han sido cuidadosamente evitados en el decreto-ley al que estas palabras sirven de fundamento. El Estatuto respeta la vida interna de los partidos y no pretende interferir en procesos y modalidades que deben quedar librados a las autoridades y los afiliados. Se limita, por lo tanto, a establecer algunas normas sencillas que aseguran la democracia interna de las agrupaciones y les exigen acreditar un mínimo de representatividad para participar - del privilegio de las candidaturas.

El Gobierno cree, en este sentido, que no es posible - admitir en la vida democrática a partidos que no incorporen a sus propias estructuras los mismos principios representativos que públicamente defienden. Por eso exige el Estatuto que las autoridades partidarias surjan de abajo hacia arriba y que se abstengan de la prédica de los procedimientos propios de regímenes totalitarios. Esta previsión alcanza a los símbolos de estos regímenes, entendida la palabra "símbolo" en un sentido lato. Hacer lo contrario sería invitar a los enemigos del sistema a gozar de sus beneficios para destruirlo desde adentro. La clásica democracia liberal sucumbió en Alemania y en Italia de este modo. Hoy el mundo libre muestra, en todas partes, democracias - representativas que otorgan amplios derechos a los partidos pero que excluyen de la libre convivencia a quienes, por - su programa o por sus acciones, pretenden implantar un régimen de fuerza. Con estos recaudos simples y necesarios , el Estatuto asegura a todas las corrientes populares la posibilidad de integrarse, sin enconos y sin exclusiones, en la vida democrática. No hay en este Estatuto una sola norma de proscripción. Sólo se imponen exigencias mínimas y comunes a todos los partidos y se da a los jueces la posi-

bilidad de hacer cumplir lo que está establecido. En vano se buscará en sus normas cualquier referencia al pasado: dentro de ellas, todos los argentinos tienen la pportunidad efectiva de participar activamente de la vida política nacional.

Al exigir un porcentaje mínimo para oficializar listas de candidatos y fundar agrupaciones, se ha procurado evitar la proliferación de las agrupaciones más allá de lo razonable. Recuérdese, en este sentido, que el Gobierno ha adoptado el régimen proporcional para las próximas elecciones. Si no lo proteje con normas que aseguren un mínimo de representatividad a quienes pretendan acogerse a él, en la vida política puede reinar la confusión de la multiplicidad.

Hay en el Estatuto, por lo tanto, el máximo de libertad y el mínimo de recaudos que resiste la situación actual. Pero sus normas no agotan la situación argentina. El Estatuto es sólo una forma, una estructura, una herramienta de trabajo de la democracia. La tarea fundamental corresponde a sus destinatarios, cuya responsabilidad aumenta en la misma medida que su libertad.

ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Ambito de Aplicación

ARTICULO 1º.- El presente estatuto regirá para los partidos políticos que se propongan intervenir en la elección de miembros de los poderes públicos de la Nación y de la Municipalidad de la Capital Federal.

Requisitos para la autorización

ARTICULO 2º.- La autorización para funcionar como partido político en un distrito está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Acreditar un acuerdo de voluntades por escrito y firmado por un número de electores no inferior al 0,4 % del total de inscriptos en el registro electoral del distrito correspondiente hasta un máximo de 1.000.000 y sin computar el excedente, o a 500 si de aquel porcentaje resultare una cifra menor, relativo a:

   a) el nombre y domicilio del partido;
   b) la declaración de principios y el programa de acción política;
   c) la carta orgánica; y
   d) la designación de autoridades y apoderados.

   Los firmantes del acuerdo de voluntades a que se refiere este inciso sólo podrán hacerlo para un solo partido y siempre y cuando no fueren afiliados a otro.

2) Solicitar la autorización al juez nacional electoral del distrito, acompañando el documento en el que conste el acuerdo de voluntades antes referido y una planilla con el nombre y domicilio de los firmantes, número de cédula de identidad y de matrícula.

ARTICULO 3º.- Las agrupaciones que deseen actuar como partidos políticos en dos o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa de acción política y carta orgánica, deberán requerir la autorización para funcionar al juez nacional electoral del distrito de la fundación, ante quien deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 2º. Además, en ese mismo acto, deberán probar la adhesión de un número de electores no inferior al 0,4 % del total de inscriptos en el registro electoral del distrito correspondiente hasta un máximo de 1.000.000 y sin computar el excedente, o a 500, si de tal porcentaje resultare una cifra menor.

La autorización para funcionar así concedida les permitirá actuar en todos los distritos electorales, siempre que se inscriban ante los jueces electorales de los distri

tos donde deseen actuar y cumplan ante ellos los siguientes requisitos:

1) acompañar testimonio de la resolución que les autoriza a funcionar y de la declaración de principios, programa de acción política y carta orgánica;

2) acompañar nómina de las autoridades nacionales del partido y de las del distrito;

3) acreditar la adhesión de un número de electores no inferior al 0,4 % del total de inscriptos en el registro electoral del distrito correspondiente hasta un máximo de 1.000.000 y sin computar el excedente, o a 500 si de aquel porcentaje resultare una cifra menor;

4) fijar domicilio y designar apoderados.

ARTICULO 4º.- Las normas del presente estatuto son aplicables a la constitución, funcionamiento y disolución de las uniones o acuerdos permanentes o transitorios de partidos o asociaciones o federaciones de partidos de distritos que agrupen a dos o más partidos políticos ya autorizados a funcionar. Ello en cuanto dichas normas no sean incompatibles con la naturaleza de tales asociaciones.

Para constituirse deberán requerir la autorización respectiva al juez nacional electoral del distrito del domicilio, y cumplir los siguientes requisitos:

1) indicar los partidos que constituirán la entidad y acreditar su voluntad de formarla, expresada por la autoridad partidaria competente;

2) acompañar testimonio de la resolución que autorice a funcionar a cada uno de los partidos integrantes de la entidad y de sus respectivas declaraciones de principios, programa de acción política, carta orgánica y nómina de autoridades;

3) acompañar la declaración de principios, programa de -

acción política y carta orgánica de la nueva entidad, ajustados a las disposiciones de este estatuto;

4) indicar el nombre, domicilio, autoridad y apoderados - de la nueva entidad.

Nombre y domicilio

ARTICULO 5º.- El nombre no podrá contener designaciones - personales ni derivados de ellas, ni que provoquen confu - sión. No podrán usarse vocablos que afecten o puedan afectar las relaciones exteriores de la Nación, ni que indiquen antagonismos hacia personas, clases, razas o religiones o que promuevan discordia entre los habitantes de la República o impliquen contradicción con normas del presente estatuto. En adelante el nombre de los partidos no podrá formarse mediante aditamentos o supresiones de vocablos al de cualquier otro partido. No podrá usarse el vocablo "internacional".

Los partidos deberán constituir domicilio en la ciudad capital correspondiente al distrito en que soliciten autorización para funcionar.

Declaración de principios y programa de acción política

ARTICULO 6º.- La declaración de principios y el programa - de acción política deberán propugnar expresamente el mantenimiento del régimen democrático, republicano, representativo y federal de gobierno y la vigencia de las libertades, derechos y garantías individuales que consagra la Constitución Nacional.

Esta afirmación obliga, en todo tiempo, al partido que las formule, a sus autoridades, candidatos y afiliados, a ajustar fielmente su conducta a los siguientes principios inherentes a la forma republicana de gobierno, sin perjuicio de otros no enumerados:

1) el respeto de las libertades, derechos y garantías individuales y, en particular, del derecho de publicar ideas, opiniones e informaciones por la prensa y otros medios de expresión, sin censura previa ni restricciones irrazonables;

2) el ejercicio dividido de las atribuciones del poder - por los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, con garantías que permitan el funcionamiento imparcial e independiente del poder judicial;

3) el rechazo de todo intento de discriminación arbitraria por causa de filiación partidaria, religión, raza, sexo o color;

4) la renovación periódica de los órganos representativos, de conformidad a las expresiones de la voluntad ciudadana en procesos electorales correctos;

5) el derecho de los ciudadanos de constituir y mantener en funcionamiento otros partidos políticos democráticos, asegurándoles la libre expresión de sus ideas, opiniones y críticas, la utilización de los medios públicos de difusión en condiciones equivalentes y una razonable representación en los órganos electivos;

6) no utilizar los símbolos de dictaduras pasadas o presentes;

7) no pretender la implantación de regímenes totalitarios o dictatoriales;

8) no aceptar la jefatura, el liderazgo o la ingerencia de gobiernos o partidos extranjeros o de grupos extrapartidarios o de personas que residan en el exterior o estén inhabilitados por las leyes para el ejercicio de los derechos electorales;

9) el imperio del derecho y la exclusión de todo recurso

o incitación a la violencia o a la lucha de clases o a antagonismos entre sectores políticos, religiosos, sociales o raciales, y del culto de la personalidad - expresado en actos de sumisión, o en homenajes insólitos, que la tradición republicana del país reserva a los próceres y fechas nacionales.

ARTICULO 7º.- Se considera de pleno derecho que no se ajustan a las exigencias del artículo 6º quienes, bajo cualquier denominación, propugnen abierta o solapadamente el establecimiento de la dictadura de una persona, clase o grupo. Están comprendidos en esta previsión los partidos de índole totalitaria, sus derivados y aliados y aquellos que se solidaricen con regímenes extranjeros de ese carácter.

La propaganda y proselitismo político se ajustará estrictamente a las normas establecidas en este artículo y en el anterior.

Carta Orgánica

ARTICULO 8º.- La carta orgánica debe ajustarse a las siguientes disposiciones:

1) asegurará la libertad y corrección de las afiliaciones y la apertura del registro de afiliados por un período no inferior a dos meses por año;

2) establecerá la participación directa o indirecta de los afiliados en la dirección, gobierno, administración y fiscalización del partido y en la elección de sus autoridades y candidatos mediante voto secreto, y garantizará la realización de comicios internos correctos, con adecuada representación de las minorías;

3) determinará el régimen patrimonial y contable, asegurando su publicidad y fiscalización;

4) establecerá las causas de extinción del partido.

Procedimiento para la autorización

ARTICULO 9º.- El juez electoral competente comprobará la autenticidad de las firmas y veracidad de los hechos de datos invocados en la solicitud y documentación anexa, habilitando días y horas si fuere necesario. Por el mismo acto en que se tenga por efectuada esta comprobación, convocará a juicio verbal, que deberá tener lugar dentro de los diez días hábiles siguientes, al procurador fiscal electoral y a los apoderados de los partidos reconocidos o en formación en el distrito. Estos podrán manifestar en esa audiencia su oposición a la solicitud concurriendo con todas las pruebas que tuvieren para fundarla.

El juez electoral, analizados todos los antecedentes, aprobará o rechazará la solicitud en el término de diez días hábiles del juicio verbal.

Si recayera sentencia firme denegatoria en una solicitud de autorización, se podrá formular un nuevo pedido ajustado a las exigencias legales.

El juez electoral dispondrá al conceder la autorización, la publicación en el Boletín Oficial, por un día, del auto probatorio de la personalidad del partido y de su carta orgánica.

Personalidad jurídica

ARTICULO 10.- La autorización para funcionar a un partido político importará el reconocimiento de su carácter de persona jurídica para todos los efectos del derecho privado.

El contralor de los partidos políticos reconocidos estará a cargo exclusivo de la Justicia Nacional Electoral.

Obligaciones de los partidos políticos reconocidos

ARTICULO 11.- Los partidos políticos reconocidos deberán:

1) dar estricto cumplimiento a este estatuto, a su carta

orgánica y a las demás leyes y reglamentaciones que se refieren a su actividad;

2) llevar como mínimo, por intermedio de cada filial o comité, los siguientes libros rubricados y sellados por el juez electoral correspondiente, con indicación de la filial o comité a que pertenezca;

   a) libro de registro de afiliados, donde constará el nombre de los ciudadanos inscriptos, firma, domicilio, número de matrícula individual, clase y ocupación. Las firmas pueden ser llevadas en fichas de afiliación;
   b) libro de inventario;
   c) libro de caja, debiendo conservarse la documentación complementaria correspondiente;
   d) libro de actas;

3) aprobar una plataforma electoral antes de la elección de sus candidatos, de acuerdo con la declaración de principios y programas de acción de la que se enviará copia al juez electoral;

4) someter a la aprobación de la Justicia Nacional Electoral, toda modificación al nombre, declaración de principios, programa de acción política o carta orgánica, resuelta por los órganos partidarios competentes, a los efectos de verificar su conformidad con las normas del presente estatuto y demás leyes aplicables a los partidos.

Afiliaciones

ARTICULO 12.- La afiliación deberá ajustarse a las siguientes condiciones;

1) el elector interesado deberá;

   a) estar inscripto en el registro electoral del distrito correspondiente y comprobar la identidad con

la libreta de enrolamiento o libreta cívica;

b) presentar una solicitud en ficha formulario por cuadruplicado, con la certificación de la autenticidad de la firma o impresión digital en forma fehaciente a juicio de la Justicia Nacional Electoral;

2) No podrán afiliarse:

a) los excluídos del registro electoral en virtud de las disposiciones legales vigentes;
b) los que estén afiliados a otros partidos políticos;
c) el personal de las fuerzas armadas en actividad y los retirados llamados a prestar servicio;
d) el personal de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias y sus equivalentes en actividad o jubilados llamados a prestar servicio;
e) los magistrados de la administración de justicia.

3) La solicitud de afiliación debe ser resuelta por la autoridad correspondiente del partido dentro de los diez días corridos de su presentación. Si fuere admitida, el partido conservará una ficha y dos de ellas serán remitidas al juez electoral;

4) la afiliación se extingue por renuncia ante el partido o la autoridad judicial, por expulsión o por inhabilidad fundada en lo dispuesto en los incisos 1) y 2) de este artículo.

El partido comunicará al juez electoral la cancelación de la afiliación partidaria dentro del tercer día de la respectiva resolución.

Fichero y registro de afiliados

ARTICULO 13.- La Justicia Nacional Electoral formará un fichero de afiliados de partidos políticos y fiscalizará los registros de afiliados.

Los partidos deberán remitir al juez electoral, copia actualizada y autenticada de los registros de afiliados el

1º de diciembre de cada año, antes de cada elección interna y cada vez que el juez lo solicite.

Elecciones partidarias

ARTICULO 14.- Las elecciones internas de los partidos se regirán por las normas de sus respectivas cartas orgánicas y por las disposiciones de este estatuto.

La Justicia Nacional Electoral podrá designar veedores de los actos electorales partidarios y deberá hacerlo a pedido de parte interesada.

Los resultados de las elecciones internas serán comunicados al juez nacional electoral del distrito.

Incompatibilidades

ARTICULO 15.- No podrán ser designados para ejercer cargos partidarios ni podrán ser candidatos a cargos electivos nacionales o municipales de la Capital Federal:

1) quienes ejerzan la dirección de empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas;

2) quienes desempeñen cargos directivos en asociaciones sindicales de obreros o de empleadores o quienes los hayan desempeñado hasta un año antes de la fecha de la designación o elección partidaria;

3) quienes residiendo en el extranjero tengan proceso abierto por delitos que no sean culposos o se hubiesen sustraído a la acción de la justicia en procesos incoados por iguales delitos, aunque la acción penal estuviere prescripta; aquellos contra los que se hubiere dictado auto de prisión preventiva, inclusive por malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios o negociaciones incompatibles con la función pública. Todas estas inhabilitaciones cesan con la absolución o el sobreseimiento definitivo;

4) los que se encuentren afectados por las inhabilidades establecidas por las leyes electorales;

5) los miembros de las fuerzas armadas en servicio activo y los que hayan pasado a situación de retiro dentro de un año antes de la designación o elección partidaria.

Oficialización de listas de candidatos

ARTICULO 16.- Cuando las actitudes o manifestaciones de los partidos, sus autoridades o candidatos estén comprendidos en las prohibiciones del artículo 7º o contradigan lo dispuesto en el artículo 6º, o infrinjan en forma grave las demás obligaciones que les impone el presente estatuto, el juez negará la oficialización de las listas de candidatos o revocará las que haya otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, inciso 5).

Cuando la infracción consistiera en la inclusión de candidatos pública y notoriamente inhabilitados, se negará la oficialización de toda la lista. Si la inhabilitación no tuviera ese carácter, procederá la sustitución del candidato, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del decreto-ley nº 4.034/57 (texto ordenado).

Contribuciones prohibidas

ARTICULO 17.- Les está prohibido a los partidos políticos la aceptación de aportes, donaciones o uso gratuito de bienes o servicios efectuados por:

1) la Nación, provincias, municipalidades o entidades descentralizadas, cuando tengan carácter especial o de privilegio;

2) empresas concesionarias de servicios u obras públicas de toda especie o personas de existencia ideal o visible que exploten juegos de azar, o asociaciones o autoridades extranjeras, o contratistas o proveedores habi

tuales de la administración pública o entes descentralizados;

3) asociaciones obreras, patronales o profesionales;

4) las personas comprendidas en el artículo 15, inciso 4);

5) personas que se encuentren en relación de subordinación o dependencia, cuando ellos hayan sido impuestos obligatoriamente o requeridos por las autoridades o superiores jerárquicos o empleadores.

Asimismo les está prohibida la aceptación de aportes o donaciones anónimas. Los donantes podrán imponer la obligación de que su nombre no se publique, pero los partidos deberán conservar la documentación necesaria para acreditar el origen de la donación.

Control patrimonial

ARTICULO 18.- Los partidos políticos por el órgano que determine la carta orgánica, deberán:

1) llevar contabilidad detallada de toda entrada o salida de bienes, con expresión de su fecha y de los nombres y domicilios de las personas que los hubieren ingresado o recibido.
Esta contabilidad deberá conservarse durante diez ejercicios económico-financieros, con todos sus comprobantes;

2) presentar al juez electoral, dentro de los sesenta días de cerrado el ejercicio, copia detallada del balance anual correspondiente al ejercicio económico-financiero, que deberá ser publicado por un día en el Boletín Oficial;

3) presentar al juez electoral, dentro de los sesenta días

de celebrado cada acto electoral nacional en que hubiere participado el partido, el detalle de los ingresos y egresos, en dinero y en especie, correspondientes al partido, así como los que individualmente pudiesen haber realizado sus candidatos y autoridades.

ARTICULO 19.- El juez electoral competente hará saber que las cuentas y documentos estarán por treinta días hábiles en secretaría para conocimiento de los interesados. Si en el término de cinco días hábiles de vencido el plazo anterior no se formularan observaciones, ordenará el archivo de las cuentas. Si fueran observadas por infracción a las normas legales o de la carta orgánica, el juez resolverá y, en su caso, aplicará las sanciones pertinentes.

Sanciones

ARTICULO 20.- Los partidos políticos que incurran en transgresión a las normas sobre formación del patrimonio serán condenados a entregar al Consejo Nacional de Educación un importe igual al de la donación o aporte ilícitamente recibido.

ARTICULO 21.- Las personas de existencia ideal que efectúen aportes o donaciones en transgresión a lo dispuesto en el artículo 17, serán pasibles de una multa por un importe igual al décuplo de la donación o aporte o del valor estimado de los bienes y servicios. Ello sin perjuicio de la pena corporal que pueda corresponder a sus directores, gerentes, representantes o agentes.

ARTICULO 22.- Serán reprimidos con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por doble término:

1) los funcionarios responsables de las donaciones, aportes, o uso gratuito de bienes o servicios efectuados en infracción a lo dispuesto en el artículo 17, inciso 1);

2) Los propietarios, directores, gerentes, administradores, mandatarios, gestores o miembros de las empresas, grupos, asociaciones u organizaciones mencionadas en el artículo 17, incisos 2), 3) y 4), que hayan participado en la comisión de los hechos allí previstos;

3) los afiliados que por sí o por interpósita persona reciban a sabiendas donaciones, aportes o uso gratuito de bienes o servicios para el partido, de las personas mencionadas en el inciso precedente así como los afiliados que por sí o por interpósita persona soliciten, a sabiendas, de aquéllos donaciones, aportes o uso gratuito de bienes o servicios para el partido, o reciban donaciones anónimas en contra de lo prescripto por el artículo 17 in fine;

4) los que intervengan directa o indirectamente en la obtención de aportes, donaciones, o uso gratuito de bienes o servicios prohibidos por el artículo 17, inciso 5);

5) los que utilicen, directa o indirectamente, fondos de un partido para influir en la designación de cualquier persona en una elección interna.

Extinción

ARTICULO 23.- La autorización para funcionar como partido político se extingue por las siguientes causas:

1) las que determine la respectiva carta orgánica.

2) la no presentación de candidaturas en tres elecciones nacionales consecutivas, en distrito alguno.

3) la no obtención del 3 % de los votos totales válidos en distrito alguno.

4) impartir instrucción militar a sus afiliados u organizarlos militarmente o por la adopción de saludos o uniformes que exterioricen la adhesión partidaria.

5) cuando el partido, sus autoridades o candidatos, con sus declaraciones o actitudes públicas contravengan en forma grave o reiterada las disposiciones de los artículos 6º ó 7º de este estatuto, o infrinjan en forma grave y reiterada las demás disposiciones del mismo, de la carta orgánica o demás leyes vigentes.

La extinción deberá ser declarada por sentencia de la Justicia Nacional Electoral. El partido afectado será parte en el proceso respectivo.

ARTICULO 24.- El retiro de la autorización para funcionar como partido político, importa, de pleno derecho, el de la personalidad jurídica. Los bienes tendrán el destino previsto por la carta orgánica o, en su defecto ingresarán a las rentas generales de la Nación. Ningún partido que pueda ser considerado continuación del partido disuelto podrá solicitar autorización para funcionar antes de pasados dos años de la sentencia que la retiró.

Recursos

ARTICULO 25.- Las resoluciones definitivas del juez electoral podrán ser apeladas dentro del plazo de cinco días hábiles para ante la Cámara Nacional Electoral, salvo en el caso previsto por el artículo 61 de la Ley Electoral.

La apelación se concederá al solo efecto devolutivo. La Cámara, no obstante, a solicitud del Procurador General Electoral, podrá establecer que el recurso tenga también efecto suspensivo.

Franquicias

Todas las actuaciones que deban cumplirse en virtud -

del presente estatuto se harán en papel simple.

Carácter de las normas

ARTICULO 27.- Las normas de este estatuto son de orden público. Los partidos políticos deberán ajustar su conducta a ellas, y sus declaraciones de principios, programas de acción política, cartas orgánicas y demás documentos partidarios no podrán contener ninguna disposición en contrario.

Disposiciones Transitorias

ARTICULO 28.- No estarán obligados a solicitar autorización para funcionar los partidos que hayan obtenido en la última elección nacional anterior a la anulada por decreto 3.657/62, por lo menos en tres distritos, el 3% de los votos hábiles emitidos en cada uno de ellos. A los efectos de la aplicación de esta norma se considera que cada federación existente con anterioridad a la sanción de este estatuto constituye un solo partido.

Los partidos referidos deberán cumplir los siguientes requisitos para acogerse a los beneficios de esta disposición:

1) renovar todas las autoridades partidarias conforme a las disposiciones de este estatuto dentro de los plazos previstos por sus respectivas cartas orgánicas;

2) adaptar formalmente sus declaraciones de principios, programas de acción política y cartas orgánicas a las normas de este estatuto dentro del plazo de un año. - Hasta tanto ello ocurra, atento lo dispuesto por el artículo 27, dichas normas se considerarán incorporadas de inmediato y de pleno derecho a aquellos documentos partidarios y a ellas deberán ajustar su conducta dichos partidos;

3) inscribirse en la forma prevista por el artículo 3º, en los distritos donde no hayan actuado y deseen hacerlo;

4) obtener la ratificación de las afiliaciones conforme a las prescripciones de este estatuto dentro del plazo - de dos años.

Las autoridades partidarias existentes a la fecha del decreto Nº 4.420/62, decidirán si el cumplimiento de lo - dispuesto en este artículo deberá ser presidido por ellas o por juntas reorganizadoras que hubieren sido designadas.

ARTICULO 29.- Los comisionados federales en las provincias proyectarán la adaptación al presente estatuto de las normas referentes a la organización y funcionamiento de las agrupaciones políticas que se propongan intervenir en las elecciones de miembros de los poderes públicos locales. El proyecto deberá ser elevado al Poder Ejecutivo dentro de - los quince días de la fecha de aprobación de este estatuto y tendrá en cuenta en lo comunal, las circunstancias que hagan aconsejable alguna modificación.

ARTICULO 30.- Quedan suspendidas solamente para el próximo proceso electoral las disposiciones partidarias que exigen antigüedad para el desempeño de cargos partidarios o para el acceso a las candidaturas.

ARTICULO 31.- El plazo fijado en los incisos 2) y 5) del - artículo 15, se reduce, para el próximo proceso electoral, a noventa días.

ARTICULO 32.- Nada en este estatuto podrá considerarse derogatorio de lo dispuesto por el decreto-ley Nº 3.855 de 24 de noviembre de 1955, ratificado por la ley 14.467 (=)y sus disposiciones complementarias.-

---

(=) Ver Digesto Administrativo Nº 609.-

ACTO: DECRETO Nº 12.823/62.-

MATERIA: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1962.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 2.781/60 (') se declaró en estado de reorganización a la Dirección General Impositiva, estableciéndose, asimismo, que durante ese período la aludida dependencia estaría a cargo de un interventor, asistido por un Consejo;

Que la ardua labor desarrollada por la citada intervención ha permitido, luego de profundos estudios y de la adopción de medidas progresivas que variaron la estructura y la capacidad de acción de dicho ente fiscal, lograr el equilibrio necesario para que ese organismo continúe con la gestión estable de sus funciones específicas;

Que en ese orden de ideas y en la seguridad de que se han cumplido los principales objetivos que dieron lugar al dictado del mencionado Decreto Nº 2.781/60, se impone dar por terminado el período de reorganización de la Dirección General Impositiva;

Que asimismo y habiendo vencido el contrato de servicios formalizado oportunamente con el señor Interven-

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1139.-

tor en dicha repartición, doctor Manuel Rapoport, procede de agradecer a este funcionario los importantes servicios prestados;

Por lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Dase por terminado el estado de reorganización de la Dirección General Impositiva, dispuesto por Decreto N° 2.781 del 18 de marzo de 1960.

ARTICULO 2°.- Dénsele las gracias por los importantes servicios prestados como Interventor en la aludida repartición, al doctor Manuel Rapoport.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray
Rafael R. Ayala

ACTO: DECRETO Nº 12.824/62.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - SERVICIOS CALIFICADOS - DEDICACION FUNCIONAL

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1962.-

Visto la necesidad de incorporar al régimen de compensaciones establecido para el personal de la Dirección General Impositiva por decreto Nº 13.520/60 (1), las asignaciones por "servicios calificados" y por "dedicación funcional", correspondientes a los Grupos 42 y 41,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Incorpórase al artículo 1º del régimen establecido por decreto 13.520, de fecha 31 de octubre de 1960, relacionado con la compensación por "servicios calificados" las retribuciones correspondientes a los Grupos 42 y 41, modificándose en la siguiente forma:

I - Beneficiarios: Personal Administrativo y Técnico incluido en los Grupos 42 al 34, inclusive:

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1300.-

II - Importes:

Grupo	Importe mensual m$n.
42	14.000
41	11.000

ARTICULO 2°.- Incorpórase al artículo 2° del régimen establecido por decreto N° 13.520, de fecha 31 de octubre de - 1960, relacionado con la compensación por "dedicación funcional" las retribuciones correspondientes a los Grupos - 42 y 41, modificándose en la siguiente forma:

I - Beneficiarios: Personal Administrativo y Técnico incluido en los Grupos 42 al 22 inclusive:

II- Importes:

Grupo	Importe mensual m$n.
42	19.000
41	15.000

ARTICULO 3°.- Determínase que los Grupos 42 y 41 que se incorporan en orden a las disposiciones contenidas en los artículos precedentes corresponden a las jerarquías de Director General y Subdirector General de la Dirección General Impositiva, respectivamente.

ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el - señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray
Rafael R. Ayala.

ACTO: DECRETO-LEY Nº 13.051/62.-

MATERIA: FACULTAD MINISTERIAL

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1962.-

Visto: Que las Leyes Nros. 15.796 (') (Artículo 19) y 16.432 (") (Artículo 36) facultaban al Presidente de la Nación para delegar en los señores Ministros o Secretarios de Estado la resolución final y la firma de determinados asuntos, y

CONSIDERANDO:

Que por tratarse de leyes anuales de presupuesto, su vigencia está limitada en el tiempo, mientras que la materia normada en los citados artículos, requiere una solución permanente;

Que las distintas normas legales establecen la intervención directa del titular del Poder Ejecutivo en la solución final y firma de los asuntos a que ellas se refieren, por cuya razón la Procuración del Tesoro ha llegado a la conclusión de que la delegación de esa firma sólo puede realizarse mediante autorización acordada por ley formal;

Que analizados los actos mencionados en la parte dispositiva del presente decreto, se advierte que el pronunciamiento del Poder Ejecutivo no importa la formulación de un juicio ni la fijación de una norma, sino el

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1327.- //-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1549.-

cumplimiento de procedimientos reglados, de modo que en esencia se trata del cumplimiento de un requisito formal, que no debe distraer la atención del Presidente de la Nación;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Autorízase la delegación en los señores Ministros y Secretarios de Estado que se indican en el artículo siguiente, de la resolución final y la firma de los asuntos mencionados en el mismo.

El acto mediante el cual el funcionario delegado ejecute la facultad delegada, deberá ajustarse a las reglamentaciones en vigor, y contra el mismo podrá recurrirse ante el Poder Ejecutivo por las causas y en las condiciones establecidas en las normas vigentes.

ARTICULO 2º.- En las condiciones indicadas en el artículo anterior, delégase la resolución final y firma de los siguientes asuntos:

a) Al señor Ministro de Educación y Justicia: el otorgamiento de personería jurídica; la autorización para el funcionamiento de sociedades anónimas y la aprobación de sus estatutos y sus reformas;

b) A los señores Secretarios de Guerra, Marina y Aeronáutica: el otorgamiento de pensiones con arreglo a las normas vigentes para el personal de las fuerzas armadas; la autorización a retirados y pensionistas de cada jurisdicción para residir en el extranjero y la modificación de haberes de pasividad fundada en error u omisión del cómputo o en el cambio de situación de los beneficiarios;

c) Al señor Ministro del Interior: los mismos asuntos con relación al personal de la Policía Federal, antiguo -

personal de los territorios nacionales y personal del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud y sus respectivos derecho - habientes;

d) A los señores Ministros y Secretarios de Estado de cada jurisdicción: la rectificación de nombramientos por cambio de estado civil o por modificación de nombres, fundada en acto auténtico del que resulte la identidad de personas;

e) Al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social: la autorización para residir en el extranjero a los beneficiarios de las cajas nacionales de previsión de su dependencia.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior y de Defensa Nacional.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Rodolfo Martínez
José M. Astigueta.

ACTO: RESOLUCION Nº 213/62.-

MATERIAS: AUTOMOTORES OFICIALES - AUTOMOTORES ADSCRIPTOS - COMPENSACIONES - PROHIBICIONES - DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO (Cuenta Especial) - SEGURO DE VIDA

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1962.-

VISTOS:

El Decreto nº 8.534/61 (¹);

La modificación introducida al párrafo 3º del artículo 5º del Decreto nº 8.534/61, en virtud de lo dispuesto por el Decreto nº 9.353/62 (²), y

Atento lo informado por la Caja Nacional de Ahorro Postal,

EL MINISTRO DE ECONOMIA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Decreto nº 8.534/61 que le sean aplicables, el seguro de vida automático previsto en el párrafo 3º del artículo 5º del precitado decreto, modificado por el artículo 3º del decreto nº 9.353/62, se contratará //-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1459.-
(²) Ver Digesto Administrativo Nº 1774.-

bajo las siguientes condiciones:

a) El seguro cubrirá exclusivamente el riesgo de muerte;

b) Regirá desde el momento en que el funcionario perciba el préstamo y mantendrá su vigencia hasta la cancelación total del mismo; con tal fin la Dirección General de Suministros del Estado informará a la Caja Nacional de Ahorro Postal, en cada oportunidad, las altas y/o bajas que se produzcan;

c) Será efectuado sin revisación médica de los agentes asegurados, los que al momento de la contratación deberán encontrarse en servicio activo, con concurrencia al trabajo y percepción de haberes;

d) Los capitales asegurados serán reajustados anualmente. A tal efecto la Dirección General de Suministros del Estado proporcionará a la Caja Nacional de Ahorro Postal, con la debida anticipación, las informaciones pertinentes que permitan establecer los capitales que se aseguran al 1° de enero de cada año;

e) La Dirección General de Suministros del Estado será beneficiaria de estos seguros hasta la concurrencia del monto de la deuda del funcionario existente al momento del siniestro. El excedente, si lo hubiera, se abonará al beneficiario que designe el agente o a los herederos legales del funcionario, si no hubiese designación de beneficiario o si habiéndola éste hubiera fallecido;

f) La Caja Nacional de Ahorro Postal emitirá a nombre de la Dirección General de Suministros del Estado una póliza colectiva de seguro de vida que cubrirá la totalidad de los funcionarios asegurados, extendiendo además certificados individuales para cada uno de ellos;

g) Fíjase la prima de este seguro en UN PESO CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1,50) mensual por cada mil pesos de capital asegurado;

h) La prima será descontada mensualmente de los haberes del asegurado y abonada en efectivo a la Caja Nacional de Ahorro Postal por la Dirección General de Suministros del Estado antes del día 10 de cada mes;

i) En el caso de que variaciones fundamentales en la constitución del núcleo asegurado aconsejaran como indispensable la modificación de la prima fijada, la Caja Nacional de Ahorro Postal propiciará, aportando todos los elementos de juicio necesarios, la nueva prima a fijar.

ARTICULO 2º.- Las cuestiones que se planteen con motivo de la aplicación e interpretación de este seguro que no puedan ser resueltas por aplicación de las presentes disposiciones o las del Decreto nº 8.534/61 en lo que fueran aplicables, serán elevadas para su resolución por este Ministerio con intervención de la Secretaría de Estado de Hacienda.
ARTICULO 3º.- La presente resolución será firmada por el Señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Fdo. ALVARO C. ALSOGARAY
Rafael R. Ayala

ACTO: RESOLUCION Nº 10.060/62.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD (Art. 76) - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN - PATRIMONIO DEL ESTADO - MUEBLES Y UTILES - DIVISION INTENDENCIA

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1962.-

Visto que el Servicio Patrimonial Central, desempeñado por la Dirección General de Contabilidad y Administración, que comprende la fiscalización, contralor contable, permanente actualización de inventarios con fijación, mediante la formulación de cargos y descargos, de las responsabilidades que en relación de jerarquías se establece por el artículo 76º de la Ley de Contabilidad, y que incluye, además de los bienes que afectan a su propio desenvolvimiento, a las de las siguientes reparticiones: Direcciones Generales de Finanzas, Impuestos y Contribuciones, Asuntos Jurídicos, Servicio Civil de la Nación y División Intendencia, como asimismo sobre todos los muebles que utilizan las distintas dependencias con asiento en el Palacio, tipificados y originariamente adquiridos para amueblamiento uniforme de todos sus ambientes, y

CONSIDERANDO: //-

Que la oficina que debe afrontar tales tareas no puede desempeñarse con la necesaria eficacia, si los usuarios de los bienes, directamente responsables de su tenencia, no le prestan espontánea y permanente colaboración en todo cuanto se relaciona con esas actividades;

Que la mejor forma de esa prestación estará dada si se constituye la obligación de que cada una de las distintas dependencias disponga la ejecución de periódicos relevamientos físicos en sus respectivas jurisdicciones, responsabilizándose de las variaciones que pudieran producirse con relación al inventario precedente;

Que previo a todo cambio de ubicación de bienes que implique una transferencia de local y/o responsable, deberá darse anterior o simultánea intervención a la División Liquidaciones y Patrimonio;

Que con el mismo fin, la Intendencia no deberá permitir en el futuro la salida de bienes muebles, en ningún concepto, con autorización suscripta por funcionario responsable si no consta que ha tomado conocimiento el Servicio Patrimonial Central;

Que debe insistirse en el cumplimiento de las normas en vigor, que reglamentan el quehacer patrimonial y en el dictado de otras, aconsejadas por la experiencia y que perfeccionen su realización;

Por ello,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1°) Toda reubicación de los bienes muebles, máquinas etc., que impliquen un cambio de local o responsable, que deban realizar las reparticiones mencionadas en el preámbulo deberán ser previa o simultáneamente comunicadas a la División Liquidaciones y Patrimonio dependiente de la Dirección General de Contabilidad y Admi

nistración, mediante la fórmula 155. (La División Intendencia deberá abstenerse de la ejecución, cuando no conste en la orden la intervención del Servicio Patrimonial Central).

2º) La División Intendencia no permitirá, en el futuro, la salida de bienes muebles (bajo ningún concepto) con autorización suscripta por funcionario competente, cuando no conste la intervención de la División Liquidaciones y Patrimonio.

3º) A los efectos de la correcta fiscalización de la cuenta "Inversiones Patrimoniales" las reparticiones comunicarán al Servicio Patrimonial Central todo ingreso de elementos adquiridos con afectación a la misma, ya sea por Compra Directa, Caja Chica o provistos de Cuenta Stock por la Dirección General de Suministros del Estado.

4º) Las reparticiones deberán llevar un registro actualizado (fichero) de todos los elementos a su cargo, clasificados por sub-responsables agrupados por departamentos y estos por divisiones y secciones.

5º) Cada repartición deberá designar o actualizar la designación de quien la representa ante el Servicio Patrimonial Central: sus obligaciones consistirán en mantener al día el registro de bienes (art. 4º), confeccionar -previa comprobación física- y remitir al Servicio Central un inventario actualizado y valorizado de los bienes al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, debiendo destacar las variaciones comprobadas respecto al inventario anterior.

6º) El Servicio Patrimonial Central requerirá por separado y por la vía jerárquica que corresponda a todas aquellas dependencias ajenas, con asiento en la Casa y que utilicen muebles de la Secretaría, actualicen el inventario de los mismos y la mantengan informada sobre los cambios que se produzcan en sus jurisdiccio

nes.

7º) Comuníquese y pase a la Dirección General de Contabilidad y Administración a sus efectos.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA.

Min. de Hacienda - Dirección Gral. de Contabilidad y Administración

ACTO: EXPEDIENTE Nº 90.782/62.-

MATERIAS: ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 10) - TITULOS - CONCURSOS - PROFESIONALES - VACANTES - NOMBRAMIENTOS - CAMBIO DE CLASE O GRUPO

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1962.-

Señor Director General del
Servicio Civil de la Nación
S / D.-

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director General, en consulta sobre la interpretación o alcance que debe darse al "in fine" del art. 10 del Estatuto del - Personal Civil de la Administración Pública (') que dice: "Al personal que no tuviere título habilitante se le exigirá aprobación previa de cursos de capacitación en el grado y especialidad adecuados, o en su defecto - examen de competencia o concurso".

El Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional en el Capítulo IV, punto 12º, inc. b) establece para el cambio de Clase o Grupo, que el aspirante reúna las condiciones que para cada caso - se establecen. El mismo instrumento legal Capítulo II,

(') Ver Digesto Administrativo Nº 254.- //-

punto 2°, establece para la Clase "C" PERSONAL PROFESIONAL el título universitario, que en las Normas aprobadas para la Dirección Nacional de Química (Resolución número 7.077/60 (") de la Secretaría de Estado de Hacienda) se especifican: Doctor en Química, en Bioquímica, en Química y Farmacia, de Ingeniero Químico, de Químico Farmacéutico, de Químico o Licenciado en algunas de esas disciplinas", así como de otras de la especialidad que se crearen, con un ciclo de estudios no inferior a los tres años, después de estudios secundarios completos". En forma similar, se fijan en el Escalafón, las condiciones para la Clase "D", PERSONAL TECNICO y en las Normas para la Dirección Nacional de Química, la exigencia de "tener aprobado el 2° año de las carreras universitarias exigidas para la Clase "C" o título de técnico químico de las Escuelas Industriales, enólogos o ingeniero de minas".

En esta Repartición el personal técnico sin jerarquizar, se agrupa en las Clases "C" y "D" y el problema planteado a esta Dirección Nacional, motivo de la presente consulta, es que si el artículo 10 del Estatuto autoriza a la Repartición a transferir a un agente de la Clase "D", que carece del título universitario, a la Clase "C", mediante un examen de competencia, cuando se cumplen los demás requisitos: existencia de la vacante, etc.

Saludo al señor Director General con atenta consideración.-

Fdo. ANDRES L. CORSO
Subdirector Nacional de Química

Providencia Nº 2637/62.

//nos Aires, noviembre 26 de 1962.-

Visto la aclaración solicitada por la Dirección Nacio-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1083.-

nal de Química y en orden a las disposiciones del punto - 1º de la Resolución Nº 8.244/59 (º), vuelva a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación manifestándole - que, en opinión de esta Dirección General, las prescripciones del artículo 10 in-fine del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (decreto-ley Nº 6.666/57) no resultan de aplicación cuando, como ocurre - en el presente caso, la Clase "C" del Escalafón General - (decreto Nº 9.530/58) agrupa exclusivamente a profesiones con título habilitante -no funciones- para cuyo ejercicio se deben realizar tareas reservadas únicamente a los que poseen tales profesiones. Ello es evidente, puesto que un temperamento en contrario, importaría tanto como reconocer que el Poder Ejecutivo -por vía de este último acto de gobierno- tiene facultades para conceder títulos habilitantes de disciplinas universitarias, al margen de las disposiciones expresas y legales que determinan su otorgamiento.

En cambio, se estima viable el uso de la norma estatutaria citada, cuando la misma está referida a suplir la falta de título para el desempeño de funciones -no profesiones- toda vez que con su aplicación se trata de que el cargo esté rodeado de las máximas garantías de conocimiento por parte de quién ha de ocuparlo, sin querer establecer con ello una exigencia de carácter excluyente, desde que la misma puede suplirse por la presencia de las condiciones previstas en la comentada disposición del Estatuto (cursos de capacitación o examen de competencia).

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General de
Contabilidad y Administración

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 958.-

Providencia Nº 1424.-

A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION:

Asunto: ingreso a la Clase "C" del Escalafón mediante examen de competencia - caso planteado por la Dirección Nacional de Química.

Disposiciones de aplicación: Estatuto del Personal Civil (art. 10); Escalafón General (decreto 9.530/58; - puntos 4º y 23).

Opinión de esta Dirección General: el informe producido a fs. 3 por ese organismo se ajusta perfectamente a la letra y al espíritu de las normas legales que reglan sobre la materia, por lo que se adhiere totalmente a las conclusiones del mismo.

En consecuencia, corresponde hacer saber a la Dirección Nacional de Química que el ingreso a la Clase "C" del Escalafón aprobado por decreto Nº 9.530/58 sólo resulta factible mediante concurso de antecedentes y previa acreditación de la posesión del título universitario habilitante que se requiera.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 5/12/62.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General.

ACTO: DECRETO-LEY Nº 13.053/62.-

MATERIAS: JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL - PARTIDOS POLITICOS - ELECCIONES

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1962.-

Visto los Decretos números 7.163/62 (+) y 8.163/62(°), creando la Justicia Nacional Electoral y siendo necesario hacer concordar sus normas con las del Estatuto de los Partidos Políticos aprobado por Decreto nº 12.530/62 (ª),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Modifícase el cuerpo de disposiciones aprobado por Decreto nº 7.163, de 24 de julio último y modificado por Decreto nº 8.163 de 13 de agosto pasado, en la siguiente forma:

1) Suprímese, en el artículo 2°, la palabra "nativos".

2) Reemplázase el texto íntegro del artículo 5°, por el siguiente: "La Cámara designará a uno o dos secretarios, que deberán reunir las mismas condiciones exigidas para ser Juez Nacional Electoral".

3) Suprímese, en el inciso b) del artículo 9°, la frase: "y arrogarse el ejercicio de las facultades de

//-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1693.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1702.-
(ª) Ver Digesto Administrativo Nº 1814.-

las Juntas Electorales cuando lo estime conveniente".

4) Suprímese, en el artículo 9°, inciso f), la frase: "así como trasladar a los secretarios de los Juzgados y demás personal de la Justicia Nacional Electoral, cuando lo requieran las exigencias del servicio".

5) Sustitúyese, en el artículo 9°, inciso g)-II, la frase: "doce mil pesos moneda nacional" por "veinte mil pesos moneda nacional".

6) Reemplázase, en el artículo 9°, el texto completo del inciso j), por el siguiente: "Dictar un reglamento de procedimientos complementario de las normas del Estatuto de los Partidos Políticos que asegure una rápida resolución de los asuntos y de la defensa en juicio en las cuestiones contenciosas".

7) Suprímese, en el artículo 10, el texto integro del inciso a), quedando consecuentemente alteradas las letras correspondientes a los otros tres incisos.

8) Agrégase, en el artículo 12, inciso a)-I, la mención del inciso j).

9) Reemplázase, en el artículo 21, apartado II), el texto íntegro del inciso d), por el siguiente: "Las elecciones internas partidarias y las designaciones de candidatos cuando sean impugnadas por los afiliados".

10) Suprímese, en el artículo 27, el texto íntegro del segundo párrafo del inciso 1°).

11) Reemplázase en el artículo 30, la mención "funcionarios", por la de "funcionarios y empleados".

12) Agrégase al final del 2º párrafo del artículo 40 lo siguiente: "Las funciones de los procuradores fiscales electorales, serán ejercidas hasta entonces por los actuales procuradores fiscales federales".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior y de Defensa Nacional.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Rodolfo Martínez
José M. Astigueta



ACTO: DECRETO-LEY Nº 13.113/62.-

MATERIA: SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1962.-

Visto lo propuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y

CONSIDERANDO:

Que la mayor parte de los gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto corresponden a la atención del servicio exterior de la Nación;

Que por razón de efectuarse esos gastos fundamentalmente en divisas extranjeras se suscitan dificultades y demoras debido a las fluctuaciones a que está sometido el peso moneda nacional en el mercado de libre cambio;

Que dichas demoras y dificultades son causas de serios inconvenientes para el normal desempeño del Servicio Exterior de la Nación, afectando el prestigio de la República;

Que resulta indispensable, en consecuencia, arbitrar los medios y procedimientos que permitan corregir esas deficiencias, teniendo en cuenta la experiencia de otros países en condiciones similares;

Que la recaudación de los aranceles consulares constituyen una base adecuada para esos fines, puesto que la forma de su percepción permite eliminar el factor de la fluctuación señalada, al mismo tiempo que su monto -

//-

posibilitaría la financiación del presupuesto del Servicio Exterior de la Nación, con el consiguiente alivio del Presupuesto General;

Que resulta conveniente, a fin de facilitar la agilitación del mecanismo de recaudación y pagos para la atención del Servicio Exterior, arbitrar un procedimiento de excepción respecto al prescripto en el artículo 21 de la Ley de Contabilidad;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1°.- Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a retener el importe emergente del cobro de los aranceles consulares, para ser aplicados al pago de los gastos que le demande el Servicio Exterior de la Nación, a cuyo efecto ingresará ese importe en instituciones bancarias públicas o privadas nacionales o extranjeras.

ARTICULO 2°.- Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de clausura de cada ejercicio financiero, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ingresará a Rentas Generales los sobrantes de recaudaciones, deducido el importe necesario para hacer frente a los gastos del primer trimestre del ejercicio siguiente.

ARTICULO 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar con intervención de la Secretaría de Hacienda, las normas reglamentarias de aplicación de lo prescripto en el presente decreto.

ARTICULO 4°.- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto, de Economía, de Defensa Nacional y del Interior y firmado por el señor Secre

tario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Carlos M.Muñiz - Alvaro C. Alsogaray - José M. Astigueta - Rodolfo Martínez - Rafael R. Ayala.

ACTO: EXPEDIENTE Nº 20.566/62.-

MATERIAS: CONTRATACIONES - PLAZOS

Si como consecuencia del incumplimiento de un contrato, por exigencias de la necesidad a satisfacer, fuera preciso contar con los elementos o servicios en forma urgente o impostergable, no median inconvenientes - en contratar por cuenta del adjudicatario remiso por los medios directos posibles y ajustando los plazos de acuerdo con las nuevas necesidades, pero cuidando que las características de los elementos y servicios en sí se ajusten estrictamente a las de las originariamente pactadas.

(Informe nº 708/62 - C.y T. Públicos - D.A.T.C.N. Nº 621 - C. 185)

ACTO: COMUNICACION 186 - T.C.N.

MATERIAS: CONTRATACIONES - OBRAS PUBLICAS - GARANTIAS

Los "Certificados de Cancelación de Deudas", dado su finalidad específica de pago de deudas impositivas - (Compensación de créditos), expresamente prevista en los objetivos de su emisión autorizada por el decreto número 4.898/61 (1) y sus complementarios, no procede legalmente ser aceptados como depósitos de garantía en contrataciones por cuenta del Estado.

Sólo podría prosperar el temperamento si el Poder Ejecutivo así lo autorizara, incluyendo tal forma de garantía entre las previstas en vigencia.-

(Consulta 8/11/62 - Supervisión - D.A.T.C.N. nº 621)

(1) Ver Digesto Administrativo nº 1.482.-

la medida que lo estime conveniente y en los organismos adecuados, la venta de los inmuebles a que se refiere - la Ley N° 13.539 (+) y las leyes especiales dictadas - hasta la fecha, por las cuales se autorizó expresamente a distintos organismos de la administración centralizada, entidades descentralizadas o autárquicas para realizar enajenaciones de inmuebles no necesarios para sus - servicios específicos.

A tal efecto se lo faculta para fijar las bases de las ventas y para delegar en organismos centralizados o descentralizados, inclusive los bancos oficiales, los - procedimientos de las operaciones de venta y para celebrar los actos jurídicos necesarios al perfeccionamiento de las transferencias.

Las ventas podrán hacerse mediante remate público o concurso de precios de acuerdo con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Podrán venderse directamente bienes inmuebles solicitados por gobiernos de provincias o municipalidades para destinarlos a fines de utilidad pública.

Asimismo podrán venderse directamente esos bienes a entidades oficiales o personas de derecho privado que persigan la finalidad de construir viviendas. En los casos de personas privadas, previa aprobación por el organismo centralizador de las ventas, de los planes de construcción y financiación.

Autorízase también la venta directa a sus ocupantes de los solares en los cuales aquéllos, con autorización oficial, hayan levantado viviendas, siempre que las construcciones realizadas se ajusten a las normas establecidas por la autoridad municipal del lugar.

(+) Ver Digesto Administrativo N° 269.-

En el caso de ventas directas, el precio se fijará con el asesoramiento indistinto del Tribunal de Tasaciones, del Banco Hipotecario Nacional, del Banco de la Nación Argentina o del organismo provincial especializado en materia de tasaciones inmobiliarias.

El Poder Ejecutivo podrá centralizar la venta de bienes muebles en desuso o en condiciones de rezago o aún de aquéllos que sin reunir ese carácter convenga renovar para mejorar la eficiencia de los servicios, y para entregar tales bienes como parte de precio de las adquisiciones que efectúe. En caso de que la venta o entrega en pago de precio no resultara de un remate o licitación pública o privada, el valor de los bienes vendidos o entregados será fijado por peritos en la forma que establezca la reglamentación.

ARTICULO 2º.- Hasta tanto se reglamente lo establecido en el artículo anterior serán de aplicación las normas contenidas en los Decretos Nros. 3.660/61 (+), 8.494/61 (-), 498/62 (¨), 8.563/62 (=) y concordantes.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior, de Defensa Nacional, Obras y Servicios Públicos y Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Rodolfo Martínez - José M. Astigueta - Julio C. Crivelli Alvaro C. Alsogaray - Rafael R. Ayala

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1395.-
(-) Ver Digesto Administrativo Nº 1457.-
(¨) Ver Digesto Administrativo Nº 1571.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 1721.-



ACTO: RESOLUCION Nº 12.020/62.-

MATERIAS: VIATICOS - MOVILIDAD - REINTEGRO DE GASTOS

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1962.-

Visto el expediente Nº 3.271/62, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Nacional de Protección de Menores ha de llevar a cabo un catastro abreugráfico de la población de alumnos de los institutos de su dependencia, utilizando para ello los servicios de personal del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública;

Que tanto el equipo como el personal, sería cedido sin cargo alguno para la realización de esa tarea, debiéndo solventar aquél Consejo el pago de los viáticos que pudiera corresponder a los agentes en cuestión;

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación ha planteado la cuestión de si el caso en análisis encuadra dentro de las "situaciones similares" de que habla el artículo 2º apartado II, inciso i), del decreto número 13.834/60 (1), cuando expresa que "en el caso de que el personal de una jurisdicción concurra a otra para completar jurados, para integrar cátedras, o situaciones similares, el viático correspondiente será liquidado con cargo al presupuesto de la repartición que requiera los servicios";

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1274.-

Que el caso planteado encuadra dentro del espíritu de dicha norma, por lo que cabe dictar la resolución que así lo determine, en orden a lo previsto en el art. 20 del decreto Nº 13.834/60;

Por ello,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1º.- Aclárase que la norma contenida en el artículo 2º, apartado II, inciso i), del decreto Nº 13.834/60, resulta de aplicación en el caso del personal de la Dirección de Exámenes Periódicos de la Población, dependiente del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, que ha de realizar el catastro abreugráfico de los alumnos de establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Protección de Menores, que tramita por expediente Nº 3.271/62 (S.H.).

2º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA.

ACTO: DECRETO Nº 12.959/62.-

MATERIAS: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - CONCEJO DELIBERANTE

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1962.-

Visto el decreto Nº 4.059, de fecha 11 de mayo de 1962 (1), por cuyo artículo 3º se establece que "el edificio y demás bienes asignados al Concejo Deliberante quedarán bajo la custodia de los secretarios legislativo y administrativo del Cuerpo, y no podrán ser cedidos ni utilizados por otros organismos sin autorización expresa del Poder Ejecutivo", y

CONSIDERANDO:

Que no es necesario recargar la atención y la firma del Presidente de la Nación en actos que pueden ser directamente autorizados por el Ministro del Interior, en forma análoga a la establecida con referencia al régimen administrativo del H. Congreso por decreto número 9.746/62 (2),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Delégase en el Ministerio del Interior - //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1625.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 1737.-

las facultades que el artículo 3° del decreto 4.059/62 atribuye al Poder Ejecutivo.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Rodolfo Martínez.

ACTO: DECRETO Nº 13.439/62.-

MATERIA: LICENCIAS

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1962.-

Visto el Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos, aprobado por decreto nº 8.567/61 (¹), y

CONSIDERANDO:

Que el art. 2º, inciso a), del mismo, establece que la licencia ordinaria por descanso no podrá ser transferida al año siguiente por ningún concepto;

Que por Decreto Nº 11.080/62 (") se fijó plazo hasta el 31 de diciembre próximo pra hacer uso de las licencias de ese carácter transferidas en 1961, mientras regía el anterior ordenamiento en la materia (decreto nº 12.720/53 (+);

Que por Decreto Nº 10.747/62 se ha autorizado a las Cajas Nacionales de Previsión, por una única vez, a conceder a su personal durante el año 1963 las licencias por descanso no utilizadas en 1962;

Que distintas Secretarías de Estado gestionan el otorgamiento de franquicias semejantes, aduciendo la imposibilidad material de acordar las licencias pendientes de su personal antes del 31 de diciembre, no utilizadas hasta ahora debido a la escasez de agentes e incremento

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1461.- //-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1778.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 15.-

paralelo de tareas;

Que deben ponderarse ambos factores a fin de arbitrar una solución que permita mantener sin inconvenientes el desarrollo de los servicios, y sin privar al agente del descanso a que legalmente tiene derecho;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Como excepción, y por esta única vez, autorízase a los organismos de la Administración Pública Nacional comprendidos en los alcances del Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos, aprobado por decreto nº 8.567/61, a acordar a su personal en el transcurso del año 1963 las licencias por descanso correspondientes a 1962 que no hubiera sido posible acordar por razones de servicio debidamente documentadas.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray
Rafael R. Ayala

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº 1829.-



ACTO: RESOLUCION Nº 12.021/62.-

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1962.-

Visto lo manifestado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, en el sentido de que debe mantenerse la vigencia de la excepción reconocida por el decreto Nº 12.507 de fecha 22 de junio de 1950, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado decreto se permitía a los médicos veterinarios y a los ingenieros agrónomos dependientes de la Administración Nacional, desempeñar otro cargo técnico en la jurisdicción provincial y municipal, siempre que éste por razones de horario u otro motivo, no fuera incompatible con sus tareas;

Que la excepción reconocida a los médicos veterinarios e ingenieros agrónomos, se hizo considerando que era necesaria a fin de no resentir la atención de los servicios que era importante mantener, ante el éxodo constante de los aludidos profesionales, y, además, por la escasez de los mismos;

Que de lo expresado por la mencionada Secretaría de Estado, se desprende que subsisten las causas que determinaron el dictado del decreto Nº 12.507/50, lo que la obliga a insistir en el reconocimiento de la excepción prescripta por dicho decreto frente al nuevo régimen de incompatibilidades;

//-

Que teniendo en cuenta lo expuesto y que no existen razones para modificar el temperamento adoptado oportunamente, y la circunstancia de que el artº 13 del decreto número 9.677/61 (¹), complementario del número 8.566/61 (ⁿ), delega en la Secretaría de Estado de Hacienda con el asesoramiento del Tribunal de Cuentas de la Nación la facultad de precisar qué disposiciones anteriores al actual "Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional" deben mantenerse por subsistir las causales que la originaron, corresponde ratificar la vigencia del decreto Nº 12.507/50;

Por ello, atento lo manifestado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación y lo aconsejado por el Tribunal de Cuentas de la Nación,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E:

1º.- Aclárase que frente a lo prescripto en el "Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional" aprobado por decreto Nº 8.566/61, mantiene su vigencia el decreto Nº 12.507/50, referente a los cargos que pueden acumular los médicos veterinarios e ingenieros agrónomos.

2º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA.

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1491.-
(ⁿ) Ver Digesto Administrativo Nº 1460.-

ACTO: RESOLUCION Nº 12.022/62.-

MATERIAS: LIMITACION DE SERVICIOS - INDEMNIZACIONES - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1962.-

Vistas las normas que, sobre indemnización al personal dado de baja, resultan del art. 36 de la Ley número 15.796(¹), art. 49 de la Ley Nº 16.432 (") , art. 2º del decreto Nº 8.533/61 (º) y art. 26º del decreto-ley Nº 10.582/62 (=), y

CONSIDERANDO:

Que el decreto 6.295/61 (+), reglamentario del art. 36 de la Ley Nº 15.796, -prorrogado por decreto 6.630/62 (°°)-, aclara en su art. 9º que debe entenderse por retribución mensual a los fines indemnizatorios, el último sueldo (sueldo o jornal) nominal mensual básico y demás asignaciones o bonificaciones regulares y permanentes, asignaciones por cargas de familia, título y compensaciones acordadas en virtud de los decretos Nros. 9.252/60 (!) y 10.852/60 (:);

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1333.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1552.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 1458.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 1776.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1426.-
(°°) Ver Digesto Administrativo Nº 1670.-
(!) Ver Digesto Administrativo Nº 1216.-
(:) Ver Digesto Administrativo Nº 1261.-

Que dicha norma ha originado dudas sobre si corresponde considerar el sueldo anual complementario como incremento, en la parte proporcional respectiva, de la retribución mensual a que se hace referencia precedentemente;

Que requerida la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, su dictamen resulta coincidente con los vertidos por otros organismos similares de distintas jurisdicciones, en el sentido de que el sueldo anual complementario equivale a un aumento de sueldo normal, en la medida de una doceava parte, con la obligación de retener ese aumento para abonarlo a fin de año o en la fecha en que la relación de trabajo tenga terminación durante el año;

Que ante las consultas promovidas sobre el particular, y a efectos de evitar dudas interpretativas sobre el alcance de la norma de que se trata, es aconsejable formular la aclaración pertinente;

Por ello y atento a lo informado por las Direcciones Generales del Servicio Civil y de Asuntos Jurídicos,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1°.- Aclárase que a los fines de la indemnización prevista en el art. 36 de la Ley Nº 15.796, art. 49 de la Ley Nº 16.432, art. 2º del decreto Nº 8.533/61 y art. 26 del decreto-ley Nº 10.582/62, debe incluirse dentro del sueldo computable la parte proporcional del sueldo anual complementario correspondiente al período trabajado durante el año calendario respectivo.

2°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA.

ACTO: DECRETO Nº 11.884/62.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - PERSONAL - PROHIBICIONES - ECONOMIAS - VACANTES - BOLSA DE TRABAJO

Buenos Aires, 31 de octubre de 1962.

Visto el Decreto Nº 496/62 (') por el que se dejan sin efecto las excepciones acordadas al Decreto número 5.006/61 ("), y

CONSIDERANDO:

Que dicha medida se fundamentó, principalmente, en la premisa de que, en casi todos los casos, las finalidades que determinaron dichas excepciones ya han sido cumplidas;

Que en el ámbito de la Secretaría de Comercio, por Decretos Nros. 8.184/61 y 9.601/61 se establecieron excepciones para incorporar hasta veinticinco (25) agentes con conocimientos contables y/o sacarotécnicos en la Cuenta Especial "Secretaría de Comercio, Dirección Nacional de Azúcar y Envases, Cumplimiento de la Ley 15.326" y para designar personal obrero de carga y descarga para la comercialización de cosechas y obrero a cargo de los depósitos de bolsas, respectivamente;

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1567.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1406.-

Que en lo que se refiere al personal obrero de las Cuentas Especiales, la particular característica netamente comercial de los servicios, y la modalidad de trabajo, que debe seguir las oscilaciones que provocan los distintos volúmenes de mercaderías que se reciben, exigen mantener la excepción otorgada por Decreto Nº 9.601/61;

Que la restante excepción corresponde a finalidades que sólo han tenido principio de ejecución, por lo cual es necesario mantenerla en vigencia, ya que hace a importantes objetivos que no es posible dejar de cumplir y que están señalados en la Ley 15.326;

Por ello y atento la conformidad expresada por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización Administrativa (C.E.P.R.A.).

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Mantiénense en vigencia las excepciones al Decreto Nº 5.006/61 dispuestas por los Decretos Nros. - 8.184/61 y 9.601/61.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Comercio y de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray - Jorge N. Zaefferer Toro - Rafael R. Ayala

ACTO: DECRETO Nº 13.304/62.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - CANCELACION - DEUDAS - PAGOS - APORTE PATRONAL

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962.-

Visto la consolidación de deudas con las Cajas Nacionales de Previsión Social y las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 9.203 (1) del 6 de setiembre de 1962, en el sentido de que los "Certificados de Cancelación de Deudas" y los "Bonos de Consolidación de Deudas 10% - 1962" serán aceptados por dichos organismos de previsión en pago de la deuda consolidada al 30 de abril de 1962, y

CONSIDERANDO:

Que a fin de facilitar el pago de los aportes jubilatorios, es conveniente ampliar la utilización de los valores mencionados al pago de los aportes jubilatorios patronales devengados a partir del 1º de mayo de 1962.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 1º del Decreto Nº

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1729.-

9.203, del 6 de setiembre de 1962, por el siguiente:

"Artículo 1°.- Los Certificados de Cancelación de Deudas" y los "Bonos de Consolidación de Deudas - 10% 1962", emitidos de conformidad con lo dispuesto en los Decretos Nros. 4.898/61 (*), 4.530/62 (+); 8.565/62 (=) y 5.427/62 serán aceptados por las Cajas Nacionales de Previsión Social, incluida la sección de los Trabajadores del Servicio Doméstico, hasta el 31 de octubre de 1963, en pago de la deuda consolidada al 30 de abril de 1962, como también de los aportes jubilatorios correspondientes a la parte patronal devengados a partir del 1° de mayo de 1962. Los aportes jubilatorios correspondientes a la parte personal, devengados a partir de la fecha indicada en último término, deberán integrarse exclusivamente en efectivo".

ARTICULO 2°.- Quedan en vigor las disposiciones del Decreto N° 9.203/62 que no se opongan al presente.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Trabajo y Seguridad Social y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas, pase a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos.

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray -
Galileo Puente - Rafael R. Ayala

(*) Ver Digesto Administrativo N° 1482.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 1636.-
(=) Ver Digesto Administrativo N° 1711.-

ACTO: DECRETO N° 13.470/62.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 28°) - BONIFICACIONES - TITULOS - PERSONAL - TRANSITORIO

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1962.-

Visto que el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por el decreto n° 9.530/58, en su Capítulo VI - Retribuciones, Punto 28°, establece una bonificación especial para los agentes que posean títulos habilitantes reconocidos y se desempeñan en sus funciones propias de su especialidad, con excepción de aquellos comprendidos en la Clase "C" y,

CONSIDERANDO:

Que este beneficio no alcanza a los agentes que revistan en calidad de transitorios en razón de que éstos, como consecuencia de lo prescripto en el artículo 5° del Decreto-Ley N° 6.666/57 (') están fuera del ámbito de influencia de aquel ordenamiento;

Que este Poder Ejecutivo considera que la circuns-

//-

(') Ver Digesto Administrativo N° 254.-

tancia apuntada no debe ser óbice para que el referido personal pueda tener acceso a las bonificaciones de esa índole, que inspiradas en el reconocimiento de aptitudes especiales acreditadas se constituyen en un positivo factor de estímulo al espíritu de superación;

Que igual criterio, en cuanto tiende a la equiparación de los agentes transitorios con los que revistan con carácter permanente o estable se ha seguido en el Decreto Nº 1.839/61 (*), por el que se hizo extensivo a aquéllos el beneficio del subsidio familiar instituido por el Punto 26º del precitado Escalafón;

Que por otra parte, las Reparticiones que cuentan con personal adventicio y/o transitorio, en su mayoría atienden su presupuesto con recursos propios, por lo que una disposición similar, referida a los adicionales por títulos habilitantes reconocidos no tendría mayor gravitación en el Tesoro Nacional;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Hacienda de la Nación, en orden a la competencia que le atribuye el Decreto-Ley Nº 797/58 (+),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A partir del día 1º del mes siguiente a la fecha del presente Decreto, se hará extensivo al personal transitorio y/o adventicio dependiente de los organismos del Estado comprendidos en el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto Nº 9.530/58, el beneficio establecido por el Punto 28º del mencionado ordenamiento.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1360.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-

ARTICULO 2º.- El mayor gasto que origine la aplicación - del presente Decreto, se imputará a las partidas destinadas a solventar las asignaciones del personal transitorio y/o adventicio, quedando facultados los organismos respectivos, en los casos que las partidas previstas al efecto resultaran insuficientes, para proponer a la Secretaría - de Estado de Hacienda la reestructuración de sus presu - puestos, a fin de cubrir las eventuales diferencias por - vía de compensación de créditos.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc - ción General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray
Rafael R. Ayala

ACTO: DECRETO Nº 13.454/62.-

MATERIA: PENSIONES

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1962.-

Visto la conveniencia de actualizar y ordenar las normas vinculadas con el otorgamiento de las pensiones a la vejez; atento el proyecto de reglamentación propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9º de la Ley Nº 13.478 instituyó dicho beneficio para toda persona de más de 60 años de edad no amparada por un régimen de previsión y que reuniese a su vez los extremos establecidos por el citado texto legal;

Que las disposiciones contenidas en la ley recordada se modificaron por la Ley Nº 15.705, la cual elevó los montos del beneficio en cuestión y fijó el concepto relacionado con la situación económica de los pensionistas, circunstancia que requiere adecuar el régimen actual en orden de las nuevas disposiciones que sobre el particular fueron dictadas;

Que al margen de lo expresado, cabe señalar que el sistema vigente no contempla una serie de situaciones que se presentan en la práctica, motivo por el cual resulta conveniente y oportuno modificarlo, a fin de que sobre la base de un procedimiento administrativo ágil y eficaz, se atiendan todos los supuestos previsibles a

//-

través del texto ordenado de la reglamentación correspondiente;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas que constituyen las Normas Reglamentarias para el otorgamiento de las "Pensiones a la Vejez", en virtud de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 13.478, modificado por la Ley Nº 15.705.

ARTICULO 2º.- El instrumento que se aprueba por el artículo 1º será de aplicación en la Capital Federal a partir del 1º del mes siguiente de la fecha del presente decreto. En los ex territorios nacionales su aplicación se hará también a contar de la fecha mencionada, manteniéndose tales beneficios en dichas jurisdicciones provinciales, hasta tanto se instituyan en cada una de ellas regímenes de Pensiones a la Vejez en cuya oportunidad caducarán las prestaciones otorgadas de acuerdo a la presente reglamentación.

ARTICULO 3º.- Derógánse todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el cuerpo de disposiciones que conforman la Reglamentación aprobada por el artículo 1º de este decreto.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía e Interior y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Alvaro C.Alsogaray - Rodolfo Martínez - Rafael R. Ayala.

NORMAS REGLAMENTARIAS DE PENSIONES A LA VEJEZ

Capítulo I

De los Beneficiarios.

1º.- Tienen derecho a gozar del beneficio instituído por el artículo 9º de la Ley Nº 13.478, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 15.705, las personas que a continuación se detallan, cuya situación encuadre en lo prescripto por el artículo citado en último término y cuando concurran algunas de las siguientes alternativas:

a) Varón o mujer de 60 o más años de edad, soltero o viudo, sin hijos, con hijos menores de 18 años o mayores de esa edad, cuando estos últimos se hallen imposibilitados parcial o totalmente para trabajar, que convivan con el beneficiario o estén a su cargo;

b) Varón o mujer casado o viudo, con hijos menores de 18 años o mayores de dicha edad, cuando estos últimos se hallen imposibilitados parcial o totalmente para trabajar, que convivan con el beneficiario o estén a su cargo;

c) Varón de 60 o más años de edad, casado, con esposa a su cargo;

d) A toda mujer casada, sin hijos, o con hijos menores de 18 años o mayores de dicha edad, cuando estos últimos se hallen imposibilitados parcial o totalmente para trabajar, que convivan con el beneficiario o estén a su cargo, siempre y cuando:

   1) sea abandonada por su cónyuge;
   2) el cónyuge que estuviera ausente con presunción de fallecimiento;
   3) el cónyuge se hallare físicamente imposibilitado.

Capítulo II

De los Requisitos

2º.- Para gozar del beneficio a que se refiere el punto 1º, deberán reunirse los siguientes requisitos:

a) ser argentino nativo o ciudadano naturalizado;
b) extranjero con residencia mínima contínuada en el país de cinco años anteriores a la presentación de la solicitud;
c) acreditar una residencia continuada de dos años anteriores al pedido del beneficio, en los lugares en que rija la presente reglamentación;
d) no encontrarse amparado por un régimen de previsión;
e) no poseer renta o recurso de cualquier naturaleza, salvo que tales ingresos sean inferiores al importe mínimo fijado para las pensiones por los regímenes de previsión, en cuyo caso el beneficio será el necesario para completar dicho importe, sin exceder del total establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 15.705 y punto 25º del presente cuerpo reglamentario.

La constatación de los requisitos previstos en el punto 2º podrán probarse por los siguientes medios:

a) edad e identidad del peticionante: libreta de enrolamiento, libreta cívica, cédula de identidad expedida por autoridad nacional o provincial.
Los que encontrándose físicamente imposibilitados, no tuvieran la documentación mencionada, o en caso de falta de los documentos o cuando dichos documentos a juicio de la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, presenten deficiencias que invaliden o disminuyan su fuerza probatoria, en lo que respecta a la edad e identidad del peticionante, ambos supuestos podrán certificarse mediante información sumaria, con la in -

tervención de dos testigos hábiles, producida ante dicha Repartición y complementada con un informe -en lo que concierne a la edad- del Departamento de Servicio Médico, dependiente de la nombrada Dirección General;

b) residencia: la residencia exigida en el apartado c) del punto 2º será acreditada:
extranjeros: mediante pasaporte y/o información producida por la Dirección Nacional de Migraciones; nativos o ciudadanos argentinos: libreta de enrolamiento o libreta cívica.
Además en ambos casos, lo harán con dos testigos hábiles del lugar en que reside o residió el solicitante, ratificado por la autoridad policial mediante el certificado correspondiente.
En los casos de extranjeros que la Dirección Nacional de Migraciones no pueda producir la información respectiva, la residencia podrá certificarse mediante información sumaria con la intervención de dos testigos hábiles producida ante la Dirección General de Contabilidad y Administración.

c) beneficiarios de regímenes de previsión: manifestarán mediante declaración jurada si gozan o no de beneficios otorgados por algún régimen de previsión. En caso afirmativo, declararán el monto del citado beneficio.

d) recursos: en oportunidad de efectuarse la encuesta social se informará con arreglo a lo establecido en el apartado e) del punto 2º del presente cuerpo reglamentario.

4º.- Se exceptúan del requisito previsto en el apartado c) del punto 2º, aquellos que gozando de un beneficio similar otorgado en otra jurisdicción se radiquen en el ámbito de vigencia de la presente reglamentación. En tal caso, deberán acreditar que gozan de dicho beneficio en la jurisdicción de la que provienen, debiendo renunciar al mismo en el momento de serle otorgada la pensión solicitada.

5º.- Los beneficiarios mencionados en el punto 1º deberán probar las situaciones en él previstas por medio de los siguientes requisitos:

a) En los casos de abandono del hogar por parte del cónyuge: mediante certificación expedida por la Policía Federal o en su defecto mediante información sumaria producida por autoridad competente;
b) Cuando el cónyuge se hallare físicamente imposibilitado: por intermedio de organismos competentes (nacional o municipal) y en los casos de internados, asilados, etcétera, por la institución oficial correspondiente;
c) Cuando el cónyuge estuviera ausente con presunción de fallecimiento: mediante información producida por autoridad judicial, conforme a las disposiciones del Código Civil;
d) En los casos de hijos mayores de 18 años, estuvieren en situación económica que le impidiera ayudar a su progenitor: mediante la presentación de certificados y/o prueba testimonial ante la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda.

6º.- Para presentar la documentación que se determina en los apartados a) y b) del punto anterior, los peticionantes tendrán un plazo de seis (6) meses, quedando la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda, facultada para prorrogarlo por otro plazo igual, cuando deban gestionarla ante autoridad judicial o Policía Federal, siempre que justifiquen tal circunstancia, y mientras tanto deberán suscribir una declaración jurada que contenga:

1) La situación del cónyuge.
2) Que no poseen recurso alguno.
3) Que de inmediato iniciarán las gestiones tendientes a proporcionar la documentación exigida.

4) Que, en caso de falsa declaración, se harán pasibles de las sanciones que establece el artículo 172 del Código Penal, cuyo texto se transcribirá en la misma.

Capítulo III

Del Trámite y Otorgamiento

7º.- Toda persona con derecho a percibir el beneficio instituído por la Ley Nº 13.478 (artículo 9º) modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 15.705, deberá presentar la solicitud de pensión ante la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, en formulario habilitado a tal efecto.

8º.- El Departamento de Contaduría de la citada Repartición, por intermedio de la División Pensiones, recibirá dicha solicitud y procederá a su verificación, a fin de constatar si la misma encuadra en los requisitos que exigen las citadas leyes y el presente reglamento.

9º.- Cumplimentada dicha tarea, las actuaciones serán derivadas de inmediato al Departamento de Servicio Médico, quien procederá a efectuar -con intervención del personal técnico asistencial- encuestas sociales, inspecciones, visitas domiciliarias, etc. Producidas las mismas, girará dichas actuaciones al Departamento de Contaduría (División Pensiones), debidamente diligenciadas, aconsejando el otorgamiento o no del beneficio solicitado.

10.- El Departamento de Contaduría (División Pensiones) dirigirá la solicitud al Registro de la Propiedad, dependiente del Ministerio de Educación y Justicia, a los efectos de obtener la información relacionada con la posesión de bienes raíces en jurisdicción nacional, en los casos en que el Departamento de Servicio Médico aconseje el otorgamiento de pensión.

11.- Con la información producida por el Registro de

la Propiedad y la encuesta social practicada por el Departamento de Servicio Médico de la citada Dirección General, el Departamento de Contaduría de la misma, propondrá a la Superioridad el otorgamiento o rechazo del pedido interpuesto.

12.- El Director General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Hacienda, con las constancias obrantes en las respectivas actuaciones, dictará el pertinente pronunciamiento acerca del otorgamiento o rechazo del beneficio, debiendo, en el primero de los casos, proyectar el acto de gobierno por el que se otorgará la pensión a la vejez.

13.- La pensión será acordada por el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Estado de Hacienda, la que comenzará a devengarse a partir del 1º del mes siguiente en que se dicte el respectivo decreto otorgando dicho beneficio.

14.- Una vez acordada la pensión, la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda, proveerá la respectiva credencial del pensionista, como documento de identificación de los beneficiarios, al solo efecto del cobro del beneficio acordado.

15.- Todas las actuaciones que realicen los peticionantes del beneficio, estarán exentas del pago de impuestos, sellados o cualquier otro gravamen.

Capítulo IV

De las Encuestas Sociales e Inspecciones Domiciliarias

16.- Toda solicitud de pensión a la vejez será motivo de una "encuesta social" que estará a cargo del Departamento de Servicio Médico de la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Ha-

cienda.

17.- La "encuesta social" de referencia, que se llevará a cabo por intermedio del personal competente del citado Departamento, deberá consignar:

a) Datos de identidad del peticionante:
Se establecerá el apellido y nombre, estado civil, edad, fecha y lugar de nacimiento.

b) Grupo familiar:
Se deberá detallar el número de personas que integran el grupo familiar, convivan o no con el solicitante, dejando las siguientes constancias:
1) Apellido y nombre.
2) Grado de parentesco que los une al solicitante.
3) Edad.
4) Estado civil.
5) Estado de salud.
6) Cantidad de hijos (mayores y menores).
7) Ocupación.
8) Entradas mensuales de cualquier concepto, ratificadas en los casos que corresponda, por medio de certificados expedidos por los respectivos empleadores.

c) Recursos propios:
Se informará si el solicitante posee algún ingreso en efectivo u otros recursos propios. En caso de ser propietario de bienes raíces, se establecerá si los mismos devengan renta, lo que deberá ser demostrado con el pertinente comprobante. Asimismo, en el supuesto de ser sublocador, se deberá informar el importe percibido en concepto de alquiler, constatado por medio de los recibos correspondientes.

d) El medio ambiente en que vive:
Se verificará el tipo de vivienda que ocupa, condiciones de habitabilidad de la misma y comodidades.

e) Años de residencia en el país y en la ciudad de Buenos Aires:
En caso de peticionantes extranjeros, se informará la fecha de ingreso en el país; medios con que lo hizo y quién se responsabilizó de su entrada.
En el supuesto de que el solicitante no cumplimentara esta parte de la encuesta, se requerirá información de la Dirección Nacional de Migraciones.

f) Ocupaciones o actividades anteriores:
Se consignará la tarea u oficio que desempeña o desempeñó el solicitante, si efectúa o efectuó aportes a algún régimen de Previsión Social.

g) Estado de salud:
Se informará acerca del estado de salud del peticionante.

h) Diagnóstico social:
Se dejará constancia, en forma clara, precisa y completa, de la situación real del peticionante.

i) Firma e impresión dígito pulgar del solicitante:
El solicitante deberá asentar su firma o impresión dígito pulgar en la "encuesta social", al pie de los datos referentes al grupo familiar.

18.- Las actuaciones debidamente diligenciadas, serán remitidas por el Departamento de Servicio Médico, al de - Contaduría.

19.- Periódicamente, la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, por intermedio del Departamento de Servicio Médico y a indicación del de Contaduría (División Pensiones), efectuará las inpecciones tendientes a comprobar si subsisten las situaciones que dieron origen al otorgamiento del beneficio, dentro de las condiciones y requisitos estipulados por la Ley Nº 13.478 (art. 9º) modificado por el art. 1º de la Ley Nº 15.705 y la presente reglamen-

tación.

20.- En los casos en que el pensionista modificara la residencia, con arreglo a lo dispuesto en los puntos 46, - 48 y 49, la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, requerirá de los organismos de Previsión de la jurisdicción en que el beneficiario fije nueva residencia, la colaboración pertinente, a fin de constatar si subsisten las situaciones que dieron origen al otorgamiento de la pensión.

En los casos en que el cambio de residencia se realice en orden a lo dispuesto en el punto 46, la citada colaboración se solicitará mientras dure la ausencia temporaria. En el supuesto de los puntos 48 y 49, lo será desde el momento en que se produzca la radicación en la nueva jurisdicción, hasta el instante en que el pensionista obtenga el - beneficio en el nuevo domicilio.

Capítulo V

De los Apoderados y Curadores.

21.- Cuando mediare incapacidad física u otro impedimento, el beneficiario, a fin de hacer efectiva su pensión, podrá designar un apoderado que actuará en su nombre y representación para tales efectos.

22.- A los fines indicados en el punto anterior, la representación será otorgada por el pensionista ante la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, por intermedio - de una carta poder.

23.- La citada Repartición, previa autorización de dicho poder, extenderá a nombre del apoderado, una credencial en la cual constará el consentimiento conferido por el pensionista a su representado. Dicha credencial, que deberá - ser presentada indispensablemente en el momento de hacerse efectiva la pensión, sólo tendrá validez a los efectos del

cobro por cuenta del beneficiario.

24.- Los beneficiarios que se encuentran en las condiciones previstas en el artículo 469 del Código Civil, harán efectiva su pensión por intermedio de sus respectivos curadores.

A esos efectos, la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, otorgará al curador una credencial, que tendrá la misma finalidad a que se ha hecho referencia en el punto 23 "in fine", del presente cuerpo reglamentario.

Capítulo VI

Monto del Beneficio

25.- Fíjase en los siguientes importes, el monto de las pensiones a la vejez, instituídas por el art. 9º de la Ley Nº 13.478, modificado por el art. 1º de la Ley Nº 15.705.

I) m$n. 500 mensuales

A los siguientes beneficiarios:

1) Varón o mujer soltero.
2) Varón o mujer viudos, sin hijos.
3) Mujer casada, sin hijos, cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:
   a) Abandonada por su cónyuge.
   b) Cuando el cónyuge estuviere ausente, con presunción de fallecimiento.

II) m$n. 625 mensuales

A los siguientes beneficiarios:

1) Varón casado, con esposa a su cargo.
2) Varón casado, varón o mujer soltero o viudo, con hijos menores de 18 años, o mayores de esa edad, cuando estos últimos se encuentren imposibilitados

parcial o totalmente para trabajar, que convivan - con el beneficiario o estén a su cargo.

III) Mujer casada, con hijos menores de 18 años o mayores de esa edad, cuando estos últimos se encuentren imposibilitados parcial o totalmente para trabajar, que - convivan con la beneficiaria o estén a su cargo cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:
a) Abandonada por su cónyuge;
b) Cuando el cónyuge estuviere ausente, con presunción de fallecimiento;
c) Cuando el cónyuge se hallare físicamente imposibilitado.

26.- Las pensiones otorgadas podrán ser modificadas en su monto en orden a lo señalado en el apartado e) del punto 2º, cuando durante su vigencia se produjera una variación en la situación económica del beneficiario, con relación a la existente al momento en que le fué otorgada la pensión.

Capítulo VII

De la Liquidación y Pago

27.- La liquidación y pago de los beneficios acordados estará a cargo de la Dirección General de Contabilidad y - Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, debiendo abonarse los mismos preferentemente - por intermedio de instituciones bancarias.

28.- El Banco Central de la República Argentina, en uso de las facultades que le acuerda su carta orgánica, dispondrá lo necesario a efectos de que el pago de las pensiones se efectúe en la Capital Federal, por intermedio del Banco de la Nación Argentina y demás bancos oficiales, nacionales o provinciales, mixtos o particulares y sus respectivas filiales.

29.- El pago será efectuado directamente al interesado o a su representante, debidamente autorizado, previa pre-

sentación de la respectiva credencial que justifique su calidad de apoderado o curador.

Capítulo VIII

30.- Los pensionistas que se hallaren imposibilitados físicamente de concurrir al lugar fijado para el pago, podrán solicitar que el mismo se efectúe en su respectivo domicilio o lugar en el que se hallare recluído. A esos efectos, la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda, efectuará las inspecciones pertinentes, a fin de constatar la necesidad de acceder a lo solicitado.

De las obligaciones de los Apoderados, Curadores y Beneficiarios

31.- Los apoderados y curadores deberán presentar en el momento del cobro, el certificado de supervivencia del titular, otorgado por autoridad competente.

32.- Los titulares del beneficio otorgado de acuerdo a lo prescripto en el apartado II), punto 25 de la presente reglamentación, deberán presentar cuatrimestralmente en la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, un certificado de supervivencia de la persona a su cargo, extendido por autoridad competente.

33.- Cuando por carencia de documentos identificatorios o por cualquier otra circunstancia debidamente justificada, exista la imposibilidad por parte de los pensionistas, de poder obtener el comprobante en cuestión, se dará intervención a la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, para que, por intermedio del Departamento de Servicio Médico, efectúe las comprobaciones pertinentes.

34.- La no presentación de los certificados de supervivencia, en término, dará lugar a la suspensión del pago del beneficio, hasta tanto se dé cumplimiento a ese requisito, salvo en los casos en que con la debida antelación, se gestione una prórroga que no podrá exceder de un mes, a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el punto 32 y cuya autorización será acordada por la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, frente a situaciones de excepción que justifiquen tal procedimiento.

35.- Los beneficiarios y apoderados o curadores de los mismos, quedan obligados a denunciar a la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, todas las variantes que se produzcan en la situación económica y/o familiar, que modifiquen a la que dió origen al otorgamiento de la pensión, como así también los cambios de domicilio que se produjeran.

Capítulo IX

De las Reconsideraciones, Suspensiones y Caducidades del Beneficio.

36.- Podrá reconsiderarse una pensión denegada o rehabilitarse una pensión caduca, cuando el recurrente probara fehacientemente tener derecho a ella. En dichos casos, los nuevos beneficios comenzarán a devengarse a partir del 1º del mes siguiente de interpuesto el recurso.

37.- Podrá recurrirse de un pedido de reconsideración rechazado, una vez transcurridos tres meses de la denegatoria, siempre que la situación haya variado y que las razones expuestas den lugar a una nueva "encuesta social". En dichos casos, los nuevos beneficios comenzarán a devengarse a partir del 1º del mes siguiente de presentado el re-

curso.

38.- Podrá suspenderse el pago de las pensiones concedidas:

a) Cuando el beneficiario solicite autorización para salir del país por períodos superiores a seis meses;
b) Por la no presentación de los certificados de supervivencia a que se refieren los puntos 31 y 32 de la presente reglamentación;
c) Por la incompatibilidad con otros beneficios;
d) Por el incumplimiento de la presentación de los informes, certificados y/o antecedentes solicitados por la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, dentro de los plazos establecidos que ésta fije;
e) Por los vencimientos de los plazos establecidos en los puntos 49 y 50 de la presente reglamentación.

39.- La suspensión del pago de la pensión, encuadrada en los casos antes señalados, será dispuesta por resolución del Director General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación.

40.- Las pensiones otorgadas caducarán:

a) Por fallecimiento del titular del beneficio;
b) Por renuncia expresa o tácita;
c) Por vida deshonesta o por ejercer la mendicidad o cuando el pensionista fuera condenado a prisión o reclusión dispuesta por autoridad competente;
d) Por abandono del país cuando el plazo exceda al fijado en el apartado a), punto 38 de la presente reglamentación;
e) Cuando al titular del beneficio le sobreviniera igual o superior renta o recurso de cualquier naturaleza, en orden a lo establecido en el punto 2º, apartado a) del Capítulo II;
f) Por no encuadrar más la situación del beneficiario, -

dentro de las condiciones exigidas por la Ley número - 13.478 -artículo 9º- modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 15.705 y la presente reglamentación;

g) Por el vencimiento de los plazos establecidos en los - puntos, 46, 49 y 50 de la presente reglamentación;

h) Por fijar su nueva residencia fuera del ámbito de la presente reglamentación, sin acogerse al procedimiento fijado en el Capítulo X (Cambio de residencia).

41.- Cuando el beneficiario dejara de percibir sus haberes por un período superior a tres meses, se procederá - en el término de los 30 días subsiguientes, a efectuar las averiguaciones tendientes a establecer los motivos. Si de ellas resultare que el pensionista ha perdido su derecho - por haberse producido algunas de las situaciones previstas en el punto 40 de la presente reglamentación, la caducidad de la pensión acordada se operará a partir de la fecha en que se dejó de percibirla.

42.- No habiéndose comprobado causales que motivaran - la caducidad del beneficio y transcurridos dos meses desde que finalizaron las averiguaciones pertinentes, sin que el pensionista -por sí o por representante- la hiciera efectiva, caducará igualmente el derecho a percibirla, a - partir de la fecha señalada en el punto precedente.

43.- La caducidad del beneficio será dispuesta por resolución ministerial. Dicho acto significará la inmediata suspensión del pago del beneficio acordado sin perjuicio - de exigir el reintegro de las sumas que indebidamente se - hubieran percibido, previa formulación del cargo, con las formalidades del caso.

44.- La Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda, queda facultada, en los casos en que lo estime necesario, a solicitar - de todas las Cajas Nacionales de Jubilaciones y Pensiones, información con respecto al beneficiario, a fin de que se

certifique si esos Organismos hubieran otorgado algún beneficio al ex pensionista, cuando la caducidad de la pensión se produce por renuncia o cambio de residencia del titular.

Capítulo X

De los Cambios de Residencia

45.- Los cambios de residencia del beneficiario podrán tener carácter temporario o definitivo y para efectuar los mismos, deberán cumplirse los trámites que se consignan en el presente capítulo.

46.- Se entenderá que la radicación es temporaria cuando el pensionista fija accidentalmente nuevo domicilio en otra jurisdicción y, su nueva residencia, no exceda del lapso de un año, a partir de la fecha que establezca la solicitud.

El cambio de radicación es definitivo cuando es propósito del pensionista establecer su nueva residencia en otra jurisdicción en forma permanente, o la misma exceda de un año, a partir de la fecha que se establezca en la solicitud.

47.- Cuando el pensionista tenga que fijar temporariamente nueva residencia fuera del ámbito de vigencia de la presente reglamentación, del radio Capital Federal, deberá solicitar autorización para ello ante la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, acompañando un certificado extendido por la autoridad competente del lugar en el que se radique y donde conste el nuevo domicilio.

A ese efecto, la repartición aludida cursará nota a los organismos de previsión de la provincia o lugar cuya jurisdicción se encuentre la localidad en que el beneficiario fije su residencia temporaria, comunicando la radicación de un pensionista en ese territorio.

Asimismo, requerirá de los citados organismos información con respecto al pensionista de que se trata, a fin de verificar si ha iniciado gestiones para obtener un beneficio similar en la nueva localidad, durante el lapso de su residencia en la misma.

Con constancia de los organismos referidos, de haber cursado recibo de dicha comunicación y obtenida la pertinente respuesta en sentido negativo sobre la iniciación de las gestiones a que se ha hecho mención en el párrafo precedente, podrá prestarse la autorización pertinente, por resolución ministerial, que dispondrá, asimismo, la prosecución de la liquidación y pago de la pensión, mientras dure la radicación temporaria del beneficiario.

48.- Vencido el plazo a que se refiere el punto 46 primer párrafo, el pensionista deberá reintegrarse al lugar de su residencia habitual. En caso contrario, se dispondrá la caducidad de la pensión, salvo que el beneficiario se acogiera al procedimiento señalado en el punto 50 de la presente reglamentación.

49.- Cuando el cambio de residencia tuviera carácter definitivo y el pensionista optara por gestionar un beneficio análogo en el lugar en que fije nuevo domicilio, deberán efectuarse trámites similares a los establecidos en el punto 47 de esta reglamentación.

Una vez cumplimentadas dichas diligencias, la autorización del cambio solicitado será acordada por resolución ministerial, la que dispondrá, a la vez, la liquidación y pago del beneficio por el término de 12 meses, a fin de permitirle la realización de las gestiones tendientes a la obtención del nuevo beneficio.

En los casos en que mediaren razones debidamente justificadas, ese lapso podrá prorrogarse por otros seis meses.

Cuando por circunstancias especiales se excedan los mencionados términos, los mismos podrán ser ampliados por un período no mayor de un año, mediante acto del Poder Eje

cutivo a propuesta de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación.

50.- Los cambios de residencia temporarios podrán transformarse en definitivos, debiendo a esos efectos, solicitarse autorización a la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación. En los casos en que el pensionista decidiera gestionar un beneficio similar en la nueva jurisdicción, deberán efectuarse los trámites a que se hace referencia en el punto 49 de la presente reglamentación.

La citada autorización, se concederá por resolución ministerial y la liquidación y pago del beneficio de que se trata, se efectuará con arreglo a los plazos que seguidamente se detallan:

a) Por el término de 12 meses, a fin de permitirle la realización de las gestiones destinadas a la obtención del nuevo beneficio, plazo que involucra el lapso que el beneficiario utilizó durante su residencia temporaria;
b) Dicho plazo podrá prorrogarse por otros 12 meses, cuando mediaren razones debidamente justificadas.
Cuando por circunstancias especiales se excedan los mencionados plazos, los mismos podrán ser ampliados por un período no mayor de un año mediante acto del Poder Ejecutivo, a propuesta de la Secretaría de Estado de Hacienda.

51.- Las solicitudes de cambio de residencia a que se refieren los puntos 49 y 50 no procederán en los casos en que el pensionista hubiera obtenido un beneficio similar, operándose en tales circunstancias la inmediata caducidad de la pensión.

52.- El pensionista autorizado a cambiar de residencia definitivamente que hubiera gestionado y obtenido el beneficio en la jurisdicción en que se radique, queda obligado

a presentar a la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda un certificado en el que conste la fecha a partir de la cual devenga la nueva pensión, y en el supuesto de producirse la duplicidad de percepción, deberá reintegrar el importe respectivo. En el caso de no operarse la devolución, se le formulará el pertinente cargo con intervención del respectivo Organismo de previsión provincial que le concedió el nuevo beneficio.

53.- Vencido los plazos a que se hace referencia en los puntos 49 y 50 y no regularizada su situación, se procederá a la suspensión del pago del beneficio y, consecuentemente se dispondrá la caducidad.

54.- La Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda como consecuencia de las autorizaciones que se acuerden para residir temporariamente o definitivamente, fuera del ámbito de vigencia de la presente reglamentación, adoptará las medidas tendientes a girar a los pensionistas el importe de las respectivas pensiones durante los plazos fijados en los puntos 47, 49 y 50.

55.- A fin de evitar la duplicidad en el otorgamiento de pensiones a la vejez, la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda remitirá a todos los organismos de previsión provinciales que tengan instituido un beneficio similar al que se reglamenta por el presente, una nómina completa de los beneficiarios a la fecha del presente decreto, debiendo semestralmente comunicar las altas y bajas que se produjeran.

Capítulo XI

Disposiciones generales

56.- Los beneficiarios que se hallaren internados, voluntariamente o no, en hospitales, colonias psiquiátricas u otros establecimientos similares en jurisdicción nacional o municipal, tendrán igualmente derecho a percibir la pen-

sión. Los que se hallaren internados en asilos o establecimientos análogos nacionales o municipales tendrán derecho a percibir el 50% del monto de la pensión.

57.- Los pensionistas comprendidos en el punto anterior deberán comunicar esa situación a la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda, adjuntando un certificado expedido por la autoridad competente del establecimiento en que se encuentren internados o recluidos, a los efectos del pago en esos lugares.

58.- El pensionista que por circunstancias fortuitas debiera recluirse o internarse en un establecimiento similar de carácter provincial, continuará percibiendo el beneficio mientras dure su internación o reclusión. Esta situación deberá comunicarla a la repartición aludida, acompañando un certificado extendido por la autoridad competente del establecimiento de que se trata, cuya firma deberá ser autenticada por la autoridad policial de la localidad.

59.- Cuando el pensionista hubiera optado por el procedimiento fijado en los puntos 47, 49 ó 50 de la presente reglamentación y tuviera en el ínterin que recluirse o internarse en un establecimiento provincial (hospitales, colonias psiquiátricas, etc.) se interrumpirán los plazos a que se refieren los citados puntos.

Los que se hallaren internados en asilos o establecimientos similares tendrán derecho a percibir el 50% del beneficio.

En esos casos continuará percibiendo el beneficio mientras dure su internación o reclusión, previa presentación de los certificados a los que se alude en el punto 58.

Una vez que haya cesado la internación o reclusión, podrá continuarse con el procedimiento prescripto en los puntos 47, 49 y 50 de la presente reglamentación y corresponderán los términos autorizados, hasta completar los mismos.

60.- En los ex territorios nacionales y hasta tanto los mismos instituyan en su jurisdicción el beneficio de que se trata, el pago se efectuará por intermedio de la Direc-

ción General de Correos y Telecomunicaciones, cuando no hubiera servicio bancario en la localidad.

61.- La prestación de los servicios por parte de las entidades bancarias y de Correos y Telecomunicaciones estará sujeta al pago de las comisiones respectivas, las que quedan a cargo de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación.

62.- Las pensiones que se reglamentan por el presente texto, son intransmisibles e inembargables y no pueden ser comprometidas a favor de terceros bajo ningún concepto o forma; en tal sentido, ningún acto celebrado por el pensionista tendrá validez para privarlo, restringirle o suspenderle el derecho a percibir la pensión que le hubiera acordado.

63.- La Secretaría de Estado de Hacienda queda facultada para reajustar los importes de las pensiones otorgadas hasta la fecha, con arreglo a las normas que se instituyen en la presente reglamentación.

64.- La Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación queda facultada para dictar las normas aclaratorias y de interpretación del presente reglamento, que se requieran para su mejor cumplimiento, considerándoselas como parte integrante del mismo.-

ACTO: DECRETO Nº 13.652/62.-

MATERIAS: EMPRESTITO DE RECUPERACION NACIONAL - TITULOS BANCOS

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.-

Visto el Decreto Nº 6.926/62 (') sobre creación de la Comisión Coordinadora del Empréstito de Recuperación Nacional 9 de Julio de 1962, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 1º del decreto mencionado, los miembros de dicha Comisión se desempeñarían durante el tiempo necesario para el cumplimiento de sus fines;

Que éstos han sido totalmente logrados mediante una cabal difusión en todo el ámbito de la República de los alcances y contenidos del Empréstito de Recuperación Nacional, permitiendo la colocación efectiva en todo el país de los valores de las emisiones durante todo el período que ha durado la suscripción;

Que ha sido factor decisivo del éxito mencionado, la patriótica y eficaz acción de todos los miembros integrantes de la Comisión, quienes han prestado su colaboración en forma honoraria y a quienes corresponde en consecuencia, agradecer tan importantes servicios;

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1691.-

Que el cierre definitivo de la suscripción se operó el día 30 de noviembre de 1962;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Dar por terminadas al 30 de noviembre de 1962 las funciones encomendadas por Decreto nº 6.926/62 a la Comisión Coordinadora del Empréstito de Recuperación Nacional 9 de Julio de 1962, creada por dicho decreto, en razón de haberse establecido la fecha referida como la del cierre definitivo de la suscripción.

ARTICULO 2º.- Agradecer a los señores miembros honorarios de la mencionada Comisión Coordinadora, ingeniero Luis A. Polledo, Dr. Bernardo A. Houssay, señores José Roger Balet y Juan Bautista Peña, y doctores Matías Mackinlay Zapiola, Pablo Calatayud y Carlos M. Noel, las eficaces importantes y patrióticas gestiones realizadas en el cumplimiento de la labor encomendada, que han redundado en el mejor logro del objetivo perseguido con la creación de dicha Comisión.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía e Interior y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Alvaro C. Alsogaray -
Rodolfo Martínez - Rafael R. Ayala

ACTO: DECRETO-LEY Nº 13.755/62.-

MATERIAS: INCOMPATIBILIDADES - JUBILACIONES

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1962.-

Visto el pedido que formula la Universidad de Buenos Aires de prórroga para un nuevo período de cinco años, del beneficio acordado por el artículo 2º del decreto Nº 5.610/57 (') para determinado personal docente que se desempeña en jurisdicción de las universidades nacionales, y

CONSIDERANDO:

Que la petición se funda en necesidades del servicio docente en el orden universitario;

Que el período establecido en dicho decreto Nº 5.610/57 finalizó en el mes de mayo de este año de 1962;

Por ello, constituyendo la medida solicitada una excepción a las previsiones de la ley Nº 14.499 (") y de acuerdo con lo aconsejado por el señor Ministro de Educación y Justicia;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Prorrógase por un nuevo período de cinco

(') Ver Digesto Administrativo Nº 255.- //-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 621.-

(5) años a contar del 29 de mayo de este año de 1962, para el personal en funciones con anterioridad a esta fecha comprendido en el artículo 2° del decreto N° 5.610/57, el beneficio acordado por dicho artículo 2°.

ARTICULO 2°.- Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la Nación.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, Defensa Nacional y de Educación y Justicia.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Rodolfo Martínez - José M. Astigueta - Alberto Rodríguez Galán



ACTO: DECRETO Nº 13.996/62.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - CANCELACION - DEUDAS - PAGOS - LIBRAMIENTOS - ORDENES DE DISPOSICION

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1962.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que en la Tesorería General de la Nación se encuentra pendiente de despacho, una apreciable cantidad de solicitudes de "Certificados de Cancelación de Deudas" tramitadas por acreedores del Estado con anterioridad al 31 de octubre ppdo., fecha de vencimiento establecida por resolución de la Secretaría de Hacienda, nº 239/62 (*), para la presentación de las mismas;

Que teniendo en cuenta que las solicitudes de que se trata han sido tramitadas en tiempo y forma, es necesario arbitrar las medidas necesarias para poder atenderlas, a fin de evitar mayores perjuicios a los titulares que han aceptado la cancelación de los créditos a su favor mediante la utilización de ese medio de pago;

Que la suma de los certificados emitidos hasta la fecha, ha alcanzado el límite de m$n. 12.000.000.000.-establecido por el decreto nº 8.565 del 23 de agosto de 1962 (**), por lo que, a efectos de cumplir el propósito enunciado en el considerando anterior, debe ampliarse dicha limitación;

//.

(*) Ver Digesto Administrativo nº 1.713.-
(**) Ver Digesto Administrativo nº 1.711.-

ACTO: DECRETO-LEY Nº 14.178/62.-

MATERIAS: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1962.-

VISTO:

Lo estatuido en el Decreto-Ley Nº 12.432 (1) relativo al sueldo anual complementario, y

CONSIDERANDO:

Que en el sector público integrado por el Estado Nacional (administración central, empresas y organismos descentralizados), los estados provinciales y sus municipios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hay entidades que se encuentran en condiciones de abonar en forma inmediata la totalidad del sueldo anual complementario, o en un menor número de cuotas que las establecidas por el decreto-ley Nº 12.432;

Que tal posibilidad debe facilitarse como medida tendiente a aliviar la situación de un ponderable número de servidores del Estado;

Que para conjugar los diversos aspectos que detallan los considerandos precedentes es condición necesaria y previa la demostración por parte de las entidades y empresas estatales, que para atender el pago en una o menos cuotas que las previstas en la aludida disposición legal, no deben solicitar, directa o indirectamen-

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1794.-

te el aporte del Tesoro Nacional, que han cumplido con el pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre y que, además, se encuentren en condiciones de atender regularmente sus obligaciones;

Que las empresas u organismos estatales que consideren hallarse en las condiciones mencionadas, deberán recabar la correspondiente autorización de excepción a la respectiva Secretaría de Estado de la que dependan, la cual únicamente la acordará cuando se cumplan estrictamente las condiciones establecidas;

Que es conveniente prever con la debida antelación, el organismo encargado de aclarar e interpretar los casos de duda que pudieren suscitarse, para obtener la lógica y consecuente unidad de criterio en la aplicación de la norma legal;

Que por su naturaleza, tal responsabilidad conviene discernirla al Ministerio de Economía;

Que las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrán adoptar el mismo criterio de pagarlo en una o en menos cuotas de acuerdo a sus posibilidades financieras y que asimismo las entidades descentralizadas y las empresas dependientes de los estados provinciales, así como los municipios bajo jurisdicción de éstos, podrán hacer efectivo el pago en la misma forma y bajo las condiciones exigidas para los organismos y empresas del Estado Nacional;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1°.- Podrán acordarse excepciones a la disposición establecida por el decreto-ley N° 12.432. Art.1° inciso a), cuando las empresas y entidades descentralizadas del Estado Nacional demuestren hallarse en condiciones de

atender el pago del sueldo anual complementario por el año 1962, en una o en menos cuotas que las previstas en el citado decreto-ley, sin necesidad de solicitar, directa o indirectamente, el aporte del Tesoro Nacional, hayan cumplido con el pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre y se encuentren, además en condiciones de atender regularmente sus obligaciones.

ARTICULO 2º.- Las empresas u organismos del Estado Nacional que consideren hallarse en las condiciones mencionadas en el artículo anterior, deberán requerir la correspondiente autorización de excepción a la respectiva Secretaría de Estado de la que dependan, la cual únicamente la acordará cuando se cumplan estrictamente las condiciones citadas. A tales efectos las Secretarías de Estado solicitarán y las empresas y/u organismos dependientes, estarán obligadas a proporcionar todas las informaciones y aclaraciones que juzguen necesarias.

ARTICULO 3º.- El Ministerio de Economía actuará como órgano de consulta y la interpretación que haga del presente decreto-ley, será de aplicación obligatoria.

ARTICULO 4º.- Los estados provinciales y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrán pagar el sueldo anual complementario en una o en menos cuotas que las previstas en el decreto-ley Nº 12.432, de acuerdo a sus posibilidades financieras.

ARTICULO 5º.- Las entidades descentralizadas y las empresas dependientes de los estados provinciales así como los municipios bajo jurisdicción de éstos, podrán hacer efectivo el pago del sueldo anual complementario en la misma forma y bajo las condiciones exigidas por el artículo 1º de este decreto-ley para los organismos y empresas del Estado Nacional.

ARTICULO 6º.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de

atender el pago del sueldo anual complementario por el año 1962, en una o en menos cuotas que las previstas en el citado decreto-ley, sin necesidad de solicitar, directa o indirectamente, el aporte del Tesoro Nacional, hayan cumplido con el pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre y se encuentren, además en condiciones de atender regularmente sus obligaciones.

ARTICULO 2º.- Las empresas u organismos del Estado Nacional que consideren hallarse en las condiciones mencionadas en el artículo anterior, deberán requerir la correspondiente autorización de excepción a la respectiva Secretaría de Estado de la que dependan, la cual únicamente la acordará cuando se cumplan estrictamente las condiciones citadas. A tales efectos las Secretarías de Estado solicitarán y las empresas y/u organismos dependientes, estarán obligadas a proporcionar todas las informaciones y aclaraciones que juzguen necesarias.

ARTICULO 3º.- El Ministerio de Economía actuará como órgano de consulta y la interpretación que haga del presente decreto-ley, será de aplicación obligatoria.

ARTICULO 4º.- Los estados provinciales y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrán pagar el sueldo anual complementario en una o en menos cuotas que las previstas en el decreto-ley Nº 12.432, de acuerdo a sus posibilidades financieras.

ARTICULO 5º.- Las entidades descentralizadas y las empresas dependientes de los estados provinciales así como los municipios bajo jurisdicción de éstos, podrán hacer efectivo el pago del sueldo anual complementario en la misma forma y bajo las condiciones exigidas por el artículo 1º de este decreto-ley para los organismos y empresas del Estado Nacional.

ARTICULO 6º.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de

Economía, del Interior y de Defensa Nacional y firmado - por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Eustaquio Méndez Delfino - Horacio García Belsunce - Rodolfo Martínez (h.) - José M. Astigueta

ACTO: DECRETO - LEY Nº 14.096/62.-

MATERIA: FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1962.-

Visto lo aconsejado por el señor Ministro de Educación y Justicia,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Modifícase el decreto Nº 11.265, de fecha 24 de octubre de 1962 (1), en la siguiente forma:

Artículo 3º.- La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas estará integrada por un Fiscal General, tres Fiscales Adjuntos y un Secretario General de Actuación. El Fiscal General tendrá la categoría jerárquica y presupuestaria de Fiscal de Cámara y su designación se hará con acuerdo del Honorable Senado de la Nación. A los Fiscales Adjuntos corresponderá la de Fiscales de Primera Instancia y al Secretario General de Actuación, la de Secretario de Segunda Instancia. Para el desempeño de

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1761.-

no ofrezcan manifiestamente los caracteres de importancia, gravedad o trascendencia a que se refiere el inciso anterior, serán giradas a la repartición correspondiente, que no podrá cuestionar dicha remisión;

h) Cuando de la investigación practicada por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas resultaren comprobadas transgresiones culpables a normas administrativas, pasará las actuaciones, con dictamen fundado, a la Procuración del Tesoro, en caso de tratarse los imputados de funcionarios de la jerarquía de Director General o superiores. En los casos de funcionarios inferiores a esa categoría, los antecedentes serán girados al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la Repartición correspondiente. En ambos casos, dichas actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberán instruir las autoridades correspondientes, las - que comunicarán al Fiscal General el resultado final - del mismo;

i) Cuando de las investigaciones practicadas por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas resultaren cargos por mal desempeño de sus funciones imputables a funcionarios que, de acuerdo con las normas vigentes, están sometidos al procedimiento de juicio político, los antecedentes serán girados, con dictamen, al Honorable Congreso de la Nación.

Artículo 6º.- A los fines de las investigaciones que la Fiscalía debe practicar estará investida de todas - las facultades que la ley confiere a los Fiscales y, especialmente:

a) Tomar declaraciones testimoniales, requiriendo de los organismos competentes el auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer a quienes deban ser interrogados;

b) Disponer el allanamiento de los domicilios y lugares - donde deban practicarse pesquisas, secuestros o deten-

ciones, a cuyo efecto librará las órdenes correspondientes, siempre que en el curso de la investigación surgieran graves presunciones de la existencia de delito, facultad que no podrá ser delegada en los Fiscales Adjuntos;

c) Examinar los libros de contabilidad de entidades privadas o públicas;

d) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrá requerir de las Reparticiones o funcionarios públicos técnicos la colaboración necesaria, que estarán obligados a prestar;

e) Solicitar informes a cualquier Repartición de la Administración Pública o a particulares, incluso Bancos y escribanos públicos, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se le fije, bajo apercibimiento de ley;

f) Solicitar el auxilio de la fuerza pública y pedir la colaboración de todos los Servicios de Informaciones del Estado. La Policía Federal, la Prefectura Nacional Marítima y la Gendarmería Nacional actuarán como organismos auxiliares de la Fiscalía en todas las investigaciones que ella practique;

g) Disponer la detención, por medio de las autoridades respectivas, de los presuntos responsables de delitos, que deberán ser puestos de inmediato a disposición de los jueces competentes, conforme lo dispuesto por el inciso c) del artículo 5º del presente;

h) Actuar en cualquier lugar de la República, en cumplimiento de sus funciones, ya sea en forma directa o por intermedio de las autoridades judiciales correspondientes, a las que exhortará a tal efecto.

Artículo 7º.- La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas ajustará sus procedimientos a las normas del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital y Territorios Nacionales, en cuanto fueren com

patibles con las disposiciones contenidas en este decreto.

Artículo 8º.- La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas dará a publicidad las instancias judiciales, administrativas o parlamentarias que promueva como consecuencia de las conclusiones a que arribe en su investigación, cuidando de no revelar hechos cuya difusión afecte la eficacia de procedimientos pendientes.

Cuando de la investigación no resulte mérito para la formación de instancia alguna administrativa, judicial o parlamentaria, y los implicados lo solicitaren, las conclusiones serán igualmente dadas a publicidad.

Artículo 9º.- La Secretaría de Informaciones de Estado hará entrega a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas de los antecedentes que le fueran girados por la ex Comisión Nacional de Investigaciones.

Artículo 10.- El Fiscal General, conjuntamente con los Fiscales Adjuntos, dictará, en acuerdo, el Reglamento interno para el mejor funcionamiento del organismo, estableciendo el orden de reemplazo del Fiscal General y Fiscales Adjuntos, en los casos de ausencia o impedimento.

Artículos 11, 12 y 13.- Corresponden a los artículos 9º, 10 y 11 ya sancionados, sin modificaciones y respectivamente.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Educación y Justicia.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Rodolfo Martínez - José M. Astigueta - Alberto Rodríguez Galán.

ACTO: DECRETO Nº 311/63.-

MATERIA: CONGRESO DE LA NACION

Buenos Aires, 15 de enero de 1963.-

Visto los decretos 9.205/62 (') y 9.746/62 ("), relativos ambos al gobierno administrativo de las dos ramas del H.Congreso de la Nación y con el propósito de precisar sus alcances y fijar las directivas que una y otra norma establecen,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Mientras dure la actual situación del H. Congreso de la Nación, los Secretarios de las H.Cámaras de Diputados y Senadores seguirán ejerciendo las facultades que les otorgan los respectivos reglamentos, en cuanto no sean incompatibles con dicha situación. Tendrán además, las atribuciones que el artículo 39, inciso 10 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el artículo 32, inciso 8º, del Reglamento del Senado asignan a los Presidentes de una y otra Cámara. A los fines de lo dispuesto en este artículo, los Prosecretarios sustituirán a los Secretarios con las mismas facultades en los casos que reglamentariamente corresponda tal reemplazo.

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1731.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1737.-

ARTICULO 2º.- Todas aquellas cuestiones que excedan las facultades concedidas a los Secretarios por los artículos anteriores, serán resueltas por el Ministerio del Interior, por sí o a propuesta de aquéllos. La aprobación de los presupuestos de sueldos y gastos de cada Cámara será dada por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 3º.- Cuando se trate de asuntos comunes a ambas Cámaras, las disposiciones que se adopten o propongan deberán contar, por lo menos, con el acuerdo de tres de los Secretarios.

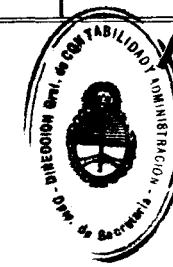
ARTICULO 4º.- El Ministro del Interior podrá delegar en el Subsecretario o en los Secretarios de las H.Cámaras algunas de las facultades que se le asignan por el presente decreto.

ARTICULO 5º.- Ratifícanse los actos realizados por los secretarios después de la sanción del decreto 9.746/62 y hasta la publicación del presente, siempre que encuadrasen en las normas del decreto 9.205/62.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Rodolfo Martínez.

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1841.-



ACTO: EXPEDIENTE Nº 683.412/62.-

MATERIAS: RESPONSABILIDAD PENAL - FUNCIONARIOS PUBLICOS

MULTAS

//ñor Secretario de Hacienda:

1.- Surge de las presentes actuaciones que la Dirección Nacional de Estadística y Censos, después de hechas las comprobaciones del caso y en uso de las atribuciones que le confiere el art. 22 de la Ley 16.450, por resolución Nº 78, de 29 de agosto de 1962 (fs. 5), aplicó a la Municipalidad de Marcos Juárez una multa de $ 5.000 por haber omitido suministrar las informaciones - que aquélla le requirió oportunamente, sobre patentamiento de vehículos. Funda la resolución en los arts. 6º y 14 de la Ley 14.046 y el art. 22 de la ya citada Ley - 16.450.

Como la multa no ha sido satisfecha, la Dirección - de referencia solicita su ejecución judicial.

2.- Como es sabido, es un principio general de nuestro derecho, la irresponsabilidad penal de las personas de existencia ideal (art. 43, Código Civil), de manera que sólo por disposición expresa de la ley puede ejercerse una acción penal y condenarse a una pena, a las corporaciones o personas jurídicas. Y aún en tales casos, tratándose de excepciones, éstas, según la Corte - Suprema, deben interpretarse restrictivamente, limitán-

//-

dolas a aquellas personas jurídicas de existencia volunt
ria, de interés privado. "Tratándose de personas jurídic
de existencia necesaria -ha dicho el alto Tribunal, en s
tencia de 20 de diciembre de 1944- creadas con un fin po
tico por excelencia, como son el Estado, las provincias
cada uno de los municipios, o de órganos de la administr
ción pública, la excepción es inaplicable y la regla ge
ral recobra su valor. Es inconcebible un órgano del Est
condenado por defraudación al mismo Estado; una provinci
condenada por defraudación al Estado General. Si los g
bernantes o los funcionarios cometieran actos de defraud
ción aduanera o participaran en las defraudaciones comet
das por terceros, la responsabilidad no puede ser, en t
caso, sino sólo personal". (Diebel y Saporiti y Div.Gene
de Hospitales de Sgo. del Estero c. Aduana: Fallos, t. 2
p. 419).

La Ley 14.046 no sólo no ha derogado el principio
la irresponsabilidad penal de las personas de existencia
deal, sino que, por lo contrario, ha establecido que los
responsables de las multas del art. 14, son "todas las p
sonas que, por sí o por las entidades que representan, d
ban suministrar informaciones a cargo de la Dirección Gra
del Servicio Estadístico Nacional", es decir, personas f
sicas, aun cuando la obligación de suministrar a dicha D
rección todos los datos e informaciones de interés públi
que ésta les solicite, ha sido puesta a cargo de "todas
las autoridades y reparticiones nacionales ... así como
las provinciales o municipales" (art. 6º).

Abonan además este criterio las disposiciones conten
das en el art. 14, última parte, y en el art. 16 de la m
ma Ley 14.046, donde se establece, por una parte, la eve
tual aplicación de las penalidades previstas por el art.
239 del Código Penal en caso de reincidencia, es decir, l
pena de prisión de 15 días a un año, que solo puede impo-
nerse a personas físicas y, por la otra, la responsabili-

dad personal de los directores, administradores, gerentes o miembros de la razón social cuando la infracción provenga - de entidades civiles o comerciales y la responsabilidad subsidiaria de la entidad. De ello resulta, en conclusión, que, tratándose de entidades públicas, la responsabilidad es únicamente personal de los respectivos funcionarios, sin responsabilidad subsidiaria para la entidad.

3.- En consecuencia, la multa que la Dirección Nacional de Estadística y Censos considera debe aplicarse en razón de que la Municipalidad de Marcos Juárez no ha suministrado las informaciones sobre patentamiento de vehículos que le fueron requeridas oportunamente, corresponde sea impuesta, no a la comuna, sino al funcionario o representante de ella que aparezca culpable de la omisión, motivo por el cual, cabe dejar sin efecto la resolución Nº 78/62 de fs. 5 y proseguir el trámite de las actuaciones con el fin de individualizar al funcionario responsable de la infracción.-

DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS, diciembre 26 de 1962.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General.

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Dpto. de Sorteos -

ACTO: DECRETO Nº 727/63.-

MATERIA: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Casinos)

Buenos Aires, 28 de enero de 1963.-

Visto el expediente Nº 383.619/62 S.H., por el cual la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos solicita se modifique el artículo 1º del decreto 1.244/61 (1), en el sentido que se aumente a m$n. 330.- el máximo de la remuneración autorizada por el referido texto legal para los agentes contratados para desempeñarse en la "Explotación Salas de Entretenimientos", y

CONSIDERANDO:

Que el aumento solicitado se fundamenta en un hecho de estricta justicia, por cuanto equipararía a los agentes que se desempeñan con carácter de contratados en las Salas de Entretenimientos que administra el organismo referido, a aquellos que prestan servicios en forma estable y efectiva;

Que en las circunstancias actuales, resulta prácticamente imposible lograr el concurso de personas capacitadas para cumplir con eficiencia las tareas que se requieren, teniendo en cuenta, además, que no se les abona ninguna otra retribución por concepto alguno; //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1343.-

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Elévase al importe de TRESCIENTOS TREINTA P SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 330.-) diarios, el máximo de l retribución a abonarse al personal contratado por la Lote ría de Beneficencia Nacional y Casinos en las condiciones establecidas por el decreto Nº 1244/61.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio Méndez Delfino
Horacio A.García Belsunce.

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1843.-



ACTO: DECRETO - LEY Nº 573/63.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD (Art. 32) - PRESUPUESTO - EJERCICIO - LIBRAMIENTOS

Buenos Aires, 23 de enero de 1963.-

Visto el artículo 32 de la Ley de Contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto por el mismo, los libramientos emitidos caducan al año de su entrada en la Tesorería General de la Nación;

Que a raíz de las dificultades del Tesoro Nacional, no ha sido posible atender en todos los casos el pago de los libramientos, por lo que transcurrido el plazo referido han quedado sin valor, y por lo tanto, no pueden hacerse efectivos;

Que ante tal circunstancia, sería necesario arbitrar nuevos créditos, conforme lo determina el artículo 36 de la Ley de Contabilidad, procedimiento que dada la gran cantidad de situaciones a resolver daría lugar a una complicada tramitación, además de provocar distorsiones en las cifras del presupuesto ya que, por una parte se aumentaría el volumen de gastos y por la otra se abultarían los recursos al arbitrar créditos que se compensarían con iguales sumas provenientes de la cancelación de caducidad;

//-

Que, en consecuencia, dado que evidentemente se trata de una situación anormal, derivada de factores no previstos en las reglamentaciones de carácter administrativo-contable, es necesario arbitrar una solución de emergencia, a fin de evitar perjuicio a los acreedores del Estado que no han podido hacer efectivos sus créditos por motivos ajenos a su gestión;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Queda en suspenso hasta el cierre del ejercicio 1963, el plazo de un año a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Contabilidad, con respecto a los libramientos correspondientes a los ejercicios 1961 en adelante que se encuentren en la Tesorería General de la Nación, aun cuando dicho plazo se hubiere cumplido con anterioridad a la fecha del presente decreto-ley.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, de Defensa Nacional y de Economía, y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, y previa intervención del Tribunal de Cuentas, pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - Rodolfo Martínez - José M. Astigueta - Eustaquio Méndez Delfino - Horacio A. García Belsunce.

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Dpto. de Secretaría -

ACTO: DECRETO Nº 499/63.-

MATERIAS: PRESUPUESTO - BANCOS - TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION - FONDOS

Buenos Aires, 21 de enero de 1963.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que por decreto Nº 11.429/62 (') se fijó hasta el - 31 de diciembre de 1962, la vigencia de las excepciones acordadas al decreto Nº 11.800/61 ("), sobre depósitos oficiales en el Banco de la Nación Argentina;

Que diversos organismos del Estado, especialmente a quellos que desarrollan actividades comerciales e indus triales, han manifestado la necesidad de que el Poder E jecutivo ratifique las citadas medidas de excepción, a cuyo efecto se requiere contar con el asesoramiento pre vio de la Comisión Especial creada por el artículo 2º del decreto Nº 11.429/62;

Que hasta tanto dicho requisito pueda cumplirse, y a los efectos de evitar inconvenientes en el desenvolvi miento de las distintas entidades oficiales interesadas en mantener las excepciones al decreto Nº 11.800/61, se considera conveniente prorrogar, hasta el 30 de junio - de 1963, la aplicación del decreto Nº 11.429/62 antes - mencionado;

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1783.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1539.-

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 30 de junio de 1963, la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 1º del decreto Nº 11.429, del 29 de octubre de 1962.
ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - Eustaquio Méndez Delfino
Horacio A. García Belsunce.



ACTO: DECRETO Nº 830/63.-

MATERIAS: AUTOMOTORES OFICIALES - AUTOMOTORES ADSCRIPTOS - COMPENSACIONES - PROHIBICIONES - DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO (Cuenta Especial)

Buenos Aires, 31 de enero de 1963.-

Visto los decretos números 8.534/61 (¹), 11.182/61 (") y 9.353/62 (°), relativos a la utilización de automóviles para el servicio oficial, y

CONSIDERANDO:

Que el régimen adoptado tenía por objeto evitar las mayores erogaciones que importa el mantenimiento de automóviles destinados al servicio oficial de ciertos funcionarios, pero, no obstante, la situación actual del Tesoro Nacional exige extremar las restricciones de todas aquellas erogaciones que no sean imprescindibles para el necesario funcionamiento de los organismos del Estado y la prestación de servicios a su cargo;

Que tal necesidad debe privar sobre la consideración de otros factores y, en consecuencia, no se justifica afectar las economías previstas en el decreto Nº 8.534/

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1459.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1516.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1774.-

62 al destino fijado en el mismo, mientras otros compromisos de atención ineludible quedan postergados por la insuficiencia de los recursos del Tesoro Nacional;

Que la suspensión del régimen de concesión de créditos para adquisición de automóviles por los funcionarios indicados en los decretos referidos, tal como se dispone en el presente, no autoriza a habilitar el uso de unidades al servicio oficial de quienes, como consecuencia de nuevas designaciones, promociones o reestructuraciones, adquieran la jerarquía de los que tenían hasta ahora derecho al aludido crédito;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial, queda suspendida la aplicación de los decretos Nros. 8.534/61, 11.182/61 y 9.353/62, en lo que hace al otorgamiento de nuevos préstamos a los funcionarios de los organismos, empresas o dependencias del Estado, sea cual fuere su naturaleza jurídica o relación administrativa, para financiar la adquisición de automóviles adscriptos al servicio oficial.

ARTICULO 2º.- Para los préstamos ya acordados, serán de aplicación las normas de los decretos señalados en el artículo anterior.

ARTICULO 3º.- Los préstamos en trámite deberán paralizarse en el estado en que se encuentren, devolviendo las actuaciones a las dependencias de origen, salvo los casos en que, con anterioridad a la fecha establecida en el artículo 1º, se hubiere contraído compromiso formal y documentado con firmas proveedoras.

ARTICULO 4º.- La Dirección General de Suministros del Estado informará a la Secretaría de Estado de Hacienda, dentro

del plazo perentorio que ésta fije, con respecto a los compromisos a que se refiere el artículo anterior, a efectos de la resolución final que deba adoptarse.

ARTICULO 5º.- Los órganos de fiscalización y control verificarán el estricto cumplimiento del presente decreto.

ARTICULO 6º.- Todos los organismos, empresas y dependencias del Estado deberán informar a la Secretaría de Estado de Hacienda, en el plazo y forma que ésta determine, acerca de los préstamos acordados con arreglo a los decretos - 8.534/61, 11.182/61 y 9.353/62, quedando facultada dicha - Secretaría para requerir la colaboración del Tribunal de Cuentas de la Nación para verificar o controlar la información.

ARTICULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 8º.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección General de Suministros del Estado, a sus efectos.-

GUIDO - Eustaquio A.Méndez Delfino -
Horacio García Belsunce.

ACTO: RESOLUCION GRAL. D.G.I. Nº 868/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - IMPUESTOS A LOS REDITOS - AGENTES DE RETENCION

Buenos Aires, 17 de enero de 1963.-

Visto las sugestiones que diversas entidades han hecho llegar a esta Dirección propiciando la modificación del régimen de retenciones vigente, y

CONSIDERANDO:

Que el sistema de retenciones establecido en las normas de referencia, al par que facilita el ingreso de los gravámenes, mediante pagos anticipados a cuenta de los mismos, tiende a reprimir la evasión impositiva, permitiendo ello una mayor equidad en la distribución de la carga fiscal;

Que, asimismo, es necesario delimitar con más precisión los responsables que deben actuar como agentes de retención, incluyendo a las entidades públicas y a las civiles, por la importancia de los réditos abonados por las mismas;

Que, además, cabe incorporar al sistema de retención a diversas actividades actualmente no comprendidas, con el objeto de hacer al mismo más homogéneo y equitativo;

Que, por último, y a efectos de no originar en la práctica retenciones que provoquen trámites posteriores,

//-

es conveniente reducir las tasas y aumentar los montos no sujetos a retención;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8°, 28 y 29 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones),

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

R E S U E L V E :

1°.- Sin perjuicio de las retenciones que corresponda practicar de conformidad con las disposiciones vigentes, las entidades públicas, incluyendo empresas y entes autárquicos nacionales, provinciales y municipales; los comerciantes; las sociedades comerciales, las sociedades y asociaciones civiles, con o sin personería jurídica; los profesionales y los comisionistas, consignatarios y martilleros públicos, deberán actuar como agentes de retención cuando paguen a personas de existencia física, sucesiones indivisas y sociedades, residentes o con domicilio en el país, importes por los conceptos que se indican en los puntos siguientes, en los casos y en las formas que establece la presente resolución.

Las personas físicas no serán responsables de actuar como agentes de retención en los pagos que realicen por causas ajenas a su actividad comercial, profesional, etc.

Intereses

2°.- Corresponderá la retención de la tasa del ocho por ciento (8%) sobre el importe que exceda de cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000), en concepto de impuesto a los réditos, en cada pago que se efectúe por intereses de capitales recibidos en préstamo o depósito, cualesquiera sean sus denominaciones o formas de pago.

No están alcanzados por esta disposición los intereses de depósitos en caja de ahorro -sin límite de monto- y los producidos por las sumas de dinero que las empresas -

acrediten a sus empleados en concepto de depósitos o préstamos, en la forma que fija la reglamentación del artículo 19, inciso h) de la Ley del Impuesto a los Réditos los provenientes de saldos de precio de venta de bienes, los presuntos - por ventas a plazos, los acreditados o abonados a los socios sujetos a las disposiciones del artículo 86 del decreto reglamentario de la misma ley, los provenientes de operaciones de pases y cauciones de valores bursátiles y los abonados por las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda.

Cuando los pagos a que se refiere este punto se efectúen a responsables no inscriptos en el impuesto a los réditos,- la tasa de retención será del veinticinco por ciento (25 %).

Honorarios, Comisiones y Otras

Retribuciones

3°.- Corresponderá la retención de la tasa del ocho por ciento (8%) sobre el importe que exceda de diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000), en concepto de impuesto a los réditos, en cada pago que se efectúe por honorarios, comisiones y otras retribuciones por prestaciones de servicios no efectuadas en relación de dependencia y en los que no haya aportes de materias primas o productos, con las excepciones contempladas en los puntos cuarto y séptimo.

Cuando los pagos enunciados en este punto se efectúen a responsables no inscriptos en el impuesto a los réditos, la tasa de retención será del veinticinco por ciento (25 %).

4°.- No corresponderá la retención de la tasa del tres por ciento (3%)sobre el importe que exceda de diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000) en concepto de impuesto a los réditos, en cada pago que se efectúe por:

a) Comisiones u otras retribuciones abonadas a agencias productoras de publicidad;
b) Comisiones u otras retribuciones abonadas a productores

contratados por compañías de seguros y capitalización y sociedades de ahorro y préstamo, siempre que los mismos tengan local establecido por su cuenta y personal a su cargo;

c) Otras comisiones o retribuciones asimiladas a las contenidas en este punto por resolución de esta Dirección.

Cuando los pagos enunciados en este punto se efectúen a responsables no inscriptos en el impuesto a los réditos, la tasa de retención será del diez por ciento (10 %).

5º.- Cuando los pagos a que se refieren los puntos tercero y cuarto estén sujetos a descuento por aportes jubilatorios, la retención del impuesto se practicará sobre el importe que resulte una vez deducido el monto descontado para tales aportes.

Alquileres de Inmuebles

6º.- Corresponderá la retención del ocho por ciento (8%) sobre el importe que exceda la suma de veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000), en concepto de impuesto a los réditos, en cada pago por alquileres de inmuebles.

Aunque el precio de la locación comprendiera también el alquiler de muebles no corresponderá hacer deducción alguna por tal concepto.

Cuando los pagos enunciados en este punto se efectúen a responsables no inscriptos en el impuesto a los réditos, la tasa de retención será del veinticinco por ciento (25%).

Otras Retenciones o Beneficiarios no Inscriptos, Exclusivamente

7º.- Corresponderá la retención de la tasa del cinco por ciento (5%) sobre el importe que exceda de diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000), en concepto de impuesto a los réditos, en cada pago que se efectúe a personas, suce-

siones indivisas o sociedades no inscriptas en el impuesto a los réditos, por:

a) Fletes;
b) Servicios u obras, cuando el que los ejecute emplee mano de obra de terceros (contratistas de obra, trabajos a destajo, de trabajos agrícola-ganaderos, empresarios de cuadrillas, empresarios de orquestas y bandas de música, etc.);
c) Servicios u obras, cuando el que los ejecute incorpore materiales o productos (constructores de obras, pintores, talleres mecánicos, etc.).

Quedan excluídos de este punto los pagos que tengan un tratamiento expreso en otras disposiciones de esta resolución.

Responsables no comprendidos en las Disposiciones Precedentes

8º.- No estarán sujetas a retención las sumas percibidas por los Bancos, las sociedades de capitalización, las compañías de seguros, las sociedades de ahorro y préstamo, las empresas de transporte de pasajeros, las empresas concesionarias de servicios públicos, las agencias de navegación y las entidades expresamente exentas del gravamen.

Administradores, Agentes Financieros, Mandatarios y Otros Intermediarios

9º.- Los responsables enunciados en el punto 1º, que actúen como administradores, agentes financieros, mandatarios u otra clase de intermediación, deberán actuar, asimismo, como agentes de retención, cuando paguen por cuenta de terceros -comprendidos o no en dicho punto-sumas consignadas en los puntos segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo y so-

bre las cuales no se hubiera practicado la retención.

Las operaciones corrientes que realizan los Bancos (pagos de cheques, giros, etc.) no se hallan involucradas en esta disposición.

Venta de Mercaderías, Materias Primas, Etc., por parte de Responsables no Inscriptos en los Impuestos a los Réditos y las Ventas.

10.- Cuando los responsables citados en el punto primero -excepto profesionales, comisionistas, consignatarios y martilleros públicos- adquieran mercaderías, materias primas u otros bienes muebles, de uso o de consumo, a comerciantes e industriales (personas físicas, sucesiones indivisas o sociedades), residentes o con domicilio en el país, no inscriptos en el impuesto a los réditos, deberán retener el tres por ciento (3%), en concepto de dicho gravamen, sobre el importe bruto de cada operación o de la factura o documento equivalente -si lo hubiere-. Asimismo, deberán retener, sobre el monto bruto de cada operación, el siete por ciento (7%), en concepto de impuesto a las ventas, cuando dichos proveedores no declaren su número de inscripción en este gravamen o su carácter de no contribuyentes.

No corresponderá efectuar tales retenciones cuando el monto de la operación o de la factura o documento equivalente -si lo hubiere- no alcance a veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000).

Cuando las adquisiciones y pago o documentación de las mismas, a que se refiere este punto, se realicen por intermedio de comisionistas u otros intermediarios que actúen en nombre propio, compete a estos últimos el cumplimiento de las disposiciones de este punto, debiendo dejar constancia de este hecho y de los datos y número de inscripción en el impuesto a los réditos y situación en el impuesto a las ventas del vendedor, en la documentación que cursen al comprador.

Oportunidad en que debe efectuarse la Retención

11.- Las retenciones de que trata esta resolución serán practicadas en el momento en que se efectúen los pagos o al documentarse la obligación (emisión de pagaré, etc.).

No deberá practicarse la retención cuando el importe de la misma no alcance a cien pesos moneda nacional (m$n.100).

Declaración y Mención en la Documentación de los Números de Inscripción en los Impuestos a los Réditos y a las Ventas

12.- Las personas o entidades sujetas a retención -cuya procedencia o tasa a aplicar dependan del carácter de inscriptas o no en el impuesto a los réditos y, en su caso, en el impuesto a las ventas-, deberán consignar mediante sello o impresión, en toda factura o documentación que emitan con motivo o como consecuencia de las operaciones alcanzadas por las disposiciones precedentes, además de su nombre y apellido o denominación, y domicilio, sus números de inscripción en ambos gravámenes o la expresión "ventas no contribuyente", en caso de no ser responsable de este último tributo.

En el supuesto que no emitieran documento, comunicarán al agente de retención los números de inscripción o la condición de "no contribuyente" en el impuesto a las ventas, en caso de no ser responsables de dicho tributo, mediante declaración jurada en nota simple, en la que dejarán constancia de: nombre y apellido o denominación, domicilio real y comercial, aclaración de la firma y carácter que inviste el firmante (propietario, gerente, apoderado, etc.).

Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo de este punto, las personas o entidades indicadas en el mismo firmarán la constancia indicada, en la primera factura o documento equivalente que emitan, salvo que hubiesen remitido las comunicaciones establecidas en los párrafos cuarto o -

quinto del punto once de la Resolución General número .- 814 (¹) (R. y V.).

Los que hubiesen emitido o emitan facturas o documentos equivalentes antes del primero de febrero de 1963, por montos de veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000), o más, también estarán sujetos a las retenciones establecidas en el punto 10 de esta resolución, sobre los importes que perciban (en efectivo, cheque, pagaré, etc.), a partir de dicha fecha, salvo que antes del cobro hayan comunicado o comuniquen, en la forma dispuesta en este punto, sus números de inscripción en los impuestos a los réditos y a las ventas o su condición de no contribuyentes de este último gravamen.

Forma de Ingreso de las Retenciones

13.- A los fines del ingreso de las retenciones practicadas, los agentes de retención podrán optar por alguno de los siguientes procedimientos:

a) Ingresos individuales:
Las sumas retenidas se ingresarán en forma individual, dentro de los quince (15) días de practicada la retención, mediante depósito bancario (formularios 94/A y 95/V), debiendo entregarse un ejemplar de la respectiva boleta al contribuyente, como comprobante de la retención;

b) Ingresos mensuales individuales:
En este caso, dentro de los primeros quince (15) días de cada mes deberán ingresarse las retenciones practicadas durante el mes anterior, mediante depósito bancario formularios 94/A y 95/V),debiendo entregarse un ejemplar de la respectiva boleta al contribuyente, como comprobante de la retención;

c) Ingresos mensuales globales:

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1770.-

Los agentes de retención que optaren por este procedimiento, ingresarán el importe total de las retenciones practicadas en el curso del mes anterior, dentro del plazo fijado en el inciso b), individualizando a los contribuyentes mediante declaración jurada (formularios 98 y 7099/C), que deberán presentar a esta Dirección en igual término.

Dichos ingresos podrán efectuarse mediante depósito (formularios 95/N y 95/Ñ), cheque o giro, a la orden de la Dirección General Impositiva.

Asimismo, el agente de retención deberá entregar al contribuyente un comprobante en el que dejará las siguientes constancias: "Ingreso a efectuar según declaración jurada del mes de ..... de 19..., importe, fecha y concepto de la retención, nombre y apellido o denominación del contribuyente y del agente de retención, domicilio de los mismos, aclaración del nombre y apellido del firmante y carácter que inviste (propietario, gerente, apoderado, etc.)".

Comunicación a la Dirección General Impositiva de Falta de Entrega de la Constancia de Retención

14.- Si dentro de los sesenta (60) días corridos de practicada la retención, el contribuyente no recibiera la constancia respectiva del agente de retención, deberá comunicar tal hecho a esta Dirección.

Dicha comunicación será efectuada a la Agencia o Distrito correspondiente al domicilio del responsable a quien se le practicó la retención, debiendo contener los siguientes datos: apellido y nombre o denominación, y domicilio de la firma vendedora; apellido y nombre o denominación, y domicilio del agente de retención, impuesto, monto de la retención y fecha de la misma.

Solicitud de Número de Inscripción

15.- Los contribuyentes no inscriptos comprendidos en esta resolución y los que inicien sus operaciones, deberán solicitar a esta Dirección la asignación de número de inscripción en los impuestos a los réditos y/o a las ventas, cubriendo a tal efecto el formulario número 3853/A y regularizando su situación impositiva, en caso de corresponder.

Las sociedades de personas que no lleven libros que les permitan confeccionar balances en forma comercial, consignarán, en la documentación de que trata esta resolución, además de su situación en el impuesto a las ventas, el número de inscripción en el impuesto a los réditos del socio que presentó la declaración jurada de la entidad (formulario Nº 127).

Autorizaciones de no Retención

16.- Excepcionalmente y cuando los hechos alegados y la documentación aportada lo justifiquen, se podrá autorizar a los interesados que así lo soliciten a que no se les practiquen las retenciones dispuestas en la presente resolución.

Imposibilidad de Retener

17.- No están obligados a actuar como agentes de retención quienes, por la modalidad especial de la operación no abonen directamente los importes sujetos a retención.

Aplicación de esta Resolución en Casos Especificados en la Ley del Impuesto a los Réditos y su Reglamentación.

18.- No rigen las normas de esta resolución en aquellos casos en que la Ley Nº 11.682 o su reglamentación prevean una forma o tasa de retención distintas a las contenidas en la presente. (Trabajo en relación de dependencia, etc.).

Sanciones

19.- Será reprimido con las multas que establece el artículo cuarenta y tres (43) de la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), graduable entre un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000) y cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000):

a) No cumplir con lo dispuesto en el punto doce (12) con respecto a la consignación y comunicación de los números de inscripción en los impuestos a los réditos y a las ventas o, para este último gravamen, la condición de no contribuyente, en la forma dispuesta;
b) No practicar las retenciones cuando correspondan, de acuerdo con lo establecido en las normas precedentes;
c) Cualquier otro acto u omisión que importe el incumplimiento total o parcial de esta resolución (desdoblamiento de pagos, cambios en la modalidad de los mismos, etc.)

Cuando las infracciones mencionadas configuren una defraudación al Fisco, podrán ser sancionadas de acuerdo con lo estatuído en el artículo cuarenta y cinco de la ley citada (multas de uno a diez tantos del gravamen omitido o pretendido omitir).

Vigencia

20.- Las disposiciones contenidas en la presente resolución comenzarán a regir a partir del día primero de febrero de 1963, comprendiendo todo pago o documentación de obligaciones que se realice desde dicha fecha, aunque corresponda a operaciones, facturas o documentos equivalentes, realizadas o emitidos con anterioridad a la misma.
21.- Déjanse sin efecto, a partir de la fecha señalada en el punto anterior, las Resoluciones Generales Nros. 814 (R. y V.) y 828 (") (R. y V.).
22.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.-

Fdo. GREGORIO ANDRES BALLESTEROS.

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1790.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Dpto. de Secretaría -

ACTO: DECRETO Nº 728/63.-

MATERIAS: INCOMPATIBILIDADES - HORARIO - INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION - LICENCIA

Buenos Aires, 28 de enero de 1963.-

Visto el Régimen de acumulación de cargos, funciones y/o pasividades aprobado por decretos Nros. 8566 (') y 9677/61 ("), y

CONSIDERANDO:

Que la aplicación práctica de sus disposiciones ha demostrado la necesidad de establecer un lapso prudencial para que el agente en situación de incompatibilidad regularice la misma o formule la opción por uno u otro cargo, como medida previa a la cesantía que corresponde aplicar en caso de no modificar su situación;

Que en tal sentido se ha expedido la Procuración del Tesoro de la Nación al serle recabado su dictamen, expresando que debe darse oportunidad al agente para controvertir y regularizar, mediante opción, sus respectivas situaciones; //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1460.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1491.-

Que, en otro aspecto del mismo Régimen, debe limitarse el derecho a la licencia sin sueldo prevista en el artículo 12 del decreto Nº 9677/61, condicionándolo a los principios generales que rigen el otorgamiento de este tipo de licencias en el régimen aprobado por decreto Nº 8567/61 (°), de manera de no desvirtuar el propósito de esta norma, y evitar que se constituya en una prerrogativa para determinados agentes y una autorización sin reservas, que vulneraría elementales principios de racionalización administrativa;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, en uso de las atribuciones resultantes del decreto-ley Nº 797/58 (=) y artículo 20, inciso 12, de la Ley Nº 14.439 (''),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el texto del apartado 2º del artículo 16 del "Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional", aprobado por decreto Nº 8566/61, el que deberá considerarse redactado de la siguiente forma:

"2º.- Si se denunciaran acumulaciones:

a) Si fueran compatibles por estar expresamente autorizadas en el presente, analizarán si se cumplen los extremos requeridos en el artículo 9º, autorizando en caso afirmativo por escrito la acumulación, disponiéndose la notificación del causante y la agregación a su legajo personal. En caso que no se cumplieran algunos de los requisitos señalados en el artículo 9º, se dispondrá el inmediato cese de funciones del agente, el que deberá regu-

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-
('') Ver Digesto Administrativo Nº 505.-

larizar su situación dentro del plazo improrrogable de cinco (5) días laborables, al vencimiento del cual se requerirá su cesantía a la autoridad que corresponda, en caso de no haberse modificado aquella situación.

b) Si fueran incompatibles por no estar autorizadas en el presente, también se dispondrá el inmediato cese de funciones del agente, el que deberá optar por uno u otro cargo dentro del plazo improrrogable de cinco (5) días laborables, a cuyo vencimiento, de no haberse materializado la opción en forma documentada, se requerirá la cesantía del causante a la autoridad competente".

ARTICULO 2º.- Agréguese al texto del artículo 12 del decreto 9677/61, lo siguiente:

"Dicha licencia se ajustará a las prescripciones del artículo 27 del Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos, aprobado por decreto 8567/61, en cuanto a las condiciones para su otorgamiento y término de duración".

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio Méndez Delfino -
Horacio A. García Belsunce.

ACTO: DECRETO Nº 860/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - AUTARQUIA

Buenos Aires, 31 de enero de 1963.-

VISTO y CONSIDERANDO:

Que por el artículo 10, inciso c) del decreto número 6.890/62 (1), el Consejo de la Dirección General Impositiva estaba autorizado para ejercer las facultades determinadas en el incico 1) del artículo 6º de dicho acto de gobierno, mientras durase el proceso de reorganización de aquella dependencia;

Que, posteriormente, por decreto Nº 12.823/62 (") , se dispuso dar por terminado el estado de reorganización a que se ha hecho referencia, habiendo caducado por lo tanto las atribuciones mencionadas más arriba;

Que, ello no obstante, existen razones de ordenamiento administrativo que aconsejan prorrogar por un tiempo prudencial las facultades de que se trata;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prorróganse por seis (6) meses a partir del día 23 de noviembre de 1962 (Decreto Nº 12.823/62), //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1668.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1815.-

las facultades acordadas al Consejo de la Dirección General Impositiva por el inciso c) del artículo 10 del decreto Nº 6.890/62, en lo que respecta al artículo 6º, inciso 1) de dicho pronunciamiento.

ARTICULO 2º.- Dentro de los sesenta (60) días de la fecha del presente decreto la Dirección General Impositiva elevará a la Secretaría de Hacienda el proyecto de la reglamentación que prevé el inciso 1) del artículo 6º del decreto Nº 6.890/62.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda a sus efectos.-

GUIDO - Eustaquio Méndez Delfino -
Horacio A. García Belsunce.

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD y A.I.N. - Dpto. de Secretaría

ACTO: DECRETO Nº 880/63.-

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Casinos - Hipódromos) - LIMITACION DE SERVICIOS - INDEMNIZACIONES

Buenos Aires, 1º de febrero de 1963.-

Visto el expediente Nº 374.474/62, relacionado con la situación de diversos ex-empleados de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos; y

CONSIDERANDO:

Que mediante decreto Nº 2.608 del 21 de marzo de 1962, se limitaron los servicios, en los términos del artículo 14 del Estatuto para el Personal de los Hipódromos y Salas de Entretenimientos, aprobado por decreto Nº 7.334/60 (1), de diverso personal de la referida repartición;

Que con motivo de la presentación efectuada por el ex-agente don José Jorge, reclamando el pago de la indemnización prevista en el citado artículo 14, se requirió, de acuerdo a las prescripciones del artículo 16º del aludido Estatuto, el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Hacienda;

Que sobre el particular, la nombrada Dirección General, estima que las previsiones contenidas en los ar-

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1204.-

tículos 15 y 16 de la mencionada norma, no son de aplicación en el presente caso, ya que considera, que la decisión adoptada mediante el señalado decreto Nº 2.608/62, es enteramente discrecional, por lo que no vé razón alguna que justifique, ni la reclamación por parte del interesado, ni una opinión jurídica, desde que no existe cuestión que pudiera controvertirse como podría ser en el caso de una decisión arbitraria;

Que en atención a ello, manifestó también, que en las situaciones análogas a las que dieron lugar al dictado del decreto Nº 2.608/62, podría incluirse una disposición que autorizara el pago de la comentada indemnización (fs.13/14

Que el señor Subprocurador del Tesoro de la Nación, en su dictamen de fecha 27 de agosto de 1962, que obra a fs. 16/17, expresa que, en casos como el presente, en que el Poder Ejecutivo ha dispuesto en forma discrecional la separación del agente, sin incluir en el respectivo decreto, ninguna norma que autorice el pago de la indemnización pertinente, no resulta ocioso ni injustificado el reclamo del empleado, puesto que su interposición constituye la primera y necesaria gestión para la iniciación del procedimiento administrativo, que tornará factible la percepción por parte del mismo del beneficio de que se trata, resultando de evidente conveniencia para el adecuado encausamiento del trámite, los requisitos previstos por el artículo 16 del precitado Estatuto;

Que asimismo, dicho funcionario señala que ello no es óbice para que coincida plenamente con la mencionada Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cuanto a la indiscutible conveniencia que existiría en incluir, en decretos como el Nº 2.608/62, un artículo por el que se dispusiera el pago de la indemnización correspondiente al agente separado de su cargo, siendo en tal supuesto, totalmente injustificados los asesoramientos técnicos prescriptos por el señalado artículo 16, como así también, la gestión del interesado para que se le reconozca ese derecho;

Que por todo lo expuesto, corresponde disponer a favor de todo el personal comprendido en el artículo 1º del aludido decreto Nº 2.608/62, el pago de la indemnización prevista en el artículo 14 del señalado Estatuto;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Déjase establecido, que todo el personal de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, cuyos servicios fueron limitados por decreto Nº 2.608 del 21 de marzo de 1962, en los términos del artículo 14 del Estatuto para el Personal de los Hipódromos y Salas de Entretenimientos, aprobado por decreto Nº 7.334/60, tiene derecho al pago de la indemnización fijada por el mismo.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y previa agregación de los expedientes Nros. 361.553, 374.032, 374.361, 374.752 y 374.994 del año 1962, dése al archivo.

GUIDO - Eustaquio Méndez Delfino -
Horacio A.García Belsunce.

DIRECCIÓN Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN - Dpto. de Secretaría -

ACTO: DECRETO Nº 882/63.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIONES - AUTORIZACIONES JURISDICCIONALES

Buenos Aires, 1º de febrero de 1963.-

Visto lo solicitado por la Dirección Nacional de Aduanas, en el sentido de prorrogar para el ejercicio 1963 las disposiciones del decreto Nº 8.564 del 23 de agosto de 1962 (1), y

CONSIDERANDO:

Que aún subsisten las razones que impusieron ampliar hasta el 31 de enero actual, mediante decreto Nº 11.707/62 (2), la vigencia de las disposiciones antes aludidas;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prorróganse hasta el día 31 de octubre de 1963 las disposiciones ordenadas por el decreto Nº 8564, dictado con fecha 23 de agosto de 1962.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1708.-

(2) Ver Digesto Administrativo Nº 1793.-

y firmado por el señor Secretario de Hacienda.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda a sus efectos.-

GUIDO - Eustaquio Méndez Delfino -
Horacio A.García Belsunce.

ACTO: DECRETO Nº 868/63.-

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Casinos) - COMPENSACION POR DESARRAIGO - LICENCIAS - PERSONAL JORNALIZADO

Buenos Aires, 31 de enero de 1963.-

Visto el régimen de "Bonificación por Desarraigo", instituido por decreto Nº 870/59 (1), actualizado por decreto Nº 11.617/60 (2), y

CONSIDERANDO:

Que dicho régimen tiene como finalidad compensar los gastos que ocasiona al personal que presta servicios en el casino de Mar del Plata, su traslado a otros casinos;

Que, en consecuencia, corresponde adecuar tales compensaciones, vinculando su monto al mayor gasto que se calcula ha de provocar su viaje y estadía para actuar en otros lugares;

Que el incremento calculado puede ser atendido con los actuales recursos y partidas presupuestarias de la cuenta especial "Explotación de Salas de Entretenimiento";

Que a fin de evitar las dificultades de orden administrativo-contable derivadas de la aplicación de por - //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 808.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 1264.-

centajes, resulta más conveniente implantar un régimen base de importes fijos diarios, con lo que se facilitará las liquidaciones respectivas, por lo que procede ordenar las disposiciones vigentes;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- El personal jornalizado de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, nombrado con imputación la cuenta especial "Explotación Salas de Entretenimiento", que sea destinado a prestar servicios en los casinos de su dependencia fuera de la ciudad de Mar del Plata, gozará de una Bonificación por Desarraigo, compensatoria los gastos que le origine su estada en la localidad donde funcione la respectiva sala de entretenimiento, de acuerdo a los importes que se consignan en la planilla anexa.

ARTICULO 2°.- Los importes establecidos se liquidarán sobre los jornales básicos vigentes en la actualidad, sin que cualquier ulterior modificación de los mismos que llegare a hacerse, dé lugar a reajuste de ninguna naturaleza.

ARTICULO 3°.- No corresponderá la percepción de este concepto para aquel personal que tenga su residencia habitual en la localidad en que funciona el casino al cual fuere destinado. Cualquier falseamiento u ocultamiento en que incurra el agente al declarar su residencia habitual, dará lugar a la aplicación de las sanciones disciplinarias correspondientes.

ARTICULO 4°.- Es incompatible la percepción de la bonificación establecida por el presente decreto con el cobro de viáticos que establece el régimen correspondiente.

ARTICULO 5°.- El agente que perciba este beneficio tendrá derecho a que se le anticipe el importe correspondiente, hasta un máximo de treinta (30) días. Esa liquidación se practicará a partir del día que el empleado sale de su asiento habitual y hasta el momento que se reintegre al mismo

con la alternativa a que se refiere el inciso c) del artículo 6º; quedando establecido que la repartición determinará en cada caso los días que corresponde liquidar.

ARTICULO 6º.- Cuando el Estado facilite gratuitamente al agente alojamiento o comida, el monto de la asignación se liquidará conforme a los siguientes porcentajes:

a) 50 % si se le diera alojamiento sin comida;
b) 50 % si se le diera comida sin alojamiento;
c) 25 % durante los días que el agente emplee para el viaje de ida y regreso;
d) si se le diera alojamiento y comida no tendrá derecho a percibir suma alguna en concepto de la asignación compensatoria establecida en el presente decreto.

ARTICULO 7º.- La asignación compensatoria que se implanta por este acto, en razón de la finalidad por la cual ha sido instituida, no sufrirá descuento alguno en concepto de aporte jubilatorio, y se liquidará también cuando el empleado haga uso de francos hebdomadarios, aún en el caso de que éstos fueran sin goce de jornal, como asimismo durante las inasistencias justificadas con derecho a la percepción de haberes, contempladas en el decreto Nº 1.881/62 (º).

ARTICULO 8º.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente.

ARTICULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio A.Méndez Delfino - Horacio A.García Belsunce.

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 1585.-

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

Jornales				Miramar	Necochea	Rosario de la Frontera	San Carlos de Bariloche
Hasta			m$n. 175	m$n. 150	m$n. 200	m$n. 270	m$n. 270
de			m$n. 190	" 180	" 250	" 320	" 320
" m$n.	195	a m$n.	225	" 180	" 270	" 350	" 350
" m$n.	230	" m$n.	250	" 200	" 270	" 350	" 350
" m$n.	255	" m$n.	275	" 220	" 300	" 400	" 400
" m$n.	280	" m$n.	350	" 270	" 350	" 450	" 450
" más	de	m$n.	350	" 300	" 400	" 500	" 500

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Dpto. de Sobrantes -

ACTO: DECRETO Nº 1050/63.-

MATERIAS: SERVICIOS CALIFICADOS - DEDICACION FUNCIONAL - RESPONSABILIDAD JERARQUICA - PREMIO POR ASISTENCIA - BONIFICACION ESPECIAL - DEDICACION PROFESIONAL O TECNICA EXCLUSIVA - PRIMA DE PRODUCCION

Buenos Aires, 6 de febrero de 1963.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que en distintas dependencias, empresas o servicios del Estado, se están tramitando solicitudes de mejoras en las retribuciones al personal;

Que, por otra parte, existen decretos que prevén modificaciones en las escalas vigentes para las retribuciones de determinado personal, condicionadas a las disponibilidades crediticias en los anexos respectivos del Presupuesto General de la Nación, disponibilidades que no es posible lograr atento a la magnitud del déficit previsto y a la necesidad de reducirlo al máximo posible;

Que ante el evidente atraso en el pago normal de sueldos, jubilaciones, pensiones y otras obligaciones a las que debe darse prioridad, no es oportuno contraer nuevos compromisos sin antes regularizar dicho atraso;

Que, en consecuencia, no es posible el acuerdo de

//-

mejoras, dado que los factores mencionados impiden que las mismas puedan hacerse efectivas, por lo que a fin de que dichas mejoras, en el caso de poder acordarse, cuent con real financiación, debe postergarse su consideración.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Postérgase hasta la finalización del corri te ejercicio financiero, la consideración de todo acuer de mejoras en las retribuciones del personal pertenecien a la Administración Central del Estado Nacional.

ARTICULO 2º.- El tratamiento señalado en el artículo ant rior se aplicará para las retribuciones del personal los organismos descentralizados, empresas y demás depend cias estatales, cuando su financiación incida directa o directamente en el tesoro Nacional.

ARTICULO 3º.- Entiéndese que la financiación incide dire ta o indirectamente en el tesoro Nacional cuando de hacerse con aportes provenientes del mismo,o se atienda recursos propios cuyos excedentes deban ser ingresados tesoro o cuando por efecto del mayor gasto se increment el importe del déficit a su cargo o se disminuya la posi lidad de reducirlo.

ARTICULO 4º.- Atento la imposibilidad de arbitrar los re cursos necesarios, suspéndese la aplicación de los decre 11.720/62 (');11.824/62;11.843/62;11.848/62;11.849/62;11. 62;11.856/62;11.878/62;11.879/62;11.880/62 y 11.881/62.

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direcci General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio A.Méndez Delfino - Horacio A.García Belsunce.

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1788.-

ACTO: DECRETO Nº 3.299/58.-

MATERIA: BOLETIN OFICIAL

Buenos Aires, 20 de marzo de 1958.-

Visto el presente expediente letra D, Nº 2234, año 1958 y el informe Nº 1074/957, presentado por el señor Interventor en las Direcciones Generales del Boletín Oficial y de Imprenta; y

CONSIDERANDO:

Que del referido informe se desprende la necesidad de proceder a reestructurar dichos organismos en uno solo, desde que la principal actividad de la Dirección de Imprenta es la de imprimir el Boletín Oficial;

Que la medida que se proyecta puede atenderse con créditos que para el ejercicio 1957-1958, figuran en el Presupuesto del Anexo 25 (Interior);

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A partir de la fecha del presente decreto, las actuales Direcciones de Imprenta y del Boletín Oficial, constituirán la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, que tendrá las mismas atribuciones que aquéllas.

//-

ARTICULO 2º.- El gasto que demande la reestructuración dispuesta por el artículo 1º, se atenderá con los créditos que para el ejercicio 1957/1958, figuran en el anexo 25 (Interior), del Presupuesto General de la Nación, a cuyo efecto el Ministerio del Interior someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo, con intervención del Departamento de Hacienda, el reajuste por compensación, respectivo.

ARTICULO 3º.- Hasta tanto se incluya en el Presupuesto el cargo de Director General del Boletín Oficial e Imprentas, sus funciones serán desempeñadas "ad-honorem" y sin perjuicio de las que le son propias, por el actual Director del Boletín Oficial, doctor Gustavo Joaquín Denett.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos del Interior y de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Carlos R.S.Alconada Aramburú - Adalberto Krieger Vasena.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 1.152/63.-

MATERIAS: JUBILACIONES - PENSIONES - PERSONAL

Buenos Aires, 13 de febrero de 1963.-

Visto lo solicitado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y

CONSIDERANDO:

Que, es evidente, la necesidad de realizar el estudio exhaustivo de una ley integral de los distintos regímenes previsionales vigentes, hasta lograr un tratamiento uniforme sin distinciones, por ser injusto que los beneficios sean dispares en situaciones semejantes;

Que, la referida tarea, a la que se encuentra abocada la Comisión Asesora Permanente de Seguridad Social, requiere un estudio ponderado de los distintos factores que intervienen en la previsión social, en el que deben participar todos los sectores interesados;lo que no es óbice para que en el momento actual se arbitren medidas conducentes a llevar a los amplios sectores de jubilados y pensionados un efectivo mejoramiento en los beneficios que perciben, ya que ello no admite demoras, dando así en parte solución a uno de los más angustiosos problemas de la seguridad social en esta hora;

Que, para hacer posible el cumplimiento de las mayores erogaciones que significarán para las Cajas Nacio

//-

nales de Previsión los aumentos en las prestaciones, resulta imprescindible en esta primera etapa, realizar los ajustes necesarios a los regímenes legales de las mismas que coincidan con la realidad actual, expuesta por los distintos sectores de opinión del país y reflejada en las últimas leyes en materia de previsión en el campo empresario, profesional y trabajadores independientes;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Las disposiciones del presente son aplicables a las Cajas Nacionales de Previsión para:

a) el Personal del Estado;
b) el Personal Ferroviario;
c) el Personal de Servicios Públicos;
d) el Personal Bancario y de Seguros;
e) el Personal de la Navegación;
f) el Personal de Comercio y Actividades Civiles;
g) el Personal de la Industria;
h) Periodistas y Gráficos;
i) Trabajadores Rurales.

ARTICULO 2º.- Sustitúyese la escala del artículo 14 del Decreto Nº 11.732/60, por la siguiente:

cuando el haber jubilatorio resultante fuere mayor de m$n. 10.000, el excedente de esta suma se determinará con sujeción a la siguiente escala acumulativa,
de más de m$n. 10.000 a m$n. 20.000: m$n. 10.000 más el 90 % del excedente de m$n. 10.000;
de más de m$n. 20.000 a m$n. 40.000: m$n. 19.000 más el 80 % del excedente de m$n. 20.000;
de más de m$n. 40.000 a m$n. 60.000: m$n. 35.000 más el 60 % del excedente de m$n. 40.000;
de más de m$n. 60.000: m$n. 47.000 más el 30 % del excedente de m$n. 60.000.

ARTICULO 3º.- Déjase sin efecto el beneficio de "jubilación por retiro voluntario" establecido en los regímenes legales de las Cajas citadas en el artículo 1º del presente.

ARTICULO 4º.- Las solicitudes de "jubilación por retiro voluntario" interpuestas o a interponerse ante cualquiera de las Cajas quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo anterior, solo en los siguientes casos:

a) Cuando la cesación de servicios sea anterior a la fecha del presente;

b) Cuando la renuncia haya sido efectuada en forma expresa, en las condiciones establecidas en los decretos Nros. - 8.820/62 (') y 9.202/62 ("), con anterioridad a la fecha del presente;

c) Cuando cualquiera de las Cajas haya acordado el beneficio de "jubilación por retiro voluntario" mediante resolución expresa, siempre que el certificado de cesación de servicios sea anterior a la fecha del presente.

ARTICULO 5º.- Las "jubilaciones por retiro voluntario" otorgadas a la fecha de la vigencia de este Decreto-Ley o que se otorguen en las condiciones del artículo anterior, no tendrán derecho a ser reajustadas de acuerdo a la escala del artículo 2º, sino que se mantendrá la prevista en el artículo 14 del decreto Nº 11.732/60, que es la siguiente:

cuando el haber jubilatorio resultante fuere mayor de m$n. 5.000, el excedente de esta suma se determinará - con sujeción a la siguiente escala acumulativa,

de más de m$n. 5.000 a m$n. 7.000: m$n. 5.000 más el 70 % del excedente de m$n. 5.000;

de más de m$n. 7.000 a m$n. 9.000: m$n. 6.400 más el 50 % del excedente de m$n. 7.000;

de m$n. 9.000 en adelante: m$n. 7.400 más el 40 % del - excedente de m$n. 9.000;

cuando aplicada la escala precedente el monto supere a m$n. 20.000, para el excedente de esa suma sólo se computará el 10 %.

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1718.-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1728.-

ARTICULO 6º.- Las escalas de los artículos 2º y 5º serán de aplicación solo para los beneficiarios comprendidos en las disposiciones de la Ley 14.499 (°), subsistiendo para los demás el régimen vigente.

ARTICULO 7º.- No está comprendido dentro de los términos del presente Decreto-Ley el personal amparado por las Leyes 12.992 y 13.018.

ARTICULO 8º.- Deróganse los artículos: 19, de la Ley número 14.499; 70, del Decreto-Ley 14.535, modificado por la Ley 13.065; 16, de la Ley 11.110, modificado por la Ley 13.076; así como cualquier otra disposición que se oponga al presente.

ARTICULO 9º.- Las disposiciones del Presente Decreto-Ley serán aplicables a partir de la fecha de la firma y sus disposiciones se declaran de orden público.

ARTICULO 10.- El presente Decreto-Ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Trabajo y Seguridad Social, Interior y Defensa Nacional.

ARTICULO 11.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, publíquese y archívese.-

GUIDO - José M.Astigueta - Rodolfo Martínez - Galileo Puente.

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 621.-

ACTO: DECRETO - LEY Nº 1.296/63.-

MATERIA: PROPAGANDA POLITICA

Buenos Aires, 15 de febrero de 1963.-

Visto el decreto 7.165, de 24 de julio de 1962 (¹), por el cual se restableció el pleno vigor de las normas dictadas por decreto-ley 4.161/56 (″), derogado por Ley 14.444 (°) y teniendo en cuenta lo dispuesto por decreto 9.747/62 (=),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Ratifícase el decreto 7.165/62.
ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros del Interior, Defensa Nacional y Educación y Justicia.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Rodolfo Martínez - José M. Astigueta - Alberto Rodríguez Galán.

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1695.-
(″) Ver Digesto Administrativo Nº 129.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 515.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 1738.-

ACTO: DECRETO Nº 1.064/63.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - RACIONALIZACION

Buenos Aires, 7 de febrero de 1963.-

Visto el decreto Nº 2.227/62 (¹), y

CONSIDERANDO:

Que sus disposiciones no han satisfecho eficazmente el propósito que se tuvo en cuenta al dictarlo, razón por la cual, de acuerdo con lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro de la Nación, conviene derogarlo;

Por ello y atento lo propuesto por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Obras y Servicios Públicos y de Economía,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Derógase el decreto Nº 2.227 de fecha 9 de marzo de 1962.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Obras y Servicios Públicos y de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Obras Públicas

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1602.-

y de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas; tome conocimiento el Tribunal de Cuentas de la Nación y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.

GUIDO - Horacio J.Zubiri - Eustaquio A. Méndez Delfino - Luis de Carli - Horacio A.García Belsunce.

ACTO: DECRETO Nº 1.404/63.-

MATERIAS: LICENCIAS - CALIFICACIONES

Buenos Aires, 21 de febrero de 1963.-

Visto el artículo 14 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (Decreto Ley Nº 6.666/57) (') y su reglamentación (Decreto Nº 1.471/58) (") y el artículo 22 del Decreto 8.567/61 (°) y,

CONSIDERANDO:

Que las licencias sin sueldo acordadas a los agentes designados para desempeñar cargos de representación política en el orden nacional, provincial o municipal, o cuando sean nombrados candidatos o resulten electos miembros de los Poderes Ejecutivo o Legislativo de la Nación, o de las Provincias y de las Municipalidades, inciden desfavorablemente en la calificación conceptual anual del agente;

Que las características especiales que revisten las motivaciones que originan este tipo de licencias, hacen mérito suficiente para acordarles idéntico tratamiento que el establecido en el Decreto Nº 4.781/61 (=), para las concedidas con motivo de la realización de estudios, //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 422.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 1410.-

investigaciones, trabajos científicos, etc.;

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Estado de Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del Decreto Ley Nº 797/58 (~) (Ley Nº 14.467) (:),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Déjase establecido que las licencias sin sueldo acordadas a partir del 1º de noviembre de 1958, conforme a los términos del artículo 14 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (Decreto Ley 6.666/57) y su reglamentación (Decreto 1.471/58) y artículo 22 del Decreto 8.567/61, no serán deducidas de la calificación anual de los beneficiarios de las mismas.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio A.Méndez Delfino -
Horacio A.García Belsunce.

(~) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-
(:) Ver Digesto Administrativo Nº 609.-

ACTO: DISPOSICION Nº 7.227/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - FONDO DE ESTIMULO

Buenos Aires, 5 de marzo de 1963.-

Visto el artículo 6º del decreto - ley número 7688/56 (¹), por el que se establece el Fondo de Estímulo para el personal de la ex-Dirección General Inmobiliaria, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto Nº 1.453 del 13 de febrero de 1962 ("), la repartición citada fué declarada disuelta, asignándose a esta Dirección General las facultades que el nombrado decreto-ley y demás disposiciones legales y reglamentarias le otorgaban;

Que, por lo tanto, es necesario actualizar las disposiciones normativas relacionadas con el beneficio de que se trata, determinando un procedimiento que asegure su correcta distribución;

Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere en su artículo 7º la Ley 11.683 (t.o. 1960) y el artículo 3º del decreto-ley 7688/56;

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

D I S P O N E :

ARTICULO 1º.- La distribución del Fondo de Estímulo pa- //-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 52.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1589.-

ra el personal de la repartición, se ajustará a las siguientes normas:

a) el monto a distribuir estará fijado por el importe que resulte de la aplicación del 6 o/oo, sobre la suma que se haya recaudado en concepto de contribución inmobiliaria (art. 6° decreto-ley 7688/56), durante el período 1° de enero al 31 de diciembre de 1962.

b) el Fondo de Estímulo se distribuirá en proporción al importe nominal de las remuneraciones del mes de diciembre de 1962, comprendidos los siguientes conceptos: Básico, Premio por Asistencia, Responsabilidad Jerárquica, Dedicación Funcional, Servicios Calificados, Bonificación Especial aprobada por decreto N° 7920/61 (°) y el complemento por ubicación, correspondiente al mes de octubre de 1962.

c) a los agentes que hayan dejado de prestar servicios en la ex-Dirección General Inmobiliaria o en la Dirección General de Contabilidad y Administración con anterioridad al mes de diciembre de 1962, el inciso b) les será considerada en base a su última remuneración mensual.

ARTICULO 2°.- Serán acreedores al Premio:

a) todos los agentes de la ex-Dirección General Inmobiliaria y de la Dirección General de Contabilidad y Administración, que cuenten con una antigüedad de servicio mayor de seis (6) meses en una o entre ambas reparticiones.

b) todos los agentes de la ex-Dirección General Inmobiliaria que se hayan desempeñado entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 1962, a los cuales se les liquidará en proporción equivalente a una doceava parte de lo que en total les correspondería en el año, por cada mes de servicios prestados. Las fracciones de días se liquidará a razón de $\frac{1}{365}$ por cada día de servicios prestado

(°) Ver Digesto Administrativo N° 1442.-

c) todos los agentes de la Dirección General de Contabilidad y Administración que se hayan desempeñado entre el 14 de febrero y el 31 de diciembre de 1962 (decreto nº 1453 del 13 de febrero de 1962), a los cuales se les liquidará en proporción equivalente a una doceava parte de lo que en total le correspondería en el año, por cada mes de servicios prestados. Las fracciones de días se liquidará a razón de $\frac{1}{365}$ por cada día de servicios prestados.

d) los agentes adscriptos o en comisión en la ex-Dirección General Inmobiliaria o en esta Dirección General, en proporción a la asistencia acreditada durante el año - 1962, de acuerdo con el requisito fijado en el inciso a) y el procedimiento a que se refieren los incisos b) ó c), siempre que no perciban en la institución a la - que pertenecen remuneración de igual naturaleza, en cuyo caso el interesado optará por la que más le convenga.

e) a los agentes que perciban comisiones se les computará a partir del 1º de enero de 1962 y hasta la fecha de su contratación (2/5/62) -además de las sumas que les correspondan en orden de las remuneraciones indicadas en el artículo 1º, inciso b), el promedio de las comisiones liquidadas durante el lapso establecido en este inciso y hasta un máximo de dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000.-).

ARTICULO 3º.- No serán acreedores del Premio:

a) los agentes cuya calificación anual definitiva durante el período a distribuir sea inferior a siete (7) puntos. De no haberse efectuado ésta, se tomará en consideración la calificación del período anterior.

b) los agentes que hubieran sido sancionados con postergación en el ascenso, retrogradación de categoría, cesantía o exoneración, previstos en los artículos 34, 35, 36, 37 y 38 del Escalafón del Personal Civil de la Na-

ción.

c) los agentes de la ex-Dirección General Inmobiliaria o de la Dirección General de Contabilidad y Administración que se encuentran adscriptos o en comisión en otras jurisdicciones. En este caso, y de corresponder parte de la liquidación del beneficio en razón del tiempo de servicio prestado en una o en ambas reparticiones, dicha liquidación se ajustará al régimen general fijado en la presente disposición.

ARTICULO 4º.- Así determinados los acreedores al Premio, el Fondo de Estímulo se distribuirá en orden a las calificaciones acreditadas en la forma que determina el artículo 3º, apartado a) de acuerdo con el siguiente detalle:

el	100%	al	agente	cuya	calificación	sea	de	9,50	a	10 puntos
el	90%	"	"	"	"	"	"	8,50	"	9,49 "
el	70%	"	"	"	"	"	"	7,50	"	8,49 "
el	50%	"	"	"	"	"	"	7	"	7,49 "

De acuerdo con las normas establecidas en el Capítulo VIII, punto 38º del Escalafón General (Decreto Nº 9.530/58), no serán calificados, a los fines de esta distribución, los agentes que revistan en la Clase A, los cuales tienen asignada a tales efectos, una calificación de diez (10) puntos.

ARTICULO 5º.- El monto total del premio a distribuir a cada agente sufrirá las siguientes reducciones:

1º) por cada día de inasistencia, justificada o no, 1/365 del total a percibir.

2º) por cada apercibimiento, un 5% del total a percibir.

3º) por cada día de suspensión que se le aplique al agente, un 10% del total a percibir.

ARTICULO 6º.- De las licencias reglamentarias, sólo se considerará como asistencia, a los efectos del cómputo de prestación de servicios, la ordinaria por descanso.

ARTICULO 7º.- El Fondo de Estímulo, liquidado de acuerdo con los procedimientos establecidos precedentemente, se retendrá a los empleados comprendidos en los siguientes casos:

a) a los agentes suspendidos en sus funciones con sumarios pendientes de resolución, se les diferirá el pago del Fondo de Estímulo, el que quedará supeditado al resultado del sumario.

b) a los agentes cuyo promedio de calificación por "conceptos" fuera inferior a siete (7) puntos, pero susceptible de modificación por recurso de reconsideración del mismo, a cuyo efecto se tendrá en cuenta las previsiones del punto 48 del Escalafón General (Decreto Nº 9530/58).

ARTICULO 8º.- Los agentes comprendidos en el artículo 7º, deberán solicitar la liquidación y pago del Fondo de Estímulo que les correspondiese, dentro de los 30 días hábiles de notificarse de la resolución definitiva.

ARTICULO 9º.- Los reclamos sobre las liquidaciones del Fondo de Estímulo a que se refiere la presente disposición, deberán ser presentados dentro de los 60 días de haberse hecho efectivo el pago; pasando dicho término, no se dará curso a los mismos.

En estos casos, los reajustes por rectificación de las sumas acordadas en concepto del Fondo de Estímulo por el año 1962, se practicarán sobre el Fondo de Estímulo del siguiente año.

ARTICULO 10.- Los fondos retenidos preventivamente, según lo dispuesto en el artículo 7º, y que por resolución definitiva no corresponda pagar, se acreditarán al Fondo de Estímulo del año siguiente.

ARTICULO 11.- Pase a los Departamentos de Personal y Contaduría para su conocimiento y efectos correspondientes; cumplido, archívese.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES

ACTO: RESOLUCION Nº 294/63. T.C.N.

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD (Art. 25) - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - APROPIACIONES

Buenos Aires, 18 de febrero de 1963.

Visto lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que dicha disposición exceptúa del régimen que instituye a aquellas erogaciones cuyo monto sólo puede establecerse al practicar la respectiva liquidación, que será la que en definitiva determinará el compromiso.

Que por resolución 1877/61 (*), se sustituyeron las normas de interpretación del mencionado artículo 25 aprobadas por resolución 1636/57 (**), considerándose comprendidos únicamente en el régimen establecido por el último párrafo del citado artículo 25 de la ley, los gastos que tengan origen en contratos de adhesión siempre y cuando no se hubieran podido incluir en las cuentas de residuos pasivos del ejercicio en que se devengaron y los que se deriven de diferencias a pagar producidas con motivo de la variabilidad de precios legalmente consentida o como consecuencia de la rescisión de contratos, cuando tales diferencias se establezcan después //-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1436.-
(**) Ver Digesto Administrativo Nº 333.-

de cerrado el ejercicio en que se asumió el compromiso original.

Que también en los casos de otorgamiento o aumento de pensiones graciables, como asimismo cuando se trata de modificaciones de beneficios que acumulen los pensionistas o por ampliación del límite a que se refiere el artículo 7° de la ley 13.337 y sus modificatorias, el verdadero monto de las erogaciones correspondientes sólo es determinable en el momento de efectuarse la respectiva liquidación.

Que esa circunstancia hace aconsejable resolver el aspecto de la apropiación de tales gastos por vía de la pertinente norma interpretativa que este Cuerpo puede dictar en virtud de la facultad acordada por el artículo 84, inciso c) de la Ley de Contabilidad.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Agregar a las normas de interpretación del artículo 25 de la Ley de Contabilidad el siguiente inciso:

"c) Los que se originen por el otorgamiento o aumento "de pensiones graciables, como así también los motivados "por la modificación del límite de acumulación previsto "en el artículo 7° de la ley 13.337 y sus modificatorias, "y los que se deriven de la actualización de los ingresos "que acumulen los beneficiarios de tales pensiones".

ARTICULO 2°.- Regístrese, dése a conocer por Digesto Administrativo y archívese.-

JOSE M.FERNANDEZ FARIÑA - Luis P.Picardo - Antonio M.Pérez Arango - Wifredo Dedeu - Eusebio E.Villar (Vocal Acc.) Juan Carlos Pastene - Secretario.

ACTO: DECRETO Nº 1.828/63.-

MATERIA: COMISION NACIONAL DE HIPODROMOS

Buenos Aires, 11 de marzo de 1963.-

Visto lo dispuesto en el decreto Nº 2248/62 (1), y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión creada en dicho decreto ha producido el asesoramiento que le requiriera el Poder Ejecutivo;

Que resulta urgente solucionar los problemas reiteradamente expuestos por los sectores que integran la actividad hípica nacional, a la cual están afectados importantes capitales y fuentes de trabajo, en forma directa o a través del comercio o industrias íntimamente vinculadas a la misma, que benefician a la economía nacional y que proporcionan divisas por las exportaciones y el turismo que dicha actividad genera, produciendo, asimismo, los hipódromos importantes recursos al Estado y facilitando la obra social a su cargo;

Que la importancia de la cría del caballo de carrera en su aspecto cualitativo y cuantitativo ha permitido a la República Argentina ocupar un lugar de privilegio que comparte con países cuya producción tiene un origen muy anterior, posición que es un deber mantener mediante un adecuado proceso selectivo en procura de lo que debe constituir la finalidad específica del turf,

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1597.-

o sea el mejoramiento de la especie caballar, con el objeto de crear fuentes de recursos para la Nación y contribuir a la Defensa Nacional;

Que la complejidad de la actividad hípica, su característica esencialmente técnica y su importancia económica justifican la necesidad de crear, con carácter definitivo una Comisión que ejerza su conducción integral, asuma las responsabilidades de su orientación, supervisión y control en todo el territorio de la República y asesore al Poder Ejecutivo en todos los asuntos referentes a la misma;

Que en dicha Comisión, además de los representantes oficiales, deben actuar, sin exclusiones, todas las entidades representativas de los sectores básicos de la actividad vinculada con la crianza del caballo de carrera y el funcionamiento de los hipódromos;

Por lo tanto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Créase la Comisión Nacional de Hipódromos, en jurisdicción del Ministerio de Economía, la que estará integrada por once miembros titulares. Tres de ellos representarán al Estado Nacional, por cada una de las siguientes Secretarías de Estado: de Agricultura y Ganadería, de Guerra y de Hacienda; los demás miembros representarán los sectores interesados, uno en representación de cada una de las siguientes entidades: Asociación Civil Jockey Club de Buenos Aires, Federación de Entidades Jockey Club de la República Argentina, Dirección Provincial de Hipódromos (Ente Autárquico) de la Provincia de Buenos Aires, Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera, Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos de Sangre Pura de Carrera Ltda., Criadores Argentinos de Sangre Pura de Carrera, Sociedad Rural Argentina y Asociación

Argentina de Fomento Equino.

ARTICULO 2º.- Los miembros de la Comisión serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de cada una de las Secretarías de Estado y Entidades que representan, debiendo nombrarse en cada caso un titular y un suplente. A los efectos de su designación la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería recibirá las propuestas correspondientes para su elevación al Poder Ejecutivo. Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en caso de fallecimiento, incapacidad o ausencia de los mismos. La Presidencia de la Comisión será ejercida por el Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación o la persona que lo represente.

ARTICULO 3ª.- El mandato de los miembros de la Comisión durará tres años, no pudiendo ser designados nuevamente en forma consecutiva por más de un período adicional. Desempeñarán sus funciones en forma honoraria.

ARTICULO 4ª.- La primera reunión de la Comisión deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días de la fecha de vigencia del presente decreto. En esa reunión y, en lo sucesivo, en la primera que se realice cada año, sus miembros designarán de entre ellos un secretario, un prosecretario, un tesorero y un protesorero. La vicepresidencia será ejercida en forma anual y rotativa por cada uno de los representantes de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Guerra. Los demás miembros de la Comisión actuarán como vocales.

ARTICULO 5ª.- La Comisión sesionará válidamente con una asistencia no inferior a seis (6) de sus miembros. Sus acuerdos y resoluciones se adoptarán por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.

ARTICULO 6ª.- El Presidente ejercerá la representación de la Comisión a los efectos correspondientes, debiendo su firma ser refrendada por el Secretario y, además, cuando implique disposición o movimiento de fondos, por el Tesorero.

ARTICULO 7º.- Son funciones de la Comisión:

a) Promover el mejoramiento de la especie caballar en la República a fin de perfeccionar la actividad hípica, crear fuentes de riqueza para la Nación y contribuir a la Defensa Nacional;

b) Ejercer la orientación integral y supervisión de la actividad de todos los hipódromos del país;

c) Proponer los proyectos de disposiciones legales que permitan la estructuración de la actividad de dichos hipódromos, la racionalización de su explotación y las modificaciones al régimen tributario vigente, para facilitar su evolución y consolidación;

d) Asesorar al Poder Ejecutivo en todos los asuntos relacionados con la actividad de los hipódromos. A tales efectos, todas las normas, decisiones o iniciativas relacionadas con esta actividad que adopte el Poder Ejecutivo, tanto de oficio como a petición de las partes interesadas, deberá contar con el dictamen previo de la Comisión;

e) Administrar y transferir los fondos provenientes de la Ley 13.235 (Fondo de Ayuda a los Hipódromos del Interior) y controlar su destino;

f) Promover la adopción de las medidas necesarias para asegurar que todas las entidades que administren y exploten hipódromos en la República, distribuyan en premios un importe no menor al seis por ciento de las sumas que hayan ingresado, provenientes de las apuestas efectuadas en cada una de ellas durante el año anterior;

g) Administrar y transferir los fondos que se destinen a la acción de fomento equino y mejoramiento de hipódromos que debe realizarse en todo el país, a través de la distribución de premios, subsidios y créditos, así como la adquisición, utilización y/o reventa de reproductores, con el fin de fomentar las actividades de crianza equina y los deportes hípicos, teniendo en cuenta las características de las diversas regiones del país y de

acuerdo con la reglamentación que deberá dictar la misma Comisión, excepción hecha de los fondos actualmente asignados (Ley 11.242) y de los que en lo futuro se asigne para la adquisición y fomento de la cría del caballo de guerra para la Remonta del Ejército;

h) Asesorar sobre las medidas necesarias para prevenir y reprimir el uso de estimulantes prohibidos, así como promover la investigación científica sobre esta materia;

i) Administrar el local de Ventas de Caballos de Sangre Pura de Carrera, instalado en el Hipódromo de Palermo para los fines propios de tales operaciones, sin perjuicio del uso habitual del mismo para las necesidades de dicho Hipódromo;

j) Mantener relaciones con la hípica continental y mundial y promover la difusión del conocimiento del caballo argentino en el exterior.

ARTICULO 8º.- Para el mejor ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo anterior, la Comisión dictará las reglamentaciones correspondientes, las que deberán ser sometidas a la aprobación conjunta de las Secretarías de Estado de Agricultura y Ganadería y de Hacienda de la Nación. Si correspondiese la sanción de normas aclaratorias del presente decreto, las mismas serán dictadas a propuesta de la Comisión, por resolución conjunta de las Secretarías de Estado de Agricultura y Ganadería y de Hacienda de la Nación.

ARTICULO 9º.- La Secretaría de Estado de Hacienda dispondrá la apertura de una cuenta especial que se denominará "Dirección General de Contabilidad y Administración - Comisión Nacional de Hipódromos", cuyo régimen será el siguiente:

a) Finalidad o cometido de servicio: Se acreditará con el producido de los recursos establecidos en el artículo 10 y se debitará por las erogaciones, sueldos, jornales, gastos diversos, inversiones y financiaciones que origine el funcionamiento de la Comisión;

b) Administración: Será ejercida directamente por la Comisión Nacional de Hipódromos, con la obligación de remi-

tir a la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Estado de Hacienda un estado mensual del movimiento que registre y la respectiva rendición de cuentas;

c) Sobrante al cierre del ejercicio: Los recursos no comprometidos al cierre de cada ejercicio serán transferidos al siguiente.

ARTICULO 10.- La Comisión dispondrá de los siguientes recursos:

a) La participación que se le fijare en los ingresos que perciban los Hipódromos;

b) Todo otro recurso que se le asigne en lo futuro;

c) Una participación en los "Sweepstakes" que organice la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, por sí o a pedido de la Comisión, que deberá ser establecida por convenio con la misma o por la sanción de las normas legales pertinentes, si así correspondiere;

d) El importe de las donaciones y legados que recibiere.

A los efectos previstos en los incisos a) y b), dentro de los treinta (30) días de constituirse y, en lo sucesivo, cuando lo considere oportuno, la Comisión deberá solicitar al Poder Ejecutivo que promueva la sanción de las normas que correspondieren.

ARTICULO 11.- La Comisión deberá destinar una parte de sus recursos para poder atender debidamente las funciones que se le asignan en el inciso g) del artículo 7º del presente decreto.

ARTICULO 12.- La Comisión queda facultada para atender las necesidades de las entidades hípicas del interior comprendidas en el régimen de la Ley 13.235 y decretos reglamentarios correspondientes, con cargo de oportuna rendición de cuentas.

ARTICULO 13.- La Comisión queda facultada para crear subcomisiones asesoras, permanentes o ad hoc, integradas por personas o entidades representativas de los sectores básicos o complementarios de la actividad hípica, cuya opinión consi

dere de interés para el mejor cumplimiento de sus funciones.
ARTICULO 14.- Derógase el decreto Nº 9277, del 28 de mayo de 1953 y toda otra disposición que se oponga al presente.
ARTICULO 15.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, de Guerra y de Hacienda de la Nación.
ARTICULO 16.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio A.Méndez Delfino - José M.Astigueta - José A.Martínez de Hoz (h.) - Benjamín Rattenbach - Horacio A.García Belsunce.

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	N° 1861.-

ACTO: DECRETO-LEY N° 1.831/63.-

MATERIA: COMISION ADMINISTRADORA PROVISIONAL DEL STUD BOOK ARGENTINO

Buenos Aires, 11 de marzo de 1963.-

Visto el Decreto-Ley N° 2.961/58 que transfirió a la Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos de Pura Sangre de Carrera Ltda. los Registros Genealógicos (Stud Book) de los caballos de la raza citada y árabes y anglo-árabes, y

CONSIDERANDO:

Que dicho decreto-ley fué dictado con el mismo espíritu que inspiró los Decretos-Leyes 3.064/56 y 8.061/57, que dispusieron la devolución a las entidades de criadores de los Registros Genealógicos de las diversas especies de animales de raza;

Que resulta conveniente dictar las normas legales que aseguren el cumplimiento de dicho propósito con respecto al denominado Stud Book Argentino;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1°.- Créase una Comisión Administradora Provisoria del Stud Book Argentino (Registro Genealógico de

//-

los Caballos de Sangre Pura de Carrera y Arabes y Anglo-Arabes) en jurisdicción de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, la que estará compuesta por dos (2) representantes titulares y dos (2) suplentes de cada una de las siguientes entidades: Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos de Pura Sangre de Carrera - Ltda. y Criadores Argentinos de Sangre Pura de Carrera.

ARTICULO 2°.- Los miembros de la Comisión serán designados por Resolución del señor Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería a propuesta de las respectivas entidades, las que deberán elevarlas a dicha Secretaría de Estado dentro de los ocho (8) días de la fecha de vigencia del presente decreto-ley.

ARTICULO 3°.- Dicha Comisión tendrá como función administrar provisoriamente el Stud Book Argentino y elevar al Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, dentro de los sesenta (60) días de su constitución, un proyecto sobre la transferencia y régimen definitivo del mencionado Stud Book.

ARTICULO 4°.- La Comisión sesionará válidamente con asistencia no inferior a la mitad más uno de sus miembros.

ARTICULO 5°.- La Comisión Administradora Provisoria del Stud Book Argentino convendrá con la Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos de Pura Sangre de Carrera Ltda., actual tenedora de dicho Stud Book, la forma de llevar a cabo la administración que se le encomienda, de manera de asegurarse el eficaz cumplimiento de la misma.

ARTICULO 6°.- Derógase el Decreto-Ley N° 2.961/58.

ARTICULO 7°.- El presente decreto-ley será refrendado - por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, de Interior y de Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, de Hacienda y de Guerra.

ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería a sus efectos.

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino Rodolfo Martínez (h) - José Manuel Astigueta - José Alfredo Martínez de Hoz (h) - Horacio Adolfo García Belsunce - Benjamín Rattenbach

ACTO: DECRETO Nº 1.406/63.-

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO

Buenos Aires, 21 de febrero de 1963.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el contrabando constituye una forma de evasión fiscal antigua pero cambiante en sus modalidades, que evoluciona con los tiempos y se adapta a los distintos países y lugares, hasta el punto de ofrecer siempre aspectos nuevos según las posibilidades que le ofrecen la época y el medio; siendo de advertir en nuestro país un sensible agravamiento de este mal en los últimos años, atribuible en buena parte al inadecuado sistema represivo;

Que es propósito del Gobierno evitar la evasión fiscal en todas sus formas y el contrabando constituye una de las más graves y perniciosas por sus especiales características y su honda repercusión social, económica y financiera, ya que opera como indudable factor de corrupción de las costumbres, como instrumento de competencia desleal en los ámbitos del comercio y de la industria y determina que se sustraigan al erario público importantes recursos que si ingresaran a él en forma de tributación normal y correcta podrían invertirse en fines que hacen al interés y al bienestar ge-

//-

neral;

Que la legislación relativa a este delito ha sufrido modificaciones circunstanciales en diversas épocas y no responde a un criterio uniforme ni a los requerimientos del momento actual;

Que tanto en punto a la tipificación del delito de contrabando (figura penal que requiere una más precisa delineación), como en cuanto a las sanciones que lo reprimen y al procedimiento para la aplicación de éstas, es cada vez más evidente la necesidad de organizar un cuerpo de normas congruentes entre sí, acordes con la realidad, que respondan a un criterio sistemático y único y sean de clara enunciación y sencilla interpretación;

Que ello hace indispensable la revisión integral del régimen preventivo y represivo articulado por las normas en vigor, para actualizarlo y adecuarlo a las modalidades que el delito presenta hoy en nuestro país;

Que con la modernización y el perfeccionamiento de las disposiciones de que se trata ha de dotarse a los organismos de aplicación de un instrumento más eficaz y operante en la lucha contra el contrabando;

Que el medio idóneo para llevar a cabo tal cometido es la creación de una comisión de técnicos en la materia que proyecte la reforma del régimen vigente;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Créase, en jurisdicción de la Secretaría de Estado de Hacienda, una Comisión de técnicos encargada de proyectar la reforma integral del régimen legal y reglamentario en vigor sobre la prevención y represión del contrabando.

ARTICULO 2°.- La Comisión de Reforma del Régimen Preven-

tivo y Represivo del Contrabando será presidida por el señor Secretario de Estado de Hacienda e integrada por técnicos que designará dicha Secretaría de Estado, quienes desempeñarán su cometido en forma honoraria.

La Comisión deberá expedirse dentro de los treinta (30) días de su constitución.

ARTICULO 3°.- La Dirección General de Impuestos y Contribuciones, la Dirección Nacional de Aduanas, la Prefectura Nacional Marítima, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal prestarán a la Comisión la colaboración que ésta les requiera.

ARTICULO 4°.- La Comisión elevará sus conclusiones al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda, juntamente con los proyectos de modificaciones legales y reglamentarias que estime corresponder.

ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Defensa Nacional, Interior y Educación y Justicia y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, Marina y Guerra.

ARTICULO 6°.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino - José M. Astigueta - Rodolfo Martínez - Alberto Rodríguez Galán - Horacio A. García Belsunce - Carlos A. Garzoni - Benjamín Rattenbach

ACTO: RESOLUCION Nº 409/63.T.C.N.-

MATERIAS: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - PAGOS ENTRE REPARTICIONES O EMPRESAS DEL ESTADO - LEY DE CONTABILIDAD (Art. 32º) - PAGOS - LIBRAMIENTOS

Buenos Aires, 27 de febrero de 1963.-

Visto el expediente nº 50.712/61, en el que la Contaduría General de la Nación somete a consideración de este Tribunal de Cuentas el caso de los libramientos que, a favor de organismos estatales, sea por aplicación de los decretos 6.124 (+) y 6.125/59 (°) u originados en contribuciones o aportes del Estado, emiten los servicios administrativos y permanecen en la Tesorería General de la Nación impagos por más de un año, y

CONSIDERANDO:

Que el sistema de compensación de créditos y débitos entre las distintas reparticiones de la administración pública nacional por ventas y compras y/o servicios prestados; y el régimen de pagos, previstos en los recordados decretos 6124 y 6125/59 han tenido por

(+) Ver Digesto Administrativo nº 847.-
(°) Ver Digesto Administrativo nº 838.-

objeto agilitar los procedimientos administrativos tendientes a facilitar el conocimiento de los saldos existentes para posibilitar su cancelación, evitando innecesarias dilaciones;

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación ha considerado, en reiteradas oportunidades, el problema referente a la caducidad de los libramientos emitidos a favor de reparticiones del Estado en función de los decretos 6124 y 6125/59, sosteniendo que los mismos no tienen período de caducidad, criterio que cabe hacerlo extensivo a los libramientos que tienen origen en contribuciones o aportes que el Estado acuerda a organismos de la administración, libramientos que, por su propia naturaleza, no son de pago para cancelación de acreedores;

Que para el primer caso (libramientos emergentes de los regímenes instituídos por los decretos 6.124 y 6.125/59), carecería de relevancia la movilización de fondos de la Tesorería General que reingresarían a la misma por otra vía, con los consiguientes recargos de tareas que ello origina. En cuanto a las contribuciones y aportes a favor de dependencias estatales, los libramientos respectivos configuran la movilización de los fondos legalmente conferidos a aquéllas para la adecuada y necesaria atención de sus servicios circunstancia que pone de manifiesto, para el caso, - la característica de un movimiento financiero interdepen - diente de las cuentas del gobierno que no justifica su encuadramiento en el régimen de caducidad establecido por el artículo 32° de la ley de contabilidad;

Por ello y atento la necesidad de dejar aclarado en el sentido expuesto el alcance del mencionado precepto legal

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- El plazo de un año establecido por el artículo 32º de la ley de contabilidad para la caducidad de los libramientos entrados en la Tesorería General de la Nación, no rige en los casos que deban cumplimentarse las disposiciones de los decretos 6.124/59 y 6.125/59. Tampoco rige - aquel plazo para los libramientos emitidos contra créditos presupuestarios que signifiquen aportes o contribuciones - en favor de organismos del Estado.

ARTICULO 2º.- Regístrese, dése a conocer por Digesto Administrativo y archívese.-

JOSE M. FERNANDEZ FARIÑA - Luis Pedro Picardo - Antonio M. Pérez Arango - Wifredo Dedeu - Eusebio E. Villar (Voc. Acc.) - Juan Carlos Pastene - Secret.

ACTO: RESOLUCION N° 446/63 T.C.N.

MATERIAS: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - INCOMPATIBILIDADES - FISCALIZACION - DELEGACIONES

Buenos Aires, 8 de marzo de 1963.-

Visto la resolución n° 1.890/62 (') relacionada con el plazo para efectuar el contralor de las declaraciones juradas sobre acumulación de cargos, funciones y pasividades del personal comprendido en el decreto número 6.250/62 ("), y

CONSIDERANDO:

Que algunos de los servicios responsables del envío de la documentación aludida a las respectivas representaciones de este Cuerpo, aún no han completado dicha remisión, habiendo otros que lo hicieran con considerable atraso;

Que tales circunstancias impidieron materialmente finalizar las tareas de contralor correspondientes dentro del lapso establecido por la resolución n° 1.890/62, razón por la cual se impone prorrogar el término con el propósito de que no resulten perjudicados, por la suspensión de sus haberes que procedería disponer, numerosos servidores públicos que presentaron sus declaraciones juradas, pero que hasta el presente no han sido tramitadas como correspondía por los responsables;

//-

(') Ver Digesto Administrativo N° 1747.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1685.-

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Las representaciones de este Cuerpo a que se refiere el artículo 1° de la resolución n° 1.890/62 cumplirán lo dispuesto por el artículo 2° de la misma las liquidaciones de haberes correspondientes al mes marzo de 1963.

ARTICULO 2°.- Con copia de la presente, dichas representaciones instarán a los responsables correspondientes el ... gente cumplimiento de los decretos 8566/61 (+) y 9677/61 cuyos plazos fueron prorrogados por los decretos 9432/61 3606/62 (=), 6250/62 y 12297/62 (°), en cuanto se relacionen con los aspectos que motivan esta resolución, e informarán a este Cuerpo de los resultados obtenidos al 10 ... abril de 1963 a efecto de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar conforme lo establece el artículo 84 j) de la ley de contabilidad.

ARTICULO 3°.- Dése por Digesto Administrativo, comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

LUIS PEDRO PICARDO - Damián Figueroa Wifredo Dedeu (Vocales) - Oscar J. Collazo - Francisco Mallo (Voc.Acc.) Juan Carlos Pastene - Secretario

---

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1460.-
(-) Ver Digesto Administrativo N° 1491.-
(°) Ver Digesto Administrativo N° 1489.-
(=) Ver Digesto Administrativo N° 1683.-
(°) Ver Digesto Administrativo N° 1807.-

ACTO: EXPEDIENTE Nº 60.146/63.-

MATERIAS: CONTRATACIONES - OBRAS PUBLICAS - GARANTIAS

Continuando la comunicación de jurisprudencia número 186 (1), los "Bonos de Consolidación de Deudas -10%- 1962" emitidos de conformidad con el decreto Nº 5.427/62 y los títulos del "Empréstito de Recuperación Nacional 9 de Julio - 7% - 1962" (decreto 6.690/62), constituyen títulos de la deuda pública nacional y como tales pueden ser admitidos para garantizar ofertas o contratos en las contrataciones regidas por la Ley de Contabilidad o por la Ley 13.064.-

(Prov. 115/63 - Contratos y Trabajos Públicos - C. Nº 187).-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1824.-

ACTO: RESOLUCION Nº 12.001/63.-

MATERIA: LICENCIAS

Buenos Aires, 4 de marzo de 1963.-

Visto la resolución S.H. Nº 12.013/61 (°), y

CONSIDERANDO:

Que en el texto del punto 1º, apartado a), de la misma se hace mención a la transferencia de licencias por vacaciones de un año a otro por razones de servicio o de salud;

Que el decreto Nº 12.720/53 ("), al cual se refiere dicha resolución, sólo preveía como causal de transferencia de este tipo de licencias las razones de servicio;

Que si bien se trata de un error formal, ya que por vías de una resolución no podría alterarse el texto expreso de un decreto del Poder Ejecutivo, resulta conveniente modificar el texto de dicha cláusula a fin de evitar cualquier duda al respecto;

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E:

1º) Rectíficase el texto del apartado a), punto 1º de la resolución S.H. Nº 12.013, de fecha 29 de noviembre de 1961, el que debe considerarse redactado de //-

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1520.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 15.-

ACTO: RESOLUCION Nº 12.002/63.-

MATERIAS: LICENCIAS - INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 4 de marzo de 1963.-

Vista la resolución S.H. Nº 12.017/62 (1), y

CONSIDERANDO:

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación, en función de la facultad acordada por el artículo 85, inc.a), de la Ley de Contabilidad, ha formulado una observación - legal a dicho acto, por considerar que el mismo modifica disposiciones contenidas en decretos del Poder Ejecutivo;

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E:

1º-Déjase sin efecto la resolución S.H. Nº 12.017/62, dictada con fecha 9 de noviembre de 1962.

2º-Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. HORACIO GARCIA BELSUNCE.

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1798.-

ACTO: DECRETO-LEY Nº 1.153/63.-

MATERIAS: JUBILACIONES - PERSONAL

Buenos Aires, 13 de febrero de 1963.

Visto lo propuesto por el Honorable Directorio de la Caja Nacional de Previsión para el Personal Bancario y de Seguros, y

CONSIDERANDO:

Que el 29 de setiembre de 1951 tuvo sanción la Ley Nº 14.069, cuyo artículo 11 dispuso: "Hasta el 31 de diciembre de 1951 el personal de servicio de las instituciones bancarias oficiales, afiliado actualmente al régimen de la Ley Nº 4.349 y sus complementarias, podrá optar por su incorporación al sistema instituído por la Ley Nº 11.575 y sus modificatorias. En tal caso, los aportes patronal y personal correspondientes a dichos agentes serán del 10 % (diez por ciento) y 14 % (catorce por ciento), respectivamente. La incorporación a que se ha hecho referencia precedentemente tendrá efectos a partir del 1º de enero de 1952. Los agentes que se incorporen en el futuro a los organismos bancarios de que se trata, quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la Ley Nº 11.575 y sus complementarias, y a su respecto regirán los aportes establecidos por el presente artículo";

Que, posteriormente, con fecha 10 de setiembre de 1952, se sancionó la Ley Nº 14.148, por la que se amplió

//-

hasta el 31 de diciembre de 1952 el plazo establecido por el artículo 11 de la Ley Nº 14.069;

Que por el artículo 2º de la Ley Nº 14.148 se incluyó en los mencionados beneficios al personal de la ex Dirección General de Servicios Sociales Bancarios;

Que el artículo 3º disponía que los afiliados que dejaron el servicio con posterioridad al 31 de diciembre de 1951 o sus derecho habientes podrán formular la opción aún cuando hubieran obtenido una prestación de la Sección Ley Nº 4.349, en cuyo caso deberán devolver las sumas percibidas en tal concepto;

Que el plazo de referencia fué ampliado, por último, hasta el 31/12/955, por medio de la Ley Nº 14.374;

Que es indudable que el legislador no tuvo en cuenta la situación de aquellos empleados que habiéndose desempeñado durante toda una vida al servicio de bancos oficiales, dejaron de prestar servicios con anterioridad a las fechas señaladas precedentemente, es decir, que se emitió dar igual opción a los empleados bancarios que ya habían obtenido alguna prestación de la Sección Ley nº 4.349, con anterioridad a diciembre de 1951;

Que ello hace que nos encontremos en presencia de una violación manifiesta del art. 18º de la Constitución Nacional, cláusula que garantiza la igualdad de los habitantes ante la ley, la que, a juicio del Poder Ejecutivo, se ha deteriorado, por cuanto jubilados bancarios -en iguales condiciones- reciben beneficios previsionalmente distintos;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- El personal que al momento de obtener su jubilación por el régimen de la Ley Nº 4.349, prestaba servicios en las instituciones bancarias oficiales, como así también los jubilados que oportunamente optaron por el beneficio de la Ley Nº 11.575 sin cumplir dentro del mismo

los tres (3) años requeridos, ya sea por haberse acogido al derecho jubilatorio antes de ese tiempo o por que -a pesar de toda una carrera bancaria- fueron destinados a prestar otras funciones fuera del ámbito de aplicación de la precitada ley, o sus causahabientes (jubilados o pensionados), quedan incorporados, a partir de la vigencia del presente al sistema previsional instituído por la Ley Nº 11.575. Los aportes personales y patronales correspondientes a dichos agentes serán transferidos por la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado a la Caja Nacional de Previsión para el Personal Bancario y de Seguros.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, Defensa Nacional y Trabajo y Seguridad Social.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Rodolfo Martínez - José M.Astigueta - Galileo Puente.

ACTO: DECRETO Nº 1.376/63.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Buenos Aires, 21 de febrero de 1963.-

Visto el expediente Nº 6.890-T-1962, en el que el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud solicita se exceptúe a la citada Gobernación de las disposiciones del Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, (aprobados por decreto-ley Nº 6.666/57 (1) y decreto Nº 9.530/58, respectivamente) y sus normas complementarias, atento las actuaciones producidas, la conformidad prestada por la Secretaría de Estado de Hacienda y la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º (inciso 1º) del mismo Estatuto contempla la posibilidad de exceptuar de sus normas, al personal de aquellos organismos que por sus funciones propias exijan un régimen especial; //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

Que las razones invocadas a fojas 1/2 que derivan la situación geográfica del mencionado territorio, hacen viable la medida que se propicia y aconsejan permitir las autoridades respectivas, la creación de un ordenamiento que, en la materia, consulte sus reales necesidades, tendiente a lograr la permanencia, estabilidad y progreso de los agentes bajo su dependencia directa,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Exceptúase al Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, de las disposiciones del Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional (aprobado por el decreto-ley Nº 6.666/57 y decreto Nº 9.530/58, respectivamente) y de los decretos reglamentarios y normas legales aclaratorias y/o complementarias de los mismos.

ARTICULO 2º.- El Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, elevará al Poder Ejecutivo Nacional -por conducto del Ministerio del Interior- para su consideración y aprobación, dentro de los sesenta (60) días de la fecha, los proyectos del Estatuto y Escalafón para el personal de su dependencia directa, los que deberán ajustarse al espíritu de las normas vigentes y adaptarse a las particulares condiciones del citado Territorio.

ARTICULO 3º.- Los gastos que origine dicha medida, se atenderán con cargo a los recursos provenientes de la aplicación de las leyes números 14.773, 14.788 y 15.263.

ARTICULO 4º.- Hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional apruebe los nuevos cuerpos normativos, el personal de la referida Gobernación, continuará rigiéndose por las normas que en materia de Estatuto y Escalafón les son aplicables en la actualidad.

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Rodolfo Martínez - Eustaquio A. Méndez Delfino - Horacio A.García Belsunce.

ACTO: DECRETO-LEY N° 1.774/63.-

MATERIA: ADSCRIPCIONES

Buenos Aires, 7 de marzo de 1963.-

Visto el decreto-ley N° 11.179/62, que aprueba las "Normas Reglamentarias Básicas para las Sociedades de Ahorro y Préstamos para la Vivienda", cuya fiscalización se pone a cargo de la Administración Federal de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que numerosas entidades vienen funcionando como sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda desde fecha anterior a la sanción de las normas aludidas;

Que, por lo tanto, el interés público exige asignar a su fiscalización una celeridad mucho mayor que la que resultaría de formar el personal propio idóneo para realizarla;

Que diversas dependencias y organismos del Estado podrían facilitar transitoriamente la colaboración de elementos habituados a este tipo de tareas, pero su adscripción a la Administración Federal de la Vivienda se ve obstaculizada por la prohibición del decreto-ley n° 3.891/57 (1), que sólo excluye de ella a las ads-

//-

(1) Ver Digesto Administrativo N° 213.-

cripciones de personal a.o de la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación, las Intervenciones y los organismos de carácter transitorio;

Que el problema quedaría resuelto si se autorizase la excepción pertinente, que indudablemente se justifica en el presente caso,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1°.- Exceptúase de la prohibición contenida en el artículo 1°, inciso b) del decreto-ley n° 3.891/57, a las adscripciones transitorias de personal a la Administración Federal de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, Defensa Nacional y Economía.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Rodolfo Martínez (h) - José M. Astigueta - Eustaquio A. Méndez Delfino.-



ACTO: DECRETO-LEY N° 1.800/63.-

MATERIAS: JUBILACIONES - PENSIONES - PERSONAL

Buenos Aires, 8 de marzo de 1963.-

Visto las disposiciones del decreto-ley N° 1.152/63 (1), y

CONSIDERANDO:

Que son objetivos del Poder Ejecutivo Nacional lograr a la brevedad posible la regularización del pago y ajuste de las prestaciones que otorgan las Cajas Nacionales de Previsión y procurar, además, un nivel justo y adecuado de las mismas en relación con la realidad actual;

Que a tales efectos es necesario tener en cuenta - que hasta el presente no se ha podido dar cumplimiento integral a la actualización de los haberes jubilatorios y de pensión conforme a la escala del artículo 14° del decreto 11.732/60;

Que, por otra parte, las mejoras de los haberes deberán ser establecidas de manera equitativa y uniforme para la totalidad de los beneficiarios comprendidos en los regímenes enumerados en el artículo 1° del decreto-ley n° 1.152/63, de acuerdo con las reales posibilidades financieras de los mismos;

//-

(1) Ver Digesto Administrativo N° 1854.-

Que el artículo 2° del decreto-ley N° 1.152/63 no contempla las condiciones precedentemente establecidas, por cuya razón no resulta oportuno mantener la vigencia del mismo;

Que es propósito del Poder Ejecutivo Nacional realizar los estudios técnicos tendientes a lograr una solución integral de los diversos problemas de la previsión social, sin perjuicio de adoptar las medidas de urgencia que se consideren indispensables;

Que dentro de ese orden de ideas es conveniente mantener las disposiciones de los artículos 3°, 4°, 7° y 8° del decreto-ley n° 1.152/63, y mientras tanto encomendar a la Comisión Asesora Permanente de Seguridad Social el estudio de soluciones inmediatas respecto de los problemas a que dichas normas se refieren;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

DECRETA CON FUERZA DE LEY,

ARTICULO 1°.- Derógánse los arts. 2°, 5° y 6° del decreto-ley n° 1.152/63.

ARTICULO 2°.- Encomiéndase a la Comisión Asesora Permanente de Seguridad Social el estudio de las posibilidades financieras de las Cajas Nacionales de Previsión para aumentar los haberes jubilatorios y de pensión, así como la revisión de las disposiciones que se mantienen vigentes de los arts. 3°, 4°, 7° y 8° del decreto-ley n° 1.152/63, con el objeto de proponer las modificaciones que correspondan.

ARTICULO 3°.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, Defensa Nacional y Trabajo y Seguridad Social.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, publíquese y archívese.-

GUIDO - Rodolfo Martínez - José M. Astigueta - Alberto R. Galán.-

ACTO: DECRETO Nº 1.998/63.-

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE QUIMICA - SERVICIOS PREFERENCIALES

Buenos Aires, 18 de marzo de 1963.-

Visto el sistema de "análisis preferenciales" implantado en la Dirección Nacional de Química por decreto nº 1.548/58 (º), modificado por los decretos números 5.575/59 (") y 2.444/61 (+), y considerando la necesidad de actualizar los valores de la sobretasa que por tal concepto se abona, para hacer frente al constante incremento de los costos del material utilizado y, al mismo tiempo para adecuar la retribución que corresponde al personal afectado a esas tareas, con las remuneraciones actuales que perciben,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícanse los artículos 2º y 5º del decreto nº 2.444 de fecha 29 de marzo de 1961, los que quedarán redactados en los siguientes términos:

"Artículo 2º.- Para obtener la prestación de "servi-

//-

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 426.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1345.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1393.-

"cios preferenciales" los particulares abonarán una so-
"bretasa en efectivo de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MO-
"NEDA NACIONAL (m$n. 750.-) si el mismo se cumple en
"días hábiles y de NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$
"900.-) si lo fuera en sábados, feriados, días inhábiles
"o de asueto administrativo".

"Artículo 5°.- La Contaduría General de la Nación proce-
"derá a la apertura en la Secretaría de Hacienda de una
"Cuenta de Terceros" denominada "Dirección Nacional de
"Química-Servicios Preferenciales", la cual se acredita-
"rá con los fondos provenientes de la sobretasa fijada
"por el artículo 2° y se debitará con: los importes que
"se abonen al personal técnico de la citada Repartición
"afectado a los servicios de que se trata, a razón de
"QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 500.-) por cada
"turno extraordinario y SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIO-
"NAL (m$n. 600.-) si esta se realizara en días sábados,
"feriados, inhábiles o de asueto administrativo; los im-
"portes que se abonen al personal administrativo, obre-
"ro y de maestranza a razón de CUATROCIENTOS PESOS MONE-
"DA NACIONAL (m$n. 400.-) por cada turno de tres (3) ho-
"ras de labor en horas extraordinarias; los importes que
"se abonen al personal de servicios auxiliares, a razón
"de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
"350.-) por cada turno de tres (3) horas de labor en ho-
"ras extraordinarias y las sumas que se destinen a la
"reposición de drogas, útiles e instrumental científico
"utilizado en la realización de análisis que se practi-
"quen por el régimen preferencial. Los saldos sobrantes,
"no comprometidos que se produzcan al final de cada e-
"jercicio se ingresarán a rentas generales.

"Las sumas destinadas a retribuir el trabajo extraordi-
"nario del personal administrativo, obrero y de maestran-
"za y de servicios auxiliares, no podrán superar el vein-
"ticinco por ciento (25%) del total anual recaudado en

"concepto de sobretasas de preferencias".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de Química a sus efectos.-

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino - Horacio A. García Belsunce

ACTO: DECRETO Nº 1.403/63.-

MATERIAS: GABINETE DEL MINISTRO - RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - PRESUPUESTO - ECONOMIAS - PROHIBICIONES

Buenos Aires, 21 de febrero de 1963.-

Visto que el artículo 27º del decreto-ley nº 10.582/62 (¹) pone en vigencia las disposiciones del decreto nº 413/60 (") y teniendo en cuenta el fundamento de las normas que en su oportunidad determinaron la constitución y funcionamiento de los Gabinetes de los señores Ministros y Secretarios de Estado,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Exceptúanse los cargos de los Gabinetes de los señores Ministros y Secretarios de Estado, de las disposiciones del decreto nº 413/60, puesto en vigencia por el artículo 27º del decreto-ley nº 10.582/62.

ARTICULO 2º.- Ratifícanse todas las designaciones efectuadas, a partir del 1º de noviembre de 1962 y hasta la fecha, en los distintos Gabinetes de los señores Ministros y Secretarios de Estado.

//.

(¹) Ver Digesto Administrativo nº 1.776.-
(") Ver Digesto Administrativo nº 1.066.-

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino - Horacio A. Garcia Belsunce.-

ACTO: DECRETO - LEY Nº 2.375/63.-

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Hipódromos) - PATRIMONIO DEL ESTADO - TRANSFERENCIAS DE DEPENDENCIAS

Buenos Aires, 27 de marzo de 1963.-

Visto el decreto Nº 2.247/62 (¹), insistido por el Nº 5.978/62 ("), y

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de la citada medida de gobierno, la Secretaría de Estado de Hacienda ha convenido con la Asociación Civil Jockey Club de la Capital Federal, la transferencia de la administración y explotación de los Hipódromos de Palermo y San Isidro;

Que es necesario actualizar los impuestos que gravan la venta de boletos en los hipódromos administrados por esa Institución;

Que, asimismo, procede un reajuste de la Ley número 11.597, en consideración a que la Escuela y Jardín de Infantes que dependían anteriormente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, han sido transferidos al Consejo Nacional de Educación;

Por ello,

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1595.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1653.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Apruébase el adjunto Convenio celebrado en fecha 15 de marzo de 1963 entre la Secretaría de Estado de Hacienda y la Asociación Civil Jockey Club de la Capital Federal, en cumplimiento de lo establecido por el decreto Nº 2.247/62, para la transferencia de la administración y explotación de los Hipódromos de Palermo y San Isidro.

ARTICULO 2º.- Asígnase al Consejo Nacional de Educación el 100 % del producido de la fracción excedente de la segunda cifra decimal o de los centavos a que se refiere el artículo 2º de la Ley Nº 11.597.

ARTICULO 3º.- Transfiérase para la atención de los gastos de funcionamiento del Hipódromo de Palermo el porcentaje actual fijado por la Ley Nº 14.042.

ARTICULO 4º.- Congélanse las participaciones que perciban los diversos beneficiarios de las Leyes Nros.11.242,12.922, 13.235, 13.941, 14.789 y decreto-ley 4.073/56, que gravan el producto de la venta de boletos de sport de los Hipódromos de Palermo y San Isidro en las sumas que les han correspondido en el ejercicio 1961/62 y que se determinan en el Convenio celebrado con la Asociación Civil Jockey Club de la Capital Federal.

El excedente que no hubiere sido utilizado en el régimen de dicho Convenio se redistribuirá proporcionalmente entre los distintos organismos beneficiarios.

ARTICULO 5º.- Derógase toda otra disposición que se oponga al presente.

ARTICULO 6º.- El presente decreto ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamento de Interior, de Defensa Nacional y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.

GUIDO - Rodolfo Martínez (h) - José M. Astigueta - Eustaquio A.Méndez Delfino Ramón C. Lequerica.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los quince días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y tres, entre la Secretaría de Hacienda, representada en este acto por el señor Secretario de Estado de Hacienda, Doctor Horacio A.García - Belsunce y la Asociación Civil Jockey Club de la Capital - Federal, representada en este acto por los señores Horacio Bustillo y Jorge Ravagnan, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto Nº 2.247/62, insistido por el decreto número 5.978/62, se procede a celebrar el presente

C O N V E N I O :

Artículo 1º.- La Secretaria de Hacienda traspasará al Jockey Club de la Capital Federal los Hipódromos de Palermo y San Isidro el primero de abril de mil novecientos sesenta y tres libre a esa fecha de cualquier deuda o gravamen y le entregará la parte de las recaudaciones percibidas - que correspondan a períodos futuros. El superávit que a la fecha de la transferencia arrojen las actuales cuentas de explotación de los hipódromos, luego del ajuste señalado - precedentemente, corresponde a Rentas Generales.

Artículo 2º.- DE LAS FACULTADES DE DIRECCION Y ADMINISTRACION.

A- Son facultades exclusivas del Jockey Club, relativas a la dirección y administración de los hipódromos a su cargo; dictar sus reglamentaciones internas y el Reglamento General de Carreras; designar Comisiones de Carreras y/o Comisariato; fijar el precio de las inscripciones; otorgar licencia profesional de cuidadores, jockeys y otros profesionales del turf, etc.; reconocer a propietarios de caballerizas y asignarles colores y/o cancelarlos; organizar los servicios técnicos y funciones de los hipódromos; aplicar las penas que contemple el Reglamento de Carreras; identificar los animales que actúen en las carreras programadas, en base a la información y colaboración del Stud Book Argentino; compilar - las estadísticas de las carreras que le correspondan y

toda otra prevista en este Convenio o que haga a la organización interna y funcionamiento de los hipódromos.

B- El Jockey Club establecerá el plan de reuniones en los hipódromos tomando en consideración y conciliando en cuanto sea posible los intereses del turf, del público concurrente y de la explotación en si misma, transfiriendo o amulando cualquier reunión hípica o modificando sus condiciones cuando así lo requieran las circunstancias, debiendo disponer la realización de no menos de treinta reuniones anuales en el circo de San Isidro.

Artículo 3º.- DEL PERSONAL.

A- Todo el personal que se desempeña en funciones propias de los hipódromos de Palermo y de San Isidro y aquél incluído en la planilla anexa que desempeña parcialmente esas funciones, cualquiera sea la forma en que perciba su remuneración (mensualizado, jornalizado o contratado) y cualquiera sea la cuenta a la que actualmente se imputen los emolumentos (Cuenta Especial Hipódromos o Rentas Generales), será absorbido por el Jockey Club en las condiciones de sueldo en que se encuentre a la fecha de transferencia, reconociéndosele la antigüedad que tenga como ex-empleado del Jockey Club y/o de la Administración de la Lotería y Casinos.

B- El personal mensualizado y jornalizado deberá manifestar expresamente su voluntad de pasar a depender del Jockey Club, una vez conocidos los beneficios de jubilación, indemnización, salario familiar, antigüedad, estabilidad, premios, bonificación por título, régimen de licencias, etc. que establecen las disposiciones que les serán aplicables. Cuando una misma persona desempeñe dos cargos, uno mensualizado y otro por reunión, -jornalizado o contratado- la opción deberá hacerla por ambos cargos a la vez. El personal que se niegue a ser transferido al Jockey Club, quedará desde ese momento desvinculado de la explotación, no pudiendo dicha Asociación Civil incorporarlo nuevamente a la misma hasta que trans-

curra un plazo mínimo de tres años.

C- El personal contratado que no desee continuar prestando servicios deberá manisfestarlo por escrito, quedando desde ese momento desvinculado de la explotación.- El Jockey Club al vencer los contratos de este personal y en cuanto necesite sus servicios, lo incorporará a su plantel estable de jornalizados, en iguales condiciones que éste.

Artículo 4º.- DE LOS BIENES.

A- Los bienes muebles de propiedad del Estado que se encuentran en el hipódromo de Palermo y/o San Isidro serán inventariados y el valor de su arriendo incluído en el valor locativo establecido para el hipódromo de Palermo que deberá imputarse a la cuenta explotación como se determina en el artículo noveno.

B- Los bienes de ese mismo carácter existentes en el hipódromo de Palermo pero que son propiedad del Jockey Club serán utilizados por éste en la explotación, sin cargo para las cuentas de resultados, en tanto se mantenga el régimen de administración establecido en el presente Convenio.

C- Los bienes de propiedad del Jockey Club existentes en el hipódromo de San Isidro y en la imprenta, se consideran incluídos en el contrato del alquiler vigente entre el Estado y el Jockey Club.

D- Los bienes muebles de propiedad del Jockey Club que se encuentran en la Administración de la Lotería serán reintegrados al Jockey Club.

Artículo 5º.- DE LAS LOCACIONES.

De común acuerdo fíjase como valor locativo del hipódromo de Palermo la misma suma que el alquiler contractualmente fijado para el hipódromo de San Isidro y que en la actualidad es de tres millones quinientos mil pesos moneda nacional incluídos los bienes muebles de propiedad del Estado, de acuerdo con el inventario a practicarse, suma ésta que

el Jockey Club deberá imputar a la cuenta de explotación y depositar mensualmente en la cuenta del Banco de la Nación Argentina "Secretaría de Estado de Hacienda c/Tesorería General de la Nación" con destino a "Rentas Generales - Rentas Diversas - Secretaría de Hacienda - Varios".- El alquiler contractualmente establecido para el hipódromo de San Isidro y la imprenta, incluídos sus bienes muebles, será percibido por el Jockey Club, también mensualmente e imputado en la misma forma.

Artículo 6º.- DE LAS CONCESIONES.

Las concesiones de restaurantes y kioscos, las recibirá el Jockey Club respetando los contratos existentes, con la opción a favor de los concesionarios de acuerdo con las cláusulas contractuales.

Artículo 7º.- DEL REGIMEN DE LAS CUENTAS.

La explotación de los hipódromos de Palermo y San Isidro será efectuada por el Jockey Club en su carácter de administrador en forma conjunta y en igual forma serán llevadas las cuentas de administración, sin perjuicio de la liquidación individual de los impuestos, dada la forma diferencial en que están gravados la venta de boletos y las entradas en cada uno de dichos establecimientos.- Las cuentas de la Administración serán agrupadas en tres grandes rubros: a) Explotación - b) Inversiones - c) Varias.

Artículo 8º.- DE LOS RECURSOS.

Los recursos de los hipódromos estarán constituídos por:

A- Cuenta Explotación.

I) El monto neto de la venta de boletos de sport, luego de deducido el porcentaje establecido para el pago del "sport" y las participaciones que a favor del Fisco, establecen las disposiciones legales.

II) El monto neto de la venta de entradas luego de deducida la participación fiscal que determinan las disposiciones.

B- Cuenta Inversiones.

Los ingresos por concesiones acordadas para las ventas al público en los recintos, los provenientes de los derechos de inscripción en las carreras, los relacionados con la registración de los colores, el alquiler de boxes, los servicios veterinarios y otros diversos en los cuales el Fisco no tiene participación directa.- Asimismo ingresarán a esta cuenta los reintegros que debe efectuar el Jockey Club por el costo de los trabajos que realice la Imprenta y no corresponda a la administración de los Hipódromos.

C- Cuentas Varias.

Constituye el grupo de Cuentas Varias las siguientes:

I) El Fondo de Reserva para Imprevistos, sujeto al régimen establecido en los artículos undécimo y duodécimo.

II) La cuenta "Jockey Club Participaciones en Suspenso. Ejercicios....." sujeta al régimen que establecen los artículos duodécimo y décimo tercero.

Artículo 9º.- DE LOS GASTOS.

Las cuentas de gastos se agruparán en:

A- Cuenta Explotación la que deberá subdividirse por lo menos en las siguientes subcuentas.

Personal.

Incluirá todas las erogaciones provenientes de los gastos en personal, como sueldos, jornales, asignaciones a personal contratado, aporte patronal, indemnizaciones, gratificaciones y cualquier erogación que se origine con el personal que actúe en relación de dependencia.

Alquileres.

Incluirá el valor locativo fijado para el Hipódromo de Palermo, el alquiler del de San Isidro, el de la Imprenta, el de la Agencia de Mar del Plata, el de la Administración, el de la Comisión Nacional de Hipódromos y cualquier otro que se vincule con la explotación.

Premios.

Comprenderá la totalidad de los premios asignados para las carreras, cualquiera sea el destino de los mismos.

Subvenciones.
Agrupará el monto abonado a los profesionales del turf y otros en virtud de las disposiciones correspondientes.
Ayuda Social.
Incluirá todas las erogaciones que origine la atención del servicio médico, -con excepción de los sueldos cargados a personal-, los gastos de farmacia, las contribuciones por las pensiones graciables, etc.
Gastos de conservación.
Se imputarán todos los gastos de mantenimiento de inmuebles y muebles de ambos hipódromos, de la administración y agencias y/o que se encuentren afectados a ellos.
Gastos Generales.
Contendrá los demás gastos no detallados precedentemente, incluída la comisión del Administrador.

B- Cuenta Inversiones.
Se imputarán a esta cuenta las erogaciones que se originen en la ampliación o modificación de las instalaciones de los hipódromos, ya se trate de mejoras en los inmuebles propiamente dichos o en las instalaciones dedicadas al mejoramiento del juego o de su mecanismo operativo.
También podrán efectuarse inversiones con cargo a la cuenta explotación, pero en este caso se requerirá la previa autorización de la Secretaría de Hacienda.
El Jockey Club no podrá realizar nuevas obras ni ampliar las existentes en el inmueble afectado al Hipódromo de San Isidro, ya sea con fondos de la cuenta explotación o de la cuenta inversiones, sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda.

Artículo 10.- DEL EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO.
En el caso que los gastos imputables a la cuenta "Explotación" sobrepasen el monto actual, el Jockey Club adoptará las medidas necesarias para que el incremento en las erogaciones sea cubierto con mayores ingresos.
A este fin evitará en lo posible cualquier aumento en gas-

tos de personal, premios, ayuda social y subvenciones que no tengan adecuada financiación.

Artículo 11.- DEL SUPERAVIT.

El supéravit anual de la cuenta "Explotación" tendrá el siguiente destino:

a) Diez por ciento para la cuenta "Fondo de Reserva para - Imprevistos".

b) El saldo a Rentas Generales.

Artículo 12.- DEL DEFICIT.

El déficit de la cuenta "Explotación" será cubierto con fondos de las siguientes cuentas, en el orden que se indica:

a) Fondo de Reserva para Imprevistos.

b) Saldo no comprometido de la cuenta Inversiones.

c) Cuenta "Jockey Club Participaciones en Suspenso.Ejercicio ...".

Si los fondos de dichas cuentas no alcanzaran a cubrir el déficit, el Jockey Club dará cuenta de ello inmediatamente a la Secretaría de Hacienda, quedando autorizado - mientras tanto para retener transitoriamente las sumas necesarias del monto de los boletos vendidos, aplicando los porcentajes de participación al Fisco sobre el saldo.

Artículo 13.- DE LAS PARTICIPACIONES FISCALES.

A- El Jockey Club queda obligado a depositar dentro de los dos (2) días hábiles de celebrada la reunión, y en la forma que se indica, los importes resultantes de los porcentajes que se detallan:

1) Hipódromo de Palermo - Sobre boletos vendidos

En Banco Nación Argentina (Casa Central) Cuenta Nº 1-1049- o/Dirección General Impositiva.-

4,087 % para la Ley 11.242
4,087 % para la Ley 12.922
1,636 % para la Ley 13.235
2,453 % para la Ley 13.941
1,784 para el Decreto-Ley 4.073/56

2) Hipódromo de San Isidro - Sobre boletos vendidos

En Banco Nación Argentina (Casa Central) Cuenta Nº 1-1049- o/Dirección General Impositiva.-
5 % para la Ley 12.922
2 % para la Ley 13.235
2 % para el Decreto-Ley 4.073/56
En Banco Provincia de Buenos Aires (Suc.Caballito) o/Tesorería General Provincia de Buenos Aires.-
3,5 % para la Ley 4143 de la Provincia de Buenos Aires
3 % para la Ley 5540 de la Provincia de Buenos Aires
En Banco Provincia de Buenos Aires (Suc.Caballito)o/ Dirección Provincial de Hipódromos-Cuenta Nº 3521
3 % para la Ley 13.131
En Banco Provincia de Buenos Aires (Suc.San Isidro) Cuenta Nº 10.526 o/Municipalidad de San Isidro (Construcción Hospital Municipal)
2 % para la Ley 14.789

3) Hipódromo de Palermo - Restos de Dividendos
En Banco Nación Argentina (Casa Central) Cuenta Nº 3.072 o/Consejo Nacional de Educación
100 % para la Ley 11.597
En Banco Provincia de Buenos Aires (Suc.San Isidro) Cuenta Nº 11.232 o/Municipalidad de San Isidro
70 % para la Ley 4143 de la Provincia de Buenos Aires
En Banco Provincia de Buenos Aires (Suc.Caballito)o/ Tesorería General Provincia de Buenos Aires
30 % para la Ley 4143 de la Provincia de Buenos Aires

4) Hipódromo de Palermo - Sobre entradas vendidas
En Banco Nación Argentina (Casa Central) Cuenta Nº 1-1049 o/Dirección General Impositiva
m$n. 1.- por cada entrada de hasta m$n. 3.- de valor)Para la Ley 11.242
m$n. 3.- por cada entrada de más de m$n. 3.- de valor)
En Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires (Casa Central) o/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

m$n. 1.- por cada entrada de hasta)
m$n. 3.- de valor)Para la Ley 13.487
m$n. 3.- por cada entrada de más)
de m$n. 3.- de valor)
En Caja Nacional de Ahorro Postal, a su orden Cuenta Seguro de Vida Espectadores de Justas Deportivas
m$n. 0,10 por cada entrada)Para la Ley 14.231
En la Tesorería General de la Nación, a su orden
m$n. 10.- por cada entrada de hasta)
m$n. 10.- de valor)
m$n. 25.- por cada entrada de más)
de m$n. 10.- de valor y)
hasta m$n. 15.- de valor)Para el Decreto-Ley 8718/57
m$n. 40.- por cada entrada de más)
de m$n. 15.- de valor y)
hasta m$n. 20.- de valor)
m$n. 75.- por cada entrada de más)
de m$n. 20.- de valor)

5) Hipódromo de San Isidro - Sobre entradas vendidas

En la Caja Nacional de Ahorro Postal a su orden, en Cuenta Seguro de Vida Espectadores de Justas Deportivas
m$n. 0,10 por cada entrada)Para la Ley 14.231
En la Tesorería General de la Nación, a su orden
m$n. 10.- por cada entrada de hasta)
m$n. 10.- de valor)
m$n. 25.- por cada entrada de más)
de m$n. 10.- de valor y)Para el Decreto-
hasta m$n. 15.- de valor)Ley 8.718/57
m$n. 40.- por cada entrada de más)
de m$n. 15.- de valor y)
hasta m$n. 20.- de valor)
m$n. 75.- por cada entrada de más)
de m$n. 20.- de valor)
En el Banco Provincia de Buenos Aires (Suc.San Isidro) Cuenta Nº 11.232 c/Municipalidad de San Isidro

m$n. 1.- por cada entrada de hasta m$n. 5.- de valor)
m$n. 2.- por cada entrada de m$n. 5,01 hasta m$n.15.- de valor)
m$n. 3.- por cada entrada de m$n. 15,01 hasta m$n.30.- de valor) Para la Ordenanza General Impositiva Nº 1.851/53
m$n. 4.- por cada entrada de m$n. 30,01 hasta m$n.60.- de valor)
m$n. 5.- por cada entrada de más de m$n. 60.- de valor)

La obligación de depositar los porcentajes indicados sobre el monto de los boletos vendidos en las cuentas citadas, cesa tan pronto como la suma total depositada en el transcurso de un ejercicio cualquiera, alcance a los siguientes montos:

En la cuenta	Ley 11.242	m$n.	192.027.239,30
" " "	Ley 12.922	"	503.621.318,30
" " "	Ley 13.235	"	141.945.288,60
" " "	Ley 13.131	"	97.617.016,50
" " "	Ley 13.941	"	115.253.931,49
" " "	Ley 14.789	"	65.078.011,00

B- Una vez alcanzados dichos topes, el Jockey Club depositará el excedente en la cuenta "Jockey Club Participaciones en Suspenso. Ejercicio..." en el Banco de la Nación Argentina, contra la cual sólo podrá girar, para atender gastos de la explotación que no puedan ser cubiertos con los ingresos corrientes, una vez agotados los recursos establecidos en el artículo duodécimo-a) y b) y previa comunicación documentada al Síndico.- El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio será transferido a la orden de la Secretaría de Hacienda.

Artículo 14.- DE LA ADMINISTRACION.

A- El Jockey Club fijará su presupuesto de ingresos y egresos de las cuentas de administración de Hipódromos e in

cluirá en su reglamento de administración todo lo referente al régimen de contrataciones.

B- El Jockey Club en su carácter de administrador percibirá una comisión equivalente al tres por ciento de los ingresos de la cuenta de explotación que se abonará con cargo a la misma.

Artículo 15.- DE LA CONTABILIDAD Y CONTROL.

A- La Secretaría de Hacienda designará en carácter de Síndico a un funcionario permanente de la misma cuyas atribuciones y deberes serán los siguientes:

1) Examinar los libros y documentos de las cuentas de explotación e inversión de los Hipódromos.
2) Asistir con voto consultivo a las sesiones de la Comisión Directiva de la entidad en cada oportunidad que se traten asuntos relativos a la explotación de los Hipódromos.
3) Participar en todo lo inherente al presupuesto de ingresos y egresos de las cuentas de explotación de Hipódromos que efectúe el Jockey Club y de sus modificaciones y ajustes, informando a la Secretaría de Hacienda.
4) Participar en la preparación del Reglamento de Administración y de todo cuanto se relaciona con él.
5) Verificar los actos acordados por el Jockey Club en relación con la explotación de los Hipódromos y observar aquéllos que, a su juicio, comporten una transgresión del reglamento legal financiero de la cuenta, del reglamento de administración o del presupuesto fijado.
6) Dictaminar sobre la Memoria, el Inventario, el Balance y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, en lo que se refiere a la Administración de Hipódromos.
7) Verificar que el Jockey Club remita a la Secretaría de Hacienda, dentro de los cuatro meses de cerrado cada ejercicio, la memoria detallada del mismo y el Balance y Cuenta de Ganancias y Pérdidas de la explotación de los Hipódromos juntamente con su dictamen.

8) Asesorar a la Secretaría de Hacienda acerca de la situación financiera de las cuentas, como así también en cuanto concierne a la incidencia que la gestión pudiera tener sobre el Tesoro Nacional.

B- El Jockey Club deberá facilitar las tareas de fiscalización a cargo del Síndico a cuyo fin deberá mantener actualizados y a su disposición, los registros contables y sus comprobantes y suministrarle toda la información complementaria que éste requiera y los elementos necesarios para que efectúe su labor de fiscalización.
El Síndico, por su parte, arbitrará las medidas necesarias para evitar que la realización de sus funciones dificulte las tareas normales del administrador.

C- Cualquier observación que efectúe el Síndico sobre los aspectos cuya verificación o fiscalización se encuentra a su cargo, que no sea compartida por el Jockey Club, se hará figurar en el acta de sesión, debidamente fundada, debiendo remitir copia a la Secretaría de Hacienda.
Dentro de los diez días hábiles de formulada la observación por el Síndico, se expedirá el Subsecretario de Hacienda.- Si no lo hiciera dentro de ese plazo, la observación quedará sin efecto.- La resolución del Subsecretario podrá ser apelada por el Jockey Club ante el Secretario de Hacienda.

Artículo 16.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y VARIAS.

A- El Jockey Club declara que al hacerse cargo de la administración de los hipódromos acordará a partir del primero de abril de mil novecientos sesenta y tres a todo el personal mensualizado y jornalizado que se le transfiere, un aumento de su remuneración conforme a la escala de la planilla anexa, que tiene en cuenta los mismos índices contemplados en el decreto Nº 11.720/62 (*) para el personal de la Secretaría de Estado de Hacienda.

B- El Jockey Club se compromete a estudiar y eventualmente reestructurar el régimen en vigencia de "Subsidios a -

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1788.-

Profesionales del Turf" y "Fondo de Ayuda y Previsión para el Personal de Caballerizas", requiriéndose la expresa intervención y conformidad del Síndico si eventualmente hubiera que incrementar las cifras totales.

C- La Secretaría de Estado de Hacienda anticipará a la Asociación Civil Jockey Club hasta la suma de sesenta millones de pesos moneda nacional, la que será reintegrada en el curso del ejercicio 1962/1963.

D- El valor de las entradas del Hipódromo de Palermo y del de San Isidro no podrá ser rebajado por el Jockey Club - con relación al precio vigente al treinta y uno de di- - ciembre de mil novecientos sesenta y dos, sin el consentimiento de la Secretaría de Hacienda.- El Jockey Club se compromete a no destinar en su totalidad la tribuna oficial exclusivamente a los socios de la Institución, quedando prohibidas las entradas de favor, salvo las excepciones determinadas por la Comisión Directiva de la Institución.

E- La Agencia Hipódromo Mar del Plata se transfiere al Jockey Club en las mismas condiciones de las demás dependencias, con la facultad del Jockey Club de mantenerla o suprimirla en el futuro.

F- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos prestará a la Asociación Civil Jockey Club el asesoramiento que ésta le solicite con referencia a la explotación de los Hipódromos, proporcionándole los elementos de juicio y antecedentes que obren en su poder.

G- El Jockey Club facilitará a la Comisión Nacional de Hipódromos locales adecuados para su funcionamiento y representación.-

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 16-A

AUMENTO DE HABERES

Personal Mensualizado:

Clase A - I hasta A - 12)	30 %
Clase A -13 hasta A - 20) Clase B - 1 hasta B - 9) Clase C - 1 hasta C - 6) Clases restantes)	40 %

Estos índices deben disponerse sobre los haberes totales que resulten -según corresponda- de la suma de los actuales conceptos: Sueldo básico - Servicio Calificado - Dedicación Funcional - Responsabilidad Jerárquica y/o Bonificación Especial Decreto Nº 7.920/61 y/o Premio por Asistencia.-

Quedan excluídos: la antigüedad, salario familiar, títulos y otros conceptos.-

Personal Jornalizado:

40 % sobre jornal básico y bonificación especial.-

PLANILLA Nº 1 - ANEXA AL ARTICULO Nº 3

PERSONAL QUE NO FIGURA EN LA CUENTA ESPECIAL DE HIPODROMOS Y QUE DEBE SER TRANSFERIDO

	CLASE	MATRICULA	D.M.
ALVAREZ, Eduardo	1908	34.494	1
ALVAREZ, Salvador	1910	4.051.941	B.A.
ABALO, Eduardo Daniel	1911	249.862	2
AMICI, Pedro	1915	2.295.072	35
BAENA, Carlos Ernesto	1923	4.452.587	4
BISACCIA, Vicente Enrique	1933	4.126.196	B.A.
COBELO, Angel Camilo	1924	4.453.941	4
CASTELLOTE, Carlos	1908	2.217	1
CAPDEVILLA, Carlos	1922	1.671.388	1
COUTO, Eduardo	1914	134.337	1
CERVIÑO, Manuel Raúl	1934	4.120.100	B.A.
CUELLO, Julio Armando	1936	4.167.875	B.A.
CERETTI, José Víctor	1916	384.364	3
CARDARELLI, Ricardo Nicolás	1921	1.667.417	1
DOMINGUEZ, Carlos Alberto	1924	4.007.972	B.A.
D'AMICO, Felipe María	1923	1.679.337	1
D'AMATO, Vicente	1909	529.712	4
DOMENECH, Vicente Tomás	1917	267.586	2
ESTRADE, Alberto Oscar	1911	99.744	1
ESVIZA, Alberto Eduardo	1929	4.050.733	B.A.
FERNANDEZ, Sergio	1925	4.166.603	B.A.
GONZALEZ BAÑOS, Norberto J.	1921	1.665.626	1
GONZALEZ, Pedro	1925	1.818.927	16
GONZALEZ, Florencio Carlos	1934	4.131.263	B.A.
GRANERO, Vicente	1914	257.849	2
GATTI, Rodolfo Juan	1928	4.339.106	B.A.
GONZALEZ, Secundino	1909	529.226	4

	CLASE	MATRICULA	D.M.
GRANILLO, Alberto Ignacio	1935	4.172.864	B.A.
GUGLIELMI, Antonio	1916	143.280	1
HERRERO, Orlando	1936	5.605.752	68
JIMENEZ, José Manuel	1919	391.891	3
LOPEZ, José Manuel	1909	325.399	3
LOPEZ, Oscar	1932	4.077.258	B.A.
LEYVA, Eulogio	1920	413.836	1
LONARDI, Jorge Héctor	1931	4.075.430	B.A.
LAYAFA, Felix Alfonso	1908	86.545	1
MENDOZA, Francisco	1929	4.051.136	B.A.
MERINO, Emilio José	1929	4.788.005	15
MARTORELLA, Nicolás	1909	4.170.248	B.A.
MASTRONARDI, Angel	1911	105.274	1
MOLINA, Adrián José	1923	1.678.849	1
MONTIEL, Juan	1908	682.643	14
NOONAN, Juan José	1903	620.572	13
NAVARRO, Gaspar	1916	144.369	1
ORRICO, Nicolás	1916	267.468	2
PLAZA MONTERO, Angel	1922	1.808.814	4
POLLERI, Luís	1923	4.166.707	B.A.
PERAFAN, Adolfo	1916	267.470	2
PALUMBO, Vicente Donato	1927	5.551.639	68
PERAFAN, Angel	1911	247.563	2
POZZOLI, Claudio	1908	450.643	4
PEREIRO, Eduardo	1913	118.473	1
PERALTA, Arnaldo Raúl	1907	71.930	1
PEROSO, Bruno Vicente	1913	266.548	2
RAMPONI, Florento Guerino	1915	133.854	1
RODRIGUEZ, Alberto Luis	1932	4.506.151	B.A.
REINOSO, Martín Emiliano	1915	3.539.644	56
RUFFA, Constantino	1923	1.679.893	1
RAMOS, José Casimiro	1917	148.712	B.A.

	CLASE	MATRICULA	D.M.
RODRIGUEZ, José Leopoldo	1915	264.239	2
SONEYRA, José Barnabé	1918	404.903	1
SOBRINO, Antonio Miguel	1919	1.918.332	15
SAN MIGUEL, Jorge Carlos	1917	154.456	1
TORRES, Oscar René	1927	4.476.826	4
TEDESCHI, Rafael	1925	4.219.654	B.A.
VIDAL, Antonio Héctor	1921	1.669.383	1
VEGA, Adolfo Felipe	1928	4.040.853	1
ZEPPONI, Antonio Guido	1914	553.230	4
ZOLLER, José Julio	1914	132.653	1
PECOS, Mauricio Bernardo	1923	1.738.078	2
CIRELO, Héctor Edmundo	1933	4.124.456	B.A.
MANCINI, Angelina N.S. de	1911	168.638	

PLANILLA Nº 2 - ANEXA AL ARTICULO 3º

PERSONAL QUE NO FIGURA EN LA CUENTA ESPECIAL DE HIPODROMOS Y QUE PUEDE SER TRANSFERIDO

	CLASE	MATRICULA
CRISTENSEN, Mario Ermes	1932	4.098.617
GOMEZ, Ruperto José	1923	4.006.034
LOPEZ, Alberto Romualdo	1900	32.190
PRESA, Marcelino	1927	4.032.797
TERUGGI, Eugenio	1920	1.727.824

ACTO: EXPEDIENTE Nº 40.998/62.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (arts. 25° y 27°)
SUSPENSIONES - PERSONAL

AL SEÑOR SUBSECRETARIO:

Asunto: revocación de una medida expulsiva - pago de haberes devengados - Dirección Nacional de Aduanas.

Disposiciones de aplicación: Estatuto del Personal Civil - (art. 25° y 27°).

Opinión de esta Dirección General: el dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fs. 9/10 del expediente nº 40.998/62, que forma parte integrante de estos actuados, es coincidente con el mantenido por este organismo en anteriores casos sometidos a su consideración, y por tanto se adhiere plenamente a sus conclusiones.

En efecto, la aplicación concordante de las normas de los artículos 25° y 27° del Estatuto del Personal Civil (decreto-ley nº 6666/57)(1) lleva a la conclusión de que, cuando el Poder Ejecutivo o autoridad competente revocan una medida expulsiva, resultando del acto administrativo pertinente que aquélla era im-

(1) Ver Digesto Administrativo nº 254.-

//-

procedente o no ajustada a derecho, dicha revocatoria genera el mismo efecto que si emanara de un fallo judicial dictado en base a las normas del referido Estatuto, y por tanto implica el pago de los haberes devengados durante el lapso en que el causante permaneció separado de su empleo.

En el caso particular tratado, el reconocimiento a la percepción de dichos haberes debe ser acordado por el Poder Ejecutivo, que es la autoridad que revocó su primitiva medida expulsiva, ampliando a tales efectos el decreto número 6.136/62.

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 21-2-63.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General .

//nos Aires, 4 de marzo de 1963.-

Con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación y a fs. 9/10 por su similar de Asuntos Jurídicos, cuyas conclusiones hace suyas esta Secretaría de Estado, vuelva al Tribunal de Cuentas de la Nación.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. CAYETANO LICCIARDO
Subsecretario de Hacienda de la Nación

ACTO: RESOLUCION GENERAL D.G.I. N° 889/63.-

MATERIAS: AUTOMOTORES OFICIALES - AUTOMOTORES ADSCRIPTOS COMPENSACIONES - PROHIBICIONES - IMPUESTOS A LOS REDITOS - AGENTES DE RETENCION

Buenos Aires, 2 de abril de 1963.-

Visto que el decreto N° 8.534/61 (1), dispone el otorgamiento de compensaciones a los funcionarios del Estado que por su jerarquía o la naturaleza de sus tareas deben utilizar medios de transporte individuales, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de funcionarios que adquieran un vehículo y lo afecten al servicio oficial, las asignaciones fijadas tienden a facilitar la compra del automotor y, además, a compensar los gastos de conservación y mantenimiento originados en dicho uso;

Que en cambio, tratándose de agentes que adscriben un vehículo de su propiedad, la compensación solo tiene por objeto el reembolso de los referidos gastos, concepto por el que el artículo 18 del citado decreto establece una asignación fija equivalente al treinta por ciento de la compensación máxima prevista en su artículo 5°;

Que la norma citada denota que el Poder Ejecutivo

//-

(1) Ver Digesto Administrativo N° 1459.-

ha considerado que los gastos mensuales que motiva la adscripción del vehículo al servicio oficial ascienden a ese importe, criterio que resulta igualmente aplicable en los supuestos a que se refiere el artículo 5° del decreto;

Que la deducción de dichos gastos como la de los intereses contenidos en el respectivo servicio financiero y la amortización del rodado se encuentra autorizada por los artículos 61° y 62°, incisos a), i) y k), de la ley del impuesto a los réditos;

Que teniendo en cuenta que la adscripción del vehículo al uso oficial está referida a los horarios habituales de labor y utilización en todos los actos de servicio, inclusive comisiones encomendadas dentro del territorio del país -Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 12.018/62 (")- resulta razonable admitir la deducción del setenta por ciento (70%) de los referidos intereses y de la pertinente amortización;

Que asimismo corresponde establecer el tratamiento que debe disponerse a la ganancia o pérdida que derive de la enajenación de dichos vehículos;

Por ello, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 8° y 9° de la ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones),

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

R E S U E L V E :

1°.- La compensación que otorga el artículo 5° del decreto N° 8.534/61, para posibilitar la adquisición de automotores por parte de funcionarios del Estado, debe computarse como renta gravada a efectos de la liquidación del impuesto a los réditos que corresponda abonar a dichos contribuyentes.

(") Ver Digesto Administrativo N° 1805.-

2°.- En los casos comprendidos en el punto precedente y sin perjuicio de las deducciones que por otros conceptos correspondan, los respectivos agentes de retención deberán considerar a fin de determinar el impuesto a retener:

a) El treinta por ciento (30%) de la compensación máxima prevista por el artículo 5° del referido decreto, en concepto de gastos de mantenimiento y conservación (incluso las primas de seguros sobre riesgo total del automóvil).

b) El setenta por ciento (70%) de los intereses contenidos en el respectivo servicio financiero.

c) El setenta por ciento (70%) de la cuota anual de amortización que por desgaste le corresponda al rodado. El monto de la anualidad es deducible a partir del año fiscal de la afectación de la unidad.

3°.- La compensación que perciben los agentes que afecten el vehículo de su propiedad en virtud del artículo 18° del decreto N° 8.534/61, no se computará dentro del monto imponible del impuesto a los réditos, por considerarse reembolso de gastos efectuados para mantener y conservar el automóvil que se originan con motivo de la afectación del mismo al uso oficial.

Asimismo, dichas personas tendrán derecho, en cuanto corresponda, a efectuar la deducción a que se refiere el inciso c) del punto segundo.

4°.- Sin perjuicio del tratamiento fiscal que deba dispensarse al remanente de la utilidad o pérdida que derive de la enajenación del automóvil, el setenta por ciento (70%) de la misma será computada en la liquidación del impuesto a los réditos del año en que tuvo lugar.

5°.- Los funcionarios comprendidos en la presente resolución, presentarán a su agente de retención una declaración jurada

en formulario 7452, donde denunciarán los importes cuya deducción se autoriza precedentemente.

6°.- Los agentes de retención deberán reajustar -en caso de corresponder- la liquidación del impuesto a los réditos de los funcionarios que hayan cumplido con el requisito del punto anterior.

7°.- Cuando corresponda la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a los réditos (form. 120), los contribuyentes comprendidos en el punto primero de la presente resolución podrán deducir de las rentas originadas en la función, en concepto de gastos de mantenimiento y conservación del automóvil, las sumas que resulten por aplicación de lo dispuesto en los puntos 2°, inciso a), o el setenta por ciento (70%) del total de gastos efectivamente realizados por dichos conceptos. Esta última deducción también podrá ser efectuada por los agentes a que se refiere el artículo 18° del decreto N° 8.534/61, siempre que computen como renta gravada la compensación prevista por dicho artículo.

8°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.

Fdo. GREGORIO ANDRES BALLESTEROS

ACTO: DECRETO Nº 1.408/63.-

MATERIAS: AUTOMOTORES OFICIALES - AUTOMOTORES ADSCRIPTOS - COMPENSACIONES - PROHIBICIONES - DERECHO-HABIENTES

Buenos Aires, 21 de febrero de 1963.-

Visto el Expediente nº 70.019/63 del registro de la Secretaría de Estado de Industria y Minería y,

CONSIDERANDO:

Que por Decretos Nros. 8.534/61 (+) y 11.182/61 (°), se instituyó el régimen que facilita la adquisición de automóviles a los agentes del Estado comprendidos en la clase A;

Que con fecha 7 de agosto de 1962 se dictó el Decreto nº 7.825 que posibilitó a las Secretarías de Estado de Comercio y de Industría y Minería poner en ejecución el régimen antes referido;

Que a la fecha en que los funcionarios de las citadas Secretarías de Estado entraron en posesión de los automóviles adquiridos por el citado régimen, todavía no se había puesto en vigencia el seguro de vida a tomarse en la Caja Nacional de Ahorro Postal previsto por el Artículo 5º del Decreto nº 8.534/61;

///

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.459.-
(°) Ver Digesto Administrativo nº 1.516.-

Que el fallecimiento inesperado, en el lugar de trabajo del Director Nacional de la Propiedad Industrial, Ingeniero Armando O. Bonello, lo sorprende sin la previsión del seguro prescripto por la norma legal antes señalada;

Que el citado régimen no ha previsto situaciones como la ocurrida al Ingeniero Armando O. Bonello, por cuyo motivo corresponde arbitrar una solución equitativa que a la vez que no produzca perjuicio para el Estado no resienta los intereses de sus derecho-habientes;

Que en consecuencia, es del caso determinar que los derecho-habientes del funcionario fallecido podrán seguir utilizando el régimen establecido por el Artículo 10 del Decreto nº 8.534/61, con la obligación de mantenerse los seguros señalados en el Artículo 5º del mismo decreto, en las condiciones en el dispuestas;

Por ello y lo propuesto por la Secretaría de Estado de Industría y Minería,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Autorizase a los derecho-habientes del ex Director Nacional de la Propiedad Industrial dependiente de la Secretaría de Estado de Industria y Minería, Ingeniero Armando O. Bonello, a hacerse cargo de la unidad automotor adquirida por él, bajo el régimen de los Decretos números 8.534/61 y 11.182/61 en las condiciones de plazo y monto determinados en el artículo 10 del decreto nombrado en primer término, con la obligación de constituir y mantenerse los seguros prescriptos por el Artículo 5º del mismo decreto.

ARTICULO 2º.- Los derecho-habientes referidos en el artículo anterior depositarán en la Dirección General de Administración de las Secretarías de Estado de Comercio y de Industria y Minería las cuotas mensuales correspondientes del 1º

al 5 de cada mes, quien a su vez, las transferirá a la Dirección General de Suministros del Estado.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Comercio, Industria y Minería y de Hacienda.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y, a sus efectos, vuelva a la Secretaría de Estado de Industria y Minería.

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino -
Juan B. Martín - Rodolfo G. Martelli
Horacio García Belsunce

ACTO: EXPEDIENTE Nº 90.324/62.-

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES

EXPEDIENTE Nº 10.049/62 TCN.
Providencia nº 1.031/62.-
Presup.,Incomp.y Pasividades

//nos Aires, 2 de julio de 1962.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Secretaría de Hacienda para manifestarle, a tenor de la consulta formulada, que el personal que presta servicios en las Obras Sociales de los distintos ministerios y sus dependencias o reparticiones, está comprendido en las disposiciones del régimen aprobado por decreto nº 8566/61(') insistido por su similar 9677/61 ("), en virtud de lo determinado en su artículo 2º que lo declara, sin distingos, específicamente sujeto a sus prescripciones.

En tal sentido y atendiendo a los fundamentos que dieron lugar al dictado de los decretos mencionados, este Tribunal de Cuentas estima que no cabría invocar la causal que determinó la excepción para el personal que prestaba servicios a la fecha del decreto nº 13.243/55, a los fines de lo establecido en el artículo 13º del decreto nº 9.677/61 ya citado.

Sin perjuicio de ello es competencia del Poder Ejecutivo ponderar si subsisten las razones de gobierno que

///

(') Ver Digesto Administrativo nº 1460.-
(") Ver Digesto Administrativo nº 1491.-

determinaron la excepción comentada, y en caso afirmativo resolver la cuestión mediante el acto pertinente.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA
Presidente del
Tribunal de Cuentas de la Nación

Providencia nº 1456/62.-

AL SEÑOR SUBSECRETARIO:

Asunto: Incompatibilidad - Situación de un agente que se desempeña como ayudante preparador de farmacia en la Dirección General de Obra Social de la Secretaría de Estado de Comunicaciones y acumula otro cargo como preparador en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

Disposiciones de aplicación: decreto nº 8.566 y 9.677/61.-

Opinión de esta Dirección General: De conformidad con el dictamen producido por el Tribunal de Cuentas de la Nación en el sentido que no procede mantener la excepción prevista por el art. 2º del decreto nº 13.243/55 para el personal de las obras sociales que a la fecha del mismo se encontrara prestando servicio (ver fs. 3), estima que el presente caso debe ser resuelto conforme a lo prescripto en los decretos números 8.566 y 9.677/61.

Independientemente de lo expresado, corresponde manifestar de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública en el expediente Nº 90.519/62, - que el cargo de preparador de farmacia no se encuentra comprendido entre las excepciones que determina el decreto Nº 12.557/55 para los auxiliares de la medicina y, por ende, el de ayudante preparador.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 7/12/1962.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

ACTO: DECRETO Nº 2.016/63.-

MATERIAS: COMISION ESPECIAL - SUBSIDIOS

Buenos Aires, 19 de marzo de 1963.-

Visto el decreto-ley nº 9.974 de fecha 26 de setiembre de 1962 (1) por el que se crea una Comisión Especial que otorgará subsidios a quienes hayan sufrido daños materiales con motivo de los hechos producidos durante los días 20,21 y 22 de setiembre ppdo., y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 2º del referido texto legal la mencionada Comisión somete a la aprobación del Poder Ejecutivo la reglamentación a la que se ajustará el trámite y otorgamiento de tales subsidios;

Que en tal virtud corresponde aprobar dicha reglamentación a fin de que en el menor plazo posible, se concrete el pago de los subsidios que correspondan;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- La Comisión Especial creada por el artículo 1º del Decreto-Ley nº 9.974 de fecha 26 de setiembre de 1962, ajustará el trámite y otorgamiento de los subsidios a que dicho cuerpo legal se refiere, a la regla-

(1) Ver Digesto Administrativo nº 1.753.-

mentación que se adjunta y que forma parte integrante del presente decreto.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Transporte.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino
Horacio J. Zubiri

REGLAMENTACION OTORGAMIENTO SUBSIDIOS

Decreto - Ley N° 9.974/62

I - Comisión

Estará integrada por los señores Subsecretarios de Economía, Obras y Servicios Públicos y Transporte, con la Presidencia del primero de ellos.-

II - Fines

La Comisión otorgará subsidios a toda persona natural o jurídica privada que haya sufrido daños materiales como consecuencia de los hechos ocurridos durante los días 20, 21 y 22 de setiembre de 1962.-

II - Competencia

La Comisión actuará como organismo de única instancia y sus decisiones no admitirán recurso alguno.(artículo 3° del Decreto-Ley 9.974/62).-

IV - Normas Básicas

1°) En los de muerte o incapacidad se aplicarán las disposiciones de la Ley N° 9688, sus complementarias y modificatorias. En ambos supuestos se abonará el subsidio teniendo como base lo determinado para el caso por el artículo 8° de esa ley, modificado por el artículo 1° de la Ley 15.448, tanto en lo que se refiere al monto de la indemnización como en lo que atañe a la acreditación del vínculo en caso de muerte.

2°) En los casos de daños sufridos en inmuebles que exijan reparación o en bienes muebles que requieran reparación o reposición, sólo se otorgará el subsidio cuando no existan seguros que cubran dichos daños.-

V - Normas de Procedimiento

La Comisión distribuirá el trámite de las solicitudes que reciba, en el plazo fijado por el artículo 3° del Decreto - Ley 9974/62 de la siguiente manera:

a) En los casos de muerte: el trámite del pertinente expediente será encarado por conducto del señor Subsecretario de Economía y para fijar la indemnización consiguiente (art. 8° de la Ley N° 9688 modificado por la Ley N° 15.448, inciso a), se requerirá de los derecho-habientes.

1°) Mención de las condiciones y circunstancias en que se produjo el hecho que provocó el deceso, debiendo figurar en la solicitud los datos que identifiquen a la persona fallecida y nombre, apellido y domicilio del que formula el reclamo.
2°) Certificado de defunción.
3°) Certificado de trabajo del causante con constancia del total de los salarios percibidos en los últimos mil días de labor.
4°) Simple acreditación del vínculo de parentesco que se invoque.

b) En los casos de incapacidad: este trámite se efectuará por conducto de la Subsecretaría de Economía y se requerirá:

1°) Presentación formulada por el interesado o en caso de imposibilidad de éste por quien se encuentre debidamente autorizado para ello, en la que consten las circunstancias en que se produjo el hecho y la naturaleza de las heridas sufridas;
2ª) Constancia del profesional o establecimiento en el que el recurrente se asistió o continúa asistiéndose;

3°) Naturaleza del trabajo que realiza y salario que percibe, a efectos de permitir a la Comisión la consideración de la incidencia del suceso en los medios de vida del reclamente y consecuentemente la determinación del monto del subsidio.

Para fijar el monto de las indemnizaciones en los casos de muerte o incapacidad, la Comisión ajustará su dictamen a las normas que sobre el particular estatuyen los incisos a, b y c) del artículo 8° de la Ley n° 9.688, modificado por el artículo 1° de la Ley n° 15.448.

c) En los casos de daños producidos en bienes inmuebles: El trámite se encargará por conducto del señor Subsecretario de Obras y Servicios Públicos y para concretar el subsidio respectivo, se requerirá del recurrente:

1°) Presentación mencionando las condiciones y circunstancias en que se produjo el hecho por el que reclama la indemnización;

2°) Declaración de que los bienes afectados no están cubiertos por seguros o si lo están agregará copia de la póliza para demostrar que no alcanza a cubrir el daño producido;

3°) Manifestación del carácter en el que reclama (propietario o apoderado) agregando los pertinentes comprobantes en que funde su derecho.

La respectiva solicitud será remitida directamente por el Ministerio de Economía, una vez registrada, al Ministerio de Economía, una vez registrada, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a efectos de que por conducto de los respectivos organismos técnicos, constate los daños ocasionados, mediante una inscripción y verificación "in situ". El respectivo informe deberá concretar los daños producidos discriminando los que

correspondan a la propiedad inmueble y a los bienes muebles, en caso de que existieran estos últimos y formulará una estimación de los daños.

Una vez producida esa información y con la conformidad del señor Subsecretario de Obras y Servicios Públicos se devolverá las actuaciones al Ministerio de Economía a efectos de que la Comisión Especial resuelva lo pertinente.

d) En los casos de daños producidos en bienes muebles : El trámite de las pertinentes solicitudes se efectuará con intervención del señor Subsecretario de Transporte y aquellas deberán contener:

1°) Mención de las circunstancias en que se produjeron los hechos que provocaron los daños causados;

2°) Documentación necesaria y suficiente que pruebe la propiedad del bien dañado;

3°) Fotocopia de la póliza de seguro, en caso de que se declare la existencia de seguros o declaración jurada de la inexistencia de éstos.

La respectiva solicitud será remitida por el Ministerio de Economía una vez registrado por éste, directamente a la Secretaría de Estado de Transporte, quien dispondrá lo pertinente a fin de que funcionarios de sus organismos competentes, previa verificación de los daños producidos, sea por inspección de los bienes o por constancia fehacientes provenientes de organismos oficiales, asesoren acerca del monto de dichos daños. Con este dictamen, las actuaciones serán devueltas a la Comisión Especial para el acuerdo respectivo.

e) En los casos de hurto: En tales casos la tramitación se efectuará directamente por conducto del señor Sub

secretario de Economía y la respectiva presentación deberá contener:

1º) Nombre, apellido y domicilio del recurrente y carácter que invoca;

2º) Mención de la circunstancias en que se produjeron los hechos que dan lugar al reclamo y lugar en que se cometió el hurto;

3º) Detalle y monto estimado de lo hurtado (deberá aportar sobre este aspecto, el mayor número de antecedentes probatorios);

4º) Fehaciente acreditación de la posesión anterior a los hechos y en el lugar en que se produjeron;

5º) Certificado policial en el que conste la denuncia del hecho que se invoca.

En estos casos el señor Subsecretario de Economía establecerá en cada oportunidad y de acuerdo a la especial modalidad del caso, los recaudos adicionales que deberán llenar los recurrentes a fin de probar fehacientemente, la aplicabilidad del régimen.

VI - Normas Generales

La Comisión resolverá cada caso, en forma individual, adoptando la medida que estime procedente mediante un acto formal cuyo original será agregado al respectivo expediente y del que se dará vista al recurrente, al simple efecto informativo, atento la irrevocabilidad de la resolución.

Una vez resuelto el acuerdo del subsidio, por conducto de la Dirección General de Administración del Ministerio de Economía se dispondrá, con las formalidades del caso la pertinente liquidación y pago a los interesados.

ACTO: RESOLUCION N° 7.403/63.-

MATERIAS: RACIONALIZACION - NORMAS - TRAMITE

Buenos Aires, 10 de abril de 1963.-

Visto la conveniencia de reglar el procedimiento para el trámite de los proyectos que se someten a la firma del suscripto,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1º Los proyectos de decretos, resoluciones, notas, memorándums, etc., que se sometan a la firma del suscripto serán inicialados en todos los casos por el titular de la repartición o dependencia con competencia en la materia y que hayan considerado el asunto o, en caso de ausencia o impedimento, como también en los supuestos en que expresamente se haya autorizado o se autorice esa delegación de funciones, por su sustituto legal.

La inicial del titular de la repartición o dependencia, o en su caso, la de su sustituto legal, implica la plena responsabilidad de los funcionarios indicados en cuanto al fondo y a la forma del proyecto de que se trate.

La falta de dicha inicial en los indicados proyectos supone que el asunto se resuelve por indicación superior, en contra de la opinión de los funcionarios aludidos.

Esta disposición no regirá en los casos en que resulte de aplicación la norma estatuida por el artículo 95 de la ley de contabilidad.

2ª Publíquese, comuníquese a los funcionarios de que se trata por conducto de la Dirección General de Contabilidad y Administración y archívese.-

Fdo. RAMON C. LEQUERICA



ACTO: EXPEDIENTE N° 140.451/62.-

MATERIAS: INCOMPATIBILIDADES - JUBILACIONES

Providencia n° 112/63.

AL SEÑOR SUBSECRETARIO:

Asunto: Incompatibilidad - Situación del doctor J. Ernesto Mántaras que se desempeña como Jefe de Trabajos - Prácticos de Derecho Procesal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y que acumula una jubilación de la provincia de Santa Fe por servicios prestados como magistrado, al que se le exige la regulación de la misma al límite de m$n. 5.000 mensuales según lo prescripto en el art. 2° de la Ley n° 15.434.-

Disposiciones de aplicación: Decretos nros. 8.566 (') y 9.677/61.(").-

Opinión de esta Dirección General: Estos actuados han tenido origen a raíz de la presentación del doctor J. Ernesto Mántaras, que se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos de Derecho Procesal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y que acumula una jubilación de m$n. 8.164 mensuales por servicios prestados como magistrado de la Provincia de Santa Fe.

//-

(') Ver Digesto Administrativo N° 1460.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1491.-

Con motivo de lo expuesto, según su propia manifestación, con fecha 13 de julio ppdo., se lo intimó para que dentro del término de diez días diese cumplimiente por intermedio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la citada provincia, a la reducción de su haber jubilatorio a m$n. 5.000, conforme a lo prescripto en el art. 2° de la Ley n° 15.434, que establece: "Modifícase, desde el 1° "del mes siguiente al de su promulgación de la presente, "el monto de las prestaciones jubilatorias a que se refiere el art. 5° del decreto-ley n° 12.458/57 (°) y el de "la compatibilidad del artículo 2° de la ley n° 15.230, fijándole en m$n. 5.000."

El art. 5° del decreto-ley n° 12.458/57, dispone que: "Las Cajas Nacionales de Previsión o el Instituto Municipal de Previsión Social no liquidarán, a los beneficiarios que se acojan a las disposiciones del presente de- "creto, prestaciones jubilatorias superiores a m$n. 3.000 "mensuales, quedando incorporado el excedente, si lo hubiera al patrimonio del organismo respectivo."

De las mencionadas normas legales surge un aspecto que es importante destacar a los fines de la consideración del caso que nos ocupa, y es el que obliga únicamente a las Cajas Nacionales de Previsión o al Instituto Municipal de Previsión Social a no liquidar a los que se amparen en las disposiciones del aludido decreto-ley, mayor cantidad que la autorizada. Es decir que no hace referencia para nada a la situación de los agentes que gozan de igual beneficio en el orden provincial o municipal, con excepción de los dependientes del Instituto Municipal de Previsión Social.

(°) Ver Digesto Administrativo N° 343.-

Lo manifestado precedentemente tiene su explicación en la circunstancia de que el gobierno de la Nación carece de competencia para legislar en el orden provincial, atento a que cada provincia se ha dado su propia constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, asegurando su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria.

Con relación al art. 5° del decreto-ley n° 12.548/57 que obliga al Instituto Municipal de Previsión Social a observar una conducta particular con los beneficiarios que se acojan a dicho decreto-ley, cabe manifestar que la citada norma se fundamenta en un régimen de reciprocidad de computación de servicios prestados, sucesiva o simultáneamente bajo los regímenes de cada una de las Secciones del Instituto Nacional de Previsión Social y la Caja Municipal de Previsión de la Ciudad de Buenos Aires, establecido por el decreto-ley n° 9.316/46.

En consecuencia, esta Dirección General estima que las limitaciones acumulativas sólo pueden existir en la jurisdicción nacional, a menos de presentarse un régimen de reciprocidad como el comentado. A su vez, interpreta que los distintos márgenes establecidos están determinados por un interés propio de las Secciones que comprende el Instituto Nacional de Previsión Social en razón de los reajustes jubilatorios que se reconoce a los jubilados vueltos al servicio.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 2-1-63.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

ACTO: DECRETO Nº 2.193/63.-

MATERIAS: CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO - INVERSIONES PATRIMONIALES - OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 21 de marzo de 1963.-

Visto las funciones atribuidas al Consejo Nacional de Desarrollo por los decretos nros. 7.290/61 y 6.337/62 (1), y

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con las disposiciones de los decretos mencionados es necesario acelerar la formulación del programa de desarrollo económico y social del país;

Que el planeamiento armónico de las inversiones públicas constituye un aspecto esencial en el proceso de asignación óptima de los recursos disponibles;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- El Consejo Nacional de Desarrollo efectuará dentro del ámbito de la Administración Pública un relevamiento de las inversiones proyectadas y/o en curso de realización, a los efectos de formular el programa de inversiones públicas de mediano y largo plazo.

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1660.-

ARTICULO 2°.- Los Ministerios, Secretarías de Estado, Or nismos Descentralizados, Empresas del Estado, y Sociedad Mixtas, presentarán al Consejo Nacional de Desarrollo, l información pertinente con anterioridad al 31 de marzo pr ximo.

ARTICULO 3°.- Los organismos indicados en el artículo 2° designarán un funcionario delegado ante el Consejo Nacion de Desarrollo, quien será responsable de la presentación en el término y forma establecidos, de la documentación r querida.

ARTICULO 4°.- El Consejo Nacional de Desarrollo adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento del presente decreto.

ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino - Horacio A. García Belsunce.

ACTO: DECRETO N° 2.255/63.-

MATERIAS: EMPRESTITO DE RECUPERACION NACIONAL - TITULOS BANCOS

Buenos Aires, 22 de marzo de 1963.-

Visto la emisión del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7% - 1962", dispuesta por Decreto N° 6.590/62 (¹), 9.309/62 (") y 11.340/62 (°), y

CONSIDERANDO:

Que la finalidad perseguida por la colocación de los títulos de la citada emisión fué la de captar ahorros de la colectividad para financiar compromisos del Estado sin provocar una expansión monetaria;

Que iniciado el canje de los bonos provisorios por los títulos definitivos, corresponde, de acuerdo con las condiciones de emisión estipuladas, adoptar las medidas necesarias para que los títulos se coticen en los Mercados de Valores del país;

Que, teniendo en cuenta la actual tendencia de dichos mercados, se considera conveniente modificar las condiciones iniciales de la emisión en lo tocante al plazo y períodos de amortización, reduciendo su vida de veinticinco (25) a diez (10) años, con amortizaciones -

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo N° 1664.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1733.-
(°) Ver Digesto Administrativo N° 1782.-

trimestrales, en lugar de semestrales;

Que con ello se dará oportunidad a los tenedores de recuperar su inversión un término mucho más breve, lo que, unido al juego de la cláusula índice de valorización, acrecentará sustancialmente el rendimiento al vencimiento de los títulos, lo que constituye un mayor aliciente para el inversor, que habrá de traducirse a la vez, en una mejor cotización;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Modifícanse los decretos nros. 6.590/62, 9.309/62 y 11.340/62, estableciéndose la tasa de amortización del "Empréstito de Recuperación Nacional - 9 de Julio - 7% - 1962", en el 7% anual, que operará, trimestralmente, el 15 de febrero, 15 de mayo, 15 de agosto y 15 de noviembre de cada año, con lo que la vida de este empréstito se verá reducida de 25 a 10 años. Los títulos que se rescaten, correspondientes a los servicios 15 de mayo y 15 de noviembre de cada año, se reembolsarán con más sus respectivos intereses corridos.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino - Horacio A. García Belsunce.

ACTO: DECRETO Nº 2.179/63.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - PERSONAL - HORARIO REDUCIDO

Buenos Aires, 21 de marzo de 1963.-

Visto el Decreto nº 16.023/59, por el cual se declaran de aplicación para todo el personal escalafonado del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública distintas normas resultantes del Decreto-ley nº 1.188/58, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 12º del mismo fija para los auxiliares de radiología y electrofisioterapeutas un horario de 4 horas 45 minutos de lunes a viernes, o 4 horas de lunes a sábado;

Que en otros organismos del Estado, ajenos al citado Ministerio, los auxiliares de radiología cumplen horarios distintos al consignado en el considerando precedente;

Que dicho Departamento de Estado se ha expedido en el sentido de que resulta conveniente uniformar el horario de dichos agentes, cualquiera sea la dependencia del Estado en que se desempeñen, debiendo ser escalafonados a similitud de los que pertenecen a su jurisdicción;

//-

Que basa su opinión en la prescripción del art. 8° (3er. párrafo) del Estatuto del Personal Civil, que establece que "a igualdad de situación de revista y de modalidades de la prestación de servicios, el personal gozará de las mismas remuneraciones que correspondan a la función, cualesquiera sea el organismo en que actúen";

Que para ello se considera oportuno hacer extensivo a todo ese ámbito la autorización que el artículo 12° del decreto n° 16.023/59 circunscribe al personal del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública;

Por ello, y atento a lo manifestado por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Los auxiliares de radiología y electrofisioterapeutas que prestan servicios en organismos de la Administración Nacional cumplirán a partir de la fecha del presente decreto, un horario de labor de cuatro (4) horas, cuarenta y cinco (45) minutos, de lunes a viernes, o cuatro (4) horas, de lunes a sábado.

ARTICULO 2°.- Los agentes a que hace referencia el artículo anterior y que estén comprendidos en el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional (Decreto n° 9.530/58) deberán ser escalafonados en la Clase D - Personal Técnico, Especializado y Administrativo, en Grupos de horario de 35 horas semanales.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros en los Departamentos de Economía y Asistencia Social y Salud Pública y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Eustaquio Méndez Delfino
Tiburcio Padilla - Horacio A.Garcia Belsunce.-



ACTO: EXPEDIENTE N° 1.134/63.-

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES

Providencia n° 276/63.-

AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA:

Asunto: Incompatibilidad - Se solicita se determine si es compatible el desempeño de un cargo de Secretario de Escuela con uno de Maestro de Enseñanza Práctica y otro de Jefe de Trabajos Prácticos en un mismo establecimiento educacional, teniendo en cuenta lo prescripto en el decreto n° 5196/62 (") y en el art. 48° de la ley número 14.473, modificado por el decreto-ley n° 1.042/63 que permite acumular hasta doce horas de cátedra, como así también se establezca si dicho artículo da la alternativa de acumular horas de cátedra o cargos equivalentes.

Disposiciones de aplicación: Apartado e) del art.9° del cuerpo de disposiciones aprobado por el decreto número 8.566/61 (') y art. 48° de la ley n° 14.473, modificado por el decreto-ley n° 1.042/63.

Opinión de esta Dirección General: En la nota que antecede, el Consejo Nacional de Educación Técnica solicita que se determine si es compatible el desempeño de un cargo de Secretario de Escuela con uno de Maestro de Enseñanza Práctica y otro de Jefe de Trabajos Prácticos de un mismo establecimiento educacional, teniendo en cuen- //-

(") Ver Digesto Administrativo N° 1649.-
(') Ver Digesto Administrativo N° 1460.-

ta lo prescripto en el art. 48° de la ley 14.473, modificado por el decreto-ley 1.042/63, que permite acumular hasta doce horas de cátedra, como así también se establece si dicho artículo da la alternativa de acumular cargos equivalentes a horas de cátedra.

De acuerdo a lo manifestado corresponde expresar que en materia de incompatibilidades, como principio, la acumulación de cargos es la excepción y que el Poder Ejecutivo en esta materia siempre ha observado una política restrictiva. Es así que las excepciones al régimen están condicionadas en todos los casos a que se cumplan determinados extremos como los previstos en el apartado e) del artículo 9° del cuerpo de disposiciones aprobado por el decreto n° 8566/61, que no permite dentro de una misma jurisdicción la subordinación a un inferior jerárquico por lo que afecta a la independencia funcional de los cargos, situación que se produce en el caso "sub-examen".

Lo expresado precedentemente hace que el caso que se analiza sea incompatible, lo que explica que en el citado art. 48° sólo se hable de la autorización de acumular hasta doce horas de cátedra a fin de evitar situaciones como la comentada, sin que esto no signifique que el mismo tenga un alcance más amplio como se desprende de su interpretación literal, pues éste debe ser considerado en su totalidad y teniendo en cuenta su antecedente que es el artículo 5° del Acuerdo General de Ministros del 23 de marzo de 1932.

Siguiendo la interpretación del art. 48° de la ley n° 14.473, el suscripto interpreta que sí da la alternativa de acumular cargos equivalentes a horas de cátedra cuando estos pertenecen a otra jurisdicción.

Es importante destacar que el art. 48° después de establecer que los directores y rectores, vicedirectores y vicerrectores, regentes y jefes de trabajos generales de enseñanza práctica, subregentes, secretarios, prosecreta-

rios y secretarios de distrito, de enseñanza primaria, media, técnica, superior y artística, pueden acumular hasta doce horas de cátedra, disponga a continuación de punto seguido que: "A partir de la vigencia de la presente ley, no podrán acumu- "lar cargos directivos de escuela en ninguna rama de enseñan- "za, de la misma o distinta categoría". Es decir que la prohibición es sólo para acumular cargos directivos y no para los que no reúnan estas condiciones, ya que de no ser así hubiera bastado con suprimir este agregado que es reproducción del texto original, por lo que puede sostenerse que no se refiere a ninguna otra situación.

Con motivo de lo manifestado, es importante traer a colación una interpretación hecha por el ex-Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en el año 1937 con respecto al alcance del art. 5° del Acuerdo del año 1932, lo que significa insistir sobre una originaria interpretación.

El art. 5° del decreto n° 1.134/32, que prescribe a semejanza del aludido art. 48° que los rectores o directores, vicerrectores o vicedirectores y regentes, no podrán ejercer más de dos cátedras rentadas, su aplicación originó que se dijera que si bien es terminante "no puede inferirse que una disposi- "ción como esa, que no hace más que limitar el número de cáte- "dras que pueden desempeñar determinados funcionarios, les im- "pida, cuando no ejercen ninguna cátedra o bien una, únicamen- "te, acumular otros puestos en las condiciones que, con carác- "ter general, autoriza la misma reglamentación, según el art. "9° y que ello debería ser materia de una prohibición expresa "y terminante que no contiene el reglamento en vigor", agregando "que el hecho que los Rectores y demás funcionarios enumerados en el art. 5° hayan sido motivo de una prescripción especial, no podría comportar excluirlos del régimen de conjunto, ni tampoco instituirle otro carácter restrictivo sino que, atendiendo a las diferentes funciones de los Rectores, etc., comparativamente a las de los profesores que se dedican

exclusivamente a la enseñanza, se limita a doce horas (dos cátedras la acumulación a favor de aquéllos en vez de veinticuatro horas o cuatro cátedra como se permite a estos últimos."

Sirva la presente de atenta nota de envío.

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 12-3-63.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

ACTO: DECRETO-LEY N° 2.713/63.-

MATERIA: PROPAGANDA POLITICA

Buenos Aires, 10 de abril de 1963.-

Visto el Decreto-Ley n° 4.161 del 5 de marzo de 1956 (+), el Decreto n° 7.165 del 24 de julio de 1962(°) y Decreto-Ley n° 1.296 del 15 de febrero de 1963 (¹),en lo que conciernen a la presencia y actividades de las fuerzas antidemocráticas peronistas en la vida institucional del país, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario complementar dichos decretos a los efectos de alcanzar una correcta y uniforme aplicación de los mismos en todo el ámbito de la República;

Que ello se hace más necesario frente a la vigencia actual del decreto n° 4.161/56 (Decreto-Ley n° 1.296 del 15 de febrero de 1963) y lo expuesto en los incisos 6,7, 8 y 9 del artículo 6° y del artículo 7° del Estatuto de los Partidos Políticos (Decreto-Ley n° 12.530/62)(",en cuanto impiden la reimplantación, bajo forma y apariencias legales, de regímenes contrarios al sistema democrático;

//.

(+) Ver Digesto Administrativo n° 129.-
(°) Ver Digesto Administrativo n° 1695.-
(¹) Ver Digesto Administrativo n° 1855.-
(") Ver Digesto Administrativo n° 1814.-

Que las restricciones que imponen los decretos arriba citados alcanzan a las personas, grupos o estructuras responsables del estado de cosas imperante durante el período peronista;

Que queda completamente garantizado el pleno ejercicio de sus derechos, incluido el de organizarse y actuar políticamente como deseen, a todas aquellas personas que manifiestan de manera inequívoca ideas o aspiraciones lícitas, morales y democráticas, totalmente desvinculadas de las prácticas contrarias a este sistema que llevó a cabo el régimen depuesto por la Revolución Libertadora de 1955, es decir cuando actúen dentro de lo prescripto por la Constitución, el Estatuto de los Partidos Políticos y las demás leyes y decretos vigentes en la materia;

Que las presentes restricciones, para ser efectivas en salvaguardia del patrimonio moral e institucional del país, deben aplicarse en forma permanente;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Quedan comprendidas dentro de las prohibiciones establecidas por el Artículo 1°) del Decreto-Ley número 4.161/56 y Decreto 7.165/62, ratificado por el Decreto Ley n° 1.296/63, y por lo tanto sujetos a las penalidades establecidas en el Artículo 3°) del Decreto-Ley n° 4.161/56:

1°) Los que hicieren de palabra o por escrito la apología del tirano prófugo o del régimen peronista o del partido disuelto por Decreto-Ley n° 3855/55, aún cuando no mediare la existencia de una finalidad de afirmación ideológica o de propaganda peronista.

2°) La difusión por cualquier medio o forma en que se efectuase de directivas, declaraciones, entrevistas o actividades del tirano prófugo y que de alguna manera signifiquen ingerencia en el plano de lo político o gremial nacional, aún cuando en su divulgación no mediase la existencia de una finalidad de afirmación ideológica o propaganda peronista.

3°) El contacto por cualquier medio con el tirano prófugo vinculadas a la actividad política o gremial y la actuación de quienes sirviesen de nexo a aquellas para tales fines y para los previstos en el inciso anterior.

ARTICULO 2º.- Sustitúyese del inciso b) del Artículo 3° del decreto-ley n° 4.161/56, por el siguiente: "Además, con inhabilitación por doble tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público, candidato a cargos públicos electivos o dirigente político o gremial. Dicha inhabilitación no será en ningún caso inferior a dos años".

ARTICULO 3º.- Derógase el Artículo 2° del Decreto n° 7.165/62 ratificado por Decreto-Ley n° 1.296/63.

ARTICULO 4º.-El presente Decreto-Ley será refrendado por los Señores Ministros Secretarios de Estado, en los Departamentos de Interior, de Defensa Nacional y de Educación y Justicia, y firmado por los Señores Secretarios de Estado de Guerra, de Marina y de Aeronáutica.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Enrique Rauch - José M. Astigueta - Alberto Rodríguez Galán - Benjamín Rattenbach - Carlos A. Kolungia - Eduardo F. Mac Loughlin.-

ACTO: DECRETO N° 2.817/63.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 55°) - FALLECIMIENTOS

Buenos Aires, 16 de abril de 1963.-

Visto el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional, aprobado por Decreto n° 9.530/58, y

CONSIDERANDO:

Que el punto 55° del mismo establece que "en caso de fallecimiento de un agente, la Repartición en la cual se desempeñaba el mismo dará prioridad al nombramiento de su viuda o de un hijo de éste, en la primera vacante que se produzca en el "grupo" para el cual aquélla o aquél reúna los requisitos de ingreso indispensables";

Que esta disposición resulta de difícil aplicación en la práctica, frente a las normas sobre concursos, transferencias de personal y economías, lo que impone una revisión que permita, sin violar la esencia de aquéllas, dar efectiva vigencia a la referida cláusula;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, en uso de las facultades emergentes del Decreto-Ley N° 797/58 (') (Ley N° 14467) (") y

(') Ver Digesto Administrativo N° 419.- //-
(") Ver Digesto Administrativo N° 609.-

artículo 20, inciso 12, de la Ley N° 14.439 (°),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Reemplazase el texto del punto 55° del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional aprobado por Decreto N° 9.530/58, por el siguiente:

"55°.- En caso de fallecimiento de un agente, el Ministerio, Secretaría de Estado o Repartición en que se desempeñaba el mismo, podrá designar, por el conducto legal pertinente, a la viuda o a un hijo de aquél, sin concurso previo, en un cargo vacante del Grupo inferior existente en el presupuesto respectivo, de la Clase D, E o F, o en el Subgrupo si fuera menor de 18 años de edad, siempre que reúna los requisitos básicos fijados en el punto 23° del Escalafón. En caso de poseer título universitario, podrá ser designado en la Clase C, en cargo vacante dentro del Grupo que corresponda a su especialidad".

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino - Ramón C. Lequerica.

(°) Ver Digesto Administrativo N° 505.-

ACTO: EXPEDIENTE Nº 1.135/63.-

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES

Providencia nº 277/63.-

AL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA:

Asunto: Incompatibilidad - Situación frente al régimen de incompatibilidades del personal de servicios auxiliares, de maestranza y obrero en un establecimiento educacional, que acumula en el mismo cargos equivalentes a doce horas de cátedra, pero en distinto turno.

Disposiciones de aplicación: Art. 9° del decreto número 8.566/61 (1).

Opinión de esta Dirección General: Se solicita de esta repartición a efectos de evitar ceses indebidos o suspensiones de personal, se establezca la situación de aquellos agentes que prestan servicios auxiliares, de maestranza y obrero que acumulan a su vez cargos equivalentes a doce horas de cátedra en un mismo establecimiento educacional, pero en distinto turno.

La situación referida es completamente anormal por la diferencia de plano existente entre la función de un servicio auxiliar, de maestranza y obrero, con una docente y por violentar todo principio de orden y jerarquía que se debe mantener y cuidar sobre todo en una escuela.

(1) Ver Digesto Administrativo nº 1460.-

Las reglamentaciones del régimen de incompatibilidades, n han descuidado el aspecto que se trata, pues el art. 9° del cuerpo de disposiciones aprobado por el decreto número 8.566/61 que establece las condiciones generales a que tie- en que ajustarse las excepciones autorizadas, establecen en tre otras condiciones que no se contraríe ninguna norma éti ca, eficiencia o disciplina, como sería la subordinación en la misma jurisdicción a un inferior jerárquico, relación de dependencia entre dos empleos y otros aspectos o supuestos que afecten la independencia funcional de los servicios.

Como se desprende del concepto amplio expuesto precedentemente, situaciones como la planteada no escapan al alcance de las normas encargadas de reglamentar las acumulaciones de cargos. Por ello el suscripto estima que dentro de un mismo establecimiento educacional, no puede admitirse acumulaciones de cargos que respondan a los servicios auxiliares, de maestranza y obrero con equivalentes a doce horas de cátedra, pues en estos casos debe prevalecer el interés general sobre el particular del agente. Por otra parte existe el deber moral de quienes desempeñen cargos como los comentados de solicitar cambio de funciones de acuerdo a sus conocimientos y condiciones personales.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 12-3-63.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Depto. de Secretaría

ACTO: RESOLUCION DEL TRIBUNAL FISCAL.-

MATERIA: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

Buenos Aires, 2 de abril de 1963.-

Visto los acontecimientosque son del dominio público ocurridos en la fecha,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Suspéndese, por el día de la fecha, el curso de los términos legales y reglamentarios, sin perjuicio de las actuaciones ya cumplidas.
ARTICULO 2º.- Regístrese y dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas.-

Fdo. BENJAMIN T. BAVIO

ACTO: RESOLUCION INTERNA D.G.I. n° 1838/63.-

MATERIAS: CONSEJO DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO - DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Buenos Aires, 16 de abril de 1963.-

Visto la conveniencia de modificar las normas de la Resolución Interna n° 1.766/62 (¹), de modo que no se susciten dudas acerca de la personería y atribuciones del personal que debe actuar en los procedimientos de represión del contrabando, regidos por el decreto número 5.426/62 ("), modificado por el n° 7.713/62 (°), en uso de las facultades conferidas por el mismo y por los artículos 7 y 8 de la ley n° 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones),

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

R E S U E L V E :

1°.- Ampliar el punto primero de la Resolución Interna n° 1.766/62, autorizando a recibir denuncias por presunta existencia de mercaderías proveniente de contrabando a todo el personal qué, teniendo asignadas funciones de inspección, sea expresamente designado a aquel efecto por

(¹) Ver Digesto Administrativo n° 1679.- //.
(") Ver Digesto Administrativo n° 1651.-
(°) Ver Digesto Administrativo n° 1699.-

las Jefaturas de las Delegaciones Regionales, Distritos y Agencias de las cuales dependen.

2º.- Los funcionarios que las Jefaturas antes mencionadas designen para recibir denuncias, quedan facultados para actuar en el doble carácter de denunciantes y aprehensores, conforme con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo segundo del decreto nº 5.426/62.

3º.- Las respectivas Jefaturas extenderán a los funcionarios mencionados en el punto primero de esta Resolución, una constancia con sello oficial en la que se consigne que se encuentran habilitados para recibir denuncias y actuar en el doble carácter de denunciantes y aprehensores, con todas las facultades inherentes a estos últimos (artículos segundos, tercero y cuarto del decreto nº 5.426/62, modificado por el nº 7.713/62).

Dicha constancia tendrá el siguiente texto:

"El empleado N.N., con credencial nº ....., se encuentra habilitado para realizar los procedimientos a que se refieren los artículos segundo, tercero y cuarto del decreto nº 5.426/62, modificado por el decreto nº 7.713/62, estando suficientemente facultado para recibir denuncias y actuar en el doble carácter de denunciante y aprehensor, clausurar provisionalmente locales y comercios y la adopción de las demás medidas dispuestas en los artículos citados".

4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, dése conocimiento a la Dirección Nacional de Aduanas y archívese.-

Fdo. GREGORIO ANDRES BALLESTEROS

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Dpto. de Secretaría -

ACTO: RESOLUCION Nº 7.496/63.-

MATERIA: DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL (Reglamento)

Buenos Aires, 25 de abril de 1963.-

Visto el expediente nº 50.026/63 por el que se propugna la modificación del artículo 19° de la Resolución Ministerial 7.078/57 (1), y

CONSIDERANDO:

Que es necesario el adecuamiento del citado artículo al Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional;

EL SECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1ª.- Adiciónese a los términos del artículo 19° de la Resolución nº 7.078/57 lo siguiente: "Exceptúase de la caducidad establecida en el presente, a aquellos afiliados que optaren por acogerse al recurso conferido por el artículo 24°, y dentro del término estipulado por el artículo 25° del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional".

2ª.- Tómese nota por donde corresponda, pase a la Dirección General de Obra Social para su conocimiento, difusión y demás efectos; cumplido, archívese.-

Fdo. RAMON C. LEQUERICA

(1) Ver Digesto Administrativo nº 176.-

ACTO: RESOLUCION Nº 12.003/63.-

MATERIAS: LICENCIAS - ANTIGUEDAD

Buenos Aires, 22 de abril de 1963.-

Visto el artículo 6º del Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos aprobado por decreto nº 8.567/61 (1), y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se especifican los servicios que serán computables a efectos de establecer la cantidad de días laborables de licencia anual por descanso que corresponden a los agentes que comprende;

Que para el caso de servicios prestados en entidades privadas, se faculta a los agentes a presentar una declaración jurada acompañada con una constancia extendida por el o los empleadores, hasta tanto la correspondiente Caja de Jubilaciones extienda las respectivas certificaciones;

Que en el caso de servicios prestados por cuenta propia (trabajadores independientes, profesionales, empresarios) no puede aceptarse tal declaración jurada, ya que carecería del respaldo de la certificación del empleador, que es el propio interesado;

Que el empleo de la expresión "entidades privadas" no puede interpretarse como excluyente de los servicios prestados por cuenta propia, ya que la licencia anual por vacaciones obedece a razones de higiene basadas en //.

(1) Ver Digesto Administrativo nº 1461.-

fundamentos biológicos, económicos y sociales, destinados a dar al trabajador la oportunidad de reparar sus energías físicas y mentales disminuídas por el trabajo;

Que en consecuencia deben conciliarse los requisitos exigidos por el régimen en cuestión para otorgar el derecho a un mayor número de días de licencia, con las características particulares de los servicios prestados sin relación de dependencia;

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas en el artículo 5° del decreto n° 8.567/61,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1ª.- Aclárase, a los fines de la aplicación de las normas del artículo 6° del Régimen de Licencias, Justificaciones y Permisos, aprobado por decreto n° 8.567/61, que el reconocimiento de la antigüedad de servicios prestados por cuenta propia (trabajadores independientes, profesionales, empresarios) sólo será procedente en base a la certificación otorgada por la Caja Nacional de Previsión que corresponda en cada caso.

2ª.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. RAMON C. LEQUERICA

ACTO: DECRETO Nº 2.879/63.-

MATERIAS: PRESUPUESTO - FACULTAD MINISTERIAL

Buenos Aires, 22 de abril de 1963.-

Atento la necesidad de reglamentar el artículo 19 del Decreto-Ley Nº 10.582/62 (1) de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1963, y

CONSIDERANDO:

Que la facultad acordada al Poder Ejecutivo por dicho artículo, para delegar en los organismos estatales las atribuciones que fija el artículo 18 del citado Decreto-Ley, en lo que se refiere a introducir modificaciones en determinados créditos dentro de los totales autorizados, tiene por finalidad la agilitación en los trámites para los reajustes presupuestarios que exigen las reales necesidades de los servicios en el curso del ejercicio financiero;

Que a efectos de la inmediata e integral aplicación de tal autorización, corresponde dictar las normas a que se ajustarán los respectivos organismos;

Por ello,

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1776.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Delégase en los señores Ministros Secretarios de Estado y en la autoridad superior de los organismos descentralizados, autárquicos y empresas del Estado, las facultades acordadas al Poder Ejecutivo por el artículo 18 del Decreto-Ley N° 10.582/62, para que, en sus respectivas jurisdicciones y dentro del total de los créditos autorizados, procedan a reajustar, cuando las necesidades de los servicios así lo exijan, mediante compensación, las partidas referentes a otros gastos con excepción de aquellas que directa o indirectamente se traduzcan en beneficios al personal bajo cualquier modalidad o concepto.

ARTICULO 2°.- La delegación acordada por el artículo anterior también será de aplicación para los reajustes que requiera el Plan de Inversiones Patrimoniales que se atiende con los créditos previstos en el Sector 5°, dentro de las partidas parciales del detalle analítico que apruebe el Poder Ejecutivo para la realización del referido Plan.

ARTICULO 3°.- Los ajustes que se dispongan en virtud de lo establecido por los artículos 1° y 2° no podrán crear nuevos conceptos de inversión ni modificar las leyendas asignadas a cada partida. Tampoco podrán dichos ajustes alterar las demás leyendas, menciones y códigos numéricos que contengan los presupuestos y planes respectivos.

Las modificaciones de créditos comprenderán invariablemente previsiones por doce meses, en forma tal que no den lugar a incrementos automáticos para los ejercicios fiscales siguientes.

La facultad de compensar a que se refiere este Decreto no podrá ejercitarse entre créditos de distintos sectores, incisos y/o financiaciones del presupuesto general de la Administración Nacional; ni tampoco podrá significar incrementación de tales créditos aun cuando la misma sea enjugada con un aumento correlativo de las economías de inversión a realizar.

ARTICULO 4º.- Los Ministerios, Secretarías de Estado, organismos descentralizados, autárquicos o empresas del Estado, comunicarán a la Secretaría de Estado de Hacienda y al Tribunal de Cuentas de la Nación la resolución y correspondientes planillas modificatorias de los créditos, confeccionadas de acuerdo con el modelo anexo.

Los actos intervenidos de conformidad por el Tribunal de Cuentas de la Nación serán girados a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.

ARTICULO 5º.- Los ajustes de presupuesto y de los planes de inversiones patrimoniales a que se refiere este Decreto sólo podrán disponerse hasta el 30 de setiembre de 1963 y deberán ser comunicados a la Secretaría de Estado de Hacienda y al Tribunal de Cuentas de la Nación antes del día 5 de octubre del mismo año.

ARTICULO 6º.- Las disposiciones del presente decreto no son de aplicación para los créditos comprendidos en el Anexo 31, Obligaciones a cargo del Tesoro (Sectores 2,4 y 5), Financiaciones 1 y 3, respectivamente, del presupuesto general de la Administración Nacional.

ARTICULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino - Ramón C. Lequerica

M O D E L O

ANEXO U ORGANISMOS DESCENTRALIZADO:
ITEM:
INCISO 9 - OTROS GASTOS

PLANILLA

Sector	Financiación	Anexo	

Nº de Código de la Partida		Concepto	Nº de Código de la Partida	
Principal	Subprincipal		Principal	Subprincipal

M O D E L O

NTRALIZADO:

PLANILLA ANEXA N°

Sector	Financiación	Anexo	Jurisdicción	Organismo Descent.	Inciso	Item

Concepto	N° de Código de la Partida		Presupuesto Vigente (debe dictarse el acto aprobatorio)	Modificaciones	Presupuesto Definitivo Resolución n° Fecha:
	Principal	Subprincipal			

ACTO: DECRETO Nº 2.907/63.-

MATERIA: INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

Buenos Aires, 22 de abril de 1963.-

Visto el Decreto-Ley nº 4.027/58(+) de creación del Instituto Superior de Administración Pública, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 6º en su inciso b), establece entre los recursos del citado organismo, los ingresos propios que se obtengan de la venta de la Revista de Administración Pública;

Que corresponde en consecuencia facultar al Director del Instituto Superior de Administración Pública, para la fijación de los precios topes que han de regir para la mencionada Revista, y establecer a su vez los porcentajes destinados para la venta, canje y/o distribución sin cargo de la misma;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Facúltase al Director del Instituto Superior de Administración Pública, a fijar conforme el costo de la misma los precios topes que han de regir para la venta de la Revista de Administración Pública //.

(+) Ver Digesto Administrativo nº 479.-

que edita el citado organismo, tanto dentro del ámbito del país como fuera de él.

ARTICULO 2º.- Facúltase asimismo al citado funcionario para fijar sobre cada uno de los números que se editen, el porcentaje de distribución de venta y el correspondiente al canje y/o distribución sin cargo.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento del Interior.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Enrique Rauch

ACTO: DECRETO-LEY Nº 2.931/63.-

MATERIAS: PRESUPUESTO - ECONOMIAS - RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - LIMITACION DE SERVICIOS - ESTRUCTURAS

Buenos Aires, 22 de abril de 1963.-

Visto lo establecido por el artículo 25 del Decreto Ley nº 10.582/62 (+), y

CONSIDERANDO:

Que a fin de facilitar el estudio de las estructuras funcionales, sin restar agilidad a la tramitación de los reajustes presupuestarios en cuanto los mismos sean imprescindibles, es necesario adecuar el texto de dicha disposición legal a los efectos de la presentación de dichas estructuras, sin enervar los propósitos perseguidos;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 25 del Decreto-Ley nº 10.582/62, el que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 25º.- El Poder Ejecutivo con intervención de la Secretaría de Hacienda y del Ministerio o Secretaría del ramo, suprimirá o reducirá por razones

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.776.-

//.

de economía, organismos, funciones, servicios, oficinas, y adoptará las demás medidas de racionalización en todo el ámbito de la administración nacional que jurisdiccionalmente dependen del mismo, inclusive empresas del Estado.

Los organismos civiles del Estado (Administración Central, Organismos Descentralizados; Servicios de Cuentas Especiales; Empresas del Estado, y Obras Sociales) deberán remitir a la Secretaría de Hacienda, antes del 31 de octubre de 1963, las estructuras funcionales a las cuales a su vez deberá ajustarse la estructura presupuestaria.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, Defensa Nacional y Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

GUIDO - Enrique Rauch - José M. Astigueta - Eustaquio A. Méndez Delfino - Ramón C. Lequerica.-

ACTO: DECRETO Nº 3.084/63.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (art. 38° - inc. c) - CALIFICACIONES - LICENCIAS

Buenos Aires, 26 de abril de 1963.-

Visto que el Decreto nº 4.216/54 (+) establece que deberá concederse licencia sin sueldo al personal que formula la opción de cumplir con la Ley del Servicio Militar Obligatorio en la Policía Federal, y

CONSIDERANDO:

Que en base a lo dispuesto en el art. 38° - inciso c) del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional los agentes que durante todo el período calificable hubieran estado con licencia sin goce de sueldo no serán calificados;

Que tal circunstancia hace que los agentes que cumplen con el Servicio Militar Obligatorio en la Policía Federal reciban un tratamiento diferente -en el orden calificatorio- con respecto a aquellos que lo realizan en las Fuerzas Armadas, a quienes por imperio del art. 39° del citado Escalafón, se les considera la última calificación obtenida a los fines del pase a la categoría superior;

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1052.-

Que este procedimiento permite que mientras unos puedan participar en los concursos para los cargos de mayor jerarquía, otros queden inhibidos de hacerlo por falta de la calificación anual exigida por el régimen de concursos o por ser inferior a siete (7) puntos por la incidencia que la licencia sin sueldo tiene en el cómputo calificatorio;

Que tal diferenciación entre los mismos agentes que cumplen iguales deberes obligatorios de inspirado sentido patriótico, no debe subsistir;

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Hacienda en uso de las atribuciones resultantes del Decreto Ley nº 797/58 (°) (Ley nº 14.467) (¹),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- La licencia sin goce de haberes acordada al personal de la Administración Pública Nacional que cumple el Servicio Militar obligatorio en la Policía Federal, de acuerdo con el decreto nº 4.216/54, no será deducible de la calificación anual de los agentes comprendidos en el Escalafón General decreto nº 9.530/58, que serán considerados a tales efectos en igualdad de condiciones con el personal que cumple aquella obligación en las filas de las Fuerzas Armadas.

ARTICULO 2º.- Las disposiciones del artículo precedente se aplicarán incluso a las situaciones de ese carácter producidas desde el 1º de noviembre de 1958.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino
Ramón C. Lequerica

(°) Ver D.A. nº 419.-
(¹) Ver D.A. nº 609.-

ACTO: RESOLUCION Nº 12.004/63.-

MATERIA: VIATICOS

Buenos Aires, 10 de mayo de 1963.-

Visto el artículo 2º del Decreto nº 13.834/60 (+), que establece las condiciones para la asignación y pago de viáticos al personal de la Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el apartado II, inciso e), del mismo establece que cuando la comisión del agente se realice en lugares donde el Estado le facilite alojamiento y/o comida, se liquidará solamente un porcentaje del viático, según se le diere uno u otra, o ambos simultáneamente;

Que en el caso de la Presidencia de la Nación se presenta una situación muy especial, ya que en las oportunidades en que el titular del Poder Ejecutivo se traslada a distintos lugares del país, es necesario contratar de antemano los servicios de alojamiento y pensión de la comitiva oficial y de los funcionarios y empleados afectados a su atención personal;

Que para tales fines debe recurrirse a la contratación de hoteles, de manera de asegurar una atención adecuada a la alta investidura del Presidente de la Nación; //.

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1274.-

Que a fin de evitar encontradas interpretaciones sobre la dispesición citada en el primer considerando, frente al caso particular a que se hace referencia, corresponde dictar la norma aclaratoria pertinente, en función de la facultad acordada en el artículo 20° del Decreto nº 13.834/60;

Por ello,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1º.- Aclárase, a los fines de la aplicación del artículo 2º apartado II, inciso e), del Decreto nº 13.834/60, que dentro del concepto "...lugares donde el Estado facilite al agente alojamiento y comida..." deben considerarse incluídos los hoteles cuyas prestaciones sean contratadas con anterioridad por la Presidencia de la Nación para el alojamiento y pensión de la comitiva oficial del Excmo. Señor Presidente de la Nación y de los funcionarios y empleados afectados a su atención personal, en ocasión de giras o visitas a localidades del interior del país.

2º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. RAMON C. LEQUERICA

ACTO: DECRETO-LEY Nº 3.284/63.-

MATERIAS: PARTIDOS POLITICOS - PROHIBICIONES - PERSONAL FUNCIONARIOS PUBLICOS

Buenos Aires, 2 de mayo de 1963.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que casi la totalidad de los partidos políticos actuantes en el presente proceso electoral han puesto de manifiesto la necesidad o conveniencia de que se prorrogue el plazo fijado oportunamente para la oficialización de listas de candidatos que las circunstancias han hecho insuficiente;

Que los estudios técnicos realizados con relación al cumplimiento del calendario electoral demuestran acabadamente que la mera prolongación de ese plazo, aún por un lapso reducido, no resulta factible, pues incidiría gravemente en el adecuado desarrollo de trámites ulteriores esenciales, para los cuales se han previsto términos que son igualmente ajustados;

Que aun cuando ha sido propósito del Gobierno mantener sin alteración las fechas fijadas para los comicios y la entrega del poder a las autoridades que resulten electas no puede desoír aquellos reclamos, provenientes de partidos que representan prácticamente, en conjunto, a toda la ciudadanía del país, por lo cual se ha decidido a postergar por dos semanas la fecha de

//-

los comicios, a fin de que los partidos dispongan de igual plazo suplementario para la presentación de sus listas de candidatos;

Que ello no afecta en modo alguno a la fecha determinada para la entrega del poder, que se mantiene inalterable, y solo obliga a desplazar por pocos días alguna de las fechas intermedias por exigirlo así el tiempo prudencial requerido para la operación del escrutinio;

Que a fin de que el lapso de postergación de los comicios pueda ser aprovechado íntegramente por los partidos en la preparación de sus listas, no se ha ampliado, como hubiera sido necesario, el plazo de que dispondrá la justicia electoral para examinar la calidad de los candidatos, sustanciar las eventuales impugnaciones y tramitar los recursos previstos para ante la Cámara Nacional Electoral, que ha venido a sustituir, en este aspecto a las juntas electorales, razón por la cual se estima conveniente, por esta vez, abreviar el trámite de esas diligencias dando nuevamente jurisdicción a las juntas para entender en las apelaciones, procedimiento sugerido por alguno de los partidos y admitido sin discrepancia por la totalidad de ellos;

Que las modificaciones introducidas en ese sentido y algunas sancionadas con anterioridad, hacen indispensable reajustar normas correlativas del régimen electoral;

Que atendiendo a gestiones formuladas por los partidos políticos, se ha decidido mejorar a su respecto el régimen de franquicias establecido por ley 15.793, lo cual les permitirá percibir más rápidamente la contribución que ella les acuerda;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1°.- Los comicios generales para la elección de autoridades de la Nación y las provincias se realizarán el domingo 7 de julio del corriente año.

ARTICULO 2º.- Inmediatamente de conocido el presente decreto, los comisionados federales dispondrán las rectificaciones consiguientes con referencia a las convocatorias dictadas en sus respectivos distritos.

ARTICULO 3º.- Fíjase el día 20 de mayo de 1963, como fecha de vencimiento del plazo para registrar ante los jueces electorales las listas de candidatos partidarios públicamente proclamados.

ARTICULO 4º.- Postérgase para el día 31 de julio de 1963 la reunión de electores de presidente y vicepresidente de la Nación a que se refiere el artículo 4º del decreto 260/63.

ARTICULO 5º.- Modifícanse las disposiciones del régimen electoral aprobado por decreto 4034/57 con las reformas introducidas por los decretos Nros. 5.054/57, 15.099/57, 335/58, 7.164/62 (1) y 13.052/62, en la siguiente forma:

1) Reemplázanse los dos primeros párrafos del art. 51 por el que sigue:

"El Secretario Electoral del Distrito actuará como secretario de la Junta y ésta podrá utilizar, además, para sus tareas, al personal asignado a la Secretaría Electoral".

2) Suprímese en el art. 94, el segundo párrafo, que dice: "El elector podrá efectuar sustituciones, reemplazando los candidatos tachados por otros candidatos que figuren en algunas de las listas oficializadas".

3) Sustitúyese el texto del apartado c) del inciso 7º del artículo 112 por el siguiente: "Cuando la boleta no contenga por lo menos la designación del partido y la categoría de candidatos a elegir".

4) Reemplázase al principio del art. 132 la frase: "Se impondrá prisión de un año" por esta otra: "Se impondrá prisión de un mes a un año".

5) Agrégase en el párrafo II del "Título Unico - Sistema Electoral", como inciso "d-bis": "Si alguna de las listas contuviese menor número de candidatos que el

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1694.-

de bancas a adjudicar con arreglo al total de votos por ella obtenido, se excluirán del ordenamiento prescripto en el inciso c) los cocientes no aprovechables, completándose dicho ordenamiento con los cocientes provenientes de otras listas que sigan en orden decreciente".

6) Agrégase en el párrafo II del "Título Unico - Sistema Electoral", al final del inciso e), la frase: "y d-bis".

ARTICULO 6º.- Suspéndese, con referencia al actual proceso electoral, la vigencia de la reforma introducida por el decreto 13.052/62 en el artículo 61 del decreto 4.034/57. En consecuencia las resoluciones de los jueces sobre habilidad e inhabilidad de candidatos partidarios serán, por esta vez, recurribles para ante las respectivas juntas electorales, cuyas decisiones tendrán carácter de definitivas.

ARTICULO 7º.- Por el Ministerio del Interior se ordenará el texto del decreto-ley 4.034/57 y sus modificatorios, al que en lo sucesivo se citará bajo la denominación de "Régimen Electoral Nacional".

ARTICULO 8º.- Modifícanse las disposiciones del Estatuto de los Partidos Políticos, aprobado por decreto 12.530/62, del siguiente modo:

1) Sustitúyese el primer párrafo del artículo 9º por los que siguen: "El juez electoral competente tendrá por acreditadas la autenticidad de las firmas y exactitud de los datos relativos a los firmantes que exige el artículo 2º, bajo la responsabilidad conjunta de la autoridad máxima partidaria y del apoderado actuante, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento anterior en 30 días como mínimo a la primera elección las comprobaciones pertinentes. Si de dichas comprobaciones resultare dolo imputable a la autoridad partidaria, el juez negará, sin más trámite la autorización. En todo caso los responsables quedarán inhabilitados para ejercer cargos partida-

rios o electivos hasta por el término de 5 años, según decisión del juez. Las comprobaciones de los demás recaudos serán efectuadas por el juez".

2) Agrégase, como último párrafo del artículo 3º, el siguiente: "En los distritos en que el número de inscriptos en el Registro Electoral sea inferior a cien mil, el mínimo de firmantes se reducirá a 300, y a 200 si aquél fuera inferior a cincuenta mil".

3) Sustitúyese el texto del inciso 3), artículo 28, por el que sigue: "inscribirse en la forma prevista por el artículo 3º en los distritos donde no hubiesen actuado en ninguna de las dos últimas elecciones nacionales anteriores a la anulada por decreto 3.657/62, y deseen hacerlo".

ARTICULO 9º.- Amplíase el artículo 1º, inciso e) - I de la Ley Nº 15.793, sobre franquicias a los partidos políticos, con la siguiente disposición:

Los partidos políticos reconocidos podrán solicitar el pago de la contribución que les corresponda o se les asigne, antes de haber obtenido la oficialización de sus listas de candidatos, siempre que la autoridad máxima partidaria en el distrito y por lo menos dos miembros de su mesa directiva asuman, en forma personal y solidaria, con renuncia de los beneficios de excusión, división o interpelación el compromiso de restituir inmediatamente las sumas percibidas, con más sus intereses, si, vencido el plazo legal, no hubieren oficializado lista alguna.

ARTICULO 10.- Ratifícanse, con alcance a las fechas de su emisión, los decretos 7.163/62(*) y 8.163/62(*) relativos a la creación y funciones de la Justicia Nacional.

ARTICULO 11.- Derógase toda disposición que se oponga a las del presente decreto.

ARTICULO 12.- El presente decreto será refrendado por los

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1693.-
(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1702.-

ministros del Interior y de Defensa Nacional y firmado por los Secretarios de Estado de Guerra, Marina y Aeronáutica. ARTICULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Enrique Rauch - José M.Astigueta
Benjamín Rattenbach - Carlos A.Kolungia
Eduardo F.Mc.Loughlin.

ACTO: DECRETO Nº 3.466/63.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 6º - inc. g) - ACCIONES JUDICIALES - SUMARIOS

Buenos Aires, 7 de mayo de 1963.-

Visto el Estatuto para el Personal Civil de la Administración Nacional, aprobado por decreto-ley Nº 6.666/57 (') y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 6º, inciso g), del mismo, determina la obligación del empleado de promover las acciones judiciales que correspondan cuando fuere objeto de imputaciones delictuosas;

Que dicha obligación constituye un deber del agente frente a la Administración, y por lo tanto el interés - jurídico-administrativo protegido es el buen nombre, reputación y honor de los acusados como agentes de la misma;

Que la órbita de aplicación es tanto la administrativa como la privada, es decir que las imputaciones delictuosas pueden haber sido efectuadas tanto por sus actividades como agentes de la Administración como por - las simples actividades privadas; //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

Que dicha norma establece también una facultad de la Administración que se transforma en deber cuando la Administración no puede determinar por sí misma la veracidad o falsedad de las imputaciones, sea por incompetencia para realizar la investigación, sea porque en el sumario administrativo no se hubiese podido establecer la falsedad de las imputaciones;

Que de este último principio resulta que la aplicación del precepto no es mecánica, sino condicionada por los factores expuestos, y que su interpretación ha de hacerse en forma restrictiva, en el sentido de que la obligación del agente debe reducirse a límites bien determinados y consultar la conveniencia de no desoír en absoluto las afirmaciones de los intereses privados que puedan interesar a la Administración, pero sin someter a los empleados y a las reparticiones en que sirven a desconceptos, de moras y perjuicios que pueden carecer, en su oportunidad, de un responsable;

Que cuando la Administración ha comprobado por sí misma la corrección de los agentes acusados y la falsedad de las imputaciones, no existe interés jurídico en compelerlos a la iniciación de acciones judiciales que no tendrían, en rigor, sino la misma finalidad, puesto que, como queda dicho, sólo se trata del interés que tiene la administración por razones de decoro y de prestigio, en el buen nombre y reputación de sus agentes;

Que en cuanto a la autoridad competente para eximir al agente de la obligación impuesta por la norma en cuestión, no puede ser otra que la autoridad superior del organismo o dependencia en que presta servicios el agente, por ser la que tiene el ejercicio de la potestad disciplinaria y la correlativa facultad de superintendencia para determinar, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, si existe o no un interés legítimo de la Administración en la promoción de las acciones judiciales en cuestión;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de -

Estado de Hacienda, en uso de las atribuciones resultantes del Decreto-Ley Nº 797/58 (') (Ley Nº 14.467) (") y art. - 20, inciso 12º de la Ley 14.439 (°),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Agréguese a la reglamentación del art. 6º, inciso g), del Estatuto del Personal Civil (Decreto-Ley número 6.666/57), la siguiente norma:

"Los Ministros, Secretarios de Estado, o autoridades superiores de los organismos descentralizados, podrán eximir a los agentes de su jurisdicción de la obligación de promover acciones judiciales por imputaciones delictuosas, cuando del sumario pertinente quede evidenciada la corrección del o los agentes acusados y la falsedad de las imputaciones vertidas".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio A.Méndez Delfino
Ramón C.Lequerica.

(') Ver Digesto Administrativo nº 419.-
(") Ver Digesto Administrativo nº 609.-
(°) Ver Digesto Administrativo nº 505.-

ACTO: DECRETO Nº 3.476/63.-

MATERIAS: PREMIO POR ASISTENCIA - LICENCIAS

Buenos Aires, 7 de mayo de 1963.-

Visto el decreto Nº 9.252/60 (*) que establece adicionales a liquidar al personal de la Administración Pública Nacional, entre las que se encuentra una compensación en concepto de premio por asistencia, y

CONSIDERANDO:

Que para hacerse acreedor a su percepción es necesario dar cumplimiento a determinadas condiciones enumeradas en el artículo 4º, Capítulo III;

Que dichas exigencias han resultado ser en la práctica excesivamente restrictivas, habiendo dado lugar a gestiones de distintos organismos en el sentido de incluir en la referida norma ausencias por motivos muy atendibles, a fin de que no se efectúen las deducciones establecidas;

Que al respecto no puede desconocerse el carácter especialísimo de excepción que revisten las ausencias motivadas por maternidad, dada su importancia social y el valor legal que le otorga la sanción de la Ley Nº 12.111, que asegura a la madre la estabilidad en su empleo y la percepción íntegra de su salario o sueldo mensual;

//-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1216.-

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Agrégase al artículo 4º, apartado III, inciso c), del Régimen de Compensaciones aprobado por decreto Nº 9.252/60, lo siguiente: 5º) Licencias por maternidad (artículo 18º del decreto Nº 8.567/61) (*).

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio A.Méndez Delfino
Ramón C. Lequerica.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-

ACTO: DECRETO Nº 3.477/63.-

MATERIA: INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 7 de mayo de 1963.-

Visto el "Régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional", aprobado por el decreto Nº 8.566/61 (¹), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8º del decreto Nº 9.677/61 (") excluyó de los alcances de dicho Régimen, entre otros organismos, a las academias y entidades subsidiadas por el Estado;

Que el artículo 2º del decreto Nº 5.229/62 (º) determinó que el personal de los organismos excluídos del Régimen en cuestión deberían cumplimentar igualmente los formularios de declaración jurada de acumulación de cargos;

Que en el caso de las academias y entidades subsidiadas por el Estado, el cumplimiento de tal obligación por parte de su personal carece de fundamento, pues en la mayoría de los casos los subsidios otorgados no tienen precisado su empleo para el pago exclusivo de haberes sino que son para gastos generales, no pudiendo precisarse su discriminación; //-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1460.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1491.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 1647.-

Que aún cuando sean destinados exclusivamente para el pago de haberes al personal, esta circunstancia no es suficiente para darles a esos agentes los atributos de empleados públicos, única condición que justificaría la necesidad de exigirles el diligenciamiento de los formularios de acumulación de cargos;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- El personal de las academias y entidades subsidiadas por el Estado queda exceptuado de la obligación de presentar los formularios de declaración jurada de acumulación de cargos, funciones y/o pasividades previstos en el artículo 14º del Régimen aprobado por decreto número 8.566/61.

ARTICULO 2º.- La excepción acordada en el artículo precedente no comporta subsidiariamente la no computación de esos cargos frente a otros empleos públicos civiles remunerados, desempeñados en forma simultánea por los mismos agentes, en cuyo caso las acumulaciones que se declaren serán juzgadas en base a las normas vigentes en la materia para cada situación.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Eustaquio Méndez Delfino
Ramón C. Lequerica.

ACTO: DECRETO N° 3.478/63.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (Art. 35° y 40°) - CREDITOS AL EMPLEADO PUBLICO - EMBARGOS

Buenos Aires, 3 de mayo de 1963.-

Visto el decreto N° 4.570/60 (°), mediante el cual se estableció la escala de sanciones a aplicar en los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas al amparo del régimen de créditos al empleado público, instituído por el decreto suscripto en Acuerdo General de Ministros N° 6.754/43 y su modificatorio el número 20.109/44, y

CONSIDERANDO:

Que el texto del artículo 2° del aludido ordenamiento ha originado dudas interpretativas con respecto a si se refiere exclusivamente al incumplimiento de las obligaciones contraídas con "afectación de haberes", conforme lo previsto en el artículo 4° del decreto N° 6.754/43, modificado por el N° 20.109/44, o si pretende involucrar también en su alcance a los embargos resultantes de la morosidad en el pago de las deudas especificadas en el artículo 11 del mismo instrumento legal, no respaldadas por aquella garantía; //-

(°) Ver Digesto Administrativo N° 1157.-

Que si bien las penalidades previstas en los comentados artículos 4° y 11 se inspiran en el propósito de sancionar actos que resultan de similar naturaleza, por cuanto se originan en el incumplimiento de las amortizaciones de las deudas contraídas con sujeción a dichas normas, existe entre ambos una marcada diferencia, ya que el considerado en la primera de esas cláusulas implica simplemente una transgresión, consecuencia de la no efectivización de un pago dentro de un término convenido, mientras que el embargo contemplado en la segunda configura un proceso que se substancia en el orden judicial, que supone reiteradas omisiones e intimaciones insatisfechas;

Que las circunstancias apuntadas señalan la conveniencia de adecuar las sanciones determinadas en el artículo 2° del decreto N° 4.570/60, graduándolas en función de la mayor gravedad de las faltas que motivan la ejecución de dichos embargos con respecto a los incumplimientos supuestos en el artículo 4° del decreto N° 6.754/43, modificado por su similar N° 20.109/44;

Por ello y de conformidad con lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda en orden a las atribuciones que le confiere el Decreto-Ley N° 797/58 (*),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- La escala de sanciones establecida en el decreto N° 4.570/60 regirá exclusivamente para los casos de incumplimiento de los compromisos a que se refiere el art. 4° del decreto N° 6.754/43, suscripto en Acuerdo General de Ministros el 26 de agosto de 1943, modificado por su similar N° 20.109/44.

ARTICULO 2°.- Los embargos a que se alude en el artículo 11 del precitado decreto N° 6.754/43, que no se justifiquen satisfactoriamente a juicio de autoridad competente, se sancionarán con sujeción a las determinaciones de los arts.

(*) Ver Digesto Administrativo N° 419.-

35 y 40 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, y conforme a la siguiente escala:

Primer embargo: Apercibimiento.
Segundo embargo: Un día de suspensión.
Tercer embargo: Cinco días de suspensión.
Cuarto embargo: Quince días de suspensión.
Quinto embargo: Treinta días de suspensión.
Sexto embargo: Cesantía.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y - firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio Méndez Delfino
Ramón C. Lequerica.

ACTO: DECRETO Nº 3.484/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - VACANTES - ECONOMIAS - PROHIBICIONES

Buenos Aires, 7 de mayo de 1963.-

Visto el Decreto-Ley Nº 10.582/62 (*), que fija el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 1963, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 27º de dicho decreto establece la supresión automática de todas las vacantes de personal existentes al 31 de octubre de 1962, con sujeción al régimen establecido por el decreto Nº 413/60 (**);

Que si bien la medida comentada se funda en la imprescindible necesidad de asegurar el máximo de economías posibles con la consecuente reducción del déficit fiscal, se hace necesario limitar su aplicación a efectos de no desvirtuar su finalidad, reduciendo las posibilidades funcionales de los organismos recaudadores;

Que, de esos organismos, merece especial tratamiento la Dirección General Impositiva, a cuyo cargo se encuentra la percepción de la mayoría de los gravámenes que conforman el sistema tributario nacional, máxime teniendo en cuenta su reciente reorganización, que se //-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1.776.-

(**) Ver Digesto Administrativo Nº 1.066.-

iniciara de acuerdo con los términos de los decretos Nros. 2.781 (°), 3.152 (+) y 6.930/60 (=), culminando con su aprobación mediante el dictado del decreto N° 6.890/62 (¨);

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Exclúyese de toda disposición de supresión y congelamiento de vacantes definitivas o transitorias, así como de las prohibiciones de ingreso o promoción, los cargos correspondientes a la Dirección General Impositiva.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación, a sus efectos.-

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino
Ramón C. Lequerica.

(°) Ver Digesto Administrativo N° 1139.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 1145.-
(=) Ver Digesto Administrativo N° 1194.-
(¨) Ver Digesto Administrativo N° 1668.-

iniciara de acuerdo con los términos de los decretos Nros. 2.781 (°), 3.152 (+) y 6.930/60 (=), culminando con su aprobación mediante el dictado del decreto Nº 6.890/62 (¨);

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Exclúyese de toda disposición de supresión y congelamiento de vacantes definitivas o transitorias, así como de las prohibiciones de ingreso o promoción, los cargos correspondientes a la Dirección General Impositiva.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación, a sus efectos.-

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino
Ramón C. Lequerica.

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1139.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 1145.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 1194.-
(¨) Ver Digesto Administrativo Nº 1668.-

ACTO: RESOLUCION Nº 11.011/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Hipódromos) - LIQUIDACION DE HABERES

Buenos Aires, 30 de abril de 1963.-

Atento la presentación efectuada por la Asociación Civil Jockey Club de la Capital Federal, solicitando la colaboración del equipo de computadoras electrónicas de la Dirección General de Contabilidad y Administración, para que este servicio continúe atendiendo la liquidación de sueldos y jornales, que prestaba a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, hasta tanto la institución se encuentre en condiciones de atender directamente esta tarea, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto Nº 2.247/62 (') de fecha 12 de marzo de 1962 se dispuso la transferencia a esa institución de la administración y explotación de los Hipódromos, medida concretada a través del convenio celebrado entre la misma y esta Secretaría de Estado aprobado por Decreto-Ley 2.375/63 ("), en el cual se dispone, además la colaboración de la Secretaría de Estado de Hacienda a //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1595.-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1874.-

la Asociación Civil Jockey Club;

Que hasta tanto se regularice la organización de los servicios y a efectos de no interrumpir la administración resulta necesario prestar la colaboración aludida y requerida;

Por todo ello,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1°) La Dirección General de Contabilidad y Administración prestará a la Asociación Civil Jockey Club de la Capital Federal, hasta tanto esta institución se encuentre en condiciones de hacerlo directamente, la colaboración necesaria para la liquidación de sueldos y jornales, servicio - que anteriormente cumplía para la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos.

2°) Autorízase a la Dirección General de Contabilidad y - Administración para fijar aranceles compensatorios por - los servicios cuya prestación se autoriza, provisión de elementos y reintegro de gastos en personal que los mismos ocasionen.

3°) A los efectos de las operaciones contables que se originen con motivo de la presente resolución, se procederá a la apertura de una Cuenta de Terceros en jurisdicción - del aludido servicio administrativo, de conformidad con - las normas del artículo 26° de la Ley de Contabilidad.

4°) Comuníquese y pase a la Dirección General de Contabilidad y Administración a sus efectos.-

Fdo. RAMON C. LEQUERICA.

ACTO: DECRETO Nº 3.583/63.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 39º) - SUMARIOS SUSPENSION PREVENTIVA - SUSPENSIONES

Buenos Aires, 9 de mayo de 1963.-

Visto el expediente nº 101.790/56 y agregados del Ministerio de Educación y Justicia (Nº 90.856/61 - S.H.)en el que se expone la situación que se plantea a los organismos de la Administración Nacional en los casos de agentes que, estando bajo proceso y obtenido el sobreseimiento provisional , deben permanecer alejados de la función hasta que se dicte sentencia definitiva, y

CONSIDERANDO:

Que la Procuración del Tesoro de la Nación se ha pronunciado sobre la necesidad de modificar el texto de la reglamentación del artículo 39º del Estatuto del Personal Civil, por considerar que el hecho de que el agente se encuentre procesado no es causa bastante para determinar su suspensión preventiva, por cuanto ello no implica, jurídicamente, ninguna presunción grave de culpabilidad;

Que asimismo considera que, siempre que el agente haya obtenido la libertad deberá disponerse su inmediata reincorporación al servicio, salvo que en causa por delito no culposo se haya dictado en su contra auto firme de

///.

prisión preventiva;

Que en lo que respecta a los sumarios administrativos debe establecerse expresamente la responsabilidad que, en el orden disciplinario como en el civil, alcanza al sumariante y/o a los funcionarios competentes para disponer el levantamiento de suspensiones preventivas, que no lo hicieren en los plazos establecidos;

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda en base a las atribuciones resultantes del Decreto-Ley N° 797/58 (+) (Ley N° 14.467) (°) y artículo 20°, inciso 12° de la Ley N° 14.439 ('),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Reemplázase el texto de la reglamentación del artículo 39° del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional (Decreto-Ley N° 6.666/57) ("), aprobada por Decreto N° 4.520/60 (=) por el siguiente:

"I. a) Vencido el término de noventa (90) días a que se refiere el artículo 39° del Estatuto, sin que se hubiese dictado resolución en el sumario, se levantará la suspensión preventiva y el agente deberá reintegrarse al servicio, fin para el cual se podrá disponer su traslado transitorio a otra oficina o dependencia, con asignación de tareas distintas de las que desempeñaba, si su reintegro a la misma oficina o dependencia en que revistaba se considerara incompatible con las exigencias propias de la sustanciación del sumario en trámite".

(+) Ver Digesto Administrativo n° 419.-
(°) Ver Digesto Administrativo n° 609.-
(') Ver Digesto Administrativo n° 505.-
(") Ver Digesto Administrativo n° 254.-
(=) Ver Digesto Administrativo n° 1.156.-

b) El sumariante y/o los funcionarios competentes para disponer el levantamiento de la suspensión, que no lo hicieren dentro del plazo establecido, serán responsables - tanto en el orden disciplinario como en el civil de los - perjuicios que se ocasionen, para cuya determinación se dará intervención al Tribunal de Cuentas de la Nación.

c) En los casos en que el personal fuera sancionado - con exoneración o cesantía, no tendrá derecho a la percepción de los haberes correspondientes al lapso durante el cual permaneció suspendido".

II. Cuando el agente se encontrare privado de libertad o se hubiera dictado en su contra acto firme de prisión - preventiva en causa por delito no culposo, por hechos ajenos o no al servicio, será suspendido preventivamente en - su cargo administrativo, con sujeción a las siguientes normas:

a) La suspensión durará, en el primer caso, hasta que el agente recobre la libertad, debiendo reintegrarse al - servicio, sin mora, al término de su detención.

b) En el caso de que se disponga auto firme de prisión preventiva contra un agente, y éste obtenga resolución definitiva en la pertinente causa criminal, su reintegro al servicio o separación definitiva del mismo se resolverá en base a los resultados de dicha causa, según si de ella surge una conducta que merezca sanción en el orden administrativo en resguardo del decoro y prestigio de la Administración Pública, a cuyos efectos el agente deberá presentar - testimonio de la sentencia firme que se dicte.

c) Cuando el proceso se hubiera originado en hechos - del servicio o imputables al mismo, el reintegro del causante al servicio o su separación, quedarán supeditados, asimismo, al resultado de la causa administrativa incoada.

d) En el caso de que en la causa administrativa se impusiera al agente una sanción expulsiva, la suspensión preventiva cesará al dictarse el acto administrativo que disponga la baja, aún cuando esté pendiente la causa criminal.

III. Los agentes sometidos a proceso por delito culposo, que hubieran obtenido excarcelación bajo fianza, -así en los casos de procesos por causas del servicio o imputables al mismo, como en los de procesos por hechos ajenos al servicio-, podrán reintegrarse a sus tareas al recobrar su libertad, sin perjuicio de la resolución que corresponda adoptar en su oportunidad como consecuencia de la sentencia definitiva que se dicte en las causas judiciales y/o administrativas.

IV. El pago de haberes por el lapso de la suspensión se ajustará a los siguientes recaudos:

a) Tratándose de procesos por hechos ajenos al servicio, el agente no tendrá derecho a pago alguno de haberes, cualquiera sea el resultado del pronunciamiento judicial.

b) En caso de procesos por hechos del servicio o imputables al mismo, el agente tendrá derecho a la percepción de los haberes devengados durante el lapso de la suspensión sólo si en la respectiva causa administrativa no resultara sancionado. Si en ésta se aplicara una sanción menor, no expulsiva, los haberes le serán abonados en la proporción correspondiente, y si la sanción fuera expulsiva (cesantía, exoneneración) no le serán abonados".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino
Ramón C. Lequerica.-

ACTO: DECRETO Nº 3.594/63.-

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SERVICIO EXTERIOR - CONCURSOS

Buenos Aires, 9 de mayo de 1963.-

Visto el Expediente nº 168.910/62; y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7º del Decreto nº 11.806/62; se resolvió la situación presupuestaria y de revista del personal del Servicio Exterior, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio, mediante la fijación de un régimen especial que importa su exclusión del Estatuto para el Personal Civil de la Administración Nacional, aprobabo por Decreto-Ley nº 6.666/57 (º);

Que como consecuencia de dicha medida el personal afectado a ese Servicio, ha quedado fuera del ámbito de aplicación del Escalafón (Decreto nº 9.530/58) y por consiguiente de intervenir en los concursos que se realicen en la mencionada Secretaría de Estado, para cubertura de cargos previstos en su estructura funcional;

Que de acuerdo con el régimen establecido por el Decreto nº 15.900/48 y complementarios todos los agentes escalafonados de la Secretaría de Estado de Comercio,que reúnan las condiciones establecidas, pueden ingresar al

//.

(º) Ver Digesto Administrativo nº 254.-

Servicio Económico Comercial Exterior, siendo por lo tanto equitativo que el personal incorporado a dicho Servicio tenga las mismas posibilidades para participar en los concursos circunscriptos a la mencionada Secretaría de Estado;

Que dado las características especiales del caso, nada obsta para establecer una norma de excepción que contemple la situación expuesta, máxime si se tiene en cuenta que en su mayoría los funcionarios que integran el citado Servicio, han desempeñado cargos de importancia dentro de la Secretaría de Estado de Comercio y de la Administración Pública;

Que a tales efectos se hace necesario determinar las equivalencias de los cargos del Servicio Exterior, con los previstos en el Escalafón para poder intervenir en los concursos;

Por ello, atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado de Comercio y a la conformidad prestada por la Secretaría de Estado de Hacienda en función de lo establecido por el Decreto- Ley nº 797/58 (¹) y Artículo 13º del Decreto nº 9.530/58,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Considérese comprendido en lo establecido en el Punto 1º - Capítulo I, del cuerpo de disposiciones que constituyen el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública, aprobado por Decreto nº 9.530/58, al personal del Servicio Exterior, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio, incorporado al régimen fijado por el artículo 7º del Decreto nº 11.806/62, al solo efecto de su participación en los concursos que se relacionen en la mencionada Secretaría de Estado.

(¹) Ver Digesto Administrativo nº 419.-

ARTICULO 2ª.- El personal a que se refiere el artículo anterior, tendrá derecho a intervenir en los concursos circunscriptos a la Secretaría de Estado de Comercio, conforme a las disposiciones contenidas en el Escalafón, aprobado por Decreto nº 9.530/58 y complementarios, para lo cual se determina a continuación las equivalencias de los cargos previstos en el citado Escalafón, con los asignados para el Servicio Exterior:

Consejero Económico de 1a.	-	Clase "A" Grupo IV
Consejero Económico de 2a.	-	Clase "A" Grupo V
Agregado Económico y Comercial	-	Clase "B" Grupo I

ARTICULO 3ª.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Comercio.

ARTICULO 4ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino
Juan B. Martín - Ramón C. Lequerica

ACTO: Cde. EXPEDIENTE Nº 50.018/63.-

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 28º) - TITULOS - CONTRATADOS

Providencia nº 202/63.-

A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION:

Asunto: Bonificación por título a personal contratado.

Opinión de esta Dirección General:

Se devuelve lo actuado señalando que esta Dirección General considera que no procede hacer extensiva la aplicación del Decreto nº 13.470/62 (") al personal contratado, por cuanto interpreta que las retribuciones al mismo deben ajustarse estrictamente a las estipulaciones contractuales respectivas.

Dése a la presente carácter de atenta nota de envío.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 30/1/63

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(") Ver Digesto Administrativo nº 1833.-

ACTO: Cde. EXPEDIENTE Nº 39.072/63.-

MATERIAS: ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SUBSIDIO FAMILIAR

Providencia nº 394/63.-

A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION:

Asunto: Consulta relativa al procedimiento a seguir en la liquidación de subsidio familiar a personal transitorio.

Disposiciones de aplicación: Decretos nros. 4.631/59 (") y 1.839/61 (').-

Opinión de esta Dirección General:

En el Apartado XII de las normas complementarias del Punto 26º del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobadas por Decreto nº 4.631/59, se determinó que el reconocimiento del beneficio que acuerda esa cláusula será considerado a partir del momento de la presentación de la respectiva declaración jurada, y su liquidación se hará con efecto al 1º del mes siguiente al de la fecha de presentada aquélla.

El Decreto nº 1.839/61, por el cual se hizo extensivo el subsidio familiar al personal transitorio, estableció que ello debería concretarse en "iguales condiciones" que las fijadas para el personal estable, vale decir que no se impuso en la emergencia ningún requisito de carácter especial.

(") Ver Digesto Administrativo nº 738.-
(') Ver Digesto Administrativo nº 1360.-

//..

En consecuencia interpreta esta Dirección General, con respecto al interrogante planteado a fs. 1 por la Casa de Moneda, que procede aplicar en la liquidación al personal transitorio de la asignación de que se trata, el procedimiento fijado en la aludida cláusula, como así también ajustar el trámite en todos sus aspectos a las normas que integran con ésta, el ordenamiento normativo aprobado por el decreto nº 4.631/59, precedentemente citado.

Sirva la presente de atenta nota de devolución.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 30/4/63.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

ACTO: DECRETO-LEY N° 3.599/63.-

MATERIA: ASOCIACIONES PROFESIONALES

Buenos Aires, 9 de mayo de 1963.-

Visto lo establecido por el artículo 54 de la Ley 14.455(+) lo informado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y

CONSIDERANDO:

Que el texto legal citado atribuye autoridad de cosa juzgada a los pronunciamientos del Consejo Nacional de Relaciones Profesionales, instituido por los artículos 47 y siguientes de la ley de referencia;

Que la norma mencionada debe ser modificada en forma tal que asegure el debido contralor judicial de las decisiones del Consejo relativo al juzgamiento de los hechos o actos denunciados como prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo;

Que la medida halla fundamento en el criterio expuesto por el más alto tribunal de la República a propósito de organismos de índole similar al que es materia del presente; en la orientación fijada en textos de convenios y recomendaciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y en proyectos de leyes que merecieron en su oportunidad consideración parcial por el Honorable Congreso de la Nación; //.

(+) Ver Digesto Administrativo n° 608.-

Que a fin de consagrar más acabadamente la garantía que se otorga a las partes intervinientes con la revisión judicial aludida, corresponde fijar un término dentro del cual el Consejo deba necesariamente expedirse, extremo no contemplado en la norma hasta ahora vigente;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el artículo 54 de la ley número 14.455, por el siguiente:

"Art. 54.- Producida la prueba, el Consejo dictará, dentro de los sesenta días, resolución fundada a simple mayoría de votos de sus integrantes.

Las resoluciones del Consejo será apelables dentro de las 48 horas de su notificación, por ante la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo de la Capital Federal, debiendo sustanciarse el recurso de acuerdo a los artículos 98 y siguientes del Decreto-Ley número 32.347/44 (Ley nº 12.948).

Las multas deberán ser satisfechas dentro de las 48 horas de quedar firme la decisión que las impusiera, y, en caso de no hacerse efectivas, se ordenará la clausura del establecimiento, hasta tanto se deposite el importe correspondiente".

ARTICULO 2º.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, de Defensa Nacional y de Trabajo y Seguridad Social.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Enrique Rauch - José M. Astigueta - Rodolfo G. Martelli.-

ACTO: DECRETO Nº 3.681/63.-

MATERIA: DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL

Buenos Aires, 10 de mayo de 1963.-

Visto el decreto nº 1.357/62 (*), que determina el régimen de funcionamiento de la Dirección General de Obra Social de la Secretaría de Hacienda y atento que resulta necesario ampliar sus disposiciones en materia de reemplazos de los cargos titulares del Consejo de Administración de la dependencia, con el objeto de asegurar la continuidad de funcionamiento del Cuerpo ante ausencias imprevistas de sus miembros, situación ésta que el ordenamiento vigente no ha previsto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el texto del apartado IV) del artículo 4º del decreto nº 1.357/62, que quedará redactado en la siguiente forma:

"Artículo 4º.- ... IV) por sorteo que realizará el "Consejo de Administración, se asignará a los Voca- "les Suplentes el orden de prelación para el reem- "plazo de los Vocales Titulares, en caso de vacancia "temporaria o definitiva del cargo de éstos. En los "reemplazos, deberá conservarse la proporción esta- "blecida en el presente y su duración quedará limi-

///..

(*) Ver Digesto Administrativo nº 1581.-

"tada hasta el reintegro del Titular en el primer caso, "o hasta el vencimiento del mandato del Titular en el "segundo caso. Cuando el titular no pueda asistir a una "o más sesiones, será reemplazado automáticamente por el "respectivo Suplente con los mismos deberes y atribucio "nes. No obstante el término de mandato fijado en el a- "partado II), los Vocales continuarán en su función has "ta la designación de quienes habrán de sustituirlos, en "el caso de que al vencimiento no se hubieran substan- "ciado las nuevas designaciones; pero solamente hasta "un período máximo adicional de tres (3) meses".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda a sus efectos.-

GUIDO - Eustaquio Méndez Delfino Ramón C. Lequerica.-

ACTO: DECRETO-LEY Nº 3.818/63.-

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - FONDO DE ESTIMULO

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963.-

Visto que la Ley de Aduanas 14.792, T.O. en 1959(+), en su artículo 204, varió la anterior redacción del citado artículo en el Texto Ordenado en 1956;

Que esa variación elevó el porcentaje de distribución destinado al Fondo Estímulo, de un 25% a un 50% y al mismo tiempo, suprimió del texto los términos..."cuya distribución reglamentará el Poder Ejecutivo"...;

CONSIDERANDO:

Que dicha notificación motivó la existencia de un solo Fondo de Estímulo: el perteneciente a la Dirección Nacional de Aduanas, al cual ingresan en la actualidad los porcentajes correspondientes de los procedimientos realizados por el personal de esta Institución y el de las Fuerzas Nacionales de Seguridad;

Que esta situación se mantiene en el artículado de la Ley de Aduanas T.O. en 1962, alterando el equilibrio de los beneficios que el régimen legal debe proporcionar al personal de la Dirección Nacional de Aduanas y de las Fuerzas Nacionales de Seguridad que interviene en la represión del delito de contrabando;

Por ello,

(+) Ver Digesto Administrativo nº 900.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- A partir de la fecha de publicación del presente decreto-ley, el 50% del importe de los comisos y multas a que se refiere el artículo 204, inciso a), de la Ley de Aduanas (T.O.) en 1962, será destinado al fondo de estímulo de la Dirección Nacional de Aduanas, excepto que el denunciante y aprehensor que resulten adjudicatarios de la cuota parte establecida en el inciso b) de dicha disposición legal pertenezcan a organismos con funciones policiales nacionales, independientes de la Dirección Nacional nombrada, en cuyo caso ingresará a esas dependencias para ser distribuido proporcionalmente a su personal o a instituciones de bien común que lo agrupen.

ARTICULO 2º.- Si en un mismo caso existieran denunciantes y aprehensores pertenecientes a una o más reparticiones oficiales nacionales, aduaneras o policiales nacionales, dicho 50% será distribuido entre éstas en proporción al beneficio reconocido a sus agentes.

ARTICULO 3º.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior, Defensa Nacional y Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Osiris G. Villegas - Eustaquio A. Méndez Delfino
José M. Astigueta - Ramón C. Lequerica.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD y ADMINISTRACION - Dpto. de Secretaría -

ACTO: DECRETO - LEY Nº 4.787/63.-

MATERIAS: SERVICIOS CALIFICADOS - DEDICACION FUNCIONAL RESPONSABILIDAD JERARQUICA - PREMIO POR ASISTENCIA - BONIFICACIONES ESPECIALES - DEDICACION PROFESIONAL O TECNICA EXCLUSIVA - PRIMA DE PRODUCCION

Buenos Aires, 14 de junio de 1963.-

Vista la política financiera de contención de los gastos públicos; y

CONSIDERANDO:

Que ella está basada en exigencias ineludibles de orden financiero cuyo estricto cumplimiento permitirá el saneamiento y reactivación de la economía nacional;

Que pasado ya más de la mitad del ejercicio 1962/1963, resulta aconsejable contemplar la situación de ciertos sectores de la administración nacional, cuyos agentes vienen siendo retribuídos sin ajustes y mejoras en los últimos años, frente a otros que por diversos motivos derivados de las posibilidades de financiación o forma en que se atienden las erogaciones de las dependencias o entidades a que pertenecen, han podido ser mejorados en mayor o menor medida;

Que sin perjuicio de reiterar el propósito y obje-

//-

tivos del decreto Nº 1.050/63 (¹), razones de justicia equidad imponen una obligada reconsideración de casos que hasta la fecha han sido postergados a fin de determinar aquellos que resulte indispensable ajustar a efectos de igualarlos con las retribuciones acordadas a los que se atienden con similar financiación;

Que no obstante, los ajustes posibles deben efectuarse sin alterar el monto del presupuesto ni dicho espíritu de contención en los gastos públicos;

Que esta actitud no debe en ningún caso afectar la preocupación principal del Gobierno de la Nación de cumplir con toda exactitud los planes de pagos de sueldos y jubilaciones que diera a publicidad el Ministerio de Economía, para lo cual es preciso no recargar con grandes obligaciones de caja las erogaciones a efectuar a cuyo efecto deben limitarse las mismas a la suma de 300 millones de pesos mensuales.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- El personal de los organismos comprendidos en los alcances de los decretos Nros. 11.720 (¹¹), 11.824, 11.843, 11.848, 11.849, 11.856, 11.878, 11.879, 11.880 y 11.881/62 y el de los Ministerios de Defensa Nacional, Educación y Justicia y Trabajo y Seguridad Social incluído en el régimen escalafonario aprobado por decreto Nº 9.530/58, percibirá a partir del 15 de junio de 1963, los importes mensuales que se detallan en planilla anexa, que forma parte integrante del presente decreto.

ARTICULO 2º.- El personal comprendido en el Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas, percibirá, a partir del 15 de junio de 1963, los importes mensuales que se detallan en las planillas anexas respectivas, que forman parte integrante del presente decreto.

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1852.-

(¹¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1788.-

ARTICULO 3º.- Los importes a que se refieren los artículos 1º y 2º incrementarán las actuales retribuciones en los conceptos que en cada caso se indican.

ARTICULO 4º.- Las modificaciones presupuestarias a que dé lugar la aplicación del presente decreto, deberán realizarse dentro de los totales fijados en el presupuesto para el ejercicio 1962/1963, aprobado por decreto-ley Nº 10.582/62 (º).

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos del Interior, de Defensa Nacional, de Economía y de Educación y Justicia y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Guerra, de Marina y de Aeronáutica.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - Osiris G. Villegas - José M. Astigueta - José A. Martínez de Hoz - José M. Astigueta - Eduardo Tiscornia Héctor A. Repetto - Carlos F. Kolungia - Eduardo F. Mc Loughlin.

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 1776.-

Planilla anexa al art. 1º.-

HORARIO DE 45 HORAS SEMANALES (9 HORAS DIARIAS)

DEDICACION FUNCIONAL

Clase A - Grupo I	m$n. 6.600
Clase A - Grupo II	m$n. 6.000
Clase A - Grupo III	m$n. 5.700
Clase A - Grupo IV	m$n. 5.400
Clase A - Grupo V	m$n. 5.000
Clase B - Grupo I	m$n. 4.900
Clase B - Grupo II	m$n. 4.400

HORARIO DE 35 HORAS SEMANALES (7 HORAS DIARIAS)

(A).- RESPONSABILIDAD JERARQUICA

Clase A - Grupo I	m$n. 6.000
Clase A - Grupo II	m$n. 5.350
Clase A - Grupo III	m$n. 5.100
Clase A - Grupo IV	m$n. 4.800
Clase A - Grupo V	m$n. 4.350
Clase B - Grupo I	m$n. 3.700
Clase B - Grupo II	m$n. 3.350
Clase B - Grupo III	m$n. 3.000
Clase B - Grupo IV	m$n. 2.750

Clase B - Grupo V	m$n. 2.450
Clase B - Grupo VI	m$n. 2.250
Clase B - Grupo VII	m$n. 2.050
Clase B - Grupo VIII	m$n. 1.800
Clase C - Grupo I	m$n. 3.050
Clase C - Grupo II	m$n. 2.750
Clase C - Grupo III	m$n. 2.350

(B).- BONIFICACION ESPECIAL

Clase D - Grupo I	m$n. 2.400
Clase D - Grupo II	m$n. 2.250
Clase D - Grupo III	m$n. 2.150
Clase D - Grupo IV	m$n. 2.100
Clase D - Grupo V	m$n. 2.050
Clase D - Grupo VI	m$n. 2.000
Clase D - Grupo VII	m$n. 1.950
Clase D - Grupo VIII	m$n. 1.850
Subgrupo	m$n. 950
Clase E - Grupo I	m$n. 2.900
Clase E - Grupo II	m$n. 2.650
Clase E - Grupo III	m$n. 2.400
Clase E - Grupo IV	m$n. 2.150
Clase E - Grupo V	m$n. 2.050

Clase E - Grupo VI	m$n. 1.950
Clase E - Grupo VII	m$n. 1.900
Clase E - Grupo VIII	m$n. 1.850
Subgrupo	m$n. 900
Clase F - Grupo I	m$n. 2.400
Clase F - Grupo II	m$n. 2.250
Clase F - Grupo III	m$n. 2.150
Clase F - Grupo IV	m$n. 2.050
Clase F - Grupo V	m$n. 1.950
Clase F - Grupo VI	m$n. 1.850
Subgrupo	m$n. 850

HORARIO DE 20 HORAS SEMANALES (4 HORAS DIARIAS)

BONIFICACION ESPECIAL

Clase D - Grupo IX	m$n. 1.800
Clase D - Grupo X	m$n. 1.600
Clase D - Grupo XI	m$n. 1.350
Clase D - Grupo XII	m$n. 1.300

HORARIO DE 17 HORAS 30 MINUTOS SEMANALES (3 HORAS 30' DIARIOS)

RESPONSABILIDAD JERARQUICA

Clase B - Grupo IX	m$n. 2.200
Clase B - Grupo X	m$n. 2.000
Clase B - Grupo XI	m$n. 1.800

Clase B - Grupo	XII	m$n. 1.650
Clase B - Grupo	XIII	m$n. 1.500
Clase C - Grupo	IV	m$n. 2.000
Clase C - Grupo	V	m$n. 1.950
Clase C - Grupo	VI	m$n. 1.450

BONIFICACION ESPECIAL

Clase D - Grupo	XIII	m$n. 1.400
Clase D - Grupo	XIV	m$n. 1.300
Clase D - Grupo	XV	m$n. 1.250
Clase D - Grupo	XVII	m$n. 1.100
Clase D - Grupo	XVIII	m$n. 1.000

HORARIO DE 15 HORAS SEMANALES (3 HORAS DIARIAS)

BONIFICACION ESPECIAL

Clase D - Grupo	XXI	m$n. 1.300
Clase D - Grupo	XXIII	m$n. 1.100
Clase D - Grupo	XXIV	m$n. 900
Clase D - Grupo	XV	m$n. 800

UNICAMENTE PARA PERSONAL QUE CUMPLA HORARIO DE 45 HORAS SEMANALES (9 HORAS DIARIAS)

SERVICIO CALIFICADO

Clase A - Grupo	I	m$n. 3.000

Clase A - Grupo	II	m$n. 2.250
Clase A - Grupo	III	m$n. 2.050
Clase A - Grupo	IV	m$n. 1.950
Clase A - Grupo	V	m$n. 1.450

Planilla anexa al artículo 2ª.-

CARRERA	CLASE	IMPORTE MENSUAL M$N.
HORARIO DE 45 HORAS SEMANALES (9 HORAS DIARIAS)		
DEDICACION FUNCIONAL		
Superior	I	5.400
	II	4.500
HORARIO DE 35 HORAS SEMANALES (7 HORAS DIARIAS)		
Superior	I	4.500
	II	3.600
Universitario	I	3.400
	II	3.000
	III	2.600
	IV	2.200
Ventas	I	3.100
	II	2.400

CARRERA	CLASE	IMPORTE MENSUAL M$N.
SUPLEMENTO DE NORMALIZACION DE ESCALAFONES		
Técnico	Esp.	2.850
	I	2.500
	II	2.350
	III	2.100
	IV	1.000
Aeronavegante	I	2.850
	II	2.500
	III	2.350
	IV	2.200
	V	2.100
	VI	1.900
Administrativo	I	2.350
	II	2.150
	III	1.900
	IV	1.000
Ventas	III	1.900
	IV	1.900
	V	1.000
Sastrerías	I	2.550
	II	2.400
	III	2.350
	IV	2.100
	V	1.900

CARRERA	CLASE	IMPORTE MENSUAL M$N.
Producción y Mantenimiento	I	2.550
	II Of.	2.350
	II ½ Of.	2.200
	III Of.	2.350
	III ½ Of.	2.100
	IV	1.900
	V	1.850
	VI	950
	VII	850
Servicios	I	2.250
	II	2.100
	III	1.900
	IV	1.900
	V	1.850
	VI	850

HORARIO DE 20 HORAS SEMANALES (4 HORAS DIARIAS)

RESPONSABILIDAD JERARQUICA

Universitario	I_1	2.050
	II_1	1.800
	III_1	1.550
	IV_1	1.350

ACTO: RESOLUCION INTERNA Nº 1.843/63.-

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - CONSEJO DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Buenos Aires, 20 de mayo de 1963.-

Visto que por el punto sexto de la Resolución Interna Nº 1.766 (') (I.I.) se dispuso que las oficinas actuantes en procedimientos vinculados con el decreto Nº 5.426/62 ("), modificado por el Nº 7.713/62 (°), sobre represión del contrabando, deben comunicar semanalmente a la Dirección de Fiscalización los procedimientos efectuados; y

CONSIDERANDO:

Que tal comunicación tiene por exclusivo objeto la centralización de los resultados de esos procedimientos, con el único fin de suministrar informaciones que puedan solicitarse para la mejor orientación de la fiscalización;

Que esa comunicación semanal recarga considerablemente las tareas de las oficinas intervinientes, situación que puede subsanarse disponiendo que la misma sea mensual, sin que ello signifique alterar el fin propues

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1679.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1651.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1699.-

//-

to;

Por ello, atento a lo aconsejado por la Dirección de Fiscalización y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos séptimo y octavo de la Ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones),

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION

GENERAL IMPOSITIVA, RESUELVE:

1°.- Modifícase el punto sexto de la Resolución Interna N° 1.766 (I.I.) en la siguiente forma:

"6°.- Mensualmente las oficinas actuantes de esta Dirección General harán llegar a la Dirección de Fiscalización (Departamento de Impuestos Varios) los nombres de los denunciantes y denunciados e inspeccionados, con sus respectivos domicilios, fecha de las denuncias y en forma escueta los resultados obtenidos en los procedimientos realizados. Oportunamente, por conducto de la Dirección de Fiscalización, se recabará de la Dirección Nacional de Aduanas información en tal sentido".

2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. GREGORIO ANDRES BALLESTEROS.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 3.585/63.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - ECONOMIAS - LIMITACION DE SERVICIOS - CESANTIAS - INDEMNIZACIONES - VACANTES - JUBILACIONES

Buenos Aires, 9 de mayo de 1963.-

Visto el decreto Nº 8.533/61 (¹), modificado e insistido por el decreto Nº 9.677/61 (") dictado en función del artículo 36 de la Ley Nº 15.796 (°), y lo prescripto por el artículo 49 de la Ley Nº 16.432 (=), mediante los cuales se estableció el régimen a que se ajustaría la baja de los agentes titulares de jubilación ordinaria o prestación similar de cuyos servicios deba prescindirse por razones de racionalización administrativa, y

CONSIDERANDO:

Que para el ejercicio de 1961 el artículo 7º del decreto Nº 8.533/61 complementado por el artículo 4º del decreto Nº 9.677/61, determinó que la liquidación de las indemnizaciones y anticipos jubilatorios resultantes se imputarán provisionalmente al disponible de los créditos presupuestarios para "Gastos en Personal";

Que también en 1962 el pago de las indemnizaciones establecidas por el artículo 49 de la Ley Nº 16.432 se

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1458.- //-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1491.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1333.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 1552.-

efectuó con imputación a las disponibilidades crediticias provenientes de las vacantes producidas por la aplicación de dicho artículo;

Que la prosecución en el ejercicio 1963 de los efectos de las medidas aludidas, hace menester mantener el régimen de imputación precedentemente señalado para atender el pago de las erogaciones mencionadas;

Que de no prorrogarse esta imputación provisional, distintos organismos del Estado se ven impedidos de continuar liquidando las indemnizaciones y anticipos jubilatorios consignados, en virtud de lo prescripto por el artículo 5° del Decreto-Ley N° 10.582/62 (s) que no permite comprometer gastos que en el ejercicio de 1962 fueron autorizados para el pago de "ejercicios vencidos" y de los que tuvieran el carácter de "por una sola vez", en cuyas previsiones se contemplaban aquellas erogaciones;

Que hasta tanto se aprueben los ajustes presupuestarios correspondientes para los distintos organismos del Estado, es necesario posibilitar la continuidad del pago respectivo;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1°.- Autorízase a los Organismos del Estado (Administración Central; Servicio de Cuentas Especiales; Organismos Descentralizados; Obras Sociales; Empresas del Estado y Plan de Trabajos Públicos) para imputar provisionalmente al disponible de los créditos presupuestarios del ejercicio 1963, las erogaciones resultantes de la aplicación del decreto N° 8.533/61, modificado e insistido por el decreto N° 9.677/61 y del artículo 49 de la Ley N° 16.432, hasta tanto se aprueben los ordenamientos integrales de presupuesto correspondientes a las distintas jurisdicciones del Estado, en donde deberán incluirse los créditos correspondientes para atender dicho gasto.

(s) Ver Digesto Administrativo N° 1776.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, del Interior y de Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y previo conocimiento del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación, archívese en la Secretaría de Estado de Hacienda.-

GUIDO - Eustaquio A.Méndez Delfino - Enrique Rauch - José M.Astigueta - Ramón C.Lequerica.

ACTO: DECRETO Nº 3.823/63.-

MATERIAS: TRIBUNAL FISCAL - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SERVICIOS CALIFICADOS - DEDICACION FUNCIONAL- RESPONSABILIDAD JERARQUICA - BONIFICACION ESPECIAL - SUBSIDIO FAMILIAR - BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD - LICENCIAS - PROHIBICIONES - PROMOCIONES

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963.-

Visto lo dispuesto por el Título II de la Ley número 11.683 (t.o. en 1960), y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 120º de la citada ley se equiparan las remuneraciones de los miembros del Tribunal Fiscal de la Nación a las de los Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal;

Que dicha norma legal no ha previsto la situación de los Secretarios, Prosecretario y demás funcionarios y empleados de ese organismo;

Que por decreto Nº 4.579/60 dichos agentes quedaron excluídos expresamente del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y del Escalafón General;

Que en virtud de esta disposición no les alcanzaron los beneficios estatuídos por los decretos número -

//-

9.252/60 (°) y 7.920/61 (");

Que razones de buen ordenamiento administrativo aconsejan establecer el régimen a que estarán sujetos los Secretarios, Prosecretario y demás funcionarios y agentes del citado Tribunal;

Que la estructura del Tribunal Fiscal de la Nación, atento a la naturaleza de sus funciones de tipo jurisdiccional, no se adapta a la de una repartición de tipo administrativo, lo que hace necesario mantener la organización vigente, como así también dotar a su personal de un escalafón especial, que le permita asegurar su normal funcionamiento;

Que ello no obsta que al establecerse un régimen propio para los citados agentes se fije la equiparación de sus actuales jerarquías y remuneraciones con las similares previstas por el Escalafón General, aprobado por decreto Nº9530/58;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébase un escalafón especial para los Secretarios, Prosecretario y demás funcionarios y agentes del Tribunal Fiscal de la Nación, en la forma dispuesta en los artículos siguientes:

ARTICULO 2º.- Establécese la siguiente equiparación de jerarquías de los Secretarios, Prosecretario y demás funcionarios y agentes del Tribunal Fiscal de la Nación con respecto a las fijadas por el Escalafón General aprobado por decreto 9.530/58:

Designación en el Tribunal Fiscal	Clase y Grupo del Escalafón General
Secretario	A I
Prosecretario	A II

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1216.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1442.-

Designación en el Tribunal Fiscal	Clase y Grupo del Escalafón General	
Oficial Mayor	A	IV
Oficial	B	III
Oficial Principal de 2da.	B	IV
Oficial Principal de 7a.	D	I
Oficial de 1a.	D	II
Oficial de 7a.	D	IV
Oficial de 9a.	F	III

ARTICULO 3º.- Declárase de aplicación para el Personal del Tribunal Fiscal de la Nación el régimen de compensaciones - por "Servicios calificados", "Dedicación funcional", "Res - ponsabilidad jerárquica" y "Premio por asistencia", estatuido por el decreto Nº 9.252/60 y "Bonificación especial", fijada por el decreto Nº 7.920/61, como así también los beneficios que se acordaren en el futuro para el Personal de la Secretaría de Estado de Hacienda -en cuya jurisdicción presupuestaria figura el Tribunal Fiscal de la Nación- a fin de mantener en forma permanente la equiparación de remuneraciones acorde con lo dispuesto en el artículo 2º del presente decreto.

ARTICULO 4º.- En los casos en que los básicos asignados actualmente al personal del Tribunal Fiscal de la Nación sean superiores a los vigentes en la correlativa jerarquía del - Escalafón General, aprobada por el artículo 2º, los beneficios adicionales previstos en el artículo precedente se liquidarán en forma tal que la remuneración total alcance los montos que, por todo concepto, perciben los agentes comprendidos en dicho Escalafón General.

ARTICULO 5º.- Asígnase al personal del Tribunal Fiscal de la Nación los beneficios del subsidio familiar y bonificación por títulos habilitantes otorgados por los artículos - 26º y 28º del Escalafón General (Decreto Nº 9.530/58) o los que se fijaren en el futuro para estos conceptos.

ARTICULO 6º.- A los efectos de la determinación de la boni-

ficación por antigüedad que percibirán los agentes del Tribunal Fiscal de la Nación se aplicará el procedimiento previsto por el artículo 52 y complementarios del Escalafón General.

ARTICULO 7º.- Determínase que para ejercer el cargo de Secretario del Tribunal Fiscal, se requerirá ser argentino y poseer título de abogado, exceptuándose por esta única vez de dichos requisitos a los funcionarios que actualmente lo desempeñan.

ARTICULO 8º.- Los Secretarios del Tribunal Fiscal de la Nación no podrán ejercer el comercio, realizar actividades políticas o cualquier actividad profesional, salvo que se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres o de los hijos, ni desempeñar empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios o la docencia.

ARTICULO 9º.- El personal del Tribunal Fiscal de la Nación, cualquiera sea su jerarquía, no podrá ejercer ninguna actividad profesional.

ARTICULO 10.- Las promociones del personal serán propuestas por el Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Estado de Hacienda.

ARTICULO 11.- El régimen de designaciones en el organismo y concesión de licencias se regirá por lo dispuesto en los apartados a) y b), artículo 125 de la Ley Nº 11.683 (t.o.en 1960).

ARTICULO 12.- La Secretaría de Estado de Hacienda efectuará las modificaciones presupuestarias que fuere menester para incorporar los créditos y partidas mediante los cuales se atenderá la liquidación y pago de las nuevas remuneraciones emergentes de lo dispuesto por el presente decreto.

ARTICULO 13.- La aplicación de las modificaciones en las retribuciones del personal del Tribunal Fiscal de la Nación

que se deriven como consecuencia de lo dispuesto por el presente decreto, queda condicionada a la oportunidad en que las normas legales o reglamentarias lo permitan.

ARTICULO 14.- Derógase toda disposición que se oponga al presente decreto.

ARTICULO 15.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 16.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - Eustaquio A.Méndez Delfino
Ramón C. Lequerica.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 3.877/63.-

MATERIAS: REPRESENTANTES EN JUICIO - DEMANDAS - PATROCINIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - DIFERENDO ENTRE REPARTICIONES Y ORGANISMOS DEL ESTADO

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963.-

Visto que la Ley 16.432 (art. 56) (') determina el procedimiento y las autoridades que han de resolver las reclamaciones por daños y perjuicios entre organismos administrativos del Estado Nacional e incluída la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y

CONSIDERANDO:

Que por tratarse de una ley anual de presupuesto, su vigencia está limitada en el tiempo, mientras que la materia reglada en el citado artículo requiere una solución permanente;

Que por lo tanto se hace necesario el dictado de una disposición especial que posibilite sin duda alguna la continuación de esa norma,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- No habrá lugar a reclamación por daños y perjuicios entre organismos administrativos del Estado //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1555.-

Nacional, centralizados y/o descentralizados, incluídas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto presupuesto de los daños y perjuicios no sea mayor a - $ 20.000 (veinte mil pesos). Cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de $ 1.000.000 (un millón de pesos)y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se someterá a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación; la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes fijado. El Poder Ejecutivo podrá elevar los montos fijados en este artículo cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable por razones de economía y expedición administrativa.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior, de Defensa Nacional y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Osiris G. Villegas - José M. Astigueta - Eustaquio A. Méndez Delfino - Ramón C. Lequerica.



ACTO: DECRETO Nº 3.893/63.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - CANCELACION - DEUDAS - PAGOS - ORDENES DE DISPOSICION - LIBRAMIENTOS

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que es conveniente extender la utilización de los "Certificados de Cancelación de Deudas", emitidos en virtud de los decretos Nros. 4.898/61 (¹), 4.530/62 (²), 8.565/62 (°) y 13.996/62 (=), al pago del impuesto de emergencia 1962/64;

Que la exclusión de dicho gravámen del pago con certificados carece de justificación y su eliminación obedece a la circunstancia de tratarse de un impuesto creado con posterioridad al régimen general de pagos con certificados de cancelación de deudas;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los Certificados de Cancelación de Deudas, cuya emisión ha sido dispuesta en virtud de los decretos Nros. 4.898/61. 4.530/62, 8.565/62 y 13.996 / //-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1482.-
(²) Ver Digesto Administrativo Nº 1636.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1711.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 1837.-

62, serán aceptados por el Gobierno Nacional en pago del impuesto de emergencia 1962/64, hasta el 70 por ciento del monto de la obligación, debiendo atenderse en efectivo por lo menos el 30 % de la misma.

El pago del citado impuesto en la forma indicada precedentemente podrá realizarse hasta el 31 de octubre de 1963, fecha en que caducarán los "Certificados de Cancelación de Deudas".

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a sus efectos a la Tesorería General de la Nación.-

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino - Ramón C. Lequerica.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 4.322/63.-

MATERIA: FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINIS - TRATIVAS

Buenos Aires, 28 de mayo de 1963.-

Visto lo dispuesto en los Decretos - Leyes número 11.265, del 24 de octubre de 1962 (') y Nº 14.096, del 26 de diciembre del mismo año ("), y

CONSIDERANDO:

Que la investigación inmediata de las denuncias que se formulen y que son de la competencia de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, es condición esencial para el eficaz cumplimiento de las tareas que le son propias;

Que, además, la pronta conclusión de los sumarios correspondientes es necesaria para que la opinión general conozca cuanto antes la veracidad o inconsistencia de las denuncias que de continuo se formulan en forma pública;

Que el aumento permanente de la dotación actual de los integrantes de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para atender con la mayor urgencia el despacho de las investigaciones que se promueven actualmente, podría ser innecesario en el futuro con imú-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1781.- //-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1839.-

62, serán aceptados por el Gobierno Nacional en pago del impuesto de emergencia 1962/64, hasta el 70 por ciento del monto de la obligación, debiendo atenderse en efectivo por lo menos el 30 % de la misma.

El pago del citado impuesto en la forma indicada precedentemente podrá realizarse hasta el 31 de octubre de 1963, fecha en que caducarán los "Certificados de Cancelación de Deudas".

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a sus efectos a la Tesorería General de la Nación.-

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino - Ramón C. Lequerica.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 4.322/63.-

MATERIA: FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINIS - TRATIVAS

Buenos Aires, 28 de mayo de 1963.-

Visto lo dispuesto en los Decretos - Leyes número 11.265, del 24 de octubre de 1962 (°) y Nº 14.096, del 26 de diciembre del mismo año (''), y

CONSIDERANDO:

Que la investigación inmediata de las denuncias que se formulen y que son de la competencia de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, es condición esencial para el eficaz cumplimiento de las tareas que le son propias;

Que, además, la pronta conclusión de los sumarios correspondientes es necesaria para que la opinión general conozca cuanto antes la veracidad o inconsistencia de las denuncias que de continuo se formulan en forma pública;

Que el aumento permanente de la dotación actual de los integrantes de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para atender con la mayor urgencia el despacho de las investigaciones que se promueven actualmente, podría ser innecesario en el futuro con imú-

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1781.- //-

(''') Ver Digesto Administrativo Nº 1839.-

til recargo del presupuesto, razón por la cual es conveniente establecer un procedimiento transitorio para satisfacer la exigencia puntualizada en los considerandos anteriores;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1°.- En los casos en que por el cúmulo de investigaciones en trámite, el Fiscal General de Investigaciones Administrativas lo considerase necesario, podrá delegar, bajo supervisión, la investigación de casos concretos entre fiscales adjuntos ad hoc.

ARTICULO 2°.-La designación de los fiscales adjuntos ad hoc se realizará por sorteo de una lista no menor de diez (10) abogados, que anualmente confeccionará el Fiscal General. Los fiscales adjuntos ad hoc deberán reunir las mismas condiciones que las exigidas para los titulares.

ARTICULO 3°.- Los fiscales adjuntos ad hoc, para el ejercicio de sus funciones, tendrán las mismas atribuciones y responsabilidades que los titulares.

ARTICULO 4°.- Para el cometido de las funciones de los fiscales adjuntos ad hoc, el Fiscal General podrá adscribirles personal regular de la fiscalía o el transitorio que aquél le autorice a contratar.

ARTICULO 5°.- La remuneración del fiscal adjunto ad hoc será regulada por la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, y la del personal eventual por el señor Fiscal General. La remuneración estará a cargo del Tesoro Nacional.

ARTICULO 6°.-El Fiscal General estará también autorizado, cuando la índole de los asuntos lo requieran, a designar peritos o auditores con especial competencia en las materias correspondientes a las investigaciones en trámite, los que serán designados en la misma forma vigente para los peritos designados de oficio por los Tribunales Judi-

ciales, y su remuneración será, igualmente, regulada por la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, a cargo del Tesoro Nacional.

ARTICULO 7º.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, Defensa Nacional y Educación y Justicia.

ARTICULO 8º.- Publíquese, anótese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Osiris G. Villegas - José M. Astigueta - José Mariano Astigueta.

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	N°1919.-

ACTO: DECRETO N° 4.594/63.-

MATERIAS: CANCELACION - DEUDAS - PAGOS - LIBRAMIENTOS

Buenos Aires, 5 de junio de 1963.-

Visto el decreto Nº 3.801/63, por el que se dispone la emisión de los "Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias - 1963", y

CONSIDERANDO:

Que la obtención de los fondos provenientes de la colocación de los citados Bonos habrá de producirse en forma paulatina;

Que, por lo tanto, es conveniente arbitrar los medios necesarios para cancelar desde ahora el mayor monto posible de deudas del Estado con sus proveedores y contratistas, asegurándoles un plan de pagos a corto plazo que les permita planear sobre bases seguras y ciertas su futura actividad;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Autorízase a la Secretaría de Estado de Hacienda para disponer la emisión de "Documentos de Cancelación de Deudas - 1963", a la orden de acreedores del Estado que sean titulares de libramientos a su favor en la Tesorería General de la Nación o liquida-

//-

ciones en situación de pago en los Ministerios, Secretarías de Estado, Entidades Descentralizadas o Empresas del Estado que, a su vez, tengan libramientos de pago o entrega a su disposición en la Tesorería General de la Nación.

ARTICULO 2°.- Los Documentos de Cancelación de Deudas, a que se refiere el artículo anterior, serán entregados, directamente por la Tesorería General de la Nación o con intervención de los organismos respectivos, a los acreedores del Estado que así lo soliciten; no devengarán intereses y podrán ser transferidos por vía de endoso, con arreglo a las normas que se indican más adelante.

ARTICULO 3°.- La Secretaría de Estado de Hacienda, con el acuerdo del Banco Central de la República Argentina y la aprobación del Ministerio de Economía, determinará el monto de la emisión y las normas de procedimiento a que se ajustará la entrega y utilización.

ARTICULO 4°.- Cada emisión constará de tres tipos de "Documentos de Cancelación de Deudas", que se entregarán a los acreedores del Estado en las proporciones que se indican a continuación:

1) Un 50 % en Documentos "A", rescatables en efectivo, nominativos, transferibles por vía de endoso hasta dos veces la segunda indefectiblemente a una entidad bancaria;
2) Un 25 % en Documentos "B", nominativos, que servirán exclusivamente para la regularización de deudas bancarias o para el pago de las obligaciones impositivas en la forma que se indica en el punto 3). En el caso de que estos Documentos se destinen a la regularización de deudas bancarias, sólo serán transferibles a favor de Bancos y, en la medida que los vaya rescatando la Tesorería General de la Nación, su importe se aplicará a la amortización de las citadas deudas, en cuya garantía quedarán afectadas mientras tanto.

   Cuando se los destine al pago de obligaciones impositivas, serán transferibles por endoso sin limitación;
3) Un 25 % en Documentos "C", nominativos, transferibles por vía de endoso sin limitación, que servirán exclusi-

vamente para el pago de las obligaciones impositivas - que se determinen en las normas a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 5º.- Los Documentos "A" y los Documentos "B" que hayan sido aplicados a la regularización de deudas bancarias, serán rescatados por la Tesorería General de la Nación, en efectivo, en doce cuotas mensuales iguales.

ARTICULO 6º.- Los Documentos "B" que hayan sido aplicados al pago de obligaciones impositivas y los Documentos "C", quedarán cancelados en la oportunidad en que por intermedio de las oficinas recaudadoras que corresponda, se apliquen al pago de los respectivos impuestos.

ARTICULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación, pase a la Tesorería General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - José Alfredo Martínez de Hoz (h). - Eduardo B. Tiscornia.

ACTO: DECRETO Nº 4.649/63.-

MATERIAS: INTERVENCIONES FEDERALES - DECLARACIONES JURADAS - PATRIMONIALES

Buenos Aires, 7 de junio de 1963.-

Atento que por decreto Nº 7.843/53 (') se creó, en el Registro del Personal Civil de la Administración Pública, el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales del personal de la Administración Pública, a fin de poner a los funcionarios públicos correctos a resguardo de la difamación y de que por otra parte, llegado el caso facilitará al Poder Administrador la comprobación de las transgresiones en que pudieren incurrir los agentes del Estado, y

CONSIDERANDO:

Que se estima pertinente incluir expresamente en la nómina de funcionarios comprendidos en el artículo 2º del referido decreto a los miembros integrantes de las misiones federales en las provincias,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Quedan comprendidos en el régimen del decreto Nº 7.843, de fecha 4 de mayo de 1953, los siguien //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 126.-

tes miembros integrantes de misiones federales en las provincias; Comisionado Federal, Secretario, Oficial Mayor y Jefe de Despacho.

ARTICULO 2º.- El plazo para la presentación de las declaraciones juradas por parte de los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, será de quince días, computados desde la fecha del presente decreto. En lo sucesivo, dicho plazo se computará a partir de la fecha de su designación por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Osiris G. Villegas.

ACTO: DECRETO Nº 4.723/63.-

MATERIAS: SERVICIO PUBLICO - BOMBEROS VOLUNTARIOS

Buenos Aires, 11 de junio de 1963.-

Visto el expediente Nº 10.757/63, por el que la Policía Federal propicia la modificación de los artículos 5º y 11º del decreto Nº 8.796/61, y

CONSIDERANDO:

Que dictado el decreto Nº 8.796/61, para reglamentar el decreto-ley Nº 1.945/58 (') (ratificado por Ley Nº 14.467) ("), por el que se reconoció el carácter de servicio público a las actividades de los bomberos voluntarios en todo el territorio de la Nación, no se determinó en el mismo la facultad de la Policía Federal de intervenir en la aprobación de las reglamentaciones correspondientes a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios que actúan en la Capital Federal;

Que, evidentemente, la inexistencia de tal contralor no permite asegurar que en las disposiciones reglamentarias se fijen normas que impidan actividades inadecuadas a los miembros de las citadas asociaciones y el uso indebido de sus elementos y material en actos ajenos a sus finalidades específicas;

Por ello y atento lo dictaminado por la Dirección

(') Ver Digesto Administrativo Nº 440.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 609.-

General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícanse los artículos 5º y 11º del decreto Nº 8.796/61, reglamentario del decreto-ley Nº 1945/58 (ratificado por Ley 14.467), los que se considerarán redactados en la forma siguiente:

"Artículo 5º.- Dichas reglamentaciones serán sometidas a la aprobación de la Dirección Defensa Antiaérea Pasiva, exclusivammente a los fines determinados por la Ley de la Defensa Antiaérea Pasiva. Las reglamentaciones correspondientes a Asociaciones que actúan en la Capital Federal, deberán también ser aprobadas por la Jefatura de la Policía Federal, por intermedio de su Dirección Bomberos".

"Artículo 11.- La Federación será responsable de la confección, aprobación, aplicación y modificación de los reglamentos que regulen las actividades de las asociaciones dependientes, previa intervención de la Dirección Defensa Antiaérea Pasiva, en lo atinente al cumplimiento de la Ley de Defensa Antiaérea Pasiva. Tratándose de asociaciones que actúan en la Capital Federal, será previa también la intervención de la Jefatura de la Policía Federal, por intermedio de su Dirección Bomberos".

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Osiris G.Villegas.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 4.867/63.-

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - CONSEJO DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO

Buenos Aires, 16 de junio de 1963.-

Visto lo propuesto por el Consejo de Coordinación para la Prevención y Represión del Contrabando, y

CONSIDERANDO:

Que en la aplicación del decreto 5.426/62 (') se ha comprobado que los expendedores de mercaderías extranjeras en infracción emplean el ardid de mantener cantidades mínimas en sus locales, en prevención de cualquier procedimiento, para así atenuar los efectos de la pena, que se gradúa en función del valor de los efectos en contravención.

Que es conveniente entonces revitalizar la eficacia punitiva del indicado decreto, mediante la imposición de multas mínimas objetivas, que importen una drástica sanción para quienes actúan al margen de la ley obteniendo pingües ganancias, saboteando la industria nacional y defraudando al Fisco.

Por ello,

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1651.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Agrégase al inciso b) del artículo 5º del decreto 5.426/62, modificado por decreto 7.713/62 (*), la siguiente expresión final: "La multa mínima a aplicar en ningún caso será inferior a m$n. 30.000 en la primera infracción y a m$n. 100.000 en las reincidencias".

ARTICULO 2º.- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus efectos.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz -
Osiris G.Villegas - José M.Astigueta
Eduardo B.M. Tiscornia.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1699.-

ACTO: DECRETO Nº 4.825/63.-

MATERIAS: PERSONAL - SUMARIOS - ACCIONES JUDICIALES - ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 34º) - SANCIONES

Buenos Aires, 17 de junio de 1963.-

Visto lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Nº 14.237, modificado por el artículo 22 del decreto-ley Nº 23.398/56, y

CONSIDERANDO:

Que dicho precepto, al reglar la prueba de informes, estableció el plazo de veinte días para su producción por las oficinas públicas;

Que, no obstante, ha podido comprobarse en algunos casos que tales informes no se expiden dentro del plazo legal, circunstancia que provoca demoras en la substanciación de los procesos respectivos con el consiguiente perjuicio para la buena administración de justicia;

Que la misma apreciación corresponde tanto en lo relativo a la prueba de informes cuanto en lo que concierne a otras medidas ordenadas por los magistrados;

Que es un deber del Poder Ejecutivo remover en su esfera los obstáculos que conspiren contra la celeri -

//-

dad de dichos trámites;
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las oficinas públicas deberán dar cumplimiento en el plazo perentorio de veinte días a lo solicitado en los oficios judiciales firmados por los magistrados o secretarios, salvo que disposiciones especiales o una orden judicial establezcan un plazo más breve. La misma exigencia regirá respecto de los suscriptos por letrados patrocinantes en el supuesto del art. 33 de la Ley número 14.237, modificado por el artículo 22 del decreto-ley Nº 23.398/56.

ARTICULO 2º.- Si la respuesta o la documentación requerida no pudieran remitirse al Juzgado en el plazo del artículo anterior, antes de su vencimiento la oficina hará conocer esa circunstancia al juez oficiante, así como las causas de la misma y la fecha en que dará cumplimiento al requerimiento.

ARTICULO 3º.- Los agentes responsables de demoras injustificadas en la tramitación de oficios, se harán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 14.467 (') (Decreto Nº 6.666/57) (''). A tal efecto, se instruirá sumario cada vez que, excedido el plazo para el cumplimiento del oficio, éste sea reiterado.

ARTICULO 4º.- Cada Ministerio reglamentará este decreto en la forma que asegure la mayor agilidad del trámite y la estricta aplicación de sus disposiciones, comunicando al Ministerio de Educación y Justicia el sistema adoptado.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José M.Astigueta.

(') Ver Digesto Administrativo Nº 609.-
('') Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

ACTO: RESOLUCION Nº 12.006/63.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 23º) - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - PERSONAL - RECLAMOS - PROMOCIONES - CAMBIO DE CLASE O GRUPO

Buenos Aires, 5 de junio de 1963.-

Visto el Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional (decreto-ley Nº 6.666/57) (') y el Escalafón conexo (decretos Nros. 9.530/58 y 11.941/59)("), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 10º del Estatuto -reglamentado por los puntos 12º al 22º del Escalafón- se refiere al derecho del agente al cambio de Clase o Grupo;

Que el artículo 22º del mismo texto legal -reglamentado por los puntos 34º al 42º del Escalafón- prevé el derecho a la promoción de categorías, dentro de cada Grupo;

Que el artículo 23º del Estatuto confiere al agente el derecho a interponer reclamos, fundados y documentados, por cuestiones relativas a calificaciones, ascensos, menciones y orden de mérito, los que deben ser re

(') Ver Digesto Administrativo Nº 254.- //-
("") Ver Digesto Administrativo Nº 916.-

sueltos por la Junta de Calificaciones prevista en el artículo 45° del mismo ordenamiento;

Que el caso de cambio de Clase o Grupo no constituye, por propia definición, un ascenso o promoción, estando previsto un régimen especial de reclamos en los puntos 32° apartado VI, y 33°, apartado IV, del referido Escalafón, como reglamentarios del artículo 9° del Estatuto, que se refiere a la carrera del agente;

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación ha solicitado se dicte una norma aclaratoria sobre la cuestión, a efectos de evitar dudas al respecto;

Por ello, y atento las facultades emergentes del Decreto-Ley N° 797/58 (°) y art. 20°, inciso 12°, de la Ley N° 14.439 (=),

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1°.- Aclárase que la interposición de reclamos por cuestiones relativas a "ascensos", prevista en el art. 23° del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional (Decreto-ley N° 6666/57), se refiere siempre a las promociones de categoría, dentro de las Clases y Grupos -según la definición contenida en el art. 9° del mismo cuerpo legal- y debe sustanciarse en base a las normas del art. 45°, reglamentado por los puntos 43° al 50° del Escalafón aprobado por decreto 9530/58.

2°.- Aclárase que la interposición de reclamos por cambio de Clase o Grupo (art. 10° del mismo Estatuto, reglamentado por los puntos 12° al 22° del citado Escalafón), debe hacerse exclusivamente en base a las normas de los puntos 32°, apartado VI, y 33°, apartado IV, del cuerpo escalafonario aprobado por decretos Nros. 9530/58 y 11.941/59, no correspondiendo en estos casos lo previsto en los arts. 23° y 45° del Estatuto del Personal Civil.

3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. EDUARDO B. TISCORNIA

(°) Ver Digesto Administrativo N° 419.-
(=) Ver Digesto Administrativo N° 505.-

ACTO: DECRETO Nº 5.000/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - FONDO DE COMPENSACION

Buenos Aires, 24 de junio de 1963.-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales se gestionan algunas modificaciones al régimen instituído por decreto Nº 7.738/58 (') (Fondo de Compensación) para la Dirección General Impositiva, entre las que se advierte un incremento en los haberes del personal de dicha Dirección, y

CONSIDERANDO:

Que es propósito del Poder Ejecutivo, a cumplirse por intermedio del Ministerio de Economía -Secretaría de Hacienda- el de no acordar mejoras de sueldos a los agentes estatales que actualmente reciben mayores remuneraciones, en tanto no se aumenten aquellas del personal que revista en otros sectores y que por distintas razones percibe una retribución menor;

Que, sin perjuicio de lo expresado, no habría objeciones que formular en caso de modificar solamente el régimen aludido en lo que concierne a la liquidación "a posteriori" del "complemento incentivado" del Fondo, toda vez que con esa medida, además de subsanarse una -

(') Ver Digesto Administrativo Nº 639.-

//-

insuficiencia de dicho sistema, se obtendrá un mejor ordenamiento presupuestal, al disponer la liquidación dentro de cada ejercicio, de las remuneraciones devengadas en el mismo, logrando así un correcto resultado financiero;

Que el tratamiento que se propicia no enerva las aspiraciones del personal en cuanto a la eventual reforma del escalafón de ese organismo ni a la reestructuración del "Fondo de Compensación", los cuales podrían ser considerados cuando la situación económica lo permita y una vez satisfechas las de los sectores postergados que se mencionan más arriba;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- El "Fondo de Compensación por incremento de recaudación" establecido por el artículo 20° del decreto N° 7738/58, se determinará en la siguiente forma:

a) Con una remuneración mínima y permanente integrada por los importes básicos establecidos por el artículo 21° del decreto N° 7738/58, a los que se adicionarán las retribuciones máximas autorizadas por el artículo 2° del decreto N° 11.597/62 (") y que se distribuirá según lo fijado por los incisos a) y b) del artículo 21° del decreto mencionado en primer término.

b) En el caso de que el "Fondo de Compensación" no resultara suficiente para atender el pago al personal de acuerdo con los montos señalados, la diferencia se cubrirá con cargo a rentas generales.

c) El aporte jubilatorio patronal de los emolumentos de que se trata será atendido por el Estado, con cargo a la partida presupuestaria específica.

(") Ver Digesto Administrativo N° 1784.-

d) Sobre las liquidaciones practicadas de acuerdo con lo dispuesto precedentemente, no se efectuarán las deducciones previstas en el decreto Nº 1.254/60 (°) y sus posteriores modificaciones, cuyas disposiciones se mantienen en tanto no se opongan a las que por el presente se establecen.

ARTICULO 2º.- Por conducto de la Secretaría de Estado de Hacienda se incorporará al presupuesto de "Gastos en Personal" de la Dirección General Impositiva, los créditos necesarios para realizar la imputación de las erogaciones a que dé lugar el presente decreto.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz (h.)
Eduardo Tiscornia.

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1132.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Min. de Economía

ACTO: DECRETO LEY Nº 5.602/63.-

MATERIAS: COMISION NACIONAL DE HIPODROMOS - FONDO NACIONAL DE HIPODROMOS Y DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA ESPECIE CABALLAR

Buenos Aires, 10 de julio de 1963.-

Visto el decreto Nº 1.828/63 (') y lo propuesto por la Comisión Nacional de Hipódromos, y

CONSIDERANDO:

Que del asesoramiento producido por la Comisión Nacional de Hipódromos surge la necesidad de concretar soluciones para los problemas reiteradamente expuestos por los sectores que integran la actividad hípica nacional, a la cual están afectados importantes capitales y fuentes de trabajo, en forma directa o a través del comercio e industria íntimamente vinculadas a la misma, que benefician a la economía nacional y que proporcionan divisas por las exportaciones y el turismo que dicha actividad genera, produciendo, asimismo, los hipódromos importantes recursos al Estado y facilitando la obra social;

Que la importancia de la cría del caballo de carrera en su aspecto cualitativo y cuantitativo ha permitido a la República Argentina ocupar un lugar de privilegio que comparte con países cuya producción tiene un

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1860.- //-

origen muy anterior, posición que es un deber mantener mediante un adecuado proceso selectivo en procura de lo que debe constituir la finalidad específica del turf, o sea el mejoramiento de la especie caballar, con el objeto de crear fuentes de recursos para la Nación y contribuir a la Defensa Nacional;

Que la complejidad de la actividad hípica, su característica esencialmente técnica y su importancia económica - justificaron la creación de la Comisión Nacional de Hipódromos para ejercer su conducción integral, asumir las responsabilidades de su orientación, supervisión y control en todo el territorio de la República y asesorar al Poder Ejecutivo en todos los asuntos referentes a la misma;

Que dicha Comisión fué integrada, además de los representantes oficiales, con todas las entidades representativas de los sectores básicos de la actividad vinculada con la crianza del caballo de carrera y el funcionamiento de los hipódromos;

Que los intereses comprometidos en la importante misión encomendada a la Comisión Nacional de Hipódromos, como así las proyecciones que, para beneficio del país, alcanzan los objetivos propuestos, requieren la concurrencia de todos aquellos factores de orden económico, administrativo y técnico que aseguren los medios apropiados para el eficaz desenvolvimiento del organismo;

Que las normas del decreto Nº 1.828/63, con ser amplias, no llegan a satisfacer plenamente el propósito expuesto, toda vez que las mismas se limitan a poner en juego los recursos económicos, técnicos y administrativos de uso ordinario en la esfera de las entidades centralizadas del Poder Administrador;

Que, tal como lo indica su constitución y finalidad, - existen en las características de este organismo, objetivos y funciones que lo particularizan y llevan a tratarlo con arreglo a los principios que rigen el desenvolvimiento de

ciertos entes del Estado que, precisamente en razón de esas circunstancias cuentan con un estatus especial, donde la descentralización o autarquía resultan la solución más apropiada;

Que ello, por otra parte, se ajusta a la política general que ha venido aplicando el Poder Ejecutivo en la organización de sus servicios, conforme modernos métodos de racionalización administrativa;

Que, por otra parte es necesario reconsiderar el curso otorgado por las disposiciones vigentes al producido de ciertos impuestos que gravan el turf a fin de ajustarlo a la nueva organización fijada para esa actividad mediante la creación de la Comisión Nacional de Hipódromos y lograr, al propio tiempo, una conexión más directa y rápida con el destino final de tales gravámenes;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas, que constituyen el régimen legal de la Comisión Nacional de Hipódromos.

ARTICULO 2º.- El producido del impuesto creado por el decreto-ley Nº 18.231/43 (ratificado por la ley Nº 12.922) y el artículo 8º del decreto-ley Nº 4.073/56 -excepto el que se percibe de los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata- se destinará al Fondo Nacional de Hipódromos y Promoción y Fomento de la Especie Caballar.

ARTICULO 3º.- Autorízase a los Hipódromos adheridos a la Ley Nº 13.235 -excepto los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata- a retener los importes que recauden por la aplicación de los decretos leyes Nros. 18.231/43 y 4.073/56 (artículo 8º), a cuenta de la participación que por subsidios les corresponde en la Ley Nº 13.235.

ARTICULO 4º.- El 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) del producido del impuesto creado por el art. 8º del decreto-ley Nº 4073/

56, que se percibe en los Hipódromos de San Isidro, Palermo y La Plata, se destinará al Fondo Nacional de Hipódromos y Promoción y Fomento de la Especie Caballar.

ARTICULO 5º.- El 20 % (VEINTE POR CIENTO) del impuesto creado por el artículo 8º del decreto-ley Nº 4.073/56 que se percibe en los Hipódromos de San Isidro, Palermo y La Plata, se destinará a la Dirección General de Remonta y Veterinaria dependiente de la Secretaría de Estado de Guerra.

ARTICULO 6º.- Convalídanse las designaciones efectuadas por los decretos Nros. 4.174/63 y 4.754/63 para integrar la Comisión Nacional de Hipódromos.

ARTICULO 7º.- Derógase el decreto Nº 1.828/63.

ARTICULO 8º.- Las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias del presente decreto-ley serán dictadas por el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisión Nacional de Hipódromos y con intervención de las Secretarías de Estado de Agricultura y Ganadería, de Guerra y de Hacienda.

ARTICULO 9º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a liberar de derechos de aduana y recargos, a todo instrumental, maquinarias, equipos e implementos que deban introducirse del extranjero en cumplimiento de los objetivos previstos por el presente, como así los reproductores sangre pura de carrera que fueran importados por la Comisión Nacional con igual motivo.

ARTICULO 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo para autorizar el funcionamiento de nuevas agencias y/o sistemas de apuestas.

ARTICULO 11.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, del Interior y de Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, de Guerra y de Hacienda.

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz (h) - José M. Astigueta - Osiris G. Villegas - Carlos López Saubidet - Héctor Repetto - Eduardo Tiscornia.

REGIMEN LEGAL DE LA
COMISION NACIONAL DE HIPODROMOS

ARTICULO 1º.- La Comisión Nacional de Hipódromos, creada por decreto Nº 1.828/63, funcionará como ente autárquico del Estado y podrá desarrollar su acción en todo el territorio de la Nación. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo serán mantenidas por intermedio del Ministerio de Economía y a los efectos presupuestarios dependerá directamente de la Secretaría de Estado de Hacienda figurando en su correspondiente - anexo.

ARTICULO 2º.- La Comisión estará integrada por once (11) - miembros titulares.- Tres (3) de ellos representarán al Estado Nacional, por cada una de las siguientes Secretarías - de Estado: de Agricultura y Ganadería, de Guerra y de Hacienda.

Los demás miembros representarán a los sectores interesados, uno por cada una de las siguientes entidades: Asociación Civil Jockey Club de Buenos Aires, Federación de Entidades Jockey Club de la República Argentina, Dirección Provincial de Hipódromos (ente autárquico) de la Provincia de Buenos Aires, Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera, Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos Sangre Pura de Carrera Ltda., Criadores Argentinos de Sangre - Pura de Carrera, Sociedad Rural Argentina y Asociación Argentina de Fomento Equino.

ARTICULO 3º.- Los miembros de la Comisión serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de cada una de las Secretarías de Estado y entidades que representan, debiendo nombrarse en cada caso un titular y un suplente.- Al solo efecto de su designación, la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería recibirá las propuestas correspondientes para su elevación al Poder Ejecutivo.- Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en caso de fallecimiento, renuncia o ausencia de los mismos.- La Presidencia de la Comi

sión será ejercida por el Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería o la persona que lo represente.

ARTICULO 4º.- Los miembros de la Comisión durarán seis (6) años en sus funciones y podrán ser reelectos, pero la Comisión se renovará por mitades cada tres (3) años, a cuyo efecto los nombrados para la primera Comisión sortearán quienes deben finalizar en el primer período.- Los miembros desempeñarán sus funciones en forma honoraria.

ARTICULO 5º.- En la reunión constitutiva y, en lo sucesivo, en la primera que se realice luego de trancurrido un (1) año de la fecha de aquella, sus miembros designarán de entre ellos un Secretario, un Prosecretario, un Tesorero y un Protesorero.- La Vicepresidencia será ejercida en forma anual y rotativa por cada uno de los representantes de las Secretarías de Estado de Guerra y de Hacienda.- Los demás miembros actuarán como vocales.

ARTICULO 6º.- La Comisión sesionará válidamente con una asistencia no inferior a seis (6) de sus miembros.- Sus acuerdos y resoluciones se adoptarán por mayoría de votos.- En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.

ARTICULO 7º.- El Presidente ejercerá la representación de la Comisión a los efectos correspondientes, debiendo su firma ser refrendada por el Secretario y, además, cuando implique disposición o movimiento de fondos, por el Tesorero.

ARTICULO 8º.- Son funciones de la Comisión:

a) Promover el mejoramiento de la especie caballar en la República a fin de perfeccionar la actividad hípica, crear fuentes de riqueza para la Nación y contribuir a la Defensa Nacional;
b) Ejercer la orientación integral y supervisión de la actividad de todos los hipódromos del país;
c) Proponer los proyectos de disposiciones legales que permitan la estructuración de la actividad de dichos hipódromos, la racionalización de su explotación y las modificaciones al régimen tributario vigente, para facilitar

su evolución y consolidación;

d) Asesorar al Poder Ejecutivo en todos los asuntos relacionados con la actividad de los hipódromos.- A tales efectos, todas las normas, decisiones o iniciativas relacionadas con esta actividad que adopte el Poder Ejecutivo, tanto de oficio como a petición de las partes interesadas, deberá contar con el dictamen previo de la Comisión;

e) Administrar el Fondo Nacional de Hipódromos y de Promoción y Fomento de la Especie Caballar;

f) Administrar y transferir los fondos provenientes de la Ley 13.235 (Fondo de Ayuda a los Hipódromos del Interior) y controlar su destino;

g) Promover la adopción de las medidas necesarias para asegurar que todas las entidades que administren y exploten hipódromos en la República, distribuyan en premios un importe no menor al seis por ciento (6%) de las sumas que hayan ingresado, provenientes de las apuestas efectuadas en cada una de ellas durante el año anterior;

h) Asesorar a los poderes públicos competentes sobre la creación de nuevas agencias y/o sistemas de apuestas, proyectar su régimen legal y supervisar su funcionamiento;

i) Administrar y transferir los fondos que se destinen a la acción de fomento equino y mejoramiento de hipódromos que debe realizarse en todo el país, a través de la distribución de premios, subsidios y créditos, así como la adquisición, utilización y/o reventa de reproductores, con el fin de fomentar las actividades de crianza equina y los deportes hípicos, teniendo en cuenta las características de las diversas regiones del país y de acuerdo con la reglamentación que deberá dictar la misma Comisión, excepción hecha de los fondos actualmente asignados (Ley 11.242) y de los que en el futuro se asignen para la adquisición y fomento de la cría de caballos de guerra para la Remonta del Ejército;

j) Asesorar sobre las medidas necesarias para prevenir y reprimir el uso de estimulantes prohibidos, así como promo

ver la investigación científica sobre esta materia;

k) Recabar de los poderes públicos competentes, la sanción de disposiciones legales sobre la realización de "sweeps takes";

l) Administrar el local de Ventas de Caballos de Sangre Pura de Carrera, instalado en el Hipódromo de Palermo para los fines propios de tales operaciones, sin perjuicio del uso habitual del mismo para las necesidades de dicho Hipódromo;

m) Mantener relaciones con la hípica continental y mundial y promover la difusión del conocimiento del caballo argentino en el exterior;

n) Otorgar subsidios a entidades de bien público;

ñ) Aprobar y remitir anualmente a la Secretaría de Estado de Hacienda el proyecto de Presupuesto de Gastos en Personal, Otros Gastos e Inversiones;

o) Redistribuir los créditos de las distintas Partidas de su Presupuesto de Gastos en Personal, Otros Gastos e Inversiones, así como efectuar los ajustes necesarios, todo ello sin alterar los totales fijados por la Ley de Presupuesto para cada servicio especial y conforme con sus necesidades, debiendo comunicar oportunamente las modificaciones a la Secretaría de Estado de Hacienda;

p) Determinar los responsables jurisdiccionales y de Cajas Chicas, estableciendo el monto y el régimen para la reposición de fondos;

q) Autorizar y aprobar todo acto de compraventa y contratos sobre locaciones, arrendamientos, trabajos o suministros, hasta cualquier importe, con arreglo al reglamento que dicte previamente y con carácter general a tal efecto;

r) Nombrar, promover, retrogradar, sancionar, aceptar renuncias, disponer cesantías y exoneraciones y dar de baja al personal de su jurisdicción;

s) Fijar el régimen de remuneraciones de su personal, condiciones de ingreso, calificaciones, asistencia, licencias, disciplina, viáticos, movilidad, servicios extra-

ordinarios, reintegro de gastos por cualquier concepto, indemnizaciones, compensaciones, bonificaciones y otras disposiciones de carácter reglamentario vinculadas al - personal;

t) Contratar los servicios de personas para labores especiales o transitorias, fijando su retribución y condiciones de trabajo;

u) Dictar los reglamentos internos relacionados con la organización y funcionamiento de sus servicios técnicos y administrativos, como así también los que correspondieren para el cumplimiento de su cometido y conforme a las facultades que le son propias.-

ARTICULO 9º.- La Comisión Nacional deberá destinar una parte de sus recursos para atender debidamente las funciones - que se le asignan en el inciso i) del artículo 8º del presente.

ARTICULO 10.- La Comisión queda facultada para crear subcomisiones asesoras, permanentes o ad-hoc, integradas por sus propios miembros, titulares y suplentes, y/o personas o entidades representativas de los sectores básicos o complementarios de la actividad hípica, cuya opinión considere de interés para el mejor cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 11.- Créase el FONDO NACIONAL DE HIPODROMOS Y DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA ESPECIE CABALLAR de carácter acumulativo, que se integrará con los siguientes recursos, que serán depositados a la orden de la Comisión Nacional de Hipódromos en el Banco de la Nación Argentina;

a) La participación que le fijan a la Comisión Nacional los artículos 2º y 4º del decreto-ley que aprueba el presente cuerpo de disposiciones, y la participación que se le fije en el futuro en los ingresos que perciben los Hipódromos;

b) La participación que le correspondiere en los "sweepstakes" que se organicen;

c) La participación que le correspondiere en el producido - de las agencias de apuestas previstas en el artículo 8º,

inciso h) del presente;
d) El importe de donaciones y legados que recibiera;
e) El producido de la Administración del local de Ventas de Caballos Sangre Pura de Carrera instalado en el Hipódromo de Palermo, como así también el producto de toda otra renta patrimonial;
f) Los fondos provenientes de la Ley Nº 13.235 y disposiciones complementarias;
g) Los saldos no comprometidos al final de cada ejercicio, y
h) Otros recursos.-

ARTICULO 12.- El presupuesto se dividirá en rubros principales que respondan a los conceptos generales de las erogaciones de la Comisión Nacional de Hipódromos, los que se integrarán con créditos parciales.- En la parte correspondiente a "Otros Gastos", sólo figurará el monto de los rubros principales, indicando el concepto de los parciales que lo integran.

ARTICULO 13.- La fiscalización financiero-patrimonial del Tribunal de Cuentas de la Nación en la Comisión Nacional de Hipódromos, se realizará exclusivamente a través de su Balance General, Cuenta General de Inversión y Memoria Anual.-

ACTO: DECRETO Nº 5.603/63.-

MATERIA: COMISION NACIONAL DE HIPODROMOS

Buenos Aires, 10 de Julio de 1963.-

Visto lo propuesto por la Comisión Nacional de Hipódromos, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto-ley nº 5.602/63 (') se aprueba el cuerpo de disposiciones que constituyen el Régimen Legal de dicha Comisión creada por decreto nº 1.828/63 ("); Que el artículo 8º del decreto-ley arriba indicado, establece que las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias del mismo serán dictadas por el Poder Ejecutivo;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Para el cumplimiento de los objetivos determinados en el Régimen Legal de la Comisión Nacional de Hipódromos aprobado por decreto-ley nº 5.602/63, la Comisión Nacional de Hipódromos funcionará de acuerdo con el régimen que se establece en el presente decreto reglamentario.-

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1926.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1860.-

ARTICULO 2°.- La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de seis (6) años y se computará a partir de la fecha de la sesión constitutiva efectuada el día 7 de junio de 1963.-

Con una anticipación de noventa (90) días a la fecha del término de los mandatos de los miembros que cesaren, la Comisión solicitará de las entidades a que se refiere el artículo 2° del Régimen Legal aprobado por el decreto-ley n° 5.602/63, la designación de sus representantes y elevará las propuestas respectivas a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para su designación conjunta con los miembros representantes de las Secretarías de Estado de Guerra y de Hacienda.

En la primera sesión de cada período anual, los miembros de la Comisión elegirán entre ellos un secretario, un prosecretario, un tesorero y un protesorero, quienes durarán un año en el ejercicio de sus cargos y asumirá sus funciones el vicepresidente representante de la Secretaría de Estado que corresponda. Los demás miembros actuarán como vocales.-

ARTICULO 3°.- La Comisión se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos una vez al mes y, en sesiones extraordinarias, cuantas veces sea necesario.

En ambos casos las citaciones serán cursadas por secretaría, por carta certificada y con una anticipación no inferior a diez (10) días corridos de la fecha fijada, salvo que para las reuniones ordinarias se establecieran fecha y hora predeterminadas.

Las citaciones se harán extensivas a los miembros suplentes, quienes podrán concurrir a las reuniones y participar en las deliberaciones, en las que solamente tendrán voto en ausencia del miembro titular al que reemplacen.

Las reuniones ordinarias serán convocadas por el presidente.

Las reuniones extraordinarias se convocarán a peti-

ciones en situación de pago en los Ministerios, Secretarías de Estado, Entidades Descentralizadas o Empresas del Estado que, a su vez, tengan libramientos de pago o entrega a su disposición en la Tesorería General de la Nación.

ARTICULO 2°.- Los Documentos de Cancelación de Deudas, a que se refiere el artículo anterior, serán entregados, directamente por la Tesorería General de la Nación o con intervención de los organismos respectivos, a los acreedores del Estado que así lo soliciten; no devengarán intereses y podrán ser transferidos por vía de endoso, con arreglo a las normas que se indican más adelante.

ARTICULO 3°.- La Secretaría de Estado de Hacienda, con el acuerdo del Banco Central de la República Argentina y la aprobación del Ministerio de Economía, determinará el monto de la emisión y las normas de procedimiento a que se ajustará la entrega y utilización.

ARTICULO 4°.- Cada emisión constará de tres tipos de "Documentos de Cancelación de Deudas", que se entregarán a los acreedores del Estado en las proporciones que se indican a continuación:

1) Un 50 % en Documentos "A", rescatables en efectivo, nominativos, transferibles por vía de endoso hasta dos veces la segunda indefectiblemente a una entidad bancaria;
2) Un 25 % en Documentos "B", nominativos, que servirán exclusivamente para la regularización de deudas bancarias o para el pago de las obligaciones impositivas en la forma que se indica en el punto 3). En el caso de que estos Documentos se destinen a la regularización de deudas bancarias, sólo serán transferibles a favor de Bancos y, en la medida que los vaya rescatando la Tesorería General de la Nación, su importe se aplicará a la amortización de las citadas deudas, en cuya garantía quedarán afectadas mientras tanto.

   Cuando se los destine al pago de obligaciones impositivas, serán transferibles por endoso sin limitación;
3) Un 25 % en Documentos "C", nominativos, transferibles por vía de endoso sin limitación, que servirán exclusi-

vamente para el pago de las obligaciones impositivas que se determinen en las normas a que se refiere el artículo anterior.

ARTICULO 5º.- Los Documentos "A" y los Documentos "B" que hayan sido aplicados a la regularización de deudas bancarias, serán rescatados por la Tesorería General de la Nación, en efectivo, en doce cuotas mensuales iguales.

ARTICULO 6º.- Los Documentos "B" que hayan sido aplicados al pago de obligaciones impositivas y los Documentos "C", quedarán cancelados en la oportunidad en que por intermedio de las oficinas recaudadoras que corresponda, se apliquen al pago de los respectivos impuestos.

ARTICULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación, pase a la Tesorería General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - José Alfredo Martínez de Hoz (h). - Eduardo B. Tiscornia.

ACTO: DECRETO Nº 4.649/63.-

MATERIAS: INTERVENCIONES FEDERALES - DECLARACIONES JURADAS - PATRIMONIALES

Buenos Aires, 7 de junio de 1963.-

Atento que por decreto Nº 7.843/53 (') se creó, en el Registro del Personal Civil de la Administración Pública, el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales del personal de la Administración Pública, a fin de poner a los funcionarios públicos correctos a resguardo de la difamación y de que por otra parte, llegado el caso facilitará al Poder Administrador la comprobación de las transgresiones en que pudieren incurrir los agentes del Estado, y

CONSIDERANDO:

Que se estima pertinente incluir expresamente en la nómina de funcionarios comprendidos en el artículo 2º del referido decreto a los miembros integrantes de las misiones federales en las provincias,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Quedan comprendidos en el régimen del decreto Nº 7.843, de fecha 4 de mayo de 1953, los siguien //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 126.-

tes miembros integrantes de misiones federales en las provincias: Comisionado Federal, Secretario, Oficial Mayor y Jefe de Despacho.

ARTICULO 2º.- El plazo para la presentación de las declaraciones juradas por parte de los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, será de quince días, computados desde la fecha del presente decreto. En lo sucesivo, dicho plazo se computará a partir de la fecha de su designación por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Osiris G. Villegas.

ACTO: DECRETO Nº 4.723/63.-

MATERIAS: SERVICIO PUBLICO - BOMBEROS VOLUNTARIOS

Buenos Aires, 11 de junio de 1963.-

Visto el expediente Nº 10.757/63, por el que la Policía Federal propicia la modificación de los artículos 5º y 11º del decreto Nº 8.796/61, y

CONSIDERANDO:

Que dictado el decreto Nº 8.796/61, para reglamentar el decreto-ley Nº 1.945/58 (') (ratificado por Ley Nº 14.467) ("), por el que se reconoció el carácter de servicio público a las actividades de los bomberos voluntarios en todo el territorio de la Nación, no se determinó en el mismo la facultad de la Policía Federal de intervenir en la aprobación de las reglamentaciones correspondientes a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios que actúan en la Capital Federal;

Que, evidentemente, la inexistencia de tal contralor no permite asegurar que en las disposiciones reglamentarias se fijen normas que impidan actividades inadecuadas a los miembros de las citadas asociaciones y el uso indebido de sus elementos y material en actos ajenos a sus finalidades específicas;

Por ello y atento lo dictaminado por la Dirección

(') Ver Digesto Administrativo Nº 440.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 609.-

General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícanse los artículos 5º y 11º del decreto Nº 8.796/61, reglamentario del decreto-ley Nº 1945/58 (ratificado por Ley 14.467), los que se considerarán redactados en la forma siguiente:

"Artículo 5º.- Dichas reglamentaciones serán sometidas a la aprobación de la Dirección Defensa Antiaérea Pasiva, exclusivammente a los fines determinados por la Ley de la Defensa Antiaérea Pasiva. Las reglamentaciones correspondientes a Asociaciones que actúan en la Capital Federal, deberán también ser aprobadas por la Jefatura de la Policía Federal, por intermedio de su Dirección Bomberos".

"Artículo 11.- La Federación será responsable de la confección, aprobación, aplicación y modificación de los reglamentos que regulen las actividades de las asociaciones dependientes, previa intervención de la Dirección Defensa Antiaérea Pasiva, en lo atinente al cumplimiento de la Ley de Defensa Antiaérea Pasiva. Tratándose de asociaciones que actúan en la Capital Federal, será previa también la intervención de la Jefatura de la Policía Federal, por intermedio de su Dirección Bomberos".

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Osiris G.Villegas.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 4.867/63.-

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - CONSEJO DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO

Buenos Aires, 16 de junio de 1963.-

Visto lo propuesto por el Consejo de Coordinación para la Prevención y Represión del Contrabando, y

CONSIDERANDO:

Que en la aplicación del decreto 5.426/62 (') se ha comprobado que los expendedores de mercaderías extranjeras en infracción emplean el ardid de mantener cantidades mínimas en sus locales, en prevención de cualquier procedimiento, para así atenuar los efectos de la pena, que se gradúa en función del valor de los efectos en contravención.

Que es conveniente entonces revitalizar la eficacia punitiva del indicado decreto, mediante la imposición de multas mínimas objetivas, que importen una drástica sanción para quienes actúan al margen de la ley obteniendo pingües ganancias, saboteando la industria nacional y defraudando al Fisco.

Por ello,

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1651.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Agrégase al inciso b) del artículo 5º del decreto 5.426/62, modificado por decreto 7.713/62 (*), la siguiente expresión final: "La multa mínima a aplicar en ningún caso será inferior a m$n. 30.000 en la primera infracción y a m$n. 100.000 en las reincidencias".

ARTICULO 2º.- Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus efectos.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz -
Osiris G.Villegas - José M.Astigueta
Eduardo B.M. Tiscornia.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1699.-

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1923.-

ACTO: DECRETO Nº 4.825/63.-

MATERIAS: PERSONAL - SUMARIOS - ACCIONES JUDICIALES - ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 34º) - SANCIONES

Buenos Aires, 17 de junio de 1963.-

Visto lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Nº 14.237, modificado por el artículo 22 del decreto-ley Nº 23.398/56, y

CONSIDERANDO:

Que dicho precepto, al reglar la prueba de informes, estableció el plazo de veinte días para su producción por las oficinas públicas;

Que, no obstante, ha podido comprobarse en algunos casos que tales informes no se expiden dentro del plazo legal, circunstancia que provoca demoras en la substanciación de los procesos respectivos con el consiguiente perjuicio para la buena administración de justicia;

Que la misma apreciación corresponde tanto en lo relativo a la prueba de informes cuanto en lo que concierne a otras medidas ordenadas por los magistrados;

Que es un deber del Poder Ejecutivo remover en su esfera los obstáculos que conspiren contra la celeri-

//-

dad de dichos trámites;
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las oficinas públicas deberán dar cumplimiento en el plazo perentorio de veinte días a lo solicitado en los oficios judiciales firmados por los magistrados o secretarios, salvo que disposiciones especiales o una orden judicial establezcan un plazo más breve. La misma exigencia regirá respecto de los suscriptos por letrados patrocinantes en el supuesto del art. 33 de la Ley número 14.237, modificado por el artículo 22 del decreto-ley Nº 23.398/56.

ARTICULO 2º.- Si la respuesta o la documentación requerida no pudieran remitirse al Juzgado en el plazo del artículo anterior, antes de su vencimiento la oficina hará conocer esa circunstancia al juez oficiante, así como las causas de la misma y la fecha en que dará cumplimiento al requerimiento.

ARTICULO 3º.- Los agentes responsables de demoras injustificadas en la tramitación de oficios, se harán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 34 de la Ley Nº 14.467 (') (Decreto Nº 6.666/57) (''). A tal efecto, se instruirá sumario cada vez que, excedido el plazo para el cumplimiento del oficio, éste sea reiterado.

ARTICULO 4º.- Cada Ministerio reglamentará este decreto en la forma que asegure la mayor agilidad del trámite y la estricta aplicación de sus disposiciones, comunicando al Ministerio de Educación y Justicia el sistema adoptado.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José M.Astigueta.

(') Ver Digesto Administrativo Nº 609.-
('') Ver Digesto Administrativo Nº 284.-

ACTO: RESOLUCION Nº 12.006/63.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 23º) - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - PERSONAL - RECLAMOS - PROMOCIONES - CAMBIO DE CLASE O GRUPO

Buenos Aires, 5 de junio de 1963.-

Visto el Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional (decreto-ley Nº 6.666/57) (') y el Escalafón conexo (decretos Nros. 9.530/58 y 11.941/59)("), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 10º del Estatuto -reglamentado por los puntos 12º al 22º del Escalafón- se refiere al derecho del agente al cambio de Clase o Grupo;

Que el artículo 22º del mismo texto legal -reglamentado por los puntos 34º al 42º del Escalafón- prevé el derecho a la promoción de categorías, dentro de cada Grupo;

Que el artículo 23º del Estatuto confiere al agente el derecho a interponer reclamos, fundados y documentados, por cuestiones relativas a calificaciones, ascensos, menciones y orden de mérito, los que deben ser re

(') Ver Digesto Administrativo Nº 254.- //-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 916.-

sueltos por la Junta de Calificaciones prevista en el artículo 45° del mismo ordenamiento;

Que el caso de cambio de Clase o Grupo no constituye, por propia definición, un ascenso o promoción, estando previsto un régimen especial de reclamos en los puntos 32° apartado VI, y 33°, apartado IV, del referido Escalafón, como reglamentarios del artículo 9° del Estatuto, que se refiere a la carrera del agente;

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación ha solicitado se dicte una norma aclaratoria sobre la cuestión, a efectos de evitar dudas al respecto;

Por ello, y atento las facultades emergentes del Decreto-Ley N° 797/58 (°) y art. 20°, inciso 12°, de la Ley N° 14.439 (=),

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1°.- Aclárase que la interposición de reclamos por cuestiones relativas a "ascensos", prevista en el art. 23° del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional (Decreto-ley N° 6666/57), se refiere siempre a las promociones de categoría, dentro de las Clases y Grupos -según la definición contenida en el art. 9° del mismo cuerpo legal- y debe sustanciarse en base a las normas del art. 45°, reglamentado por los puntos 43° al 50° del Escalafón aprobado por decreto 9530/58.

2°.- Aclárase que la interposición de reclamos por cambio de Clase o Grupo (art. 10° del mismo Estatuto, reglamentado por los puntos 12° al 22° del citado Escalafón), debe hacerse exclusivamente en base a las normas de los puntos 32°, apartado VI, y 33°, apartado IV, del cuerpo escalafonario aprobado por decretos Nros. 9530/58 y 11.941/59, no correspondiendo en estos casos lo previsto en los arts. 23° y 45° del Estatuto del Personal Civil.

3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. EDUARDO B. TISCORNIA

(°) Ver Digesto Administrativo N° 419.-
(=) Ver Digesto Administrativo N° 505.-

ACTO: DECRETO Nº 5.000/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - FONDO DE COMPENSACION

Buenos Aires, 24 de junio de 1963.-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales se gestionan algunas modificaciones al régimen instituído por decreto Nº 7.738/58 (') (Fondo de Compensación) para la Dirección General Impositiva, entre las que se advierte un incremento en los haberes del personal de dicha Dirección, y

CONSIDERANDO:

Que es propósito del Poder Ejecutivo, a cumplirse por intermedio del Ministerio de Economía -Secretaría de Hacienda- el de no acordar mejoras de sueldos a los agentes estatales que actualmente reciben mayores remuneraciones, en tanto no se aumenten aquellas del personal que revista en otros sectores y que por distintas razones percibe una retribución menor;

Que, sin perjuicio de lo expresado, no habría objeciones que formular en caso de modificar solamente el régimen aludido en lo que concierne a la liquidación "a posteriori" del "complemento incentivado" del Fondo, toda vez que con esa medida, además de subsanarse una -

(') Ver Digesto Administrativo Nº 639.-

//-

insuficiencia de dicho sistema, se obtendrá un mejor ordenamiento presupuestal, al disponer la liquidación dentro de cada ejercicio, de las remuneraciones devengadas en el mismo, logrando así un correcto resultado financiero;

Que el tratamiento que se propicia no enerva las aspiraciones del personal en cuanto a la eventual reforma del escalafón de ese organismo ni a la reestructuración del "Fondo de Compensación", los cuales podrían ser considerados cuando la situación económica lo permita y una vez satisfechas las de los sectores postergados que se mencionan más arriba;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- El "Fondo de Compensación por incremento de recaudación" establecido por el artículo 20º del decreto Nº 7738/58, se determinará en la siguiente forma:

a) Con una remuneración mínima y permanente integrada por los importes básicos establecidos por el artículo 21º del decreto Nº 7738/58, a los que se adicionarán las retribuciones máximas autorizadas por el artículo 2º del decreto Nº 11.597/62 (") y que se distribuirá según lo fijado por los incisos a) y b) del artículo 21º del decreto mencionado en primer término.

b) En el caso de que el "Fondo de Compensación" no resultara suficiente para atender el pago al personal de acuerdo con los montos señalados, la diferencia se cubrirá con cargo a rentas generales.

c) El aporte jubilatorio patronal de los emolumentos de que se trata será atendido por el Estado, con cargo a la partida presupuestaria específica.

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1784.-

d) Sobre las liquidaciones practicadas de acuerdo con lo dispuesto precedentemente, no se efectuarán las deducciones previstas en el decreto Nº 1.254/60 (°) y sus posteriores modificaciones, cuyas disposiciones se mantienen en tanto no se opongan a las que por el presente se establecen.

ARTICULO 2º.- Por conducto de la Secretaría de Estado de Hacienda se incorporará al presupuesto de "Gastos en Personal" de la Dirección General Impositiva, los créditos necesarios para realizar la imputación de las erogaciones a que dé lugar el presente decreto.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz (h.)
Eduardo Tiscornia.

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1132.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Dpto. de Secretaría -

ACTO: DECRETO LEY Nº 5.602/63.-

MATERIAS: COMISION NACIONAL DE HIPODROMOS - FONDO NACIONAL DE HIPODROMOS Y DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA ESPECIE CABALLAR

Buenos Aires, 10 de julio de 1963.-

Visto el decreto Nº 1.828/63 (') y lo propuesto por la Comisión Nacional de Hipódromos, y

CONSIDERANDO:

Que del asesoramiento producido por la Comisión Nacional de Hipódromos surge la necesidad de concretar soluciones para los problemas reiteradamente expuestos por los sectores que integran la actividad hípica nacional, a la cual están afectados importantes capitales y fuentes de trabajo, en forma directa o a través del comercio e industria íntimamente vinculadas a la misma, que benefician a la economía nacional y que proporcionan divisas por las exportaciones y el turismo que dicha actividad genera, produciendo, asimismo, los hipódromos importantes recursos al Estado y facilitando la obra social;

Que la importancia de la cría del caballo de carrera en su aspecto cualitativo y cuantitativo ha permitido a la República Argentina ocupar un lugar de privilegio que comparte con países cuya producción tiene un

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1860.- //-

origen muy anterior, posición que es un deber mantener mediante un adecuado proceso selectivo en procura de lo que debe constituir la finalidad específica del turf, o sea el mejoramiento de la especie caballar, con el objeto de crear fuentes de recursos para la Nación y contribuir a la Defensa Nacional;

Que la complejidad de la actividad hípica, su característica esencialmente técnica y su importancia económica - justificaron la creación de la Comisión Nacional de Hipódromos para ejercer su conducción integral, asumir las responsabilidades de su orientación, supervisión y control en todo el territorio de la República y asesorar al Poder Ejecutivo en todos los asuntos referentes a la misma;

Que dicha Comisión fué integrada, además de los representantes oficiales, con todas las entidades representativas de los sectores básicos de la actividad vinculada con la crianza del caballo de carrera y el funcionamiento de los hipódromos;

Que los intereses comprometidos en la importante misión encomendada a la Comisión Nacional de Hipódromos, como así las proyecciones que, para beneficio del país, alcanzan los objetivos propuestos, requieren la concurrencia de todos aquellos factores de orden económico, administrativo y técnico que aseguren los medios apropiados para el eficaz desenvolvimiento del organismo;

Que las normas del decreto Nº 1.828/63, con ser amplias, no llegan a satisfacer plenamente el propósito expuesto, toda vez que las mismas se limitan a poner en juego los recursos económicos, técnicos y administrativos de uso ordinario en la esfera de las entidades centralizadas del Poder Administrador;

Que, tal como lo indica su constitución y finalidad, - existen en las características de este organismo, objetivos y funciones que lo particularizan y llevan a tratarlo con arreglo a los principios que rigen el desenvolvimiento de

ciertos entes del Estado que, precisamente en razón de esas circunstancias cuentan con un estatus especial, donde la descentralización o autarquía resultan la solución más apropiada;

Que ello, por otra parte, se ajusta a la política general que ha venido aplicando el Poder Ejecutivo en la organización de sus servicios, conforme modernos métodos de racionalización administrativa;

Que, por otra parte es necesario reconsiderar el curso otorgado por las disposiciones vigentes al producido de ciertos impuestos que gravan el turf a fin de ajustarlo a la nueva organización fijada para esa actividad mediante la creación de la Comisión Nacional de Hipódromos y lograr, al propio tiempo, una conexión más directa y rápida con el destino final de tales gravámenes;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas, que constituyen el régimen legal de la Comisión Nacional de Hipódromos.

ARTICULO 2º.- El producido del impuesto creado por el decreto-ley Nº 18.231/43 (ratificado por la ley Nº 12.922) y el artículo 8º del decreto-ley Nº 4.073/56 -excepto el que se percibe de los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata- se destinará al Fondo Nacional de Hipódromos y Promoción y Fomento de la Especie Caballar.

ARTICULO 3º.- Autorízase a los Hipódromos adheridos a la Ley Nº 13.235 -excepto los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata- a retener los importes que recauden por la aplicación de los decretos leyes Nros. 18.231/43 y 4.073/56 (artículo 8º), a cuenta de la participación que por subsidios les corresponde en la Ley Nº 13.235.

ARTICULO 4º.- El 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) del producido del impuesto creado por el art. 8º del decreto-ley Nº 4073/

56, que se percibe en los Hipódromos de San Isidro, Palermo y La Plata, se destinará al Fondo Nacional de Hipódromos y Promoción y Fomento de la Especie Caballar.

ARTICULO 5º.- El 20 % (VEINTE POR CIENTO) del impuesto creado por el artículo 8º del decreto-ley Nº 4.073/56 que se percibe en los Hipódromos de San Isidro, Palermo y La Plata, se destinará a la Dirección General de Remonta y Veterinaria dependiente de la Secretaría de Estado de Guerra.

ARTICULO 6º.- Convalídanse las designaciones efectuadas por los decretos Nros. 4.174/63 y 4.754/63 para integrar la Comisión Nacional de Hipódromos.

ARTICULO 7º.- Derógase el decreto Nº 1.828/63.

ARTICULO 8º.- Las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias del presente decreto-ley serán dictadas por el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisión Nacional de Hipódromos y con intervención de las Secretarías de Estado de Agricultura y Ganadería, de Guerra y de Hacienda.

ARTICULO 9º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a liberar de derechos de aduana y recargos, a todo instrumental, maquinarias, equipos e implementos que deban introducirse del extranjero en cumplimiento de los objetivos previstos por el presente, como así los reproductores sangre pura de carrera que fueran importados por la Comisión Nacional con igual motivo.

ARTICULO 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo para autorizar el funcionamiento de nuevas agencias y/o sistemas de apuestas.

ARTICULO 11.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, del Interior y de Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, de Guerra y de Hacienda.

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz (h) - José M. Astigueta - Osiris G. Villegas - Carlos López Saubidet - Héctor Repetto - Eduardo Tiscornia.

REGIMEN LEGAL DE LA

COMISION NACIONAL DE HIPODROMOS

ARTICULO 1º.- La Comisión Nacional de Hipódromos, creada por decreto Nº 1.828/63, funcionará como ente autárquico del Estado y podrá desarrollar su acción en todo el territorio de la Nación. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo serán mantenidas por intermedio del Ministerio de Economía y a los efectos presupuestarios dependerá directamente de la Secretaría de Estado de Hacienda figurando en su correspondiente anexo.

ARTICULO 2º.- La Comisión estará integrada por once (11) miembros titulares.- Tres (3) de ellos representarán al Estado Nacional, por cada una de las siguientes Secretarías de Estado: de Agricultura y Ganadería, de Guerra y de Hacienda.

Los demás miembros representarán a los sectores interesados, uno por cada una de las siguientes entidades: Asociación Civil Jockey Club de Buenos Aires, Federación de Entidades Jockey Club de la República Argentina, Dirección Provincial de Hipódromos (ente autárquico) de la Provincia de Buenos Aires, Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera, Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos Sangre Pura de Carrera Ltda., Criadores Argentinos de Sangre Pura de Carrera, Sociedad Rural Argentina y Asociación Argentina de Fomento Equino.

ARTICULO 3º.- Los miembros de la Comisión serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de cada una de las Secretarías de Estado y entidades que representan, debiendo nombrarse en cada caso un titular y un suplente.- Al solo efecto de su designación, la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería recibirá las propuestas correspondientes para su elevación al Poder Ejecutivo.- Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en caso de fallecimiento, renuncia o ausencia de los mismos.- La Presidencia de la Comi

sión será ejercida por el Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería o la persona que lo represente.

ARTICULO 4º.- Los miembros de la Comisión durarán seis (6) años en sus funciones y podrán ser reelectos, pero la Comisión se renovará por mitades cada tres (3) años, a cuyo efecto los nombrados para la primera Comisión sortearán quienes deben finalizar en el primer período.- Los miembros desempeñarán sus funciones en forma honoraria.

ARTICULO 5º.- En la reunión constitutiva y, en lo sucesivo, en la primera que se realice luego de trancurrido un (1) año de la fecha de aquella, sus miembros designarán de entre ellos un Secretario, un Prosecretario, un Tesorero y un Protesorero.- La Vicepresidencia será ejercida en forma anual y rotativa por cada uno de los representantes de las Secretarías de Estado de Guerra y de Hacienda.- Los demás miembros actuarán como vocales.

ARTICULO 6º.- La Comisión sesionará válidamente con una asistencia no inferior a seis (6) de sus miembros.- Sus acuerdos y resoluciones se adoptarán por mayoría de votos.- En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.

ARTICULO 7º.- El Presidente ejercerá la representación de la Comisión a los efectos correspondientes, debiendo su firma ser refrendada por el Secretario y, además, cuando implique disposición o movimiento de fondos, por el Tesorero.

ARTICULO 8º.- Son funciones de la Comisión:

a) Promover el mejoramiento de la especie caballar en la República a fin de perfeccionar la actividad hípica, y crear fuentes de riqueza para la Nación y contribuir a la Defensa Nacional;
b) Ejercer la orientación integral y supervisión de la actividad de todos los hipódromos del país;
c) Proponer los proyectos de disposiciones legales que permitan la estructuración de la actividad de dichos hipódromos, la racionalización de su explotación y las modificaciones al régimen tributario vigente, para facilitar

su evolución y consolidación;

d) Asesorar al Poder Ejecutivo en todos los asuntos relacionados con la actividad de los hipódromos.- A tales efectos, todas las normas, decisiones o iniciativas relacionadas con esta actividad que adopte el Poder Ejecutivo, tanto de oficio como a petición de las partes interesadas, deberá contar con el dictamen previo de la Comisión;

e) Administrar el Fondo Nacional de Hipódromos y de Promoción y Fomento de la Especie Caballar;

f) Administrar y transferir los fondos provenientes de la Ley 13.235 (Fondo de Ayuda a los Hipódromos del Interior) y controlar su destino;

g) Promover la adopción de las medidas necesarias para asegurar que todas las entidades que administren y exploten hipódromos en la República, distribuyan en premios un importe no menor al seis por ciento (6%) de las sumas que hayan ingresado, provenientes de las apuestas efectuadas en cada una de ellas durante el año anterior;

h) Asesorar a los poderes públicos competentes sobre la creación de nuevas agencias y/o sistemas de apuestas, proyectar su régimen legal y supervisar su funcionamiento;

i) Administrar y transferir los fondos que se destinen a la acción de fomento equino y mejoramiento de hipódromos que debe realizarse en todo el país, a través de la distribución de premios, subsidios y créditos, así como la adquisición, utilización y/o reventa de reproductores, con el fin de fomentar las actividades de crianza equina y los deportes hípicos, teniendo en cuenta las características de las diversas regiones del país y de acuerdo con la reglamentación que deberá dictar la misma Comisión, excepción hecha de los fondos actualmente asignados (Ley 11.242) y de los que en el futuro se asignen para la adquisición y fomento de la cría de caballos de guerra para la Remonta del Ejército;

j) Asesorar sobre las medidas necesarias para prevenir y reprimir el uso de estimulantes prohibidos, así como promo

ver la investigación científica sobre esta materia;

k) Recabar de los poderes públicos competentes, la sanción de disposiciones legales sobre la realización de "sweeps takes";

l) Administrar el local de Ventas de Caballos de Sangre Pura de Carrera, instalado en el Hipódromo de Palermo para los fines propios de tales operaciones, sin perjuicio del uso habitual del mismo para las necesidades de dicho Hipódromo;

m) Mantener relaciones con la hípica continental y mundial y promover la difusión del conocimiento del caballo argentino en el exterior;

n) Otorgar subsidios a entidades de bien público;

ñ) Aprobar y remitir anualmente a la Secretaría de Estado de Hacienda el proyecto de Presupuesto de Gastos en Personal, Otros Gastos e Inversiones;

o) Redistribuir los créditos de las distintas Partidas de su Presupuesto de Gastos en Personal, Otros Gastos e Inversiones, así como efectuar los ajustes necesarios, todo ello sin alterar los totales fijados por la Ley de Presupuesto para cada servicio especial y conforme con sus necesidades, debiendo comunicar oportunamente las modificaciones a la Secretaría de Estado de Hacienda;

p) Determinar los responsables jurisdiccionales y de Cajas Chicas, estableciendo el monto y el régimen para la reposición de fondos;

q) Autorizar y aprobar todo acto de compraventa y contratos sobre locaciones, arrendamientos, trabajos o suministros, hasta cualquier importe, con arreglo al reglamento que dicte previamente y con carácter general a tal efecto;

r) Nombrar, promover, retrogradar, sancionar, aceptar renuncias, disponer cesantías y exoneraciones y dar de baja al personal de su jurisdicción;

s) Fijar el régimen de remuneraciones de su personal, condiciones de ingreso, calificaciones, asistencia, licencias, disciplina, viáticos, movilidad, servicios extra-

ordinarios, reintegro de gastos por cualquier concepto, indemnizaciones, compensaciones, bonificaciones y otras disposiciones de carácter reglamentario vinculadas al - personal;

t) Contratar los servicios de personas para labores especiales o transitorias, fijando su retribución y condiciones de trabajo;

u) Dictar los reglamentos internos relacionados con la organización y funcionamiento de sus servicios técnicos y administrativos, como así también los que correspondieren para el cumplimiento de su cometido y conforme a las facultades que le son propias.-

ARTICULO 9º.- La Comisión Nacional deberá destinar una parte de sus recursos para atender debidamente las funciones - que se le asignan en el inciso i) del artículo 8º del presente.

ARTICULO 10.- La Comisión queda facultada para crear subcomisiones asesoras, permanentes o ad-hoc, integradas por sus propios miembros, titulares y suplentes, y/o personas o entidades representativas de los sectores básicos o complementarios de la actividad hípica, cuya opinión considere de interés para el mejor cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 11.- Créase el FONDO NACIONAL DE HIPODROMOS Y DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA ESPECIE CABALLAR de carácter acumulativo, que se integrará con los siguientes recursos, que serán depositados a la orden de la Comisión Nacional de Hipódromos en el Banco de la Nación Argentina:

a) La participación que le fijan a la Comisión Nacional los artículos 2º y 4º del decreto-ley que aprueba el presente cuerpo de disposiciones, y la participación que se le fije en el futuro en los ingresos que perciben los Hipódromos;

b) La participación que le correspondiere en los "sweepstakes" que se organicen;

c) La participación que le correspondiere en el producido - de las agencias de apuestas previstas en el artículo 8º,

inciso h) del presente;

d) El importe de donaciones y legados que recibiera;

e) El producido de la Administración del local de Ventas de Caballos Sangre Pura de Carrera instalado en el Hipódromo de Palermo, como así también el producto de toda otra renta patrimonial;

f) Los fondos provenientes de la Ley Nº 13.235 y disposiciones complementarias;

g) Los saldos no comprometidos al final de cada ejercicio, y

h) Otros recursos.-

ARTICULO 12.- El presupuesto se dividirá en rubros principales que respondan a los conceptos generales de las erogaciones de la Comisión Nacional de Hipódromos, los que se integrarán con créditos parciales.- En la parte correspondiente a "Otros Gastos", sólo figurará el monto de los rubros principales, indicando el concepto de los parciales que lo integran.

ARTICULO 13.- La fiscalización financiero-patrimonial del Tribunal de Cuentas de la Nación en la Comisión Nacional de Hipódromos, se realizará exclusivamente a través de su Balance General, Cuenta General de Inversión y Memoria Anual.-

ACTO: DECRETO Nº 5.603/63.-

MATERIA: COMISION NACIONAL DE HIPODROMOS

Buenos Aires, 10 de Julio de 1963.-

Visto lo propuesto por la Comisión Nacional de Hipódromos, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto-ley nº 5.602/63 (') se aprueba el cuerpo de disposiciones que constituyen el Régimen Legal de dicha Comisión creada por decreto nº 1.828/63 ("); Que el artículo 8º del decreto-ley arriba indicado, establece que las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias del mismo serán dictadas por el Poder Ejecutivo;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Para el cumplimiento de los objetivos determinados en el Régimen Legal de la Comisión Nacional de Hipódromos aprobado por decreto-ley nº 5.602/63, la Comisión Nacional de Hipódromos funcionará de acuerdo con el régimen que se establece en el presente decreto reglamentario.-

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1926.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1860.-

ARTICULO 2°.- La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de seis (6) años y se computará a partir de la fecha de la sesión constitutiva efectuada el día 7 de junio de 1963.-

Con una anticipación de noventa (90) días a la fecha del término de los mandatos de los miembros que cesaren, la Comisión solicitará de las entidades a que se refiere el artículo 2° del Régimen Legal aprobado por el decreto-ley n° 5.602/63, la designación de sus representantes y elevará las propuestas respectivas a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para su designación conjunta con los miembros representantes de las Secretarías de Estado de Guerra y de Hacienda.

En la primera sesión de cada período anual, los miembros de la Comisión elegirán entre ellos un secretario, un prosecretario, un tesorero y un protesorero, quienes durarán un año en el ejercicio de sus cargos y asumirá sus funciones el vicepresidente representante de la Secretaría de Estado que corresponda. Los demás miembros actuarán como vocales.-

ARTICULO 3°.- La Comisión se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos una vez al mes y, en sesiones extraordinarias, cuantas veces sea necesario.

En ambos casos las citaciones serán cursadas por secretaría, por carta certificada y con una anticipación no inferior a diez (10) días corridos de la fecha fijada, salvo que para las reuniones ordinarias se establecieran fecha y hora predeterminadas.

Las citaciones se harán extensivas a los miembros suplentes, quienes podrán concurrir a las reuniones y participar en las deliberaciones, en las que solamente tendrán voto en ausencia del miembro titular al que reemplacen.

Las reuniones ordinarias serán convocadas por el presidente.

Las reuniones extraordinarias se convocarán a peti-

ción de dos o más miembros de la Comisión dirigida por escrito al presidente expresando el objeto de la reunión, y deberán realizarse dentro de los diez (10) días corridos de la fecha del pedido correspondiente. En ausencia del presidente y/o del vicepresidente en ejercicio, las reuniones extraordinarias serán presididas por el miembro designado por mayoría de los presentes.

Si por cualquier causa las citaciones a sesión extraordinaria no fueren cursadas, los miembros que la hubieren solicitado, podrán enviar por sí las citaciones a todos los miembros titulares y suplentes de la Comisión.-

ARTICULO 4º.- Las resoluciones de la Comisión serán válidas, cuando fueren tomadas en sesiones a las que asistan, por lo menos, seis (6) de sus miembros. Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y, en caso de empate, la persona que presida tendrá doble voto.

De todas las reuniones que se realicen, se dejará constancia en los libros de "Asistencia" y de "Actas". El acta correspondiente a cada reunión deberá ser suscripta por todos los miembros asistentes y, por secretaría, se remitirá copia autenticada a todos los miembros de la Comisión.-

ARTICULO 5º.- La delegación del cargo de Presidente por parte del Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería en la persona que lo represente, se hará mediante acto formal y expreso -resolución ministerial- que será debidamente notificada a la Comisión y demás organismos privados y oficiales que corresponda.

El representante del Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería ejercerá la Presidencia de la Comisión, en caso de operarse la delegación, con todos los deberes y atribuciones inherentes al cargo, mientras no fuere revocada -formal y expresamente- la resolución por la cual le fueron delegadas tales funciones.

El Presidente y, en caso de su fallecimiento, renuncia o ausencia, el Vicepresidente en ejercicio, tendrá las si-

guientes atribuciones y deberes:

a) Asistir a las reuniones.
b) Representar a la Comisión.
c) Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, presidirlas, dirigir la discusión, proponer las votaciones, votar, proclamar el resultado de las votaciones y autenticar con su firma el acta de las reuniones.
d) Firmar con el Secretario la correspondencia y toda otra documentación y, con el Secretario y Tesorero, las resoluciones que impliquen disposición o movimiento de fondos.
e) Dar cuenta a la Comisión de las resoluciones que adopte por sí, en los casos urgentes, en la primera reunión posterior que ella realice.
f) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que rijan el funcionamiento de la Comisión, sus resoluciones y facilitar el cumplimiento de sus objetivos.

ARTICULO 6º.- El Secretario y, en caso de su fallecimiento, renuncia o ausencia el Prosecretario, tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Asistir a las reuniones de la Comisión y subcomisiones para las que fuera designado.
b) Cursar las citaciones para las sesiones ordinarias y extraordinarias, incluyendo en las mismas el proyecto del acta de la sesión anterior y el "orden del día" que corresponda, según instrucciones del Presidente o petición de dos o más de los miembros de la Comisión.
c) Computar y verificar el resultado de las votaciones y anunciar su resultado.
d) Llevar los libros de "Asistencia" y de "Actas" y asentar las constancias correspondientes a todas -

las reuniones que se realicen.

e) Firmar con el Presidente, el acta de sesiones, la correspondencia y toda otra documentación.
f) Redactar la "Memoria" anual y los informes solicitados por la Comisión.
g) Organizar y conservar el archivo de la Comisión.
h) Desempeñar las demás funciones que el Presidente le asigne, en uso de sus facultades.

ARTICULO 7º.- El Tesorero y, en caso de su fallecimiento, renuncia o ausencia, el Protesorero tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Asistir a las reuniones de la Comisión y subcomisiones para las que fuera designado.
b) Organizar la contabilidad y demás documentación correspondiente.
c) Preparar y someter a la Comisión, el estado mensual del movimiento registrado en sus cuentas y el Balance General, Cuenta General de Inversión y Memoria anual, para su elevación a la Contaduría General de la Nación.
d) Preparar el Presupuesto de ingresos y egresos, así como de inversiones y financiaciones de la Comisión, y someterlo a su aprobación, dentro de los plazos que se establezcan.
e) Firmar con el Presidente y Secretario los recibos y demás documentación de Tesorería, ordenando los pagos que correspondan.
f) Disponer la apertura de cuentas bancarias y el ingreso a los Bancos del efectivo en caja, pudiendo retener en la misma la cantidad de dinero que autorice la Comisión para los pagos urgentes o de emergencia.
g) Dar cuenta a la Comisión del estado financiero y económico cuando lo considere oportuno y toda vez que le fuera requerido.

ARTICULO 8º.- Corresponde a los Vocales asistir a las reu -

niones de la Comisión y de las subcomisiones para las que fueran designados y desempeñar y rendir cuenta de las tareas que les fueran encomendadas.

ARTICULO 9º.- En caso de fallecimiento, renuncia o ausencia del Secretario y del Prosecretario o del Tesorero y del Protesorero, la Comisión designará de entre sus miembros un Secretario o Tesorero ád-hoc.

ARTICULO 10.- Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en caso de fallecimiento, renuncia o ausencia.

Son atribuciones y deberes de los Miembros suplentes asistir a las reuniones, tomar parte en las deliberaciones pero no en las votaciones, integrar las subcomisiones permanentes o ad-hoc para las que fueran designados, en las que tendrán voz y voto, y desempeñar y rendir cuentas de otras tareas que les fueran encomendadas.

ARTICULO 11.- La Comisión designará un Gerente, un Secretario Administrativo y los funcionarios y el personal que fuere necesario para el cumplimiento de sus funciones.

El Gerente será el encargado de la administración de cuya marcha será responsable ante la Comisión y tendrá a su cargo el personal de la misma, todo con sujeción a las resoluciones de la Comisión. Las tareas del Secretario Administrativo serán coordinadas con las que correspondan a la Secretaría de la Comisión.

ARTICULO 12.- A los efectos del cumplimiento de sus funciones, la Comisión tendrá las siguientes facultades y deberes:

a) Orientar la política estatal en materia de actividad turfística en el orden nacional, provincial y municipal, a fin de que las disposiciones legales que la rijan faciliten el cumplimiento de sus objetivos.
b) Gestionar de los Gobiernos Provinciales la sanción de disposiciones legales concordantes con el decre

to-ley nº 5.602/63, con el presente decreto y con las que, previo su asesoramiento dicte el Gobierno Nacional.

c) Asesorar al Poder Ejecutivo y someter a su consideración los proyectos de disposiciones legales o la reforma de las actualmente en vigencia, para impulsar la evolución de la actividad en todos sus órdenes, proporcionar estabilidad a todos los sectores interesados y obtener un régimen tributario que facilite y promueva su desarrollo.

d) Promover la reforma y/o la unificación de las disposiciones tributarias en vigencia.

e) Orientar la actividad de los hipódromos en todo el territorio de la República mediante la estructuración del turf nacional en su conjunto. Coordinar la actividad de los hipódromos existentes y de los que se instalen en el futuro, en el orden técnico, económico y financiero.

f) Enunciar normas para la programación anual de carreras y la distribución y monto de sus premios para el fomento y mejoramiento de la actividad en todo el país y supervisar su ejecución. Aprobar los programas de carreras y la distribución de los premios que, concordantes con sus directivas, le elevarán las entidades con hipódromos en explotación. Adoptar las medidas necesarias para que en todos los hipódromos del país pueda ser distribuído en premios una cantidad no menor al porcentaje mínimo dispuesto por el inciso g) del artículo 8º del Régimen Legal aprobado por decreto-ley nº 5.602/63.

g) Asesorar al Poder Ejecutivo con respecto al otorgamiento a las entidades interesadas de las autorizaciones para la instalación y funcionamiento de hipódromos, así como también con respecto a la cancelación de las autorizaciones de aquéllas que no cum -

plan sus finalidades específicas o no acataran o violaran las normas vigentes.

h) Formalizar y suscribir con las entidades con hipódromos en explotación los respectivos contratos de adhesión de acuerdo con las normas establecidas en los artículos 14° a 17° del presente decreto.

i) Orientar, asesorar, proyectar y aprobar las Normas Generales de Carreras de aplicación obligatoria en todos los hipódromos del país, interpretarlas en los casos sometidos a su consulta, facilitar el intercambio informativo con respecto a su cumplimiento y establecer los principios particulares para cada hipódromo o grupo de hipódromos, contemplando sus características regionales.

j) Orientar, asesorar, proyectar y aprobar las medidas necesarias para lograr una efectiva prevención y represión del uso de sustancias estimulantes o depresivas que alteren el rendimiento del caballo en la carrera y promover la investigación científica sobre esta materia.

k) Orientar, asesorar y proyectar planes para las mejoras técnico-funcionales de los hipódromos y la instalación de equipos que contribuyen a racionalizar las explotaciones. Financiar las inversiones que, con tal propósito, la Comisión considerara convenientes y aprobara de acuerdo con la jerarquía de los hipódromos y sus posibilidades de rendimiento.

l) Promover una racional distribución de los caballos sangre pura de carrera en los hipódromos y fomentar la adquisición de sus excedentes por las entidades administradoras de los hipódromos del interior, proveyéndoles, para tal fin, de una financiación adecuada, cuando así lo consideraran conveniente.

11) Orientar y supervisar los regímenes de apuestas mutuas vigentes en los hipódromos del país. Estudiar, aprobar y promover sus modificaciones y nuevas formas de apuestas que tiendan a incrementar el producido de las explotaciones.

m) Orientar y supervisar la aplicación del producido de la explotación de los hipódromos, y especialmente, lo referente al pago de los premios, las comisiones, las retenciones sobre los premios para la amortización del precio de compra de los animales y otras retenciones que eventualmente correspondieran.

n) En casos de emergencia, previa solicitud de las entidades administradoras de los hipódromos afectados y con la conformidad de las autoridades competentes, la Comisión podrá arbitrar todos los medios y recursos que considere necesarios para impedir la cesación de la actividad en cualquier hipódromo del país, o en su caso, para lograr la reanudación de la actividad de los que por cualquier causa hubieran dejado de funcionar.

ñ) Recabar de los Poderes Públicos competentes la sanción de disposiciones legales para la realización de "sweepstakes". Convenir con Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, con las Loterías Provinciales o instituciones similares y con las entidades administradoras de los hipódromos que en cada caso corresponda, la distribución del producido de los "sweepstakes" que se organicen y la participación que sobre los mismos corresponderá a la Comisión, de acuerdo con el inciso b) del artículo 11° del Régimen Legal aprobado por decreto-ley n° 5.602/63.

o) Administrar el local de ventas de Palermo para los fines propios de tales operaciones conviniendo con las entidades representativas de los criadores de caballos sangre pura de carrera la organización de

los remates de productos, reproductores y animales en entrenamiento.

p) Gestionar de entidades nacionales y/o extranjeras créditos para las entidades con hipódromos en explotación y/o para los interesados en la instalación de nuevos hipódromos cuando así lo considerara conveniente para el mejor cumplimiento de sus objetivos.

q) Otorgar, con igual objeto, a las entidades mencionadas en el inciso anterior, créditos y/o financiaciones de sus propios recursos.

r) Compilar estadísticas, realizar censos de la existencia de animales sangre pura de carrera y de otras razas equinas y efectuar publicaciones relacionadas con la actividad hípica nacional, continental y mundial, quedando facultada para recabar de las reparticiones estatales y entidades con hipódromos en explotación los datos y antecedentes necesarios.

s) Participar en organizaciones nacionales e internacionales y/o en las reuniones o congresos que tengan finalidades análogas y promover el conocimiento del caballo argentino en el exterior.

t) Facilitar las exportaciones de caballos y/o reproductores sangre pura de carrera y de otras razas equinas; propiciar su inclusión en los convenios comerciales que se formalicen en el orden internacional, y promover la derogación de normas impositivas o aduaneras que pudieran obstaculizar dichas exportaciones.

u) Apoyar, facilitar y, en su caso, efectuar adquisiciones de reproductores en el país y/o en el extranjero para el mejoramiento de la crianza caballar y asesorar sobre su régimen impositivo y control aduanero y sanitario, así como realizar todas las

demás operaciones previstas en el inciso i) del artículo 8º del Régimen Legal aprobado por decreto - ley nº 5.602/63.

v) Crear, dirigir y/o administrar por sí o por terceros, estaciones de monta e institutos de investigaciones relacionados con la especie equina.

w) Apoyar iniciativas tendientes a incrementar los fondos destinados a la adquisición de animales para la Remonta del Ejército y al fomento de la cría del caballo de guerra, como positiva contribución a la Defensa Nacional. Apoyar actividades hípicas deportivas y fomentar la crianza de equinos con el fin de crear fuentes de riqueza para la Nación, estableciendo para ello fondos especiales.

x) Atender los requerimientos de instituciones de bien público o beneficencia.

ARTICULO 13.- La Comisión dictará las reglamentaciones que fueren necesarias para el mejor ejercicio de sus funciones y entre ellas:

a) Para el nombramiento, integración y régimen de trabajo de las subcomisiones permanentes o ad-hoc cuya creación fuera conveniente.

b) Sobre la participación que se le fijare sobre los - ingresos que perciban los hipódromos, otros recursos que en el futuro le fueran asignados y sobre el producido de los "sweepstakes" que se realicen.

c) Para la administración de sus propios recursos, el control de su percepción y las rendiciones de cuenta correspondientes.

d) Para la administración, regulación, distribución, - transferencia y control de destino de los fondos - que resuelva asignar a la acción de fomento equino y a la realización de las demás operaciones previstas en el inciso i) del artículo 8º del Régimen Legal aprobado por decreto-ley nº 5.602/63.

e) Para la percepción, administración y transferencia de los fondos del "Premio al Criador" y su pago a los beneficiarios, así como para la percepción de los saldos no distribuídos. Estos saldos ingresarán como recursos de la Comisión, para ser aplicados a la financiación de las creaciones a que se refiere el inciso v) del artículo anterior, independientemente de otros recursos que la Comisión destine con igual objeto.

f) Para orientar, regular y supervisar, en todos sus aspectos, la actividad de todos los hipódromos del país.

g) Para la percepción, administración, regulación, distribución, transferencia y control de destino de los fondos de la Ley nº 13.235 y de sus saldos no distribuídos hasta el presente, así como de cualquier otra disposición que tienda a promover la reactivación del turf del interior.

h) Para el otorgamiento de créditos y/o financiaciones para la compra y venta de caballos en entrenamiento y/c productos destinados a satisfacer las necesidades de los hipódromos del interior, así como, para la importación y exportación de reproductores sangre pura de carrera.

i) Para la administración del local de ventas de caballos sangre pura de carrera de Palermo, organizando y disponiendo, en acuerdo con las entidades representativas de los criadores, la venta de productos, reproductores y animales en entrenamiento.

j) Para la realización de las demás operaciones previstas en el artículo 12º del presente decreto reglamentario.

ARTICULO 14.- La Comisión proyectará, aprobará y pondrá en ejecución un plan para la estructuración integral de la actividad turfística en todo el territorio de la Repú-

blica y supervisará su cumplimiento.

Dicho plan de estructuración comprenderá las explotaciones de todos los hipódromos del país y se organizará, preferentemente, mediante contratos de adhesión libremente formalizados entre la Comisión y cada una de las entidades administradoras de hipódromos. Estos contratos serán suscriptos "ad-referendum" de su ratificación por el Poder Ejecutivo Nacional y Gobiernos Provinciales y Municipales correspondientes.

ARTICULO 15.- Los contratos de adhesión regularán las relaciones entre las partes contratantes, en cuanto se refiera a la actividad de los hipódromos desde el punto de vista técnico, económico y financiero y establecerán los derechos y obligaciones de las entidades adheridas.

ARTICULO 16.- Las entidades adheridas, además de recibir -cuando así correspondiere- la ayuda proveniente de los fondos de la Ley nº 13.235 y/o de otras disposiciones que en el futuro se establezcan, tendrán los derechos siguientes:

a) Solicitar los créditos y/o financiaciones a que se refiere el artículo 12º del presente decreto, conforme a las reglamentaciones que dicte la Comisión.
b) Recibir de la Comisión trato preferencial para:

   1) Convenir arreglos que faciliten el pago de sus deudas con el fisco y de los aportes a las Cajas de Previsión Social.
   2) Gestionar con el apoyo de la Comisión la desgravación de impuestos nacionales y/o provinciales y/o municipales, cuando incidan desfavorablemente sobre el desenvolvimiento y evolución de las explotaciones.
   3) Recibir los asesoramientos que soliciten, el apoyo a las gestiones que realicen para mejorar y racionalizar las explotaciones y a todas las demás medidas convenientes para promover su reactivación.

Las entidades administradoras de hipódromos que no formalizaran contratos de adhesión, no gozarán de los derechos a que se refiere el presente artículo, en sus incisos a) y b).

ARTICULO 17.- Las entidades adheridas se obligarán a:

a) Gestionar, juntamente con la Comisión, de los Poderes Públicos correspondientes, la sanción de disposiciones legales concordantes con la presente, y en particular, la ratificación, por ellos, de los contratos de adhesión, dentro de los plazos que se determinen.
b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del contrato de adhesión.
c) Proyectar y poner en vigencia sus reglamentaciones internas, que deberán ajustarse a las Normas Generales de Carrera dictadas por la Comisión, de acuerdo con lo previsto en el inciso i) del artículo 12° del presente decreto.
d) Proyectar el presupuesto anual de recursos y gastos de explotación y elevarlos en forma y dentro de los plazos convenidos para su aprobación por la Comisión, solicitando la ayuda necesaria, cuando los recursos previstos no alcancen a cubrir los egresos.

ARTICULO 18.- Las entidades administradoras de hipódromos tendrán las obligaciones y atribuciones siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones dictadas por la Comisión en el ejercicio de sus funciones de orientación y supervisión de la actividad de todos los hipódromos del país.
b) Designar las Comisiones de Carreras y/o "Comisariatos", cuyas atribuciones y obligaciones deberán ser consignadas en las reglamentaciones internas a

que se refiere el inciso c) del artículo 17º.

c) Proyectar, de acuerdo con la Programación Anual de Carreras y de Distribución de Premios aprobada por la Comisión, el programa de carreras y distribución de premios correspondiente al hipódromo a su cargo, elevándolo en forma y dentro de los plazos establecidos para su aprobación por la Comisión.

d) Organizar los servicios técnico-funcionales del hipódromo a su cargo.

e) Reconocer a propietarios de caballerizas, asignarles colores y cancelar o suspender los reconocimientos otorgados, si así correspondiera, suministrando a la Comisión información periódica al respecto.

f) Otorgar, suspender o cancelar licencias a los profesionales del turf y extender las autorizaciones habilitantes para el personal de caballerizas, suministrando información periódica a la Comisión.

g) Regular y aplicar las sanciones establecidas en el Reglamento de Carreras e informar a la Comisión sobre aquéllas que por su importancia, corresponda hacer extensiva a los demás hipódromos.

h) Determinar el precio de las inscripciones y ratificaciones para las carreras en sus distintas categorías, que no podrá ser superior al 5‰ (cinco por mil) del premio asignado al ganador.

i) Identificar a los animales que actúan en carrera, en base a la información y colaboración del Stud Book Argentino.

j) Reglamentar el derecho de acceso y fijar el precio de las entradas al hipódromo a su cargo, previa aprobación por la Comisión.

k) Administrar las apuestas mutuas en base al régimen vigente o al que, en el futuro determine la Comisión y someter a su aprobación las propuestas de nuevos sistemas de apuestas o la modificación de los existentes.

1) Retener sobre el monto de las apuestas los importes que correspondan de acuerdo con los porcentajes vigentes, o los que en el futuro se establezcan, por nuevas disposiciones legales o por modificación de las que rigen en la actualidad.

11) Pagar, dentro de los plazos legales establecidos, los impuestos sobre las apuestas, los aportes a las Cajas de Previsión Social, los premios que correspondan a los propietarios, las retenciones sobre los premios, las comisiones a los profesionales del turf y, en general, las obligaciones derivadas de la explotación en sí misma. Ingresar a la Comisión, en los plazos y donde se determine, su participación sobre los descuentos en las apuestas mutuas, los fondos del Premio al Criador, los correspondientes a la Ley nº 13.235 y otros aportes que en el futuro se establezcan.

m) Proyectar y realizar la introducción de mejoras técnicas y funcionales en los hipódromos a su cargo y solicitar la ayuda financiera para realizar las obras, sus amortizaciones y las provisiones o previsiones correspondientes.

n) Compilar las estadísticas y demás información técnica del hipódromo a su cargo, colaborar con la Comisión en las publicaciones de orden general y, en especial, en el Calendario de Carreras y contribuir con los fondos que para tal objeto determinen las disposiciones correspondientes.

ñ) Proporcionar en tiempo y forma toda la información técnica, económica y financiera que les sea requerida por la Comisión. Colaborar con las inspecciones periódicas que disponga la Comisión en el ejercicio de sus funciones de supervisión.

o) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para el normal desenvolvimiento de las explotacio-

nes, en salvaguarda de los intereses del Estado, - del público concurrente a los hipódromos a su cargo y de los propiestarios, criadores y sectores - complementarios del turf.

ARTICULO 19.- La Comisión podrá verificar en cualquier momento la exactitud de las informaciones técnicas y contables suministradas por las entidades administradoras de hipódromos y efectuar todas las comprobaciones que considere oportunas para el cumplimiento de sus funciones de - supervisión sobre la actividad turfística, en todo el territorio de la República, ya sea mediante inspecciones, - compulsas de libros o cualquier otro sistema de controles. A tal efecto, de acuerdo con lo previsto en el inciso f) del artículo 13º del presente decreto, dictará la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 20.- A partir de la fecha, las entidades administradoras de hipódromos ingresarán a la Comisión, en la - forma y plazos que la misma establezca, los fondos correspondientes a la Ley nº 13.235 y los importes del "Premio al Criador", que se devenguen a partir del 1º de noviembre de 1963 y los que en el futuro correspondieran de acuerdo a las disposiciones vigentes. Dentro de los diez - (10) días hábiles de la fecha, Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos transferirá a la Comisión, en la forma - que la misma determine, las órdenes de pago y/o saldos no distribuídos correspondientes a los fondos e importes a que se refiere el párrafo anterior, acompañando las liquidaciones correspondientes.

Dentro de igual fecha, la Tesorería General de la Nación, transferirá a la Comisión el saldo que arroje la - Cuenta Especial "SECRETARIA DE HACIENDA-FONDO DE AYUDA PARA HIPODROMOS - Ley 13.235, artículo 1º".

ARTICULO 21.- De todas las actuaciones se llevará el correspondiente archivo, a cargo de la Secretaría de la Comisión. A los efectos de su consulta y asesoramiento, Lo-

tería de Beneficencia Nacional y Casinos, dentro de un plazo de treinta (30) días corridos elevará a la Comisión, clasificados y bajo inventario, toda la documentación técnica, contable y estadística que se relacione con la actividad turfística nacional, así como las publicaciones de igual carácter y demás elementos de juicio que obren en dicha repartición, los que se incorporarán al inventario de la Comisión.

Dentro del mismo plazo, la citada repartición elevará a la Comisión un informe completo sobre la situación técnica, económica, financiera e impositiva de cada uno de los hipódromos del país al 31 de diciembre de 1962 y la correspondiente al corriente año.

ARTICULO 22.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

ARTICULO 23.- El presente decreto reglamentario será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, de Guerra y de Hacienda de la Nación.

ARTICULO 24.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - José A.Martínez de Hoz (h) - José M. Astigueta - Carlos López Saubidet - Héctor Repetto - Eduardo Tiscornia

ACTO: DECRETO Nº 4.581/63.-

MATERIAS: TRABAJO INSALUBRE - PERSONAL

Buenos Aires, 4 de junio de 1963.-

Visto lo propiciado por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública y lo dispuesto por los decretos Nros. 22.422 del 29 de julio de 1948 y 20.011 del 23 - de octubre de 1953; y

CONSIDERANDO:

Que habiéndose establecido el uso obligatorio del minio como anticorrosivo en materiales ferrosos por parte de las reparticiones del Estado y entidades autárquicas, en materiales de su propiedad y por los subcontratistas en las obras que realicen por el Estado, es necesario, conforme a las conclusiones a que arribaran las reparticiones técnicas del citado Departamento de Estado, adoptar las medidas pertinentes, de carácter preventivo en salvaguardia de la salud de los trabajadores que utilicen el minio como anticorrosivo;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Se declara obligatoria la aplicación de las medidas preventivas que se detallan en el presente, en las reparticiones nacionales, inclusive las autár -

//-

quicas que empleen el minio como anticorrosivo de los materiales de su propiedad.

ARTICULO 2°.- En los pliegos de licitaciones se establecerá una cláusula contractual en virtud de la cual los subcontratistas que realicen obras para el Estado, se comprometan a adoptar las mismas medidas preventivas con respecto a su personal y toda otra obligación que surja del presente decreto.

ARTICULO 3°.- Quedan comprendidos en las presentes disposiciones los trabajos de preparación, aplicación, raspado, picareteado y quemado de pintura, enduídos o masillas que contengan minio.

ARTICULO 4°.- Todo trabajo susceptible de producir el desprendimiento de vapores, humos o polvos provenientes de substancias que contengan minio deberá realizarse al aire libre o en locales cuya ventilación asegure una concentración de plomo ambiental, que no exceda ciento cincuenta (150) gammas por metro cúbico de aire.

ARTICULO 5°.- Las paredes y los pisos de los locales donde se efectúen las tareas mencionadas precedentemente deberán ser lisos. Semanalmente se procederá a la limpieza de los muros y diariamente a la de los pisos, por procedimientos que no den lugar a la movilización de partículas.

ARTICULO 6°.- Se prohibe en los lugares de trabajo, fumar, introducir y/o consumir alimentos o bebidas de cualquier tipo.

ARTICULO 7°.- Las ropas de calle deberán estar separadas perfectamente de las de trabajo, ya sean en lugares distintos o por muebles o dispositivos adecuados.

ARTICULO 8°.- Los obreros deberán efectuar su higiene personal (en especial lavado y cepillado de uñas y dientes) al finalizar sus jornadas de trabajo. A tales fines las reparticiones nacionales, entidades autárquicas y subcontratistas les proveerán de los elementos de higiene indispensables.

ARTICULO 9°.- Los obreros deberán usar obligatoriamente los siguientes elementos de protección individual: mamelu

cos, gorras y guantes. En las tareas de picareteado o raspado de superficies cubiertas con substancias que contengan minio, se agregarán antiparras protectoras y en las de quemado de pintura, caretas antigás.

ARTICULO 10.- La ropa de trabajo de los obreros deberá ser lavada como mínimo una vez por semana.

ARTICULO 11.- Los obreros que realicen las tareas que se mencionan en el presente decreto, serán objeto de un examen médico, cada seis meses, a objeto de evidenciar precozmente la intoxicación plúmbica.

ARTICULO 12.- Las reparticiones nacionales o entidades autárquicas en su caso proveerán lo necesario para que la tarea especificada en el artículo 10º sea realizada por su cuenta y que sus Servicios Médicos lleven a cabo los exámenes a que se refiere el artículo anterior. Los subcontratistas cumplirán éstas y demás obligaciones impuestas por el presente decreto, en virtud de las cláusulas contractuales que se agregarán a los respectivos pliegos de condiciones, conforme a lo especificado en el artículo 2º.

ARTICULO 13.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Asistencia Social y Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social.

ARTICULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Tiburcio Padilla -
Bernardo Has.

ACTO: MEMORANDUM I.O. y M. Nº 68/63.-

MATERIAS: CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA - MUEBLES Y UTILES - I.S.A.P. - SERVICIO DE ORGANIZACION Y METODOS

Informe I.S.A.P. Nº 289/63.-

Buenos Aires, 20 de mayo de 1963.-

Conforme al criterio reiteradamente sustentado por este Instituto, la adquisición de mobiliario y equipo (incluído ventiladores o renovadores de aire), con destino a locales donde no se efectúa permanentemente actividades burocráticas (laboratorios, aulas, talleres, etc.), no se encuentra comprendido dentro de los términos del decreto Nº 504/62 (1), por lo que se considera innecesaria la autorización previa de este Instituto para concretar la operación.-

Fdo. CARLOS A. JUVENAL
Director del Servicio de
Organización y Métodos

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1565.-

ACTO: DECRETO Nº 4.340/63.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIONES - PROPAGANDA Y PUBLICIDAD - PRESUPUESTO - CUENTAS ESPECIALES

Buenos Aires, 29 de mayo de 1963.-

Atento la necesidad de otorgar un nuevo anticipo de m$n. 30.000.000.- con destino a la atención de los servicios que se atienden con cargo a la Cuenta Especial "Presidencia de la Nación - Cumplimiento decreto Nº 6.854/62" (1), hasta tanto se concreten los ingresos provenientes de los distintos Ministerios y Organismos del Estado a la referida cuenta especial;

Por ello, y atento lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 16.432 (2), incorporado por el artículo 83 de la misma a la Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto);

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Autorízase a la Secretaría de Estado de Hacienda a anticipar con cargo a los recursos del Tesoro Nacional y con carácter de reintegro hasta la suma de treinta millones de pesos moneda nacional (m$n. //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1671.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 1545.-

30.000.000.-) con destino a atender el funcionamiento de la Cuenta Especial "Presidencia de la Nación - Cumplimiento decreto Nº 6854/62", cuya apertura fué dispuesta por el artículo 1º del decreto Nº 7.208 de fecha 25 de julio de 1962 (º), a cuyo efecto la Contaduría General de la Nación procederá a contabilizar la presente operación en la cuenta de anticipo oportunamente habilitada por el artículo - 3º del precitado decreto Nº 7.208/62.

ARTICULO 2º.- La Tesorería General de la Nación pondrá a disposición de la Dirección de Administración de la Presidencia de la Nación hasta la suma de treinta millones de pesos moneda nacional (m$n. 30.000.000.-) en función de lo establecido en el citado artículo 12 de la Ley 16.432, orden conjunta, Director de Administración y Tesorero de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, con destino a la atención de los gastos a que se refiere el presente decreto.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y del Interior y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz - Osiris G.Villegas - Eduardo Tiscornia.

(º) Ver Digesto Administrativo Nº1748.-

ACTO: DECRETO Nº 5.313/63.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - OBRAS PUBLICAS - CONTRATACIONES - OBRAS ARQUITECTONICAS

Buenos Aires, 28 de junio de 1963.-

Visto que subsisten a la fecha las razones que determinaron la prórroga del plazo establecido por el artículo 4º del decreto Nº 4.760/62 (1), acordado por decreto Nº 12.327/62(") del cual se ha operado su vencimiento;

Por tanto, atento a lo solicitado por el señor Secretario de Estado de Obras Públicas y a lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prorrogar por el lapso de ciento veinte (120) días laborables administrativos, el plazo establecido por el artículo 4º del decreto Nº 4.760/62, prorrogado por el artículo 1º del decreto Nº 12.327/62.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Obras y Servicios Públicos y de Economía y firmado //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1640.-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 1808.-

por los señores Secretarios de Estado de Obras Públicas y de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de Obras Públicas a sus efectos.-

GUIDO - Horacio J.Zubiri - José A.Martínez de Hoz (h) - Luis De Carli - Eduardo Tiscornia.

ACTO: DECRETO-LEY Nº 5.340/63.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA

Buenos Aires, 1º de julio de 1963.-

CONSIDERANDO:

Que para promover el bienestar general, que es uno de los fines esenciales del gobierno, pueden dictarse medidas conducentes a la prosperidad del país para el adelanto y bienestar de todas las provincias, promoviendo las industrias existentes y la introducción y establecimiento de otras nuevas, por leyes protectoras de estos fines, como expresan el preámbulo de la Constitución Nacional y su artículo 67, inciso 16;

Que se considera absolutamente imprescindible y urgente adoptar ciertas medidas tendientes a fomentar las actividades nacionales de producción de bienes;

Que las compras en el exterior de productos que pudieran adquirirse en el mercado interno agrava innecesariamente el déficit de la balanza de pagos internacionales de la República, ya que exigen pagos en divisas que pueden ser evitados;

Que cuanto mayores sean las ventas en el mercado interno, tanto mayores serán los empleos y tanto más se eliminarán las causas de desocupación;

Que el mayor volumen de ventas está generalmente a

//-

compañado de una reducción de los costos, que a su vez se traduce en disminución de los precios de venta;

Que el fortalecimiento del mercado interno alienta nuevas inversiones y consiguientemente, crea un factor de competencia que es el mecanismo básico para mejorar y abaratar la producción;

Que las adquisiciones que deben hacer la administración pública, las dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y autónomas, las empresas del Estado y las empresas concesionarias de servicios públicos representan un volumen importantísimo;

Que es imprescindible adoptar las medidas para asegurar que el potencial comprador del Estado, de los organismos del Estado y de los que prestan servicios públicos, se dirija al mercado interno, adquiriendo en la máxima medida posible productos, mercaderías y materiales de origen nacional cuando estén a un nivel razonable de precios en relación con los productos, mercaderías y materiales similares adquiridos en el exterior;

Que los derechos aduaneros y los recargos cambiarios a la importación tienden a establecer un equilibrio entre los precios de los productos nacionales y los de los productos de importación, dentro de márgenes razonables y en consideración de la conveniencia del establecimiento de ciertas actividades de producción;

Que como la administración pública, los organismos y empresas del Estado y las empresas concesionarias de servicios públicos se encuentran en algunos casos liberadas del pago de impuestos aduaneros y recargos de importación y en otros casos gozan de facilidades financieras para su pago, se produce, naturalmente, una tendencia a adquirir materiales, mercaderías y productos de importación;

Que a estos efectos parece lo más conveniente establecer la preferencia absoluta a favor del material, mercadería y productos de origen nacional en las adquisiciones

directas o indirectas de la administración pública, de los organismos y empresas del Estado y de las empresas concesionarias de servicios públicos, cuando el precio sea razonable, entendiéndose como razonable el que no sea superior al del material, mercadería o productos de importación, computando todos los recargos cambiarios, derechos, impuestos, tasas y gravámenes que debiera satisfacer un importador no privilegiado, es decir, una persona que no pudiera invocar las exenciones o privilegios del Estado;

Que en esta forma se sigue la misma política que han adoptado los países industriales que han asegurado para su propia industria el mercado de las inversiones públicas;

Que con el establecimiento de esta régimen el Gobierno Nacional piensa asegurar en forma permanente un importante sector del mercado interno para ser satisfecha por la producción de origen nacional, sin desconocer los compromisos que surgen del Tratado de Montevideo, que creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- La Administración Pública, las dependencias, reparticiones o entidades autárquicas, autónomas o descentralizadas, las empresas concesionarias de servicios públicos y las empresas del Estado, deberán adquirir exclusivamente materiales, mercaderías y productos de origen nacional, siempre que el precio sea razonable.

Igualmente estarán obligados los que celebren contratos de obras o de servicios con la administración pública, las dependencias, reparticiones o entidades autárquicas, autónomas o descentralizadas y las empresas de Estado.

ARTICULO 2º.- A los efectos del artículo 1º, se entiende que un material, mercadería o producto es de origen nacio-

nal, cuando:

a) sea un mineral extraído de minas situadas en el territorio nacional, y beneficiado en el mismo;
b) sea un producto agropecuario producido en el territorio nacional;
c) sea un producto industrial manufacturado en la República Argentina en cuya elaboración se utilicen materias primas, productos semielaborados o partes producidas en el territorio nacional;
d) sea un producto industrial manufacturado en la República Argentina en cuya elaboración se utilicen materias primas, productos semielaborados o partes producidas en el exterior y que no se produzcan o no puedan producirse en el territorio nacional a precios razonables;
e) sea un producto industrial manufacturado en la República Argentina por plantas industriales que estén desarrollando un plan de integración industrial aprobado o establecido por autoridad competente, - aunque el producido no cumpla la condición del inciso d) precedente.

ARTICULO 3º.- El costo es considerado razonable cuando el precio de los materiales, mercaderías o productos de origen nacional no sea superior al precio de los materiales, mercaderías o productos de importación, que al solo efecto de la comparación de precios comprenderá:

a) el valor C.I.F. puerto argentino (costo, seguro y flete);
b) los recargos cambiarios establecidos para la importación del material, mercadería o productos de que se trate, que deban ser satisfechos por un importador no privilegiado; se computará como recargo mínimo el 25% si el establecido fuera inferior o no existiese;

c) los impuestos, derechos y tasas aduaneras que debieran ser satisfechos por un importador no privilegiado;

d) todos los demás impuestos, derechos, tasas o gravámenes que debieran ser satisfechos por un importador no privilegiado;

e) los intereses, comisiones y gastos financieros que el adquirente deba pagar cuando se hubiera ofrecido el pago a plazo de los materiales, mercaderías y productos de importación, en el monto que exceda del porcentaje corriente en el país de origen para exportaciones financiadas sobre el valor de los materiales, mercaderías y productos entregados; se computarán también en este concepto el impuesto a los réditos imponible sobre el giro de intereses al exterior cuando esté a cargo del adquirente.

ARTICULO 4º.- En los materiales, mercaderías o productos originarios de países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, se computarán solamente, los recargos y aranceles vigentes en la Lista Nacional Argentina.

ARTICULO 5º.- Cuando la Secretaría de Estado de Industria y Minería, a petición de parte interesada o de oficio, establezca fehacientemente que el precio en el mercado interno del país de origen del material, mercadería o producto de importación que hubiera sido ofrecido es, por lo menos, superior en un diez por ciento (10%) al de exportación, se sustituirá en la comparación de precios -siempre que no existiese un precio índice establecido- el valor C.I.F. puerto argentino por el precio corriente en el mercado interno del país de origen, aumentado con los elementos para establecer el valor C.I.F. puerto argentino.

ARTICULO 6º.- A los efectos de la comparación de precios prevista en el artículo 3º, si el monto de los gravámenes

totales del producto terminado de importación que debiere pagar un importador no privilegiado fuera menor que el monto total de los gravámenes pagados por los componentes importados del producto terminado nacional, esta diferencia disminuirá el precio del material, mercadería o producto de origen nacional comprendido en los incisos d) y e) del artículo 2º. Este importe será determinado por la Secretaría de Industría y Minería y será aplicado el importe menor establecido para cada uno de los varios materiales, mercaderías o productos similares de origen nacional que se hubiesen ofrecido en una licitación, cuando en la elaboración se emplearen en distinto grado materias primas, productos semielaborados o partes de importación.

ARTICULO 7º.- Será condición para la aplicación del régimen establecido, la certificación por la Secretaría de Industria y Minería de que un material, mercadería o producto es de origen nacional, conforme a las disposiciones del artículo 2º y del importe que se determine conforme a las disposiciones del artículo 6º. La Secretaría de Industria y Minería deberá expedir las certificaciones dentro de los diez días hábiles de ser solicitadas y estas certificaciones tendrán validez permanente, mientras no sean rectificadas o modificadas, de oficio o a pedido de parte interesada.

ARTICULO 8º.- Los Bancos oficiales podrán conceder créditos, avales o garantías para financiar la adquisición en el exterior de materiales, mercaderías o productos por parte de las administraciones públicas, provinciales o municipales, reparticiones, dependencias o entidades autárquicas, autónomas o descentralizadas o empresas del Estado, provinciales o municipales, solamente previo dictado de la resolución conjunta a que se refiere el artículo 12º.

ARTICULO 9º.- No se acordarán liberaciones de recargos cambiarios o de derechos aduaneros que soliciten las provincias, municipalidades o cualquier otra entidad pública, para la importación de materiales, mercaderías o productos, si no se o

peran las condiciones que se establecen en el presente decreto.

ARTICULO 10.- Declárase al régimen establecido de orden público y nulos de nulidad absoluta todos los contratos que se celebren en contravención con el mismo. La nulidad podrá ser declarada de oficio, o petición de parte interesada, considerándose tal también al oferente de materiales, mercaderías o productos de origen nacional.

ARTICULO 11.- Créase, en jurisdicción del Ministerio de Economía, una Comisión Asesora Honoraria, integrada por representantes de organismos del Estado y de la actividad privada, la que intervendrá en el cumplimiento de las disposiciones del presente régimen asesorando a dicho Ministerio. La reglamentación que se dicte determinará el número de miembros, organismos representados y procedimiento a que se deberá ajustar su cometido.

ARTICULO 12.- Previo asesoramiento de la Comisión que se crea, por resolución conjunta del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Industria y Minería se podrán conceder autorizaciones de importación, en los siguientes casos:

a) Cuando se hayan observado las condiciones del régimen establecido por este decreto, y el precio de los materiales, mercaderías o productos de importación C.I.F. Buenos Aires, resulten más convenientes de acuerdo con el criterio de comparación fijado en el artículo 3°.

b) Cuando el bien licitado internacionalmente se encuentre protegido con un recargo de cambio superior al 25% y, hecho el estudio de costos, incluido un razonable beneficio del productor argentino, se llegare a la conclusión de que la protección existente excede la necesaria, a los efectos de la comparación del artículo 3°, inc. b), podrá reducirse el recargo en la medida del excedente y no será el recargo inferior, en ningún caso, al 25%.

c) Cuando exista una razón de urgencia y se pruebe fehacientemente que los proveedores locales no están en condiciones de entregar el producto de que se trate, dentro del plazo requerido.

d) Cuando se trate de importaciones de países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y se juzgue que una importación determinada promoverá exportaciones en otros sectores.

e) Cuando se trate de operaciones financiadas por agencias gubernamentales extranjeras u organismos internacionales de crédito, siempre que, hechos debidos estudios económicos, la obra o trabajo a financiar se considere de alta prioridad y que como consecuencia de la misma se obtenga un correlativo incremento de la actividad general interna y una adecuada participación de la industria argentina.

f) Cuando se pruebe en forma fehaciente que la calidad del producto nacional es insatisfactoria o que las especificaciones técnicas exigidas por el ente comprador difieren sustancialmente de las del producto nacional y que no puedan ser adaptadas a las de la industria nacional sin serio perjuicio para el adquirente.

g) Cuando los antecedentes del proveedor nacional sean, a juicio de la Comisión, insatisfactorios en cuanto a su posibilidad de cumplir en todos sus términos con su oferta.

h) Cuando el oferente, en virtud de beneficios concedidos por el Estado, se haya comprometido a operar con un nivel de protección inferior al que fija el presente régimen.

ARTICULO 13.- Por el Ministerio del Interior se invitará a los gobiernos de las provincias para que en sus respectivas jurisdicciones se dicten normas similares a las de

este régimen.

ARTICULO 14.- Las disposiciones del presente decreto no regirán para las comparaciones de precios que deban hacerse en las licitaciones internacionales que se efectúen en función de financiaciones ya convenidas con agencias gubernamentales extranjeras u organismos internacionales de crédito en que se hubieran especialmente previsto las modalidades correspondientes.

ARTICULO 15.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Obras y Servicios Públicos, Defensa Nacional e Interior y firmado por los señores Secretarios de Estado de Energía y Combustibles, de Industria y Minería, de Comercio y de Hacienda.

ARTICULO 16.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - José A. Martínez de Hoz - Horacio J. Zubiri - José M. Astigueta Osiris G. Villegas - Jorge Bermúdez Emparanza - Luis Gottheil - Juan B. Martín - Eduardo B. M. Tiscornia.

ACTO: DECRETO Nº 5.363/63.-

MATERIAS: ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - PERSONAL - INCOMPATIBILIDADES - LICENCIAS

Buenos Aires, 1º de julio de 1963.-

Visto que el régimen sobre acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública aprobado por el decreto Nº 8.566/61 (1), en su artículo 3º establece que al personal que tuviera más de tres (3) años en la Administración, que fuera designado candidato a miembro de los Poderes Ejecutivo o Legislativo de la Nación o de las Provincias y de las Municipalidades se le acordará licencia desde ese momento sin goce de sueldo, y

CONSIDERANDO:

Que dicha cláusula se inspiró en el propósito de prever el instrumento legal necesario para que el agente en quien recayera una designación de esa naturaleza pudiera, invocando su amparo, dedicarse sin reservas a las actividades inherentes a su condición de candidato;

Que si bien por sus especiales características, estas actividades pueden generar situaciones de incompatibilidad, originadas en razones de ética, o simplemente en motivos de eficiencia o disciplina administrativa, -

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1460.-

ello no constituye una norma invariable, por cuanto en oportunidades, particularmente cuando están referidas a representaciones de menor jerarquía, no afectan necesariamente el normal desempeño de la función pública;

Que en esas circunstancias el otorgamiento de la referida licencia no debe revestir carácter obligatorio, como el fijado expresamente para los candidatos electos en la misma cláusula y en los Artículos 14 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y 22 del régimen de licencias aprobado por el decreto Nº 8567/61(*), por cuanto no se darían en el caso las razones que hacen aconsejable su separación de las actividades que le competen como agente al servicio del Estado;

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda en orden a las atribuciones que le confiere el decreto-ley Nº 797/58 (°),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Déjase establecido que la licencia sin goce de sueldo prevista en el art. 3º del decreto Nº 8566/61 para el personal del Estado que fuera electo candidato a miembro de los Poderes Ejecutivo o Legislativo de la Nación o de las Provincias y de las Municipalidades, no revestirá carácter obligatorio cuando el agente en quien recayera esa designación pueda continuar ejerciendo normalmente las funciones que le competen en la Repartición que integra. Esta circunstancia será fiscalizada por sus superiores jerárquicos, los que, en caso contrario, lo intimarían a formular la opción respectiva, conforme a las estipulaciones del régimen aprobado por el aludido pronunciamiento.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz (h.) - Eduardo Tiscornia.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-

ACTO: DECRETO - LEY Nº 5.535/63.-

MATERIAS: PRESIDENCIA DE LA NACION - SUELDO - COMPENSACIONES

Buenos Aires, 4 de julio de 1963.-

Visto lo dispuesto por los artículos 79 y 93 de la Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que estando próxima la renovación de las autoridades nacionales, resulta oportuno fijar los sueldos y gastos de representación de los futuros mandatarios, en razón de que las disposiciones constitucionales citadas impiden a aquéllos adoptar previsiones en tal sentido;

Que ese procedimiento ha sido seguido en otras oportunidades similares;

Que las actuales retribuciones son inadecuadas, ya que no guardan relación con las que perciben funcionarios de menor jerarquía y resultan completamente desproporcionadas a la importancia de sus funciones;

Que para lograr tal propósito se hace necesario establecer un sistema de adecuación automática, compatible con las normas constitucionales mencionadas;

Que la doctrina constitucional señala unánimemente que en el artículo 79 se procuró salvaguardar la independencia del Poder Ejecutivo, impidiendo que el Congreso utilizara su atribución de fijar los sueldos como un instrumento de presión sobre aquél;

//-

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1°.- A partir del próximo ejercicio fiscal, las compensaciones del Presidente y Vicepresidente de la Nación Ministros y Secretarios de Estado serán las que se establecen en este decreto.

ARTICULO 2°.- El Presidente de la Nación percibirá como sueldo, una suma igual a la que, por todo concepto, corresponda al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en carácter de gastos de representación, las tres cuartas partes de dicha suma.

ARTICULO 3°.- El Vicepresidente de la Nación percibirá como sueldo, las tres cuartas partes de la suma que perciba el Presidente por tal concepto, y en carácter de gastos de representación, la misma proporción de la suma que corresponda al Presidente por dicho concepto.

ARTICULO 4°.- Los Ministros y Secretarios de Estado percibirán como sueldo, las tres cuartas partes de la suma que perciba el Vicepresidente por tal concepto, y en carácter de gastos de representación, la misma suma que corresponda al Vicepresidente por dicho concepto.

ARTICULO 5°.- Incorpórase a la Ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto), las disposiciones del presente decreto.

ARTICULO 6°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, del Interior y de Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz - Osiris G.Villegas - José M. Astigueta - Eduardo B.M. Tiscornia.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 5.553/63.-

MATERIAS: INCOMPATIBILIDADES - PERSONAL

Buenos Aires, 5 de julio de 1963.-

Visto el expediente Nº 3.029/63, por el que la Policía Federal solicita la modificación del artículo 23º - del decreto-ley 6.581/58, y

CONSIDERANDO:

Que el personal de los servicios sanitarios y asistencial de esa Institución se halla comprendido en el régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 23º del decreto-ley 6.581/58, que rige a su personal civil;

Que tal situación configura una evidente desigualdad con los similares de otras Reparticiones del Estado que pueden acumular otro cargo de la misma naturaleza, de carácter nacional, provincial o municipal (decreto número 12.557/55, cuya vigencia se ratificó por decreto número 9.677/61 (1), artículo 8º, "in fine");

Que es innegable, además, que en las funciones propias de esa actividad, la intensificación de las tareas redunda en beneficio del servicio, por la mayor experiencia y consiguiente eficacia que adquiere quien las desempeña;

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1491.-

Que ello es tanto más importante por constituir estos servicios el complemento indispensable de las tareas técnico científicas de los profesionales del arte de curar;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 23º del decreto-ley 6.581/58, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 23º.- Es incompatible el desempeño de un empleo civil en la Policía Federal, con otro nacional, provincial o municipal, exceptuándose los cargos docentes y los técnicos profesionales, siempre que no haya superposición de horarios. En las mismas condiciones, el personal del Escalafón "B" - Técnico Sub-profesional - y Escalafón "C" - Técnico de Obra Social -, que cumplan tareas de carácter sanitario o asistencial, podrá acumular otro cargo de esa misma naturaleza".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior, Defensa Nacional y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Osiris G.Villegas - José M.Astigueta - José A.Martínez de Hoz - Eduardo B.M.Tiscornia.

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº1936.-

ACTO: DECRETO Nº 5.747/63.-

MATERIA: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS

(Casinos)

Buenos Aires, 16 de julio de 1963.-

Visto las presentes actuaciones, expediente número 51.830/59, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de las gestiones promovidas por la Dirección General de Parques Nacionales dependiente de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos propone la instalación de una sala de entretenimientos en el Parque Nacional de Iguazú (Provincia de Misiones);

Que la habilitación de esa sala de entretenimientos ha de aportar indudables beneficios para el desarrollo e incremento de la corriente turística que se hará converger hacia esa zona, todo lo cual dará lugar a la creación de nuevas fuentes de trabajo para la población local estable;

Que el encauzamiento de esa corriente turística, además de propender a un mejor conocimiento de las bellezas naturales de nuestro suelo que en tal forma pueden llegar a tener insospechada difusión en el exterior, entraña también un motivo de verdadero interés nacional, aspecto éste que no debe ser pasado por alto

//-

ya que es indudable que el mismo es objeto de primordial atención por parte de los países limítrofes en sus respectivos territorios;

Que desde el punto de vista estrictamente local y acorde con lo que se ha evidenciado en los lugares donde actualmente funcionan casinos administrados por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, el producido de la explotación de la sala de entretenimientos cuya habilitación se proyecta contribuirá a incrementar el patrimonio de la provincia, con la que ésta se hallará en mejores condiciones para atender los gastos que le demande el mejoramiento de la zona;

Que, por último, es procedente la autorización solicitada en mérito a que, por imperio del Decreto N° 34.189 del 20 de diciembre de 1944, se encomendó a la citada repartición todo lo referente a la administración y explotación de casinos, salas y centros de esparcimiento, etc., que tome a su cargo el Gobierno de la Nación en todo el territorio de la República;

Por ello y lo propuesto por los señores Secretarios de Agricultura y Ganadería y de Hacienda de la Nación,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Autorízase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a habilitar un casino en el Parque Nacional de Iguazú (Provincia de Misiones), a cuyo efecto se celebrará un convenio entre la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos y la Dirección General de Parques Nacionales, sobre la base del proyecto agregado y que forma parte del presente decreto, por el cual el organismo citado en último término cede en arrendamiento al primero, parte de un inmueble ubicado en el Parque Nacional de Iguazú (Provincia de Misiones), para la instalación de un casino.

ARTICULO 2º.- Los gastos que origine la instalación y habilitación de la sala de entretenimientos de que se trata, serán atendidos con las partidas específicas del presupuesto de la Cuenta Especial "Explotación de Salas de Entretenimientos".

ARTICULO 3º.- El producido de la explotación del casino mencionado, se distribuirá de acuerdo con las normas fijadas por Decreto-Ley Nº 22.296/56 (1).

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Agricultura y Ganadería de la Nación.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.

GUIDO - José A. Martínez de Hoz - Eduardo B.M. Tiscornia - Carlos A. López Saubidet

Entre la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, con domicilio en la Capital Federal, calle Santiago del Estero Nº 126/40, representada en este acto por el señor . . . en su carácter de . . . de la misma y la Dirección General de Parques Nacionales, dependiente de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, con domicilio en la Capital Federal, calle Santa Fe Nº690,

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 90.-

representada en esta emergencia por el señor . . . en su carácter de . . . de la misma se celebra el presente convenio conforme a las cláusulas que se determinan en los artículos siguientes:

Artículo 1º.- La Dirección General de Parques Nacionales cede en locación a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, parte del edificio donde funciona el Hotel Iguazú, situado en jurisdicción del Parque Nacional Iguazú (Provincia de Misiones), a fin de que la segunda de las reparticiones nombradas proceda a la habilitación de una sala de entretenimientos, de acuerdo con la autorización respectiva conferida por el decreto Nº . . . de fecha . . .

Artículo 2º.- Las dependencias que se arriendan por el presente convenio configuran una superficie aproximada de . . . metros cuadrados, acorde con las especificaciones que se consignan en el plano de fojas . . . que es parte integrante de este contrato.

Artículo 3º.- Fíjase como valor locativo mensual de las dependencias mencionadas en el artículo anterior la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional (m$n. 50.000.-), la que será abonada del primero (1º) al cinco (5) del mes siguiente al que corresponda, por intermedio de la Tesorería General de la Administración Central de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos.

Artículo 4º.- El término del presente convenio será por tres (3) años con opción, por parte de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, de prorrogarlo por dos (2) años más, empezando la vigencia del mismo como así también el cómputo del alquiler que se devenga, desde el momento que la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos tome posesión de las dependencias respectivas -una vez realizadas las modificaciones que sean necesarias llevar a cabo en los distintos ambientes que se arriendan- y hasta la fecha de vencimiento de los plazos establecidos precedentemente.

Artículo 5º.- La Lotería de Beneficencia Nacional y Ca

sinos, declara expresamente su conformidad con el estado actual de conservación e higiene de la parte que arrienda, comprometiéndose a devolverla en las mismas condiciones salvo los deterioros causados por la acción del tiempo.

Artículo 6º.- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, previa conformidad por escrito por parte de la Dirección General de Parques Nacionales, efectuará por su cuenta en la parte del inmueble que arrienda, las modificaciones que sean indispensables a fin de adaptarlo a las necesidades de su explotación, ya sean ellas demolición y/o levantamiento de mamposterías, como la construcción de oficinas, tabiques, mostradores, etc.

En la oportunidad de tener que proceder a la desocupación de los ambientes arrendados, la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos tomará a su cargo la tarea de desmontar las oficinas habilitadas no asumiendo ninguna obligación con respecto a la restitución a su estado original, de cualquier trabajo de mampostería que se hubiere realizado.

Artículo 7º.- Queda convenido que será por cuenta de la Dirección General de Parques Nacionales el mantenimiento y/o conservación de los exteriores de los ambientes arrendados -incluido el pintado del frente, puertas, ventanas y reparación de techos- como así mismo de las instalaciones eléctricas, sanitarias, de agua corriente y toda otra de cualquier tipo que sea, quedando únicamente a cargo de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos las reparaciones y/o mantenimiento de esas instalaciones en el interior de los ambientes que le pertenecen, cuando los desperfectos se hayan originado por el mal uso de las mismas o por negligencias imputables al personal dependiente de ella.

Artículo 8º.- Queda expresamente establecido que las tasas, contribuciones, impuestos o gravámenes de cualquier naturaleza que fueren, existentes o a crearse, como así tam

bién los que correspondieren por el uso de agua corriente y cloacas, estarán a cargo de la Dirección General de Parques Nacionales, salvo aquellos que obedecieran al uso - que, a la parte arrendada le diera la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos.

Artículo 9º.- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos dispondrá sin restricción alguna, de la corriente eléctrica que estime necesaria a fin de contar con una - perfecta iluminación en todos los ambientes y disponer del normal funcionamiento de los motores y aparatos eléctri - cos que estime conveniente utilizar.

En igual forma que lo estipulado en el párrafo ante - rior se le facilitará el suministro de agua corriente y - la utilización de los servicios sanitarios, de calefacción y/o de refrigeración.

Artículo 10.- Para determinar la erogación que representa la utilización de los servicios enumerados en el artículo anterior, oportunamente se labrará un acta discriminando en ella el consumo diario de kilovatios de elec - tricidad que se estime corresponder, la parte proporcional del consumo de combustible, agua corriente y/o cualquier otra erogación anexa que se aprecie, necesario in - cluir en esa estimación. El importe que la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos deba cancelar, estará dado en base a los precios básicos o costos que establezca la Dirección General de Parques Nacionales.

Para el supuesto que la explotación del Hotel Iguazú sea entregada a un concesionario, y éste tenga la obligación de afrontar todos los gastos emergentes de los servicios mencionados, el acta de gastos comunes ya referida - será suscrita por el concesionario y la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, previa aprobación de la misma por parte de la Dirección General de Parques Nacionales.

Artículo 11.- Bajo las cláusulas que anteceden se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de Buenos Aires, a los . . .

ACTO: DECRETO Nº 5.751/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - FONDO DE COMPENSACION

Buenos Aires, 16 de julio de 1963.-

Visto la observación Nº 11/63 formulada por el Tribunal de Cuentas de la Nación al decreto Nº 5.000/63 (1), por el cual se introducen modificaciones en el régimen del Fondo de Compensación instituído por el decreto Nº 7.738/58 (") para el Personal de la Dirección General Impositiva, y atento que subsisten las razones que dieron origen al dictado del citado acto de gobierno, en uso de las facultades que el artículo 87 de la Ley de Contabilidad confiere al Poder Ejecutivo,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Insístese en el cumplimiento del decreto Nº 5.000/63.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1925.-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 639.-

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz -
Eduardo B.M. Tiscornia.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 6.087/63.-

MATERIAS: DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - ADUANA DE LA NACION - CONSEJO NACIONAL DE ADUANA

Buenos Aires, 24 de julio de 1963.-

VISTOS y CONSIDERANDO:

Que es necesario reestructurar la Dirección Nacional de Aduanas para dotarla de una organización técnico-administrativa acorde con las necesidades actuales del país;

Que la nueva organización ha de procurar la eficiencia y celeridad del servicio, mediante la descentralización administrativa, la modernización de los equipos y la jerarquización y capacitación del personal;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- En lo sucesivo, la actual Dirección Nacional de Aduanas se denominará Aduana de la Nación y su organización y funcionamiento se ajustará a las disposiciones del presente decreto.

ARTICULO 2º.- La Aduana de la Nación estará a cargo del Consejo Nacional de Aduana, integrado por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Secretaría de Estado de Hacienda, tres de los cuales se-

//-

rán de dedicación exclusiva. Uno de los Consejeros sin dedicación exclusiva deberá ser funcionario permanente de la Secretaría de Estado de Hacienda.

Los miembros del Consejo Nacional de Aduana durarán cuatro años en sus funciones pudiendo ser reelegidos. Durante el período de su actuación conservarán sus cargos mientras dure su buena conducta y capacidad y sólo podrán ser removidos mediante actuación judicial o administrativa de donde resulte probada la mala conducta o incapacidad.

La Presidencia y la Vicepresidencia serán ejercidas por Consejeros con dedicación exclusiva, por elección de la totalidad de los miembros del Consejo. Durarán un año como tales, pudiendo ser reelegidos.

El quórum se formará con la presencia de tres Consejeros, por lo menos, y las decisiones se adoptarán por simple mayoría. El Consejo dictará su reglamento interno.

ARTICULO 3º.- El Consejo ejercerá la jefatura y representación legal de la repartición, tendrá los poderes y atribuciones que las leyes y reglamentos vigentes otorgan al Director Nacional de Aduanas y a los Administradores de Aduanas y Receptorías y, además, estará facultado para:

a) Adoptar las medidas necesarias para la estructuración orgánica y funcional de la dependencia, creando y suprimiendo oficinas y determinando sus funciones;
b) Aprobar y remitir anualmente a la Secretaría de Estado de Hacienda el proyecto de Presupuesto de Gastos en Personal, otros Gastos e Inversiones;
c) Redistribuir los créditos de las distintas partidas de su Presupuesto de Gastos en personal, otros Gastos e Inversiones, sin alterar los totales fijados por la Ley de Presupuesto ni la planta de personal y con las limitaciones que se establecen en el apartado i), así como efectuar los ajustes necesarios, sin alterar los totales fijados por la Ley de Presupuesto, para cada servicio especial y conforme con sus necesidades, debiendo comunicar oportunamente las modificaciones a la Secretaría

de Estado de Hacienda;

d) Determinar los responsables jurisdiccionales y de cajas chicas, estableciendo el monto y régimen para la reposición de fondos;

e) Autorizar y aprobar la contratación de trabajos, adquisiciones y arrendamientos por cualquier suma, en la forma que lo considere más conveniente para los intereses de la repartición, dentro de las normas establecidas por la Ley de Contabilidad y su reglamentación;

f) Establecer las autoridades jurisdiccionales hábiles para contratar, fijando los montos de las respectivas autorizaciones;

g) Autorizar convenios de locación, compra y permuta de bienes muebles, por cualquier suma, dentro de las normas establecidas por la Ley de Contabilidad;

h) Nombrar, promover, retrogradar, aceptar renuncias, disponer cesantías y exoneraciones y dar de baja al personal, con arreglo a las prescripciones del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, su reglamentación y/o demás disposiciones sobre la materia;

i) Aprobar los proyectos de modificaciones del Escalafón para el Personal de la repartición a remitir a consideración del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Estado de Hacienda y dictar las disposiciones complementarias y aclaratorias del mismo;

j) Dictar los reglamentos de movilidad, viáticos, servicios extraordinarios, reintegro de gastos por cualquier concepto, indemnizaciones por traslados y fallecimientos, pasajes y cargas, suplementos por trabajos insalubres, compensación por residencia y casa-habitación, compensaciones o bonificaciones especiales y régimen de estímulo para el personal, dentro de los montos aprobados o que apruebe el Poder Ejecutivo;

k) Dictar el reglamento de personal (condiciones de ingreso, calificaciones, servicio, control asistencial, licencias, traslado, régimen disciplinario y otras medidas de carác

ter reglamentario vinculadas con el mismo);

l) Determinar los funcionarios con facultades para aplicar sanciones disciplinarias, con arreglo a las normas reglamentarias;

m) Contratar los servicios de personal ajeno a la repartición, para labores extraordinarias, especiales o transitorias, fijando las condiciones de trabajo y su retribución, ajustándose a la reglamentación que, a su propuesta, fije en forma general la Secretaría de Estado de Hacienda;

n) Fijar el horario general y los horarios especiales en que desarrollará su actividad la institución, de acuerdo con las necesidades del servicio, dentro de la jornada de labor que establezca el Poder Ejecutivo para la Administración Pública Nacional;

ñ) Designar los funcionarios que ejercerán, en juicio, la representación de la repartición;

o) Ejercer las demás funciones que le encomiende la reglamentación.

ARTICULO 4º.- El Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Estado de Hacienda y a propuesta del Consejo Nacional de Aduana, determinará qué funcionarios y en qué medida sustituirán a éste en sus funciones de juez administrativo.

El Consejo, en todos los casos en que se autorice la intervención de otros funcionarios como jueces administrativos, podrá arrogarse, por vía de superintendencia, el conocimiento y decisión de las cuestiones planteadas. Igual atribución podrá ejercer la Secretaría de Estado de Hacienda respecto de los actos de la Aduana de la Nación.

ARTICULO 5º.- El Consejo será secundado en sus funciones por los servicios que determine la reglamentación.

Disposiciones Transitorias

ARTICULO 6º.- El Consejo propondrá al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Estado de Hacienda, el presu-

puesto de gastos ajustado a su nueva estructura, las designaciones pertinentes y las sustituciones previstas en el artículo 4º. Durante el período de reorganización -cuyo término fijará el Poder Ejecutivo- el Consejo podrá disponer de por sí las designaciones indispensables para la puesta en marcha de la nueva estructura, las sustituciones previstas en el artículo 4º y toda otra medida de urgencia.

ARTICULO 7º.- El Primer Consejo Nacional de Aduana tendrá las autoridades que por esta única vez designe el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 8º.- Dése cuenta oportunamente al H.Congreso de la Nación.

ARTICULO 9º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 10.- Publíquese, comuníquese y archívese.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz - Osiris G.Villegas - José M.Astigueta - Eduardo B.M. Tiscornia.

ACTO: DECRETO Nº 6.176/63.-

MATERIAS: REGISTRO PERMANENTE DE PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA EN RELACION CON LA OBRA PUBLICA - OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 25 de julio de 1963.-

Visto que la Secretaría de Estado de Obras Públicas eleva para su aprobación las normas a que se ajustará - la prestación de servicios de los profesionales de la actividad privada con relación a la obra pública, así como la reglamentación del Registro Permanente de Profesionales de la Actividad Privada en Relación con la Obra Pública, preparados por la Comisión Especial creada por resolución Nº 181/63, integrada por funcionarios de esa Secretaría de Estado y representantes de los Consejos Profesionales de Ingeniería Civil y de Arquitectura, Centro Argentino de Ingenieros y Sociedad Central de Arquitectos;

CONSIDERANDO:

Que el estudio, proyecto, dirección e inspección - técnica de las obras públicas deben ser realizados por profesionales debidamente habilitados, de acuerdo con - las leyes y reglamentos pertinentes;

Que debe contemplarse la contratación de servicios de profesionales de la actividad privada para el desa-

//-

rrollo de dichas tareas en distintos casos, ya sea cuando las dependencias técnicas de dicha Secretaría de Estado deban afrontar un gran volumen de obras, o bien que éstas no le sean habituales, o por carencia de personal técnico, o medios suficientes, o cuando la importancia de las obras no justifique la creación de nuevas dependencias, o bien si las posibilidades financieras de los planes de obras superan el régimen corriente de los organismos;

Que estas necesidades obligan a establecer las normas a que debe ajustarse la prestación de los referidos servicios de los profesionales de la actividad privada con relación a la obra pública, así como también crear y reglamentar el Registro Permanente, para su inscripción y funcionamiento;

Que las normas y la reglamentación del Registro preparadas por la Comisión Especial designada por resolución Nº 181/63, satisfacen las finalidades perseguidas por lo que nada obsta para su aprobación;

Por ello y atento a lo solicitado por el señor Secretario de Estado de Obras Públicas y lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébanse las normas a que se ajustará la prestación de los servicios de los profesionales de la actividad privada con relación a la obra pública y la Reglamentación del Registro Permanente de Profesionales de la Actividad Privada en Relación con la Obra Pública, corrientes a fs. 20/25, que forman parte integrante del presente decreto.

ARTICULO 2º.- Autorízase a la Secretaría de Estado de Obras Públicas a poner en práctica las referidas normas y a crear dicho Registro para la prestación de los servicios de los

profesionales de la actividad privada en las obras que lleven a cabo sus Reparticiones técnicas centralizadas y descentralizadas.

ARTICULO 3º.- El citado Registro funcionará atendido por los organismos permanentes del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Obras Públicas.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de Obras Públicas.-

GUIDO - Horacio J.Zubiri -
Luis De Carli.

NORMAS A QUE SE AJUSTARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA CON RELACION A LA OBRA PUBLICA

CAPITULO I

Obras públicas que podrán ejecutarse por contrato con profesionales de la actividad privada

Cuando las circunstancias lo hagan conveniente, el estudio, anteproyecto, proyecto, dirección e inspección técnica de una obra pública, podrán ser contratados con profesionales habilitados, de acuerdo con las leyes o reglamentos que rijan el ejercicio profesional y el régimen de incompatibilidades.

Este sistema se hará aplicable en los siguientes casos:

1º) Cuando las dependencias técnicas del estado deban abocarse a un gran volumen de obras públicas, o cuando se trate de obras que no son las que habitualmente realiza el organismo, o que no se disponga de personal técnico, medios o elementos en cantidad suficiente, o cuando la índole del trabajo lo justifique.

2º) Cuando las posibilidades financieras de los planes de obras superen el régimen corriente de las organizaciones estatales o cuando se requiera personal técnico especializado para tareas de duración limitada.

CAPITULO II

Sistema de Concursos

La celebración de contratos de estudios, anteproyectos, proyectos, dirección y/o inspección técnica de obras podrá concretarse a través de los siguientes sistemas, de acuerdo al tipo de obra pública:

a) Concursos de anteproyectos: Cuando la obra pública pueda ser expresada a través de distintos elementos prima-

rios que permitan valorar por comparación la capacidad - profesional (edificios, monumentos, urbanismo, etc.).

b) Concurso de antecedentes: Cuando la obra pública no permite ser materializada sin estudios e investigaciones - previas (caminos, canales, ferrocarriles, aprovechamientos hidráulicos, estudios especiales de tránsito, urbanísticos, operaciones, exploración, administración, desarrollo y economía, financiación de obras y servicios,etc) y cuando se trate de la dirección y/o inspección técnica de obras.

Estas normas no excluyen la posibilidad de la realización de concursos para la provisión y ejecución de instalaciones especiales patentadas, de cualquier tipo.

CAPITULO III

Jurados

Integración

Los jurados estarán integrados por:

a) Un funcionario de la Secretaría de Estado de Obras Públicas.
b) Igual número de representantes de la repartición promotora que de Asociaciones de Profesionales.
c) Un representante de los concurrentes para los concursos de anteproyectos.

Los miembros del Jurado serán Profesionales Universitarios de la especialidad respectiva y tendrán como mínimo - cinco (5) años de antigüedad en el ejercicio de la profesión.

CAPITULO IV

Contratos

a) La contratación de los trabajos profesionales, así como el pago de los honorarios y gastos respectivos, se regi-

rán por las Leyes Nacionales del ejercicio profesional de la Ingeniería, la Arquitectura y la Agrimensura, vigentes a la fecha del contrato.

b) Las condiciones del contrato deberán ser establecidas en las bases del concurso y en éstas se preverán las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de las partes.

c) No corresponde la aplicación de depósitos o de retenciones de garantía, sobre los honorarios.

d) La forma de pago debe permitir la financiación de la tarea encomendada mediante adecuados pagos parciales durante la ejecución de los trabajos.

e) Las penalidades que aplique el organismo comitente por incumplimiento del contrato, serán comunicadas a la Comisión del Registro, el que a su vez dará intervención al Consejo Profesional respectivo.

f) Las bases para los concursos serán preparadas por la Repartición respectiva de la Secretaría de Estado de Obras Públicas en consulta con la Comisión del Registro Permanente de Profesionales de la Actividad Privada en Relación con la Obra Pública.

REGLAMENTACION DEL REGISTRO PERMANENTE DE PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA EN RELACION CON LA OBRA PUBLICA

Artículo 1º.- Esta Reglamentación tiene por objeto establecer un Registro de Profesionales de la actividad privada, para afrontar tareas de estudio, anteproyecto, proyecto, dirección e inspección técnica de obras públicas, bajo la configuración jurídica de locación de obra intelectual.

Artículo 2º.- Se podrán inscribir en él, los profesionales de las distintas especialidades de la ingeniería, arquitectura y agrimensura, con títulos expedidos o revalidados por Universidad Nacional e inscriptos en los Consejos Profesionales respectivos.

Podrán también inscribirse grupos de profesionales asociados u otras sociedades civiles integradas primordialmente por profesionales y que estén constituidas en cualesquiera de las formas previstas en la legislación vigente.

Al presentarse a concurso la sociedad civil deberá indicar los nombres de los profesionales que serán directamente responsables de los trabajos contratados, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de la sociedad a que pertenecen. Los profesionales designados deberán comenzar y continuar los trabajos hasta su terminación y no podrán ser sustituidos sin consentimiento del comitente, quien no podrá negarlo cuando la sustitución obedezca a causas de fuerza mayor debidamente comprobadas.

La sociedad civil que resulte adjudicataria de trabajos de estudios y proyecto de una obra, quedará automáticamente inhibida para participar en la licitación para la ejecución de las obras proyectadas, como empresa constructora.

La inscripción en el Registro será condición para intervenir en los concursos.

Artículo 3º.- Las solicitudes de inscripción deberán presentarse en los formularios que proveerá el Registro.

Los datos que los interesados consignen en la solicitud tendrán carácter reservado. Incluirán por lo menos los siguientes:

1. Título o títulos profesionales. Fecha de otorgamiento del o de los diplomas y Universidad respectiva. Inscripción en el Consejo Profesional.
2. Especialidad.
3. Detalle de los estudios, proyectos, trabajos, obras, etc. realizados.
4. Cargos públicos o privados que ha desempeñado.
5. Publicaciones técnicas de la especialidad de las que fuera autor o colaborador.
6. Cualquier otro elemento informativo que el recurrente juzgare de interés.

Artículo 4º.- La inscripción de los profesionales estará a cargo de una Comisión integrada por tres funcionarios de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, elegidos entre funcionarios de dicha Secretaría de Estado o reparticiones descentralizadas, un representante de la Unión Argentina de Ingenieros y otro de la Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos o sus suplentes.

Serán asesores permanentes de la Comisión, los representantes que los Consejos Profesionales respectivos designen a tal efecto.

Artículo 5º.- En caso necesario actuará como Asesor Letrado el Sr. Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, o su reemplazante legal.

Artículo 6º.- La Comisión reglará la periodicidad o frecuencia de sus reuniones de acuerdo con las necesidades del Registro y dictará sus normas de procedimiento.

Artículo 7º.- La tarea técnico-administrativa que requiera el funcionamiento del Registro, estará a cargo del organismo permanente del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

Artículo 8º.- Son atribuciones de la Comisión del Registro:

a) Disponer, cuando así proceda, la inscripción en el Registro de quienes lo solicitaren, estableciendo la especialización y tareas correspondientes, formando un legajo con todos los antecedentes de los inscriptos.
b) Actualizar las condiciones de la inscripción, en base a posteriores datos de actuación que aporten los inscriptos.
c) Registrar el comportamiento de los inscriptos en relación con los estudios, proyectos, dirección de obras y cualquier otro trabajo que se les encomendare, conforme con las referencias que deberán suministrar obligatoriamente las reparticiones contratantes.
d) Informar de las constancias del Registro a los organismos oficiales que lo soliciten.

e) Resolver en las reclamaciones que sobre sus resoluciones efectúen los inscriptos.
f) El Registro informará a los Consejos Profesionales respectivos, las penalidades que le hubiesen sido aplicadas a los contratados.
g) Proponer las modificaciones del presente reglamento cuando lo estime conveniente.
h) Dictar su reglamento interno.

Artículo 9º.- Las incompatibilidades a que pudiera dar lugar este régimen, deberán ser en cada caso claramente establecidas en las bases de los concursos respectivos.

Artículo 10.- La aplicación de las penalidades por incumplimiento de los contratos corresponde a los organismos comitentes, debiéndose efectuar las comunicaciones al Registro, el que a su vez las comunicará al Consejo Profesional respectivo.-

ACTO: DECRETO-LEY Nº 6.190/63.-

MATERIAS: OFICINA NACIONAL DEL PRESUPUESTO - PRESUPUESTO - SECRETARIA DE HACIENDA

Buenos Aires, 25 de julio de 1963.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que la administración financiera constituye un factor preponderante de gobierno, indispensable para el cumplimiento de las funciones del estado y de especial gravitación en el desenvolvimiento de la economía nacional;

Que siendo el estado una unidad orgánica, cuyos elementos se ligan en un sistema de poderes, responsabilidades y controles, que se refleja en el presupuesto, es evidente que éste resulta ser, además del instrumento fundamental para el manejo de la hacienda pública, el medio a través del cual puede conocerse el costo de las funciones, programas y actividades del gobierno, destinados a satisfacer las necesidades de interés general y a lograr el fin último de su organización: mejorar las condiciones de vida de la población;

Que a medida que se amplían las funciones del estado, aumenta el volumen de recursos que administra el gobierno y la dimensión de su incidencia en la economía, fenómeno que pone de relieve la necesidad de actuar con criterio racional y metódico, acudiendo a técnicas modernas que permitan la formulación de planes para la determinación de prioridad a fin de que los responsables

//-

de su conducción puedan adoptar decisiones acordes con las posibilidades y en relación con objetivos concretos;

Que la actual estructura del Presupuesto General de la Nación no es apta para concretar la aplicación de los principios expuestos;

Que el Decreto Nº 7.920/61 (¹), establece las funciones que en orden a la materia de que se trata competen al Consejo Nacional de Desarrollo, por lo que la finalidad que le dió origen debe integrarse, con las medidas necesarias para que mediante el presupuesto anual se concrete el cumplimiento de los planes que decida adoptar el gobierno, coordinando dichas funciones con las que son de competencia del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Hacienda (artículos 11º y 20º de la Ley Nº 14.439) (");

Que, en consecuencia, el mecanismo presupuestario no debe responder solamente a la necesidad de facilitar el control contable del empleo de los recursos y autorizaciones para gastar y velar por la honestidad de su manejo, sino también constituir un instrumento idóneo para posibilitar la decisión de las acciones de los poderes públicos; contribuir a medir la eficiencia con que dichas acciones se ejecutan; facilitar la información periódica para la formulación de planes; proporcionar cifras para el control del cumplimiento de dichos planes y establecer las responsabilidades a efectos de que los órganos de control cumplan sus funciones, es decir, dar al Poder Ejecutivo los elementos de juicio y datos aptos para proyectar un programa de gobierno, al Poder Legislativo información suficiente para su estudio y sanción y a la opinión pública oportunidad de conocer no sólo lo que el gobierno gasta sino también lo que el gobierno hace;

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1442.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 505.-

Que correlativamente con lo expuesto en el considerando anterior, deben darse condiciones que superen posibles dificultades derivadas de fijar la atención en los controles administrativos de carácter formal que pueden implicar, por su exceso de detalle, rigidez o frondosidad, el descuido de lo fundamental; la eficiencia de la acción del gobierno. La simplificación y funcionalidad del sistema presupuestario, frente al importante papel que juegan las inversiones públicas y la intensidad del efecto de los gastos fiscales, permitirá un control más eficiente y evitará la actual tendencia a la creación de órganos o dependencias que procuran colocarse al margen de la organización institucional de la Administración Pública en busca de una agilidad que de otra manera suponen trabada por el control. También permitirá, por otra parte, mantener la unidad y generalidad del presupuesto para ordenar definitiva e integralmente la administración financiera;

Que todo ello demuestra la necesidad de modificar la actual estructura del presupuesto y ajustar los procedimientos administrativos correlativos, de manera que el Poder Ejecutivo se encuentre en condiciones de poder centralizar el control de la administración financiera;

Que la importancia de la modificación de que se trata, y su repercusión en la estructura de la administración pública, requiere la realización de estudios e investigaciones que las oficinas con funciones ejecutivas no pueden tomar a su cargo. La atención del despacho y trámites, impiden a los funcionarios ejecutivos destinar su tiempo a recopilaciones o análisis de datos, por lo que conviene separar ambas actividades ;

Que, por lo tanto, dado que por razones obvias, las posibles modificaciones no podrán concretarse instantáneamente, sino que deberán ser de aplicación gradual y progresiva, para actuar sobre bases firmes que aseguren su factibilidad y eficiencia, es aconsejable crear un servi-

cio especial que, sin interferir la actividad normal de las actuales dependencias, inicie de inmediato los referidos estudios y proponga las medidas que considere adecuadas, sin perjuicio de que, conforme lo que el Poder Ejecutivo considere conveniente al reglamentarlo, le asigne las funciones de superintendencia o control derivadas de las mismas. Además, por tratarse de un servicio técnico e instrumental, cuya misión será especialmente de asistencia y coordinación para -como queda dicho en considerandos anteriores- facilitar decisiones que son de competencia de la Secretaría de Hacienda o del Poder Ejecutivo en su caso, debe ponerse en funcionamiento con carácter permanente y ubicarse en relación directa con el más alto nivel ejecutivo;

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1°.- El Presupuesto General de la Nación se estructurará en forma económico-funcional y deberá demostrar, en términos de servicios, actividades, trabajos e inversiones proyectados, el costo anual de las funciones, programas y objetivos del gobierno.

ARTICULO 2°.- A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior y demás funciones correlativas de administración financiera de conformidad con los propósitos expuestos en los considerandos, créase en jurisdicción de la Secretaría de Estado de Hacienda, la Oficina Nacional del Presupuesto con carácter de Subsecretaría de Estado.

ARTICULO 3°.- La Oficina Nacional del Presupuesto será dirigida por un funcionario permanente de la Secretaría de Estado de Hacienda con jerarquía, atribuciones y deberes

de Subsecretario.

ARTICULO 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para incorporar al Presupuesto, con cargo a Rentas Generales, los créditos necesarios o introducir en el mismo las modificaciones que pudieren corresponder para atender los gastos que demande la organización y funcionamiento de la oficina.

ARTICULO 5°.- Hasta tanto la Oficina Nacional del Presupuesto se estructure orgánicamente, el Poder Ejecutivo podrá disponer o delegar en la Secretaría de Estado de Hacienda, la contratación del personal que considere necesario o adscribir a la misma personal que pertenezca a otras dependencias o entidades del Estado Nacional. Si el personal a adscribir perteneciere a dependencias ajenas a la jurisdicción y competencia de la Secretaría de Hacienda, la adscripción deberá ser conformada por el Ministro, Secretario de Estado o autoridad competente de que dependa.

ARTICULO 6°.- Lo dispuesto en el artículo 1°, será de aplicación gradual y progresiva en la medida en que se completen los estudios y se den las condiciones que lo hagan factible.

ARTICULO 7°.- Derógase el artículo 27 de la Ley N° 16.432(+) y mantiénese en vigor el artículo 3° de la Ley N°13.653(t.o) modificada por la Ley N° 15.023 (-).

ARTICULO 8°.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Defensa Nacional e Interior y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - José A. Martínez de Hoz - José M. Astigueta - Osiris G. Villegas - Eduardo B. M. Tiscornia

---

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1543.-

(-) Ver Digesto Administrativo N° 1039.-

ACTO: EXPEDIENTE Nº 90.458/63.-

MATERIA: LICENCIAS

Providencia D.G.S.C.N. Nº 506/63.-

AL SEÑOR SUBSECRETARIO:

Asunto: Licencia - Prórroga del art. 28 del decreto número 8567/61.-

Disposiciones de aplicación: Decreto Nº 8.567/61.-

Opinión de esta Dirección General: El Tribunal de Cuentas de la Nación solicita se aclare, si la licencia a que se refiere el art. 28 del Régimen de Licencias aprobado por decreto 8.567/61 (') puede ser usufructuada en períodos fraccionados, y en caso afirmativo, si debe mediar entre ellos prestación de servicios de por lo menos un año ininterrumpido.

Al respecto debe informarse que la referida licencia puede concederse en forma total o por fracciones, no existiendo ninguna disposición que obligue a un determinado período de trabajo entre una y otra fracción.

Cabe señalar que una interpretación en contrario no resultaría compatible con el espíritu que anima a esta cláusula, por cuanto en ella se prevé el otorgamiento de licencia, entre otras motivaciones, para participar en conferencias o congresos de carácter técnico, científ

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-

fico o cultural, manifestaciones éstas que resultan comunmente de breve duración, y que suelen responder a programas integrados por reuniones periódicas para la consideración de un mismo tópico, circunstancia por la cual no se estimó conveniente establecer la exigencia de prestación de servicios entre una y otra fracción.

El año ininterrumpido de servicio es vigente para el caso del agente que, habiendo utilizado licencia por art. 28 solicita las previstas en el art. 27 ó 29 ya que como lo dispone la propia norma éstas no pueden adicionarse.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 14-7-63.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1942.-

ACTO: EXPEDIENTE Nº 30.097/63.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD (Art. 53) - TRANSFERENCIAS DE BIENES - BIENES EN DESUSO O REZAGO

Teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 53 de la ley de contabilidad los ministros pueden autorizar - la cesión de elementos en desuso o en condición de rezago a instituciones de bien público, también pueden, por analogía, autorizar la transferencia patrimonial sin cargo a otras dependencias de la administración nacional, cuando su importe no supere los $ 5.000 %.-

(Informe Nº 208/63 C. y T.P. - D.A.T.C.N. Nº 671 - C.Nº 188)

ACTO: EXPEDIENTE Nº 30.374/61.-

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIONES

Las contrataciones directas emergentes del fracaso de una licitación deben realizarse conforme a los mismos pliegos que rigieron la licitación fracasada, dado que en ese supuesto se descuenta la inutilidad de una nueva competencia. Si se variaran esas condiciones no se estaría ante la misma contratación frustrada, y en consecuencia correspondería la realización de una nueva puja, conforme al principio general consagrado por el artículo 55 de la ley de contabilidad.-

(Informe Nº 345/61 C. y T.P. - D.A.T.C.N. Nº 671 - C.Nº 189)

ACTO: MEMORANDUM Nº 1793/60 C. y T.P.

MATERIAS: LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIONES EN EL EXTERIOR

La excepción contenida en el artículo 56, inciso 3º, apartado h) de la ley de contabilidad se refiere a compras y locaciones que efectivamente se realizan en los países extranjeros; es decir, que se gestionan y concluyen en ellos. Tal por ejemplo acontece con la adquisición o locación de bienes para las embajadas destacadas en esos países, o las adquisiciones que efectúan las comisiones especiales que se envían al exterior exprofesamente para realizarlas allí por determinadas razones.-

(D.A.T.C.N. Nº 671 - C.Nº 190)

ACTO: EXPEDIENTE Nº 40.636/62.-

MATERIAS: OBRAS PUBLICAS - PLAZOS

No corresponde otorgar prórrogas fundadas en hechos acaecidos cuando el contratista está incurso en mora.

Para determinar si está ante esa situación deben adicionarse al plazo fijado en el contrato, las ampliaciones que se hubieran acordado en orden a las estipulaciones del contrato.-

(Informe Nº 145/63 C. y T.P. - D.A.T.C.N. Nº 671 - C.Nº 191)

ACTO: DECRETO - LEY Nº 6.600/63.-

MATERIAS: JUBILACIONES - PENSIONES

Buenos Aires, 7 de agosto de 1963.-

Visto lo solicitado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y

CONSIDERANDO:

Que es deber del Gobierno contemplar la situación económica de los agentes que se encuentran en pasividad, después de haber cumplido el ciclo establecido por las leyes de previsión para obtener su retiro;

Que resulta obvia la inadecuación de las prestaciones que obtienen, con relación a las demandas que el costo de la vida actual impone sobre aquéllas;

Que al respecto, desde hace tiempo vienen formulándose insistentes reclamos por los interesados, reclamos que el Poder Ejecutivo no puede ignorar;

Que, si bien al presente no es posible solucionar de manera integral dicha situación, corresponde que en la medida de los recursos disponibles se procure elevar los beneficios de los jubilados y pensionados;

Que las Cajas del sistema previsional de la Nación, cuentan con recursos provenientes de los aportes que la ley fija, los que permitirán a breve plazo sufragar la mayor erogación que supone la presente disposición;

Que de este modo, no será necesario gravar el presupuesto de la Nación y se satisfarán en parte legítimas

//-

aspiraciones de los titulares de pasividades;

Que de los estudios realizados por la Comisión Asesora Permanente de Seguridad Social y las organizaciones laborales, resulta que sin perjuicio de considerar oportunamente una adecuación de todas las prestaciones a los niveles actuales del costo de la vida, es de todo punto imprescindible fijar en una cifra mínima el monto de las jubilaciones y pensiones;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1°.- Fíjase en la suma de cuatro mil pesos moneda nacional el importe mínimo de las jubilaciones otorgadas y a otorgarse por las Cajas integrantes del sistema previsional de la Nación.

ARTICULO 2°.- Fíjase en la suma de tres mil pesos moneda nacional el importe mínimo de las pensiones otorgadas y a otorgarse por las Cajas integrantes del sistema previsional de la Nación.

ARTICULO 3°.- El importe mínimo de las jubilaciones y pensiones a que se refieren los artículos anteriores, se empezará a hacer efectivo a partir del 1° de noviembre de mil novecientos sesenta y tres.

ARTICULO 4°.- El presente decreto-ley será suscripto por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Trabajo y Seguridad Social, Interior, Defensa Nacional, Economía y refrendado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, publíquese y archívese.-

GUIDO - Bernardo Bas - Osiris G.Villegas - José M.Astigueta - José A.Martínez de Hoz - Eduardo B.M.Tiscornia.

ACTO: DECRETO Nº 6.246/63.-

MATERIAS: SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Buenos Aires, 25 de julio de 1963.-

Visto lo propuesto por el Ministerio de Economía - de la Nación, por intermedio de la Secretaría de Estado de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4º de la Ley 14.046, prevé el relevamiento de censos que permitan conocer la real situación de la industria y el comercio del país;

Que las últimas informaciones de este carácter de que puede disponerse datan del año 1954;

Que el levantamiento de censos económicos separados por intérvalos iguales, posibilita la actualización de informaciones dinámicas que son instrumento indispensable de la función de gobierno;

Que la disponibilidad de los datos censales permitirá la integración de investigaciones estadísticas a nivel regional y sectorial;

Que la operación propuesta permite a Argentina adherir al programa regional americano de censos económicos propiciado por las Naciones Unidas;

Por ello,

//-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- La Dirección Nacional de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, organizará y conducirá en todo el territorio del país el relevamiento simultáneo de los censos de minería, industria, empresas de construcciones, comercio, servicios comerciales y servicios públicos de distribución de agua, gas y electricidad en el curso del año 1964.

La oportunidad del empadronamiento previo y la fecha - del relevamiento del censo, serán fijados por el Comité Nacional Censal.

ARTICULO 2º.- La redacción, impresión y provisión a todo - el país de los cuestionarios, instrucciones, cartografía - censal, planillas, credenciales y comprobantes necesarios para las tareas censales, así como la compilación y publicación de los resultados, corresponden a la Dirección Nacional de Estadística y Censos, de acuerdo con las facultades que le confiere la ley 14.046.

ARTICULO 3º.- El relevamiento estará a cargo de los Gobiernos provinciales y Territorial de Tierra del Fuego, dentro de sus respectivas jurisdicciones políticas, siguiendo las directivas técnicas que imparta la Dirección Nacional de Estadística y Censos, la que, además, se hará cargo del relevamiento censal de la Capital Federal.

ARTICULO 4º.- El Comité Censal, creado por decreto Nº9107/54 y decreto-ley 2246/56 (Ley Nº 14.467) (*), tendrá a su cargo la coordinación por ellos dispuesta y estará presidido por el Subsecretario de Hacienda de la Nación e integrado por los Subsecretarios de: Educación, Interior, Industria, Minería, Comercio, Energía y Combustibles, Defensa Nacional, Comunicaciones y Transporte y los Presidentes del Consejo Nacional de Educación y de la Dirección Nacional de Vialidad.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 609.-

Actuará como Secretario Ejecutivo del Comité Censal el Director Nacional de Estadística y Censos.

El Comité Censal designará un representante ante cada uno de los organismos similares que se instituyan en jurisdicción de las provincias y Territorio Nacional de Tierra del Fuego, con el objeto de materializar la coordinación dispuesta en el decreto Nº 9107/54.

ARTICULO 5º.- Las escuelas de enseñanza primaria constituirán la base de la organización del relevamiento censal. Sólo en aquellas zonas en las que, a juicio de la autoridad censal provincial, la operación del censo no pueda ser íntegramente cubierta por la escuela primaria, ésta podrá ser complementada por otros organismos.

Todo el personal docente que éste afectado a la enseñanza primaria será conceptuado agente del censo en su lugar de trabajo, sin otra condición que el propio nombramiento para el cargo que ocupa.

Las autoridades superiores de la enseñanza primaria determinarán la incidencia que en la calificación del personal docente tendrá su desempeño en las tareas censales.

ARTICULO 6º.- Todas las oficinas públicas nacionales, así como las Fuerzas Armadas de la Nación, prestarán ayuda para el relevamiento censal, facilitando su personal dependiente y suministrando los muebles, edificios, medios de movilidad, etc., que le sean requeridos por los organismos ejecutores de los censos.

El personal de la Administración del Estado está obligado a desempeñar las tareas censales que le sean asignadas en el lugar y ocasión que determinen las autoridades del Censo. El buen desempeño en las tareas censales deberá constar en el legajo personal de los agentes.

ARTICULO 7º.- Facúltase, como excepción y dentro del mismo período mencionado en el artículo 10, a los señores Directores Generales, Directores, Jefes de Reparticiones Nacionales y Jefes de Oficinas Nacionales, destacadas en el interior del país, a conceder directamente y a simple requerimiento de la autoridad censal de su jurisdicción, la colabo

ración del personal y la concesión y la afectación de locales, muebles, máquinas, medios de movilidad, etc., que sean necesarios para la ejecución de las tareas relativas a los censos.

Acordada la colaboración del personal o la afectación de elementos, las autoridades de las Oficinas Nacionales - destacadas en el interior del país, deberán comunicar la - medida adoptada a la Superioridad.

ARTICULO 8º.- El Ministerio del Interior invitará a los Gobiernos provinciales a adoptar en sus respectivas jurisdicciones, similares medidas que las detalladas precedentemente, con el fin de asegurar el éxito del relevamiento censal.

ARTICULO 9º.- Las tareas censales se considerarán carga pública, por lo que no darán derecho a retribución alguna y sólo podrán ser renunciadas por causas debidamente justificadas.

ARTICULO 10.- La obligatoriedad del personal docente de la enseñanza primaria para el desempeño de las tareas censales, se prolongará desde dos meses antes del día del censo hasta un mes después, debiendo, sin embargo, las escuelas que hayan constituído el asiento de una unidad censal, quedar,-mientras dure el período lectivo- habilitadas para la recepción de las declaraciones censales.

La ayuda de las oficinas públicas nacionales y de las Fuerzas Armadas de la Nación al relevamiento censal dispuesta por el artículo 6º, deberá prestarse desde tres meses - antes del día del censo hasta tres meses después.

La excepción del pago de tasas y derechos establecida por el artículo 11, regirá desde tres meses antes hasta - seis meses después del día del relevamiento.

La obligatoriedad de la acreditación del cumplimiento de la obligación censal, resuelta por el artículo 12, se - prolongará durante seis meses, contados a partir de un mes después del día del censo.

ARTICULO 11.- A los efectos del relevamiento de los censos de minería, industria, empresas de construcciones, comercio,

servicios comerciales y servicios públicos de distribución de agua, gas y electricidad en el curso del año 1964, las comunicaciones postales y telegráficas que se originen con esa finalidad, estarán exentas del pago de tasas y derechos, con excepción de las sobretasas aéreas.

ARTICULO 12.- Las reparticiones nacionales y las instituciones bancarias exigirán, como requisito previo para dar curso a cualquier trámite que inicie o realice el responsable de toda explotación minera, industrial, de construcción, comercial o de prestación de servicios públicos, de agua, gas y electricidad, la acreditación del cumplimiento de la obligación censal.

Los agentes de los organismos citados precedentemente que en función de sus tareas deban exigir la presentación del certificado de cumplimentación, y no lo hicieren, serán pasibles de las sanciones previstas por la Ley número 14.046.

ARTICULO 13.- Los gastos que demande la operación "Censos Económicos 1963" no podrán exceder de la cantidad de dieciocho millones de pesos moneda nacional (m$n. 18.000.000) para el año 1963 y de veinticinco millones de pesos moneda nacional (m$n. 25.000.000) para el año 1964, sumas que serán imputadas a las partidas pertinentes que a tal efecto deberán incluirse en el Anexo 52, Secretaría de Hacienda del presupuesto general de la Nación para los ejercicios financieros de 1963 y 1964.

ARTICULO 14.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de: Economía, Educación y Justicia, Interior, Defensa Nacional y Obras y Servicios Públicos y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, Industria y Minería, Energía y Combustibles, Guerra, Marina, Aeronáutica, Comunicaciones, Transporte y Comercio.

ARTICULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz - Bernardo Bas - Osiris G.Villegas - José M. Astigueta - Horacio J. Zubiri - Eduardo B.M. Tiscornia - Luis Gottheil - Jorge Bermúdez Emparanza - Héctor A. Repetto - Carlos A. Kolungia - Eduardo F.Mc.Loughlin - Miguel A. Pérez Tort - Juan B. Martín.

Dpto. de Contabilidad y Administración - Dpto. de Secretaría - Dirección

ACTO: DECRETO - LEY Nº 6.407/63.-

MATERIAS: JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL - PARTIDOS POLITICOS - ELECCIONES

Buenos Aires, 31 de julio de 1963.-

Visto los Decretos - Leyes Nros. 4.034/57 (T.O.); 7.163/62 (¹); 8.163/62 (ⁿ); 13.053/62 (°); 12.530/62 (=) y 3.284/63 (:), relativos al régimen electoral vigente y a la Justicia Nacional Electoral, y

CONSIDERANDO:

Que es innegable la facultad del Estado de ejercer sobre las organizaciones políticas una real y prudente fiscalización, que asegure tanto la pureza y legitimidad de principios de ellas como la inexistencia de corruptelas internas una vez que se encuentren en funcionamiento;

Que acorde con tales propósitos, el Estado ha establecido una serie de normas jurídicas, cuya aplicación ha de quedar obligadamente a cargo de organismos oficiales; los que, teniendo en cuenta la estructura de nuestra organización republicana, no pueden sino formar parte de uno de los tres poderes públicos;

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1693.-
(ⁿ) Ver Digesto Administrativo Nº 1702.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1821.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 1814.-
(:) Ver Digesto Administrativo Nº 1898.-

Que dado el carácter y alcance de las cuestiones involucradas en la materia jurídico-político y electoral, es necesario que su conocimiento quede a cargo de un organismo integrante del Poder Judicial de la Nación;

Que ha sido voluntad del Poder Ejecutivo, al dictar el decreto-ley Nº 7.163/62 en ejercicio transitorio de funciones legislativas, dar nacimiento a tribunales integrantes de un fuero específico dentro de nuestra organización judiciaria;

Que no obstante surgir en forma implícita de la ley orgánica de creación de la Justicia Electoral la inclusión de dichos tribunales dentro de la órbita del Poder Judicial de la Nación, es conveniente establecer tal circunstancia en términos expresos a fin de que no pueda abrigarse duda alguna al respecto;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- La Justicia Nacional Electoral integra el Poder Judicial de la Nación, como un fuero especializado en materia jurídico-política y electoral, y conocerá en el límite de la competencia que la ley le otorga (arts.94 de la Constitución Nacional; Ley Nº 13.998 y Decreto-Ley Nº 1.285/58).

ARTICULO 2º.- Las Juntas Electorales Nacionales, sin perjuicio de las atribuciones propias que la ley electoral les asigne, deberán ajustar su cometido a las decisiones que, en la materia respectiva, emanen de la Cámara Nacional Electoral.

ARTICULO 3º.- La Cámara Nacional Electoral será tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales electorales y sus fallos revestirán las condiciones a que se refiere el artículo 30 del Decreto-Ley Nº 1.285/58.

ARTICULO 4º.- Agrégase a la enumeración de tribunales que

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Min. de Hacienda

ACTO: DECRETO Nº 6.650/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - AUTARQUIA

Buenos Aires, 8 de agosto de 1963.-

Visto que al darse por terminado, por decreto número 12.823/62 (¹), el estado de reorganización de la Dirección General Impositiva quedaron sin efecto las atribuciones especiales conferidas al Consejo de ese Organismo por decreto Nº 2.781/60 (ⁿ), mantenidas en forma similar por el decreto Nº 6.890/62 (º); y

CONSIDERANDO:

Que la naturaleza especial de las funciones de dicha repartición pone de relieve la conveniencia de facilitar la continuidad de un desenvolvimiento ágil y expeditivo, acorde con la trascendencia que reviste su función recaudadora;

Que tal finalidad puede cumplirse restituyendo al referido Cuerpo, por un tiempo prudencial susceptible de renovarse, las facultades que tuvo acordadas por el artículo 10 del citado decreto Nº 6.890/62;

Por ello, y de acuerdo con lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, //-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1815.-
(ⁿ) Ver Digesto Administrativo Nº 1139.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 1668.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prorrógase por un (1) año la vigencia del artículo 10 del decreto Nº 6.890/62, reemplazándose en dicho artículo la expresión "del señor Interventor" por "de la Dirección General".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda a sus efectos.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz
Eduardo B.M. Tiscornia.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 6.660/63.-

MATERIAS: ADUANA DE LA NACION - SUMARIOS (Prevención - del contrabando)

Buenos Aires, 8 de agosto de 1963.-

Visto: Que, según resulta de una ya larga experiencia, la actual coexistencia de dos jurisdicciones -la judicial y la administrativa- encargadas respectivamente de los aspectos penal y fiscal de la represión del contrabando, a la vez que prolonga excesivamente la tramitación de las causas complicándolas innecesariamente, acarrea el peligro de la existencia de decisiones contradictorias y

CONSIDERANDO:

Que es necesario garantizar el correcto encuadramiento de los actos que puedan tipificar el delito aludido y los que le sean conexos, desde el comienzo de las actuaciones que se promuevan;

Que tal garantía se logrará encomendando a la autoridad judicial la instrucción de los sumarios, una vez cumplida la etapa de prevención por el organismo administrativo que corresponda;

Que ello facilitará a las autoridades aduaneras y de seguridad el cumplimiento más cabal y eficiente de las tareas de contralor e investigación que específicamente les atañen;

//-

Que el contrabando y sus delitos conexos constituyen una forma especial de la delincuencia económica que, por razón de especialización, es conveniente centralizar en los tribunales en lo penal económico, donde éstos se hallen constituídos;

Que el extraordinario auge del tipo de delincuencia examinado y la interconexión de los actos que la configuran, especialmente en la Capital Federal y partidos circunvecinos, hacen necesaria la unificación jurisdiccional de tales distritos;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- La instrucción de los sumarios de prevención en las causas por contrabando, ya sean iniciados de oficio o por denuncia, corresponderá a la Aduana de la Nación, Policía Federal, Prefectura Nacional Marítima, Dirección Nacional de Gendarmería y policías provinciales, dentro de los límites de sus respectivas jurisdicciones. A tal fin realizarán las tareas de vigilancia, comprobación e investigación.

ARTICULO 2º.- El conocimiento y resolución de los mismos asuntos corresponderá originariamente y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, con las modificaciones que se introducen al respecto en el presente decreto, a los tribunales en lo penal económico de la Capital Federal y a los de la Justicia Federal en el interior del país, que se ajustarán a las normas de procedimiento del fuero respectivo.

ARTICULO 3º.- La competencia atribuída por el artículo anterior a los tribunales en lo Penal Económico comprenderá, además del territorio de la Capital Federal, los siguientes partidos de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Estebán Echeverría, Florencio Varela,

General Rodríguez, General San Martín, General Sarmiento, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Los delitos de contrabando o conexos cometidos en depósitos fiscales o en depósitos particulares habilitados como fiscales serán juzgados por los Tribunales competentes de la jurisdicción de la Aduana que haya autorizado el funcionamiento de tales depósitos.

ARTICULO 4º.- Las prevenciones sumariales serán proseguidas hasta finalizar la investigación, por la autoridad que las haya iniciado, cumplido lo cual se remitirán al juez competente, sin perjuicio de:

a) Poner en inmediato conocimiento de la causa al organismo aduanero de la jurisdicción, cuando éste no interviniera en la misma;
b) Comunicar al juez competente la iniciación del sumario;
c) Mantenerlo informado del curso de la investigación si así lo dispone y cumplir las directivas que impartiera. Si hubiera detenidos, serán puestos a disposición del juez dentro de las 48 horas, y si el sumario de prevención no hubiere finalizado se remitirán al magistrado las piezas originales de lo actuado hasta ese momento, prosiguiéndose la investigación con copia autenticada.

ARTICULO 5º.- La sentencia que se dicte en estas causas, además de observar las formalidades ordinarias que establece el procedimiento común, deberá:

1º. Absolver o condenar a los procesados con respecto al delito de contrabando y a los delitos conexos o en concurso con el mismo que pudieren ser objeto de juzgamiento.
2º. Resolver respecto de las infracciones que, además o en lugar del delito de contrabando, se hubieran comprobado en autos.
3º. Resolver sobre la situación fiscal de las mercaderías,

aplicando sobre ellas las penas que correspondieran al delito de contrabando o, en su caso, a las otras infracciones que se hubieran comprobado en autos.

ARTICULO 6º.- La distribución de las multas que se apliquen estará a cargo de las respectivas autoridades aduaneras.

ARTICULO 7º.- Las causas a que se refiere el presente decreto que se hallaran pendientes al tiempo de su publicación, continuarán substanciándose, hasta su juzgamiento definitivo, ante los tribunales en que se encuentren radicadas.

ARTICULO 8º.- Dése cuenta oportunamente al H.Congreso de la Nación.

ARTICULO 9º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior, Educación y Justicia y Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, Guerra y Marina.

ARTICULO 10.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz - Osiris G.Villegas - Bernardo Bas - José M.Astigueta - Eduardo B.M.Tiscornia - Héctor A.Repetto - Carlos A.Kolungia.

ACTO: RESOLUCION Nº 727/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO - MUEBLES Y UTILES - ARTICULOS TIPIFICADOS - ARTICULOS DE OFICINA

Buenos Aires, 2 de agosto de 1963.-

Visto que la experiencia adquirida en el uso de papeles de actuación interna y externa, sobres, cartulinas y papel carbónicos cuya tipificación se aprobara por decretos Nros. 7.008/56 (fs. 4/5) y 299/57 (fs. 6), aconseja por razones de orden práctico modificar el formato de los sobres oficio: A-11,4 x 32,4 cm.; B-16,2 x 22,9 cm. y C-22,5 x 10 cm. por otro de 10,5 x 23 cm. que permite usarse indistintamente para papeles tipificados y formularios denominados oficio, medidas 22,5 x 35 cm.;

EL DIRECTOR GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Modifícase por lo expuesto y de acuerdo con la facultad otorgada por el artículo 4º del decreto Nº 4.335/60 (') (fs. 2/3) el formato de los sobres oficio A-11,4 x 32,4 cm., B-16,2 x 22,9 cm. incluidos en el decreto Nº 7.008/56 y C-22,5 x 10 cm. incluido en el //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1171.-

decreto Nº 299/57, por otro de 10,5 x 23 cm. debiendo el - material a emplearse en su fabricación ajustarse a lo establecido en el Capítulo IV, Acápite A, Requisitos Generales, Incisos a), b), c), d), e) y f) del decreto Nº 7.008/56.
ARTICULO 2º.- Con carácter de atenta nota, remítase a la - Delegación Fiscalía del Tribunal de Cuentas de la Nación a los fines de su competencia; cumplido, tómese conocimiento por los Departamentos Técnico y de Producción y de Contabilidad y Control y la División Contaduría y su publicación en el Boletín Oficial.-

Fdo. PEDRO A. CARABBA.

ACTO: EXPEDIENTE Nº 90.859/63.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 48º) - RECLAMO POR ESCALAFONAMIENTO - JUNTA DE CALIFICACIONES.

Providencia Nº 717.-

A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS:

Asunto: escalafonamiento - recurso - agente de la Junta Nacional de Granos.

Disposiciones de aplicación: decretos 9530/58, 11.941/59 (') y complementarios.

Opinión de esta Dirección General: el causante, agente de la Junta Nacional de Granos, se dirige al señor Secretario de Estado de Hacienda interponiendo "reclamación contra el decreto Nº 7104/61 y todos los actos que le hayan servido de antecedentes, así como los que se hayan dictado en su ejecución.

El personal de dicho organismo fué encasillado en las Clases, Grupo y Categoría previstos en el Escalafón aprobado por decreto Nº 9530/58, en base al agrupamiento de funciones acordado por su similar Nº 11.030/59; el acto mediante el cual se concretó tal escalafonamiento fué dictado por la propia Junta Nacional de Granos, en //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 916.-

uso de sus facultades para designar y promover a su personal.

En razón de considerarse mal escalafonado en Clase B - Grupo III el causante formuló el reclamo previsto en el punto 48° del aludido Escalafón y sus normas conexas, el cual, tras su trámite ante la Junta de Calificaciones y esta Dirección General del Servicio Civil de la Nación, fué desestimado por el Poder Ejecutivo mediante decreto Nº 7104/61, refrendado por el señor Ministro de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Expuesto así el proceso previo a la nota que origina estos actuados, y sin entrar a considerar la procedencia de la revisión material del encasillamiento cuestionado, este organismo considera necesario, como medida previa, solicitar el asesoramiento de esa Dirección General sobre las siguientes cuestiones:

a) si en las condiciones expuestas puede el causante plantear el reclamo que formula, directamente ante el Secretario de Estado de Hacienda, como lo hace, o si por el contrario debe efectuarlo ante las autoridades de la Junta Nacional de Granos, donde se desempeña, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la que depende jurisdiccionalmente dicha Junta, o ante el Poder Ejecutivo directamente.

b) si en el caso del causante son de aplicación las normas del decreto 7.520/44 (°) y sus complementarios.

c) si en el supuesto que el encasillamiento hubiera sido aprobado por el Poder Ejecutivo -en lugar de hacerlo la Junta de Granos u otro organismo con sus mismas facultades- y desestimado por el mismo Poder Ejecutivo, el eventual reclamo interpuesto en función del punto 48° del Escalafón, cabría la alternativa de entablar un nuevo recurso por vía administrativa, y ante qué autoridad.

El asesoramiento requerido permitirá, al par que trami

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 43.-

tar como corresponda el presente expediente, encarar debidamente cualquier situación futura similar a la que formula el interesado, causa por la cual se solicita se le asigne carácter preferente.

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 22-8-1963.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 26 de agosto de 1963.-

El recurso jerárquico, ha sido organizado por el decreto 7520/44 y sus complementarios, con el fin esencial de asegurar la legitimidad de las resoluciones dictadas por los órganos administrativos, centralizados o descentralizados, dependientes del Poder Ejecutivo y de facilitar su revisión por parte de éste en su carácter de superior jerárquico (y de allí la calificación del recurso). La instancia administrativa concluye, pues, con la decisión del Poder Ejecutivo, respecto de la cual no queda ya recurso alguno, salvo las acciones judiciales que pudiera ejercer el interesado.

No obstante, como lo ha señalado reiteradamente la Procuración del Tesoro y lo recuerda el recurrente a fs. 2 vta., ello no importa la inalterabilidad absoluta de los decretos del Poder Ejecutivo, el cual puede proceder a la revisión de oficio de sus propios actos, en ejercicio del contralor de legalidad que posee sobre los mismos, atribuyendo con ese fin a todo recurso improcedente el carácter de una denuncia de ilegalidad y en esta forma, si median razones para ello, reconsiderando la cuestión de fondo en favor -nunca- en contra- del interesado. (cfr. "Digesto Administrativo", Boletín 1148).

La reclamación deducida en las presentes actuaciones tiene, por tanto, el carácter de un pedido de revocatoria o

reconsideración del decreto 7104/61, por las razones que expone el recurrente y que, a juicio de esta Dirección, tiene la fuerza suficiente como para motivar un nuevo estudio de la cuestión, desde que la afirmación genérica --contenida en el decreto 7104/61- de que de los argumentos que se esgrimen en los expedientes del personal a que se hace referencia en el art. 1º, no surgen fundamentos - que obliguen a introducir modificaciones en los encasillamientos que se objeten, no constituye por cierto un análisis convincente de la situación del interesado ni de la - improcedencia de su reclamación.

Como el decreto 7104/61 ha sido dictado por conducto de esta Secretaría de Hacienda, la reclamación de fs. 1 - ha sido dirigida, por lo tanto, congruentemente, a esta - misma Secretaría, desde que es el órgano por cuyo intermedio podría lograrse la revisión de dicho decreto. La presentación ante la Junta Nacional de Granos carecería de - razón de ser, por no haber intervenido en la adopción de la medida dispuesta por el mencionado decreto.

Quedan con lo expuesto contestadas las preguntas a - que se refieren los puntos a) y b) de la consulta de fs. 13. La cuestión planteada en el punto c) de fs. 14 debe - resolverse asimismo por aplicación de los principios enunciados con respecto a la posibilidad de reclamar, por vía de pedido de reconsideración o revocatoria, contra decisiones contenidas en decretos del Poder Ejecutivo.

Vuelva a la Dirección General del Servicio Civil de - la Nación a sus efectos.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General de
Asuntos Jurídicos

ACTO: DECRETO - LEY N° 5.537/63.-

MATERIAS: SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION - MISIONES AL EXTERIOR - AUTOMOTORES

Buenos Aires, 5 de julio de 1963.-

VISTOS y CONSIDERANDO:

Que por decreto 4.544/63 se dejó transitoriamente en suspenso la aplicación de los decretos Nros. 3.693/59 bis, 7.051/60, 3.096/60, 6.619/60 y 4.161/61, que organizan un régimen preferente para la importación de automotores por parte de los funcionarios públicos que regresan al país luego de cumplir misiones oficiales en el exterior;

Que la suspensión se fundó en un dictamen de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en el que se impugna la legalidad de dichos decretos frente a las normas de la Ley 14.446 (1); y tuvo por objeto completar los estudios necesarios para llegar a conclusiones definitivas acerca de la oportunidad y conveniencia de mantener o derogar el régimen preferencial de que se trata;

Que los estudios practicados demuestran que los altos recargos a la importación de automotores, que establece el sistema general vigente, tienden a tornar antieconómica la introducción de estos vehículos, para que las divisas de que el país dispone puedan utilizarse en

(1) Ver Digesto Administrativo N° 537.-

//-

adquisiciones más provechosas para la comunidad; y que no existe ninguna razón fundamental que impida -también atendiendo a los intereses de la comunidad- que el personal oficial introduzca, a su regreso al país, el automotor que generalmente ha debido adquirir por exigencias propias de su gestión oficial (ya que no existen automóviles oficiales en el exterior) en condiciones que no impliquen una pérdida patrimonial ni un enriquecimiento injustificado,- pues se trata de divisas que ya se han utilizado y que de otro modo podrían gastarse en el exterior en vez de - traducirse en la introducción de un bien útil;

Que el régimen preferencial que establecen los decretos suspendidos en su aplicación, da lugar en la práctica a que en ciertos casos el personal beneficiado obtenga por la venta en plaza de los automóviles así importados un apreciable enriquecimiento patrimonial que desvirtúa los - fines que se tuvieron en cuenta al implantarlo y resulta irritante desde todo punto de vista;

Que es conveniente entonces estructurar un nuevo sistema que tienda, exclusivamente, a que el personal que regresa luego de cumplir una misión oficial en el exterior pueda seguir utilizando en el país el automóvil adquirido de su peculio en el exterior, sin pérdida ni beneficio alguno; graduando en función de sus posibilidades financieras -medidas por la jerarquía- el tipo de automóvil susceptible de ser importado y aplicándole un recargo que, sumado al precio de compra del vehículo, lleve el costo total de su introducción a un nivel equivalente a su valor en plaza, con lo cual queda descartada toda eventual especulación y la franquicia vigente deja de ser tal;

Que al propio tiempo, prescindiendo del juicio que - puedan merecer los decretos impugnados por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en punto a su - legalidad no cabe duda que ellos han producido efectos que es de toda justicia convalidar, pues no es prudente revisar ahora la situación fiscal de los automotores despachados a plaza conforme a dichos decretos a partir de 1959;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- El personal de la Administración Nacional que revista en organismos que cumplen funciones de Estado como poder público, designado por decreto para cumplir misiones oficiales en el exterior por un término mayor de un año, podrá importar un automóvil al término de su misión, en las condiciones establecidas en este decreto, siempre que dicho automóvil hubiera sido registrado en el Ministerio o Secretaría de Estado respectiva por lo menos con seis meses de anticipación a la fecha del decreto que haya dispuesto el cese o traslado al país, o de la fecha en que éste debió tener lugar si la designación hubiera sido hecha por tiempo - determinado. A los fines de este decreto, deberá considerarse como fecha de registro aquella en la cual el Ministerio o Secretaría de Estado ha recibido la comunicación del interesado denunciando la marca, modelo, año, número de motor , chassis y serial del automóvil a importar. Las solicitudes deberán presentarse en formulario aprobado por la Dirección - Nacional de Aduanas. Los Subsecretarios de los Ministerios o de las Secretarías de Estado respectivas, certificarán en cada caso dicho formulario, en el que constarán los datos - necesarios para que la Dirección Nacional de Aduanas dicte resolución definitiva. Con el formulario deberá acompañarse la factura de compra.

ARTICULO 2º.- Al solo efecto de este decreto establécense - las siguientes categorías para el personal destacado en el exterior:

Primera Categoría:

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario; Teniente - General, Almirante, Brigadier General, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Primera Clase; General - de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor, Enviado Extra-

ordinario y Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase;General de Brigada, Contraalmirante y Brigadier.

Segunda Categoría:

Consejero de Primera Clase; Coronel; Capitán de Navío; Comodoro; Cónsul General de Primera Clase; Consejero Comercial; Consejero de Segunda Clase; Teniente Coronel; Capitán de Fragata; Vicecomodoro; Cónsul General de Segunda Clase; Consejeros Técnicos Civiles de Organismos Estatales de carácter financiero.

Tercera Categoría:

Secretario de Primera Clase; Mayor; Capitán de Corbeta; Comandante; Cónsul de Primera Clase; Agregado Comercial;Secretario de Segunda Clase; Capitán; Teniente de Navío; Cónsul de Segunda Clase.

Cuarta Categoría:

Secretario de Tercera Clase; Teniente Primero; Teniente de Fragata; Primer Teniente; Cónsul de Tercera Clase; Agregados de Embajada; Teniente; Teniente de Corbeta; Vicecónsul; Subteniente; Guardiamarina; Alférez; Agregados Técnicos Civiles de Organismos Estatales; Personal Administrativo de la Administración Nacional y Personal Subalterno - y Civil de las Fuerzas Armadas.

A los fines del encasillamiento del personal en las categorías precedentes, se computará la jerarquía adquirida a la fecha de su regreso al país. En el caso del personal militar, se computará en iguales condiciones la jerarquía propia de su grado,con prescindencia de la función desempeñada.

ARTICULO 3º.- El costo en fábrica, según catálogo, excluídas las mejoras opcionales, de los automotores que pueden importarse conforme a este decreto, excepto en cuanto a la primera categoría, que será libre, no podrá exceder de los siguientes valores por categoría:

Segunda Categoría: hasta u$s. 3.500 o su equivalente en - otras divisas;

Tercera Categoría: hasta u$s. 2.500 o su equivalente en otras divisas;
Cuarta Categoría: hasta u$s. 1.800 o su equivalente en otras divisas.

La conversión se hará al tipo de cambio libre vigente en el momento de iniciarse el trámite ante la Dirección Nacional de Aduanas.

En los casos en que no exista catálogo deberá presentarse una certificación de la firma fabricante del automóvil visada por el Cónsul Argentino. En la imposibilidad de cumplir este último requisito, el valor se acreditará mediante certificación expedida por el representante del fabricante en nuestro país.

Facúltase al Poder Ejecutivo para aumentar o disminuir proporcionalmente los valores atribuibles al costo en fábrica a que se refiere este artículo, cuando mediaran sensibles oscilaciones en los referidos costos.

ARTICULO 4º.- Los automotores a que se refiere este decreto estarán sujetos al pago de un recargo igual a su costo en fábrica, según catálogo, incluidas las mejoras opcionales, que se reducirá en un 25% por cada año de uso, a partir de su registro en el Ministerio o Secretaría de Estado respectiva y hasta la fecha de la disposición que establece el cese o traslado; a cuyo efecto las fracciones de más de seis meses se computarán como enteros. La Dirección Nacional de Aduanas determinará el tipo de cambio a aplicar para la conversión a pesos moneda nacional.

El personal comprendido en este decreto que importe automóviles que no correspondan a su categoría deberá tributar los recargos generales establecidos para la importación de automotores.

ARTICULO 5º.- El régimen organizado por este decreto, será de aplicación para los automotores que se registren en los Ministerios o Secretarías respectivas a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. El personal que

con anterioridad a esa fecha haya registrado ya sus automotores podrá optar por el régimen de este decreto o por el que establecen los decretos Nros. 3693/59 bis, 3096/60, - 6619/60, 7051/60 y 4161/61. La opción deberá formalizarse en el momento del despacho a plaza.

Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas para resolver los casos en que se planteen problemas vinculados con el cambio de sistema (falta de registración, registración fuera de término, compromisos de compra en firme, etc.), - cuidando respetar los derechos adquiridos. Esta facultad - caducará el 31 de enero de 1964 y en todos los casos será ejercida con la información favorable de los Ministerios o Secretarías respectivas.

Los automotores embarcados con destino a la República, en viaje o en puerto argentino a la fecha de publicación - de este decreto en el Boletín Oficial, pertenecientes al - personal civil de las Fuerzas Armadas , se despacharán a - plaza conforme al decreto 4161/61.

ARTICULO 6º.- Los ciudadanos argentinos que no revistan en la Administración Nacional, que hubieren integrado por más de un año organismos internacionales a los que está adherido el país, en calidad de directores, gobernadores o jerarquía equivalente, por designación expresa de dichos organismos, gozarán de franquicia diplomática para el despacho de sus equipajes y podrán introducir al término de su gestión, en las condiciones de este decreto, el automóvil que hubieren usado en el exterior, siempre que prueben que lo han adquirido con seis meses de antelación a la fecha del cese. A - este efecto, tales ciudadanos se considerarán incluídos en la primera categoría del artículo 2º. Los que hubieren adquirido automóviles antes de la fecha de vigencia de este decreto podrán ejercer la opción prevista en el artículo - 5º.

ARTICULO 7º.- Ratifícanse desde la fecha de su vigencia, los decretos nros. 3693/59 bis, 7051/60, 3096/60, 6619/60

y 4161/61, los que quedan derogados a partir de la fecha de publicación de este decreto en el Boletín Oficial, excepto en los supuestos previstos en los artículos 5º y 6º.

ARTICULO 8º.- Dése cuenta oportunamente al H.Congreso de la Nación.

ARTICULO 9º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 10.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz - Osiris G. Villegas - José M.Astigueta - Eduardo B.M. Tiscornia.

ACTO: EXPEDIENTE Nº 248/63.-

MATERIAS: LICENCIAS - CALIFICACIONES

Providencia DGSCN. Nº 674/63.-

AL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION (SECRETARIA):

Asunto: licencia sin sueldo - incidencia sobre la calificación anual - agentes designados Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario.

Disposiciones de aplicación: Decretos Nros. 8.566 (') y 8567/61 ("); 1404/63 (°).

Opinión de esta Dirección General: el caso de los agentes designados para desempeñar funciones de Ministro, Secretario de Estado, Subsecretario, Secretario de la Presidencia de la Nación, de las Provincias o de las Municipalidades, a los que por tal causa se les otorga licencia sin sueldo, es asimilable al previsto en el artículo 22° del Régimen de Licencias (decreto Nº 8.567/61), ya que en esencia se trata de cargos de representación política.

En tales condiciones, se estima que las normas del decreto Nº 1404/63, sobre incidencia de este tipo de licencias en la calificación anual, son aplicables al ca

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1460.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1857.-

so previsto en el artículo 3°, inciso a), del Régimen de acumulación de cargos, funciones y/o pasividades (decreto Nº 8.566/61).

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 9-8-963.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General.

ACTO: DECRETO Nº 3.821/63.-

MATERIAS: ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - RESPONSABILIDAD JERARQUICA - CALIFICACIONES

Buenos Aires, 13 de mayo de 1963.-

Visto el decreto nº 9.252/60 (1) que estableció distintas compensaciones para el personal comprendido en el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la percepción de las referidas compensaciones está sujeta a determinadas condiciones, según sea el carácter de las mismas;

Que para la "responsabilidad jerárquica" prevista en el art. 3º, se fija como condición en el punto III inciso b) "haber obtenido durante el período inmediato anterior una calificación de "Muy bueno" (8 puntos), como mínimo, de acuerdo con el régimen del punto 41º y complementarios del Escalafón General";

Que la práctica ha demostrado que dicha exigencia produce desigualdad en el tratamiento de los agentes frente a la misma norma, como ocurre en el caso de agen

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1216.-

tes escalafonados en Clase B Grupo III o inferiores, calificados con siete (7) puntos, y que por tanto no pueden percibir dicho adicional, que al promover por concurso a los Grupos I o II de la misma Clase adquieren el derecho a percibir el beneficio de la "dedicación funcional", de más importancia que el de "responsabilidad jerárquica", sin necesidad de un mínimo de calificación;

Que tal circunstancia aconseja proceder a corregir la norma de manera de evitar situaciones como las anotadas,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Suprímese el inciso b) del punto III del art. 3° del Régimen de Compensaciones para el personal comprendido en el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional, aprobado por decreto n° 9.252/60.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Eustaquio A. Méndez Delfino - Ramón C. Lequerica

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº 1956.-

ACTO: DECRETO - LEY Nº 6.661/63.-

MATERIAS: ADUANA DE LA NACION - CONSEJO DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO

Buenos Aires, 8 de agosto de 1963.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que las normas vigentes en materia aduanera prevén que las mercaderías detenidas por hallarse afectadas a sumarios o juicios y que por sus condiciones o propiedades ofrezcan peligro inmediato de deterioro o disminución del valor aduanero o que hayan empezado a sufrirlo, serán vendidas en pública subasta en el supuesto de que los interesados se nieguen a hacer el retiro de las mismas, previa consignación de su valor a la orden de la Aduana y pago de los gravámenes respectivos, pasados diez días de ser intimados a ello.

Que es conveniente arbitrar un medio distinto y más ágil que el del remate a objeto de evitar el demérito de las mercaderías -particularmente de las de fácil desvalorización- y facilitar el descongestionamiento de los depósitos en que permanecen durante el tiempo que dura la sustanciación de la causa, ya que se procede al mismo sólo en forma periódica y cuando la cantidad de mercaderías en condiciones de ser subastadas lo justifica; de imposibilitar algunos fraudes y formas de evasión fiscal y ciertas maniobras de grupos de interesados ten

dientes a impedir que los precios alcancen en los remates su nivel normal; así como de aliviar al Estado de determinados gastos originados por la subasta, tales como los de publicidad.

Que con ese propósito, puede autorizarse, como alternativa, la comercialización de las mercaderías en la señalada situación por intermedio de los importadores o industriales del ramo y/o sus entidades representativas.

Que este temperamento ya ha sido adoptado dentro del régimen del decreto 5.426/62 (') por el que se dieron normas sobre prevención y represión del contrabando.

Que este propósito puede obtenerse introduciendo la adecuada modificación al actual artículo 106 de la ley de aduana, texto ordenado en 1962.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el artículo 106 de la ley de aduana, texto ordenado en 1962, por el siguiente:

Artículo 106.- Las mercaderías detenidas no podrán venderse antes de que su declaración en comiso haya quedado firme.

Durante la sustanciación de los sumarios o juicios por infracciones aduaneras, se podrá intimar a los interesados el retiro de las mercaderías que por sus condiciones o propiedades ofrezcan peligro inmediato de deterioro o disminución del valor aduanero o que hayan empezado a sufrirlo, consignando su valor a la orden de la Aduana, previo pago de los derechos respectivos.

En caso que los interesados no las retiren dentro de los diez días de la intimación y cualquiera sea la jurisdicción en que se encuentre la causa, las mercaderías se venderán en remate público o se convendrá su

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1651.-

comercialización por intermedio de los importadores o industriales del ramo y/o de sus cámaras representativas. La suma depositada por los interesados o el producido de la venta o comercialización en su caso, se transferirá por la Aduana al juez que entienda en la causa, a su requerimiento, y previa deducción del importe de los derechos, servicios y demás gastos.

Si existiera semiplena prueba de que se trata de un caso típico de contrabando, podrá procederse a la venta o comercialización de las mercaderías susceptibles de demérito, sin requerir la conformidad de los interesados.

Del auto que intime el retiro de las mercaderías o disponga su venta o comercialización, recurrido en el modo y forma previstos por el artículo 70, la Aduana de la Nación decidirá en última instancia administrativa.

Cuando se trate de comercialización de mercaderías por intermedio de los importadores o industriales del ramo y/o sus entidades representativas la entrega de las mercaderías se efectuará contra letras a treinta (30) días por el importe de los precios de venta previamente establecidos por la Aduana de la Nación, los que incluirán el importe del impuesto interno cuando correspondiere.

La venta se realizará directamente al público consumidor o usuario y exclusivamente en los locales habilitados a tal efecto, con personal designado y empleado por los industriales o importadores, por cuya cuenta correrán los gastos respectivos. La venta al público podrá limitarse a determinadas unidades por persona. La Aduana de la Nación, cuando lo considere conveniente, podrá poner veedores en dichos locales.

ARTICULO 2º.- Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la Nación.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los

señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior, Defensa Nacional y Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Osiris G. Villegas - José M. Astigueta - José A. Martínez de Hoz - Eduardo B.M. Tiscornia.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 6.681/63.-

MATERIAS: CONGRESO DE LA NACION - PRESUPUESTO

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963.-

Atento lo solicitado por el Congreso de la Nación, en el expediente Nº 13.571 del año 1963, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 10º del Decreto-Ley Nº 10.582/62 (1) excluye del régimen establecido por el artículo 20º de la Ley Nº 13.922, las economías que se obtengan en la gestión presupuestaria del Congreso de la Nación para el ejercicio 1963;

Que los sobrantes que se obtengan durante el corriente ejercicio recién podrán utilizarse una vez finalizado el mismo, fecha en que el Parlamento se hallará en el período inicial de su funcionamiento, oportunidad en que, por tal razón, se producirán gastos de carácter extraordinario, por lo que se hace necesario autorizar al Congreso Nacional a disponer de los recursos sobrantes;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Derógase el artículo 10º del Decreto-Ley Nº 10.582/62.

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1776.-

//-

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior, de Defensa Nacional y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Ministerio del Interior, a sus efectos.-

GUIDO - Osiris G.Villegas - José M.Astigueta - José A. Martínez de Hoz - Eduardo B.M. Tiscornia.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 6.690/63.-

MATERIA: PRESUPUESTO

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963.-

Visto lo dispuesto por el art. 23 del decreto-ley Nº 10.582/62 (') y lo propuesto por el Ministerio de Educación y Justicia con el fin de propender al mejor desenvolvimiento de los establecimientos dependientes de los organismos citados en dicha disposición legal, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario modificar dicha norma a fin de posibilitar el desarrollo eficaz de los planes de trabajo de aplicación en los establecimientos asistenciales y de enseñanza, de los Consejos Nacionales de Educación - Técnica y de Protección de Menores y del Instituto Nacional de Salud Mental;

Que en consecuencia se hace necesario facilitar la distribución de los recursos provenientes de la comercialización de excedentes de producción;

Que, por otra parte, en lo que hace al Consejo Nacional de Educación Técnica, procede arbitrar los medios necesarios para la sustanciación de las tramitaciones relativas al régimen a que se refiere el artículo 23 mencionado;

Por ello,

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1776.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el artículo 23 del decreto-ley Nº 10.582/62 por el siguiente:

"Artículo 23.- Facúltase al Consejo Nacional de Educación Técnica, al Consejo Nacional de Protección de Menores y al Instituto Nacional de Salud Mental, para que procedan a la venta directa de los excedentes de producción de los talleres y laboratorios de aprendizaje y capacitación, así como de las secciones agropecuarias dependientes de aquéllos.

Autorízase, asimismo, a los organismos mencionados para realizar, en los establecimientos de su dependencia, trabajos por cuenta de terceros, sean éstos personas de derecho privado o entidades públicas nacionales, provinciales o municipales. Los trabajos destinados a los alumnos o para sus hogares quedarán exceptuados del importe de la mano de obra.

Las sumas provenientes de las ventas y/o trabajos de referencia, se destinarán a los siguientes fines:

a) Materia prima y refección, conservación, reparación y equipamientos y renovación de máquinas y herramientas de los talleres y laboratorios vinculados directamente con la enseñanza práctica y/o secciones agropecuarias;
b) Incremento de los recursos propios de los respectivos organismos, y
c) Asignación de peculio a favor de los educandos y/o internados.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto por el presente artículo, teniendo en cuenta especialmente las características económico sociales de las zonas de ubicación de los distintos establecimientos, a los efectos de la distribución de los recursos obtenidos en las finalidades previstas precedentemente".

ARTICULO 2º.- Incorpórase a la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, el artículo 23 del decreto-

ley Nº 10.582/62, en la forma en que queda redactado por el artículo 1º precedente.

ARTICULO 3º.- Autorízase al Consejo Nacional de Educación Técnica, para delegar en las autoridades de los establecimientos de su dependencia, la sustanciación de las tramitaciones relativas a las compraventas y administración del régimen a que se refiere el artículo 23 mencionado en el artículo anterior, con las mismas atribuciones y obligaciones que, conforme con las normas vigentes, posee la Dirección de Administración de dicho Consejo Nacional, ante la cual esas autoridades serán consideradas responsables. El Consejo Nacional fijará la cantidad de la que podrán disponer directamente los establecimientos dependientes, dentro del monto máximo de cien mil pesos (m$n. 100.000.-).

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Educación y Justicia, del Interior, de Defensa Nacional, de Asistencia Social y Salud Pública y de Economía, y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, tomen nota los Consejos Nacionales de Educación Técnica y de Protección de Menores y el Instituto Nacional de Salud Mental y, previa intervención del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación, archívese.-

GUIDO - Bernardo Bas - Osiris G. Villegas - José M. Astigueta - Horacio M. Rodríguez Castells - José A. Martínez de Hoz - Eduardo B. M. Tiscornia.

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº 1959.-

ACTO: DECRETO-LEY Nº 6.692/63.-

MATERIAS: TRIBUNAL FISCAL - ADUANA DE LA NACION

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 170 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, el Poder Ejecutivo puede extender la competencia del Tribunal Fiscal a otros impuestos que los indicados en el artículo 115 de la misma ley;

Que la opinión más autorizada señala la necesidad de otorgar a los contribuyentes y responsables las mismas garantías en materia aduanera que se les acuerdan frente a otros tributos, disciplinando las relaciones entre la Aduana y los que resulten obligados ante ella, de modo de proteger por igual los derechos del fisco y los de los contribuyentes;

Que las últimas reformas adoptadas en materia de organización aduanera tienden a perfeccionar los resortes de la administración pública en este importante aspecto de su labor, todo lo cual torna oportuno hacer uso de la facultad que la ley otorga al Poder Ejecutivo para atribuir al Tribunal Fiscal competencia en las causas de aduana;

Que de esta competencia deben quedar excluídas las causas de contrabando, por tener pena privativa de liber

//-

tad cuya imposición, como es obvio, debe quedar reservada a las autoridades judiciales, todo lo cual debe ser motivo de una legislación especial que contemple adecuadamente los intereses en juego;

Que la transferencia al Tribunal Fiscal de las causas que se originen en la Aduana, excepto contrabando, importa la adecuación de la legislación existente a fin de reglamentar los procedimientos a seguir en forma congruente con la finalidad perseguida, del mismo modo que requiere modificar la organización del Tribunal Fiscal para hacerla compatible con las exigencias de las nuevas tareas que deberá afrontar;

Que por otra parte las medidas a que se refiere el presente decreto no constituyen en líneas generales más que un anticipo de las soluciones contempladas en forma orgánica en esta materia por el Código Tributario, cuya redacción ya ha sido dispuesta por Decreto nº 1.232, del 14 de febrero del corriente año;

Que tanto el Codificador encargado de la redacción del código como la Comisión Asesora del mismo y el propio Tribunal Fiscal, han sido consultados en este asunto, habiendo contemplado el Poder Ejecutivo las opiniones vertidas a su respecto;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Modifícase la Ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones posteriores, en los siguientes artículos que quedarán redactados en la forma que en cada caso se indica a continuación:

Artículo 116.- El Tribunal Fiscal tendrá su sede en la Capital Federal, pero podrá actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar de la República:

a) Mediante delegaciones fijas que el Poder Ejecutivo, a propuesta del Presidente del Tribunal, podrá establecer en los lugares del interior del país que se estimen convenientes.

b) Mediante delegaciones móviles que funcionen en los lugares del país y en los períodos del año que establezcan los reglamentos del Tribunal.

Los jueces del Tribunal podrán establecer su despacho en cualquier lugar de la República a los efectos de la tramitación de las causas que conozcan.

En todas las materias de competencia del Tribunal Fiscal, excepto en las causas aduaneras, los contribuyentes y responsables podrán optar por deducir los recursos y demandas, sea en la Capital Federal o ante las delegaciones fijas o móviles del Tribunal, las que tendrán la jurisdicción que establezca el Poder Ejecutivo en el primer caso o el Reglamento de Procedimiento en el segundo.

En materia aduanera los recursos y demandas se interpondrán ante las delegaciones del Tribunal que correspondan al lugar de la sede de la autoridad aduanera que dictó la resolución recurrida o, en ausencia de ella, de aquella que intervino en el cobro de las sumas cuestionadas. El Poder Ejecutivo podrá fijar de otro modo la jurisdicción del Tribunal Fiscal, cuando las circunstancias así lo hagan conveniente.

Artículo 117.- El Tribunal Fiscal está constituido por un Presidente y siete Vocales. Tanto el Presidente como los Vocales deberán ser abogados, con la excepción de aquellos que habiendo ya sido designados para el cargo, posean el

título de doctores en Ciencias Económicas, conforme con lo previsto en la Ley 15.265(1). Todos ellos serán argentinos y de treinta o más años de edad.

A propuesta del Secretario de Hacienda el Poder Ejecutivo podrá aumentar el número de miembros del Tribunal, cuando resultare conveniente para la mejor protección de los derechos de los contribuyentes.

Los miembros desempeñarán sus cargos en el lugar para el cual hubieren sido designados, no pudiendo ser trasladados sin su consentimiento.

Artículo 122.- Para sustanciar y resolver cada causa, el Presidente del Tribunal designará, por sorteo, a un Vocal quien, a ese efecto, constituirá Tribunal.

Toda decisión del Vocal que ponga fin al litigio, quedará en suspenso por 30 días, contados desde la fecha del fallo. Durante dicho período, el Presidente resolverá si la decisión será sometida al Tribunal en pleno, en cuyo caso éste tendrá por válidas las conclusiones del fallo sobre los hechos probados.

El Presidente podrá resolver que el sometimiento de la causa al Tribunal pleno, lo sea al solo efecto de fijar la interpretación de la ley aplicable.

Cuando el derecho a aplicar en el caso pudiere depender de otros hechos que los valorados en el fallo, el Presidente adoptará las medidas para mejor proveer que estime oportunas, las que se diligenciarán con intervención de las partes. De todas ellas quedará constancia en el expediente, en la forma que establezca el reglamento de procedimiento, de modo que el Tribunal pueda decidir en base a los elementos de autos.

Si transcurrido el término de treinta días, una sentencia no hubiera sido incluida por el Presidente en la lista de asuntos sometidos a plenario, será notificada a las partes como sentencia del Tribunal. El

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1085.-

Presidente podrá disponer que la sentencia se notifique antes de que transcurra el citado término de treinta días.

El Tribunal se reunirá en plenario por lo menos seis veces al año, en las épocas que fije el reglamento de procedimiento. Las causas serán consideradas y resueltas por el primer plenario del Tribunal que se reúna dentro de un plazo no menor de cuarenta días de la resolución del Presidente que decida su sometimiento al Tribunal pleno.

El Tribunal en pleno estará constituido válidamente por el Presidente y cinco Vocales o, cuando el número de éstos sea mayor de siete, por el Presidente y la mitad más uno de los Vocales. La sentencia será dictada por mayoría absoluta de votos y el Presidente tendrá doble voto en caso de empate.

Artículo 125.- Inciso d) Representar al Tribunal y suscribir sus comunicaciones. El Presidente podrá delegar estas funciones en los Vocales que actúen en las delegaciones del interior.

Artículo 156.- Realizada la audiencia de vista de la causa, el Tribunal dictará sentencia en el término de cinco días. Las costas serán en el orden causado, pero, a petición de parte, fijará el Tribunal los honorarios de los profesionales intervinientes, aplicando los aranceles vigentes, cuya decisión será apelable.

Artículo 161.- Cuando una causa se radique en la Capital Federal o ante cualquiera de las delegaciones permanentes del Tribunal, el vocal designado para entender en ella, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156, dictará la sentencia definitiva dentro de los plazos que se indican a continuación, contados desde la fecha de presentación del acuerdo a que se refiere el artículo 139 o, a falta de éste, desde la fecha

de expiración del término disponible para tal fin;

a) Si no hubiere hechos controvertidos, noventa (90) días.

b) Si los hubiere, ciento cincuenta (150) días.

c) Si se debieron resolver cuestiones previas, ciento ochenta (180) días.

Cuando se tratara de causas radicadas ante las delegaciones móviles del Tribunal, las mismas serán resueltas en los términos que fije el reglamento de procedimiento.

Artículo 162.- Inciso 3. Por el término que establezca el Presidente, cuando éste autorice un plazo mayor de 60 días para producir la prueba a que se refieren los artículos 41 y siguientes o en los casos de ausencia o impedimento del Vocal que entendiera en la causa.

Artículo 164.- Los responsables o infractores podrán interponer el recurso de revisión y de apelación limitada a que se refiere el artículo 85 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, para ante la Cámara Nacional competente, dentro de 30 días de notificárseles la sentencia del Tribunal y, con sujeción a lo dispuesto en el artículo siguiente, igual derecho tendrá la Dirección General Impositiva. No interpuesto el recurso, la sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y deberá cumplirse dentro de treinta días de quedar firme.

Será Cámara Nacional competente aquella en cuya jurisdicción funcione la sede o la delegación permanente o móvil del Tribunal, según sea donde se ha radicado la causa.

Artículo 85.- Apartado 2º, párrafo primero. Resolverá

el fondo del asunto teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal sobre los hechos probados. Ello no obstante, podrá apartarse de ellas y disponer la producción de prueba cuando, a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos.

ARTICULO 2º.- Elimínase de los artículos 129, 140, 141, 142, 143, 144 y 159 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, la expresión "vocal instructor" y el Poder Ejecutivo adaptará, en el ordenamiento de la ley, la redacción de ellos al concepto de que el vocal interviniente constituye Tribunal.

ARTICULO 3º.- El Tribunal Fiscal tendrá la competencia que establece el artículo siguiente en los recursos y demandas que se interpongan con relación a los derechos, gravámenes, accesorios y sanciones que aplique la Aduana de la Nación en ejercicio de los poderes fiscales que le son propios, excepto en los que corresponden a las causas de contrabando.

ARTICULO 4º.- Los recursos y demandas contra resoluciones de la Aduana de la Nación que determinen derechos, gravámenes, recargos y sus accesorios o ingresos a la renta aduanera a cargo de los particulares y/o apliquen sanciones, excepto en las causas de contrabando; el recurso de amparo de los contribuyentes y terceros y los reclamos y demandas de repetición de derechos, gravámenes, accesorios y recargos recaudados por la Aduana de la Nación, como también los recursos a que ellos den lugar, se regirán por lo dispuesto en los artículos 71 a 90 y por el Título II de la Ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones. No será aplicable en materia aduanera lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 128 de dicha ley.

ARTICULO 5º.- La representación y patrocinio ante el Tribunal en materia aduanera se ejercitará por las personas au-

torizadas para actuar en causas judiciales. La representación también podrá ser llevada a cabo por los despachantes de Aduana, sus apoderados y dependientes en el límite de sus facultades, pero estarán obligados a actuar con patrocinio letrado.

ARTICULO 6º.- La repetición a que se refiere el artículo 152 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, en materia aduanera, no podrá acordarse por mayor suma que la que haya ingresado a las arcas fiscales, esto es, deducción hecha de la participación acordada a denunciantes y aprehensores.

ARTICULO 7º.- Los denunciantes y aprehensores no podrán deducir los recursos y demandas a que se refiere el artículo 4º, de la presente ley, ni serán partes en las causas a que los mismos den lugar. La distribución entre denunciantes y aprehensores de la multa que imponga una sentencia firme, será efectuada por la autoridad administrativa correspondiente.

ARTICULO 8º.- En materia aduanera, la suspensión e interrupción de la prescripción de las acciones y poderes fiscales para la determinación y cobro de derechos, gravámenes y sus accesorios para la imposición y cobro de multas y sanciones, así como la acción de repetición de los contribuyentes y responsables, se regirán por lo dispuesto en los artículos 62 a 65, ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones.

ARTICULO 9º.- Los particulares podrán interponer ante el Tribunal Fiscal los recursos que la presente ley autoriza contra las resoluciones que la Aduana de la Nación dicte a partir de la fecha de la publicación del presente.

Las demandas de repetición no podrán comprender los pagos efectuados en virtud de resolución administrativa que hubiera quedado firme con anterioridad a la fecha de la publicación del presente.

ARTICULO 10.- Los reglamentos del Tribunal o el Poder Ejecutivo, según el caso, establecerán la fecha desde cuando

podrán interponerse demandas y recursos ante las delegaciones móviles o fijas del Tribunal.

Las causas iniciadas en el Tribunal Fiscal en las que a la fecha de la publicación del presente ya se hubiere designado vocal instructor, se tramitarán de acuerdo a las disposiciones vigentes a la época de su iniciación.

ARTICULO 11.- La Dirección General Impositiva y la Aduana de la Nación prestarán al Tribunal la asistencia que éste requiera a los efectos de la organización y funcionamiento de sus delegaciones en el interior.

ARTICULO 12.- El Poder Ejecutivo atenderá los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto, de acuerdo al presupuesto que le someterá para su aprobación el Presidente del Tribunal, con imputación a Rentas Generales.

ARTICULO 13.- Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la Nación.

ARTICULO 14.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 15.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz - Osiris G. Villegas - José M. Astigueta - Eduardo B. M. Tiscornia.-



ACTO: DECRETO Nº 6.696/63.-

MATERIAS: ADUANA DE LA NACION - PRESUPUESTO - VACANTES NOMBRAMIENTOS

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963.-

Visto el decreto-ley Nº 10.582/62 (¹), que fija el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 1963, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 27 de dicho decreto establece la supresión automática de todas las vacantes de personal existentes al 31 de octubre de 1962, con sujeción al régimen establecido por el decreto Nº 413/60 (");

Que si bien la medida comentada se funda en la imprescindible necesidad de asegurar el máximo de economías posibles con la consecuente reducción del déficit fiscal, se hace necesario limitar su aplicación a efectos de no desvirtuar su finalidad reduciendo las posibilidades funcionales de los organismos recaudadores;

Que de esos organismos, merece especial tratamiento la Aduana de la Nación, máxime teniendo en cuenta que por decreto-ley Nº 6.087/63 (°), se dispuso su reorganización técnico-administrativa, acorde con las necesidades //-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1776.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1066.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1938.-

actuales del país;
Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Exclúyese de toda disposición de supresión y congelamiento de vacantes definitivas o transitorias, así como de las prohibiciones de ingreso o promoción, los cargos correspondientes a la Aduana de la Nación.
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz -
Eduardo B. M. Tiscornia.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 6.699/63.-

MATERIA: COMISION ADMINISTRADORA PROVISIONAL DEL STUD BOOK ARGENTINO

Buenos Aires, 9 de agosto de 1963.-

Visto el decreto Nº 1.831/63 (¹), que creó una Comisión Administradora Provisoria del Stud Book Argentino (Registros Genealógicos de los Caballos Sangre Pura de Carrera y Arabes y Anglo-Arabes), y

CONSIDERANDO:

Que el citado decreto fué dictado con el mismo espíritu que inspiró los decretos Nros. 3.064/56 y 8.061/57 que dispusieron la devolución a las entidades de criadores de los Registros Genealógicos de las diversas especies de animales de razas;

Que por el decreto-ley Nº 2.961/58 el Stud Book Argentino fué transferido a la Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos Sangre Pura de Carrera Ltda.;

Que la Comisión Administradora Provisoria creada por decreto Nº 1.831/63 no se ha constituido por cuya razón resulta conveniente dictar las normas legales que aseguren el cumplimiento del propósito que lo inspiró;

Que hasta el presente la Administración del Stud Book Argentino es desempeñada por la Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos Sangre Pura de Carrera Ltda., siendo necesario prever la continuidad de su ad-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1861.- //-

ministración hasta el momento que el Poder Ejecutivo dicte las disposiciones complementarias a que se refiere el presente;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1°.- Encomiéndase a las entidades representativas de los criadores de caballos sangre pura de carrera la dirección del Stud Book Argentino (Registros Genealógicos de los Caballos Sangre Pura de Carrera y Arabe y Anglo-Arabes) de acuerdo a las normas que a tales efectos dictará el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de dichas entidades.

ARTICULO 2°.- Hasta tanto se dicten por el Poder Ejecutivo las normas a que se refiere el artículo anterior, la administración del Stud Book Argentino continuará a cargo de la Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos Sangre Pura de Carrera Ltda.

ARTICULO 3°.- Derógase el decreto N° 1.831/63.-

ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros en los Departamentos de Economía, de Defensa Nacional y del Interior, y firmado por los señores Secretarios de Estado de Agricultura y Ganadería, de Hacienda y de Guerra.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz - José M. Astigueta - Osiris G. Villegas - Carlos A. López Saubidet - Eduardo B.M. Tiscornia - Héctor A. Repetto.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 6.764/63.-

MATERIAS: CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que recientemente se ha dispuesto que desde el 1º - de enero de 1964 la Dirección General Impositiva no acordará prórrogas para el pago de impuestos y sus accesorios, pues ésta es una función financiera ajena totalmente a su misión recaudadora específica;

Que, en consecuencia, deben arbitrarse medios para lograr el cobro de la deuda atrasada que registran los contribuyentes ante esa repartición, para que ésta pueda dedicar su máximo esfuerzo a la fiscalización y cobro de los impuestos del año;

Que para ello es conveniente transferir el cobro de esa deuda atrasada a un ente público que cuente con los medios humanos y materiales necesarios para cumplir acabadamente esa función;

Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- La Caja Nacional de Ahorro Postal se hará cargo del cobro de la deuda atrasada que registran los contribuyentes ante la Dirección General Impositiva, en

//-

la forma y condiciones que determine la reglamentación. La Caja Nacional de Ahorro Postal ejercerá los poderes y atribuciones que la Ley Nº 11.683 (t.o. en 1960) y sus modificaciones confiere a este efecto a la Dirección General Impositiva.

ARTICULO 2º.- Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de la Nación.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, de Interior y de Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz - Osiris G. Villegas - José M. Astigueta - Eduardo B.M. Tiscornia.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 6.769/63.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - ECONOMIAS - CESANTIAS - LIMITACION DE SERVICIOS - INDEMNIZACIONES

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963.-

Visto el artículo 26 del decreto-ley Nº 10.582/62 (1), y

CONSIDERANDO:

Que, encontrándose cercana la fecha de entrega del gobierno de la Nación a las nuevas autoridades surgidas del acto eleccionario del día 7 de julio de 1963, no existen razones que avalen la necesidad o conveniencia de efectuar reestructuraciones administrativas y funcionales en los servicios de la administración nacional, que deben ser encaradas, en su momento por aquéllas;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Derógase el artículo 26 del decreto-ley Nº 10.582, de fecha 10 de octubre de 1962.

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1776.-

ARTICULO 2°.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Interior y Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz -
Osiris G.Villegas - José M.Astigueta
Eduardo B.M.Tiscornia.

ACTO: DECRETO - LEY Nº 6.825/63.-

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - ESCALAFON CASINOS - DEDICACION FUNCIONAL - RESPONSABILIDAD JERARQUICA - BONIFICACIONES ESPECIALES

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963.-

Visto las disposiciones del decreto Nº 4.787 de fecha 14 de junio de 1963 (¹), por el cual se establecen determinadas mejoras en las retribuciones de ciertos sectores de la Administración Nacional cuyos agentes vienen siendo retribuídos sin ajustes y mejoras en los últimos años, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto Nº 7.920 dictado con fecha 8 de setiembre de 1961 (²), se aprobó para el personal de la Secretaría de Estado de Hacienda y para el personal mensualizado y jornalizado comprendido en el decreto número 13.375/60 (³), bonificaciones especiales destinadas a reajustar las escalas de sueldos en función de valores actualizados en aquel momento;

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1912.-
(²) Ver Digesto Administrativo Nº 1442.-
(³) Ver Digesto Administrativo Nº 1443.-

Que en la presente emergencia, el personal comprendido en las disposiciones del decreto Nº 13.375/60 le alcanzan las mismas razones que motivaron el dictado del decreto Nº 4.787/63, circunstancia que impone la necesidad de ajustar sus remuneraciones a efectos de equipararlas con las que percibe el personal regido por el régimen escalafonario aprobado por el decreto Nº 9.530/58;

Por todo lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Hácense extensivos al personal comprendido en el Escalafón aprobado por el decreto Nº 13.375/60, los beneficios establecidos por el decreto Nº 4.787 de fecha 14 de junio de 1963, a partir de la misma fecha y conforme con los importes mensuales que se determinan en la planilla anexa que forma parte integrante del presente decreto.

ARTICULO 2º.- Los importes a que se refiere el artículo anterior incrementará las actuales retribuciones en los conceptos que en cada caso se indica.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, Defensa Nacional y Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - Osiris G. Villegas - José A. Martínez de Hoz (h). - José M.Astigueta - Eduardo B.M. Tiscornia.

Planilla anexa al art. 1º.-

HORARIO DE 45 HORAS SEMANALES (9 HORAS DIARIAS)

PERSONAL MENSUALIZADO

a) ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO

A - DEDICACION FUNCIONAL

CATEGORIA	GRUPO	IMPORTE
I	1	m$n. 5.400.-
II	1	m$n. 5.000.-

HORARIO DE 35 HORAS SEMANALES (7 HORAS DIARIAS)

B - RESPONSABILIDAD JERARQUICA

I	1	m$n. 4.200.-
II	1	m$n. 3.900.-
III	1 a 3	m$n. 3.700.-
IV	1 a 7	m$n. 3.350.-
V	1 a 12	m$n. 3.000.-
VI	1	m$n. 3.050.-
VI a)	1	m$n. 2.000.-
VI b)	1	m$n. 1.950.-
VII	1 a 20	m$n. 2.750.-
VIII	1 a 18	m$n. 2.450.-

C - BONIFICACION ESPECIAL

IX	1 a 7	m$n. 2.250.-
X	1 a 3	m$n. 2.250.-
XI	1 a 3	m$n. 2.150.-
XII	1 y 2	m$n. 2.100.-
XIII	1 y 2	m$n. 2.000.-
XIV	1	m$n. 1.850.-
XV	1	m$n. 1.750.-

b) DE MAESTRANZA Y OBRERO

CATEGORIA	GRUPO		IMPORTE
I	1	m$n.	2.650.-
II	1	m$n.	2.300.-
III	1	m$n.	2.150.-
IV	1	m$n.	2.050.-
V	1	m$n.	1.850.-
VI	1	m$n.	1.700.-

c) SERVICIOS AUXILIARES

I	1	m$n.	2.250.-
II	1	m$n.	2.050.-
III	1	m$n.	1.900.-
IV	1 y 2	m$n.	1.850.-
V	1 y 2	m$n.	1.750.-

PERSONAL JORNALIZADO

BONIFICACION ESPECIAL

a) ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO

		IMPORTE DIARIO	
I	1	m$n.	165.-
II	1 y 2	m$n.	150.-
III	1	m$n.	140.-
IV	1 a 3	m$n.	115.-
V	1 a 4	m$n.	110.-
VI	1	m$n.	105.-
VII	1	m$n.	100.-
VIII	1 a 3	m$n.	100.-
IX	1 a 3	m$n.	95.-

b) PERSONAL DE JUEGO

I	1	m$n.	180.-
II	1	m$n.	165.-
III	1 y 2	m$n.	150.-

ACTO: DECRETO-LEY Nº 6.826/63.-

MATERIAS: JUBILACIONES - INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 12 de agosto de 1963.-

Visto que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicita se prorrogue por el término de un año el régimen de compatibilidad establecido por el Decreto-Ley Nº 12.458/57 (') y el Decreto Nº 8.320/58.("), con la modificación de la Ley Nº 15.434,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 30 de setiembre de 1964 el régimen de compatibilidad establecido por el Decreto-Ley Nº 12.458/57 y Decreto Nº 8.320/58, con la modificación de la Ley Nº 15.434.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior, Defensa Nacional y Trabajo y Seguridad Social.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Osiris G. Villegas - José M. Astigueta - Bernardo Bas

(') Ver Digesto Administrativo Nº 343.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 878.-

ACTO: RESOLUCION INTERNA D.G.I. N° 1859/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - ADUANA DE LA NACION - CONSEJO DE COORDINACION PARA LA PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO - PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO

Buenos Aires, 19 de agosto de 1963.-

Visto los procedimientos seguidos en los casos de clausura de locales, prevista por el artículo 4° del Decreto N° 5.426/62 (') sobre prevención y represión del contrabando, modificado por el Decreto N° 7.713/62 (") y lo dispuesto por el punto 11 de la Resolución Interna N° 1.766 (+), y

CONSIDERANDO:

Que la norma citada en último término establece que en ningún caso se clausurará una "unidad habitable", no obstante existir en ella mercaderías proveniente de contrabando, disposición que en la práctica ha traído dificultades que afectan los fines económicos, sociales y fiscales perseguidos por los decretos citados;

Que en consecuencia es necesario definir lo que debe entenderse por "vivienda" a los efectos de la prohi- //-

(') Ver Digesto Administrativo N° 1651.-
(") Ver Digesto Administrativo N° 1699.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 1679.-

bición prescripta en el punto 11 de la resolución mencionada, sin perjuicio de lo que se resolviere en cada caso frente a situaciones muy particulares, difíciles de prever dentro de una definición común;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° y 8° de la Ley 11.683 (t.o. en 1960 y sus modificaciones),

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

R E S U E L V E :

1°.- Modificar el punto 11 de la Resolución Interna número 1.766 en la siguiente forma:

11.- En ningún caso se clausurará un negocio que sea a la vez vivienda o forme parte indivisible con ella. En tales circunstancias los actuantes se limitarán a retirar los efectos en infracción para su remisión a la Aduana, sin perjuicio de proceder a la intervención material del resto de las mercaderías y al sellado de vidrieras, escaparates, etc. Cuando por la cantidad, tamaño, etc. de estas últimas no fuera posible adoptar ese procedimiento, se notificará al causante que las mismas deben considerarse intervenidas y, en ambos casos, se le designará depositario con las prevenciones de ley (artículos 254 y 255 del Código Penal). El responsable no podrá introducir en el local nuevas mercaderías en tanto no sea levantada la intervención dispuesta. De todo ello, incluso de las formalidades adoptadas, se dejará constancia en el acta respectiva.

Considérase "vivienda" a los fines de esta resolución el lugar habitado por una o más personas en forma habitual y permanente, y no accidental o esporádica.

Cuando se clausure un local, se dejará expresa constancia de ello en el acta en que se documente el procedimiento, con mención detallada de las circunstancias que motivaron la medida.

2º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. GREGORIO ANDRES BALLESTEROS

ACTO: DECRETO Nº 6.962/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - AUTARQUIA

Buenos Aires, 23 de agosto de 1963.-

Visto la observación Nº 12/63 formulada por el Tribunal de Cuentas de la Nación al decreto Nº 6.650/63(1), por el cual se prorroga por un año la vigencia del artículo 10 del decreto Nº 6.890/62 (2), y atento que subsisten las razones que dieron origen al dictado del citado acto de gobierno, en uso de las facultades que el artículo 87 de la Ley de Contabilidad confiere al Poder Ejecutivo,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Insístese en el cumplimiento del decreto Nº 6.650/63.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación, a sus efectos.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz
Eduardo B.M. Tiscornia.

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1949.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 1668.-

Subsecretaría Gral. de Contaduría, Tribunal y Administración - Min. de Hacienda

ACTO: DECRETO Nº 7.492/63.-

MATERIAS: PRESUPUESTO - BANCOS - TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION - FONDOS

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1963.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que diversos organismos del Estado, especialmente aquellos que desarrollan actividades comerciales y/o industriales, han manifestado la necesidad de que el Poder Ejecutivo ratifique la excepción que se les acordara para el cumplimiento de las disposiciones del decreto Nº 11.800/61 (1), sobre la obligatoriedad de efectuar los depósitos oficiales únicamente en el Banco de la Nación Argentina;

Que la Comisión Especial creada por el artículo 2º del decreto Nº 11.429/62 (2) para estudiar las solicitudes formuladas en tal sentido, no ha podido expedirse hasta la fecha;

Que en virtud de las disposiciones del artículo 1º del citado decreto Nº 11.429/62 y la prórroga dispuesta por el decreto Nº 499/63 (3) las excepciones al decreto Nº 11.800/61, han sido acordadas con vigencia hasta el 30 de junio de 1963;

Que no habiendo sido posible la resolución en térmi //-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1539.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 1783.-
(3) Ver Digesto Administrativo Nº 1844.-

no de las gestiones en trámite, resulta aconsejable ampliar el plazo de validez de las excepciones ya aprobadas, a fin de evitar inconvenientes en el desenvolvimiento financiero de los organismos estatales interesados;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1963, la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 1° del decreto N° 11.429, del 20 de octubre de 1962.-

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz
Eduardo B.M. Tiscornia.

ACTO: RESOLUCION Nº 169/63.-

MATERIAS: SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION - MISIONES AL EXTERIOR - AUTOMOTORES

Buenos Aires, 20 de agosto de 1963.-

VISTO:

Que por Decreto-Ley Nº 5.537/63 (') se concede un tratamiento especial a la importación de automóviles por parte de los funcionarios públicos que regresan al país luego de cumplir misiones oficiales en el exterior, y

CONSIDERANDO:

Que como lo establece el mismo texto legal, es necesario reglamentar su aplicación;

Por ello,

EL CONSEJO NACIONAL DE ADUANA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- A los fines de las certificaciones que deberán extender los Subsecretarios de los Ministerios o de las Secretarías de Estado (parte in fine del Art.1º, Decreto-Ley Nº 5.537/63), adóptanse los formularios Nº 1 y 2, adjuntos, y que forman parte de la presente resolución.

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1953.-

//-

ARTICULO 2°.- A los efectos indicados en el penúltimo párrafo del Art. 4° de la disposición legal citada precedentemente se establece que el tipo de cambio para la conversión a pesos moneda nacional se determinará en base a las normas establecidas en la Resolución N° 131/62 (Circular 149/62), tomándose como fecha de presentación la de entrada del expediente en esta Resolución.

ARTICULO 3°.- La opción que acuerda el artículo 5° del Decreto-Ley 5.537/63, deberá ejercerla el interesado, por escrito, previamente a la resolución que acuerde la franquicia.

ARTICULO 4°.- Para el despacho de automóviles pertenecientes al personal civil de las fuerzas armadas (Art.5° in fine, Decreto-Ley N° 5.537/63), se exigirá la misma certificación que el Subsecretario del arma extendía al personal militar de acuerdo con el Decreto 4.161/61.

Dicha certificación deberá completarse incluyendo la fecha de embarque en los casos en que los automóviles se hallaban embarcados o en viaje al 8 de agosto ppdo.

ARTICULO 5°.- Los ciudadanos argentinos comprendidos en el Art. 6° del Decreto-Ley N° 5.537/63, juntamente con la solicitud deberán presentar, en formulario N° 2 adjunto, una certificación extendida por el Subsecretario del Ministerio o Secretaría de Estado que tenga relación con la misión cumplida por el recurrente.

ARTICULO 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial; comuníquese por circular. Tomen nota el Departamento Aduanas y la Aduana de la Capital, para su inmediato cumplimiento.

Fdo. HECTOR ALBERTO CARTIER
Presidente

ACTO: DECRETO-LEY Nº 7.603/63.-

MATERIA: AMNISTIA

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1963.-

CONSIDERANDO:

Que las elecciones han permitido al país encauzarse nuevamente en la normalidad institucional, tan ansiada por el pueblo argentino;

Que para consolidar plenamente ese objetivo es necesario, y así lo ha reconocido sin excepciones la opinión pública, borrar todos los factores que puedan significar un resabio de las incomprensiones del pasado;

Que las sanciones impuestas en virtud del plan Conintes, indispensables en el momento en que se dispusieron ante la grave conmoción que sufría entonces el país, han sido superadas por el clima general de confianza y optimismo que se percibe después de la salida electoral, así como por los sentimientos de tolerancia y de convivencia que tradicionalmente alienta nuestro pueblo;

Que para no malograr esta esperanza, es indispensable y conveniente proceder de inmediato a satisfacer estos anhelos de hermandad y buena voluntad a fin de que se depongan las pasiones que han dividido al pueblo argentino;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Concédese amnistía a todos los infractores, encausados o condenados por delitos políticos y co

//-

munes conexos, por aplicación de los decretos nros.2.628/60, 2.639/60 y de la ley 15.293.

ARTICULO 2º.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior y de Defensa Nacional.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Osiris G. Villegas - José M. Astigueta

ACTO: DECRETO-LEY Nº 7.604/63.-

MATERIA: AMNISTIA

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1963.-

Visto la amnistía que ha sido concedida por decreto-ley Nº 7.603 (') del día 12 de setiembre de 1963; y

CONSIDERANDO:

Que por los hechos ocurridos los días 2 de abril y subsiguientes existen ciudadanos sin estado militar con proceso abierto en virtud de su participación en aquéllos;

Que las mismas razones que determinaron al Poder Ejecutivo a conceder la amplia amnistía contenida en el decreto referido, obligan a hacer extensiva la medida a los ciudadanos que se encuentran en aquellas circunstancias;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Concédese amnistía para todos los delitos políticos y comunes conexos cometidos con motivo de los hechos militares ocurridos el día 2 de abril y subsiguientes del año 1963.

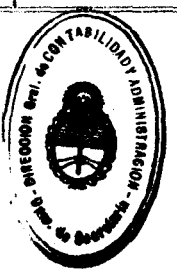
//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1970.-

ARTICULO 2°.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior y de Defensa Nacional.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Osiris G. Villegas -
José M. Astigueta



ACTO: RESOLUCION del T.C.N. Nº 1.749/63.-

MATERIA: LEY DE CONTABILIDAD (Art. 37)

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1963.-

Visto la Ley de Contabilidad, en cuyo artículo 37, determina los estados que formarán la cuenta general - del ejercicio, y

CONSIDERANDO:

Que entre los estados que hacen parte de dicho documento figura el relativo a la cuenta patrimonial que deberá reflejar las existencias al iniciarse el ejercicio, las variaciones producidas durante el mismo como resultado de la ejecución del presupuesto general o por otras causas y la situación al cierre;

Que en la versión original de la Ley de Contabilidad, aprobada por decreto-ley 23.354/56, la información que se señala en el considerando que antecede estaba impuesta por el inciso 9º del citado artículo 37, pero a raíz del agregado introducido con posterioridad por el decreto-ley 3.453/58 (') dicho inciso paso a ser el 10 con cuya nomenclatura figura en el ordenamiento actual;

Que el decreto 13.100/57 ("), reglamentario de la Ley de Contabilidad prescribe, en relación con el art.

(') Ver Digesto Administrativo Nº 488.- //-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 487.-

37 que se analiza, que los estados demostrativos de los resultados de la gestión de las entidades descentralizadas, a agregarse a la cuenta general, deberán comprender los señalados en los incisos 1° a 9° del referido artículo de la ley;

Que en mérito al agregado dispuesto por el decreto-ley 3.453/58, posterior a dicha reglamentación, y al desplazamiento de la numeración de los incisos, tal como se consigna más arriba se hace necesario aclarar y coordinar los alcances de la referida prescripción legal en el sentido de que las entidades descentralizadas deben cumplimentar la información comprendida en los incisos 1° a 10 del artículo 37 de la Ley de Contabilidad,

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Aprobar la siguiente norma de interpretación y cumplimiento de la Ley de Contabilidad para el artículo 37:

"Sin perjuicio de los estados demostrativos a que se "refiere la reglamentación de este artículo, las en- "tidades descentralizadas deberán presentar a la Con- "taduría General para ser agregado a la cuenta general "del ejercicio, el estado a que se refiere el inciso "10".

ARTICULO 2°.- Dése por digesto administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.

JOSE M. FERNANDEZ FARIÑA - Antonio M.Pérez Arango - Wifredo Dedeu - Luis Pedro Picardo Damián Figueroa - César Aguirre Legarreta-Secretario.

ACTO: RESOLUCION Nº 1.574/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - IMPUESTOS A LOS REDITOS

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1963.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que las normas del decreto Nº 6.824/63 se basaron en la adecuación de la política impositiva a la realidad económica, ajustando las tasas a prospectos razonables de capitalización de las distintas escalas de contribuyentes;

Que esa misma realidad aconsejó derogar el régimen establecido por la Resolución General Nº 693 (R) de la Dirección General Impositiva;

Que sin perjuicio de ello se advierte la conveniencia de prever un sistema que, al par que agilice la labor fiscalizadora del organismo recaudador, obvie los inconvenientes en que se encuentran los contribuyentes de la cuarta categoría que, por la índole de sus actividades, no están organizados de manera tal que les sea posible la discriminación exacta y la demostración de tales egresos;

Que el sistema a implantarse debe contemplar en forma prudente la porción mínima de erogaciones presuntas en que incurre el contribuyente para satisfacer determinados gastos que, por ser inherentes a la actividad, función o empleo desempeñado, resultan deducibles del rédi

//-

to del año fiscal; previendo asimismo un margen razonable atribuible a gastos menores, aún en el caso de que la deducción por aquellos gastos se efectúe sobre la base de comprobantes o mediante la aplicación de otros procedimientos autorizados por disposiciones especiales;

Que, finalmente, corresponde excluir de este sistema a los contribuyentes a que se refiere el inciso g) del artículo 60 de la Ley Nº 11.682, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, por cuanto por la índole de sus actividades deben estar organizados para documentar los gastos y vinculados con el giro de sus negocios;

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA,

RESUELVE:

1º) A partir del 1º de enero de 1964, los contribuyentes comprendidos en los incisos a), c), d), e) y f) del artículo 60 de la ley Nº 11.682, texto ordenado en 1960 y sus modificaciones, podrán deducir del rédito del año fiscal, sin comprobantes, en concepto de gastos inherentes al ejercicio de la actividad, función o empleo, la suma que resulte de aplicar el veinte por ciento (20%) sobre los ingresos brutos obtenidos en el desempeño de las actividades a que se refieren los citados incisos.

Igual deducción podrán efectuar los contribuyentes comprendidos en el inciso b) del artículo 60 de la ley mencionada. En este caso la suma a deducir será igual a veinte por ciento (20%) del rédito neto originado en el ejercicio de la respectiva actividad.

En ningún caso la deducción total, sin comprobantes, que corresponda efectuar por el concepto expresado podrá exceder de ciento veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 120.000.-) anuales.

2º) La deducción autorizada por el artículo anterior se reducirá en el setenta y cinco por ciento (75%), en

los siguientes casos:

a) Cuando se trate de funcionarios, empleados o personas contratadas de las administraciones nacional, provinciales y/o municipales, inclusive Empresas del Estado, a quienes por aplicación de leyes, decretos o disposiciones de autoridad competente, se les reconozca el derecho a no computar como réditos los importes que percibán con destino a atender los gastos a que se alude en esta resolución y que opten por mantener esta situación fiscal;

b) Cuando se opte por la deducción de los gastos de viáticos, de movilidad y/o de representación a base de comprobantes o aplicando otros procedimientos especiales autorizados por el organismo fiscalizador.

3º) La Dirección General Impositiva dictará las normas complementarias que fueren menester para la aplicación del régimen que se establece por la presente resolución.

4º) Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General Impositiva, a sus efectos.-

Fdo. EDUARDO B.M. TISCORNIA.

ACTO: DECRETO Nº 2.818/63.-

MATERIAS: PATRIMONIO DEL ESTADO - IMPRENTAS OFICIALES - VENTAS

Buenos Aires, 16 de abril de 1963.-

Visto el Decreto Nº 8.494/61 (') que dispone la venta de las imprentas del Estado que cumplen tareas circunstanciales, y

CONSIDERANDO:

Que la citada medida alcanza a la imprenta de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, que si bien cumple tareas de carácter permanente, no ha sido incluida en la nómina de las imprentas exceptuadas de la aplicación de aquel acto de gobierno;

Que esa situación especial en que se halla la referida imprenta ya fué señalada en oportunidad de dictarse el Decreto Nº 7.711/62, al expresarse que las razones enunciadas en el mismo hacen mérito suficiente para disponer una medida de excepción a la norma general obtenida;

Que en el precitado decreto se dispuso que por intermedio de la Secretaría de Hacienda se nombrará una comisión especial encargada de estudiar el problema desde el punto de vista económico-financiero;

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1457.-

Que esa comisión designada por Resolución Ministerial Nº 7.743 del 27 de agosto de 1962, ha producido el informe correspondiente, donde pone de manifiesto las razones que aconsejan la conveniencia de que los talleres gráficos continúen a cargo de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos;

Que en tal sentido se destaca el carácter permanente de las tareas que ejecuta la imprenta, íntimamente vinculadas al proceso funcional de la Repartición nombrada precedentemente;

Que su sostenimiento demanda erogaciones comparativamente inferiores a los costos de la actividad privada;

Que su permanencia bajo la jurisdicción estatal, asegurará otras ventajas tales como la celeridad en los trabajos de impresión y el control directo de ciertas tareas que, por su índole, exigen la adopción de medidas de seguridad;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Exceptúase del cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 8.494/61 a la imprenta de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Eustaquio A.Méndez Delfino
Ramón C. Lequerica

ACTO: DECRETO N° 7.550/63.-

MATERIAS: PRESUPUESTO - SERVICIOS CALIFICADOS - DEDICACION FUNCIONAL - RESPONSABILIDAD JERARQUICA PREMIO POR ASISTENCIA - BONIFICACIONES ESPECIALES

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1963.-

Visto que por los Decretos-Leyes Nros. 4.787 (') y 4.788, ambos de fecha 14 de junio ppdo., se acordaron mejoras en las retribuciones de ciertos sectores de la Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que en razón de que aún no se han aprobado para algunos organismos del Estado los reajustes presupuestarios correspondientes al presente ejercicio, es necesario arbitrar las medidas que permitan la efectivización de las mejoras de referencia;

Que a tal efecto, es conveniente disponer, con carácter general y, para los organismos del Estado comprendidos en los citados Decretos-Leyes Nros. 4.787 y 4.788/63, la excepción a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto);

//-

(') Ver Digesto Administrativo N° 1912.-

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- A los efectos de posibilitar el cumplimiento de lo dispuesto por los Decretos-Leyes Nros. 4.787 y 4.788/63, autorízase a la Contaduría General de la Nación y a las Direcciones Generales de Administración de los organismos del Estado, a imputar el gasto correspondiente a los créditos de las partidas respectivas, sin sujeción a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto, Edición 1943).

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos.

GUIDO - José A.Martínez de Hoz -
Eduardo B. M. Tiscornia

ACTO: DECRETO Nº 7.631/63.-

MATERIAS: FERIADOS NACIONALES - DIAS NO LABORABLES

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1963.-

Visto el expediente 19.593/1963, por el que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndose eco de la petición formulada ante la misma por la Comisión de Caballeros de San Martín de Tours, solicita se restituya el carácter de feriado al día 11 de noviembre, en el que la Iglesia Católica celebra la festividad del santo epónimo, y

CONSIDERANDO:

Que el Obispo de San Martín de Tours es Santo Patrono de la Ciudad de Buenos Aires, desde el Acuerdo del Cabildo de la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, realizado el 20 de octubre de 1580, o sea desde el mismo año de la fundación de la ciudad, celebrándose la festividad el día 11 de noviembre;

Que ese día la población católica de la Capital Federal lo dedica a celebrar y a honrar a su santo protector;

Que si bien, como lo determina el Decreto-Ley Nº 2.446 (') del 9 de febrero de 1956, debe seguirse un criterio de prudencia en la determinación de los días

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 115.-

feriados y no laborables a fin de no afectar el normal - desenvolvimiento de las actividades públicas y privadas, es interesante recordar que la Nación no puede desvincularse de los sentimientos de la mayoría de sus habitantes - respetando la libertad de cultos;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Declárase feriado para la Ciudad de Buenos Aires el 11 de noviembre, día de su santo patrono San Martín de Tours, con el alcance establecido por el Decreto-Ley N° 2.446/56 para los días no laborables.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - Osiris G. Villegas

ACTO: DECRETO Nº 7.904/63.-

MATERIA: COMISION NACIONAL DE HIPODROMOS

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1963.-

Visto el decreto nº 5.603/63 (¹), reglamentario del Régimen Legal de la Comisión Nacional de Hipódromos, aprobado por el decreto-ley nº 5.602/63 (°), y

CONSIDERANDO:

Que en los artículos 9º y 10º de dichas normas se prevé el régimen a seguir para el reemplazo de algunos cargos de la Comisión Nacional ante la ausencia, renuncia o fallecimiento de sus titulares;

Que conforme lo evidenciado en la práctica, las comentadas disposiciones, a pesar de ser amplias, no son suficientes para resolver las distintas alternativas que ofrecen los variados supuestos de vacancia;

Que, por otra parte es menester asegurar de manera efectiva que, la eventualidad de una ausencia, de carácter transitorio o definitivo, por cualquiera de las causales previsibles, no impida o disminuya la representación de la respectiva entidad u organismo frente a sus iguales, toda vez que la activa participación de todos los sectores nucleados en la Comisión Nacional constituye uno de los objetos perseguidos por el instrumento le-

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1927.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1926.-

gal que dió creación al ente, como medio eficaz para posibilitar el logro de sus fines;

Por ello y de conformidad con la facultad otorgada por el artículo 3º del decreto-ley nº 5.602/63,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Reemplázanse los artículos 9º y 10º del decreto nº 5.603/63, reglamentario del decreto-ley nº5.602/63, por los siguientes:

"Artículo 9º.- El reemplazo de los cargos de la Comisión Nacional de Hipódromos, se ajustará al siguiente procedimiento:

" a) Los miembros suplentes sólo reemplazarán a los titulares con sus mismas atribuciones y deberes, en caso de ausencia transitoria de éstos. Cuando la ausencia tenga carácter definitivo por renuncia o fallecimiento, la entidad u organismo respectivo procederá a proponer la designación de su substituto, que se desempeñará hasta completar el período que corresponda cumplir al miembro que reemplaza.

" b) En caso de ausencia transitoria del Presidente, Secretario o Tesorero, dichos cargos serán ejercidos por el Vicepresidente, Prosecretario o Protesorero, respectivamente. Si la ausencia fuera definitiva, por renuncia o fallecimiento, dichos cargos serán cubiertos por los nuevos representantes titulares, cuya designación hayan propuesto las entidades u organismos a que los mismos pertenecían, quienes actuarán hasta completar el período correspondiente.

" c) En caso de ausencia transitoria del representante titular de la Secretaría de Estado que se halle ejerciendo la Vicepresidencia, el cargo será desempeñado por el representante suplente y en ausencia de ambos por el representante titular -o suplente, según correspon da- de la restante Secretaría de Estado.

" d) En caso de ausencia definitiva, por renuncia o fallecimiento del Prosecretario o del Protesorero, dichos cargos serán cubiertos por los nuevos representantes titulares, cuya designación hayan propuesto las entidades u organismos a que los mismos pertenecían, quienes actuarán hasta completar el período correspondiente.

" e) En caso de ausencia transitoria del Secretario, Prosecretario, Tesorero o Protesorero, los miembros suplentes representantes de las entidades u organismos a que pertenezcan los titulares de dichos cargos, se incorporarán durante el lapso de dicha ausencia como vocales titulares.

" f) En caso de ausencia transitoria del Secretario y Prosecretario o del Tesorero y Protesorero, la Comisión designará de entre sus miembros a un Secretario o un Tesorero "ad-hoc".

" g) Los miembros que ejerzan reemplazos en casos de ausencias transitorias, conforme a los supuestos previstos precedentemente, lo harán también en los casos de ausencias definitivas mientras se tramite la designación del nuevo titular".

"Artículo 10º.- Son atribuciones y deberes de los miem

"bros suplentes asistir a las reuniones, tomar parte "en las deliberaciones pero no en las votaciones, in- "tegrar las subcomisiones permanentes o "ad-hoc" para "las que fueran designados, en las que tendrán voz y "voto, y desempeñar y rendir cuentas de otras tareas "que le fueran encomendadas".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Defensa Nacional y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, de Guerra y de Agricultura y Ganadería.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz (h)
José M. Astigueta - Eduardo Tiscornia - Héctor Repetto - Carlos López Saubidet

ACTO: DECRETO Nº 8.210/63.-

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Casinos) - COMPENSACION POR DESARRAIGO - PERSONAL JORNALIZADO

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1963.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por decreto Nº 5.747/63 (') se autorizó a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos para habilitar una Sala de Entretenimiento en el Parque Nacional de Iguazú, Provincia de Misiones;

Que por decreto nº 868/63 (°) se implantó un régimen de Bonificación por desarraigo para el personal jornalizado de la citada repartición, que sea destinado a prestar servicios en los casinos que administra la misma - fuera de la ciudad de Mar del Plata;

Que en consecuencia y con motivo de la próxima habilitación de la nueva sala, corresponde incluir al personal que habrá de desempeñarse en ella, dentro de los beneficios acordados por el acto de gobierno aludido precedentemente, a cuyo efecto y teniendo en cuenta que se trata de una zona inhóspita, procede incrementar aquéllos en medida similar a la de otro personal de la - Administración Pública que presta servicios en la misma;

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1936.- //-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1851.-

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Inclúyese en el régimen de la Bonificación - por Desarraigo instituída por el decreto Nº 868/63 para el personal jornalizado de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, nombrado con imputación a la cuenta especial "Explotación Salas de Entretenimiento", a los agentes de la citada repartición que sean destinados a prestar servicios en el Casino del Parque Nacional de Iguazú (Provincia de Misiones), conforme al detalle que se consigna en la - planilla anexa.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el - señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda de - la Nación.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz
Eduardo B.M. Tiscornia.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

JORNALES	CASINO IGUAZU	INCREMENTO 30%	TOTAL
Hasta m$n. 225.-	m$n. 400.-	m$n. 120.-	m$n. 520.-
De m$n. 270.- a m$n. 290.-	" 450.-	" 135.-	" 585.-
De m$n. 350.- a m$n. 400.-	" 500.-	" 150.-	" 650.-

ACTO: DECRETO Nº 8.153/63.-

MATERIA: LICENCIAS

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1963.-

Visto el Decreto Nº 8.567/61 (') modificado por el Decreto Nº 10.635/61 (") y la Ley Nº 9.688, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario determinar en forma expresa el criterio a seguir en la aplicación del artículo 12 del decreto aludido frente a las disposiciones de la Ley Nº 9.688;

Que en el Expediente Nº 5.415 (Comisión Nacional de Granos y Elevadores) han dictaminado en forma coincidente el señor Procurador General de la Nación y el señor Procurador del Tesoro, sobre la compatibilidad de las normas legales que rigen la licencia por accidente o enfermedad profesional del personal civil de la Nación, con lo dispuesto por la Ley Nº 9.688, atento el distinto carácter y finalidad de las mismas;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los sueldos percibidos en virtud del artículo 12 del Decreto Nº 8.567/61 y su modificatorio -

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1501.-

Decreto Nº 10.635/61, no son deducibles del monto que eventualmente corresponda abonarse por indemnización de acuerdo a la Ley Nº 9.688.

ARTICULO 2º.- El presente decreto comprende incluso los casos pendientes de liquidación.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Trabajo y Seguridad Social y Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Bernardo Bas - José A. Martínez de Hoz - Eduardo B.M. Tiscornia

DIGESTO ADMINISTRATIVO	PODER EJECUTIVO NACIONAL SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA	Nº. 1980.-

ACTO: DECRETO - LEY Nº 8.208/63.-

MATERIAS: SUELDOS - CONGRESO DE LA NACION

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1963.

Visto lo dispuesto por el artículo 66º de la Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que procede actualizar las remuneraciones de los legisladores nacionales, de acuerdo con la jerarquía y responsabilidad de sus altas funciones;

Que a tal efecto resulta conveniente relacionar tales remuneraciones con un patrón de referencia extraño al Poder Legislativo, en forma que permita su reajuste automático, con lo que se evitará a los miembros de las Honorables Cámaras el problema ético de resolver sobre un asunto que atañe a su interés directo;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- A partir del próximo ejercicio fiscal la asignación mensual que perciban los señores Senadores y Diputados Nacionales será igual a las tres cuartas partes de la que correspondiere a los señores Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La mitad de la cantidad resultante tendrá el carácter de dieta y la otra mitad, el de gastos de representación.

//-

sista esta circunstancia, que el personal que forma parte de ese cuerpo en aquel carácter, cumpliendo tareas similares, se le reconozcan los viáticos correspondientes a ese nivel jerárquico.

Robustece este criterio el hecho de que se trata de personal que presta su concurso sin cargo para el Estado y que, en mérito a ello, abstracción hecha de otros antecedentes ponderables, en la alternativa de asimilarlos a los efectos del otorgamiento de viáticos, a distintos niveles, se considera lógico asignarle el mayor, temperamento que por otra parte, concuerda perfectamente con la letra y el espíritu del precitado inciso.

Es en cambio distinta la situación respecto a los funcionarios superiores de los distintos Organismos del Estado, integrantes también de ese Tribunal, que revistan en niveles inferiores al Grupo II de la Clase "A" o equivalentes, por cuanto la asignación a que tienen derecho en ese concepto está taxativamente indicada en el antes citado Artículo 2°, considerándose que no es motivo valedero para la alteración de esa escala, el solo hecho de actuar como miembros de ese cuerpo, por cuanto ello significaría un privilegio con relación a funcionarios de la misma jerarquía afectados a otros servicios, no compatible con los principios de equidad que sostiene el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.-

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 11-9-1963.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Min. de Hacienda

ACTO: DECRETO Nº 7.975/63.-

MATERIAS: RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - OBRAS PUBLICAS
CONTRATACIONES - OBRAS ARQUITECTONICAS

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1963.-

Visto que subsisten a la fecha las razones que determinaron la prórroga del plazo establecido por el artículo 4° del decreto nº 4.760/62 (+) acordado por decretos nros. 12.327/62 (") y 5.313/63 ('); del cual se ha operado vencimiento;

Por tanto, atento lo solicitado por el señor Secretario de Estado de Obras Públicas y a lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- Prorrogar por el lapso de Ciento ochenta (180) días laborables administrativos, el plazo establecido por el artículo 4° del decreto nº 4.760/62, prorrogado por el artículo 1° de los decretos nros. 12.327/62 y 5.313/63 de fechas 14 de noviembre de 1962 y 28 de junio de 1963 respectivamente.

(+) Ver Digesto Administrativo nº 1.640.-
(") Ver Digesto Administrativo nº 1.808.-
(') Ver Digesto Administrativo nº 1.931.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Obras y Servicios Públicos y de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Obras Públicas y de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de Obras Públicas a sus efectos.-

GUIDO - Horacio J. Zubiri - José A. Martinez de Hoz - Luis De Carli - Eduardo B.M. Tiscornia.-

ACTO: DECRETO Nº 8.251/63.-

MATERIAS: AUTOMOTORES OFICIALES - AUTOMOTORES ADSCRIPTOS COMPENSACIONES - PROHIBICIONES - DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO - SEGURO DE AUTOMOTORES - SEGURO DE VIDA

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1963.-

Visto el Decreto nº 8.534/61 (1), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 6º del citado decreto en el 2º párrafo prevé que el agente que renunciara por supresión del organismo o de los servicios del cargo en que revista, luego de haber pagado 18 (dieciocho) mensualidades podrá retener el automóvil abonando el saldo del crédito prendario en 18 (dieciocho) meses, si este plazo fuera inferior al faltante para la cancelación de la deuda;

Que el tercer párrafo del mismo artículo dispone que el agente que renunciara sin estar comprendido en las prescripciones del apartado anterior perderá todos sus derechos al pago por cuotas mensuales;

Que es indudable que los agentes a quienes se suprimió el uso de automóvil oficial se han visto compelidos a aceptar el procedimiento establecido por el decreto número 8.534 a efectos de proveer a su movilidad para el desempe

(1) Ver Digesto Administrativo nº 1.459.-

ño de su funciones específicas;

Que por lo tanto, no puede desconocerse que la renuncia por supresión del organismo o los servicios del cargo en que revista el agente, hecho ajeno e independiente a su propia determinación, no pueda originar una modificación en las condiciones pactadas para acordarle el préstamo;

Que a igual conclusión debe llegarse cuando el agente renuncia por otros motivos, siempre que acredite un mínimo de servicios en la Administración Pública y en el cargo que justicó -conforme a las previsiones del Decreto nº 8.534/61- el otorgamiento de préstamo;

Que es evidente que la obligatoriedad de cancelar los préstamos es la forma actualmente prevista en el precitado decreto, origina por su elevado monto y perentoriedad, un serio gravamen en los agentes renunciantes;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el segundo párrafo del artículo 6º del Decreto nº 8.534 del 22 de setiembre de 1961, el que quedará redactado como sigue:

"El agente que renunciara al cargo mantendrá sus derechos y obligaciones en lo concerniente a la prenda sobre el automóvil hasta la extinción de la deuda a favor de la Dirección General de Suministros del Estado pagadera en las mensualidades convenidas, con la obligación de atender las primas para que continúen en vigor el seguro general y el de vida como se ha previsto pero le será suprimida al día del cese de servicios la compensación establecida en el artículo 5º. Para gozar de este beneficio el agente deberá acreditar al momento de la renuncia una antigüedad de diez años en la Administración Pública y haber desempeñado como mínimo un año el

o los cargos que autorizaron el otorgamiento del préstamo".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 3º.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección General de Suministros del Estado a sus efectos.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz -
Eduardo B. M. Tiscornia.-

ACTO: DECRETO Nº 8.333/63.-

MATERIAS: OFICINA NACIONAL DEL PRESUPUESTO - DIRECCION GENERAL DE FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION - CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - ADICIONAL POR ESPECIALIZACION DE TAREAS - SECRETARIA DE HACIENDA

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1963.-

Visto el Decreto-Ley nº 6.190 del 25 de junio de 1963 (1), y

CONSIDERANDO:

Que a fin de iniciar cuanto antes las actividades y estudios tendientes a lograr el cumplimiento de lo dispuesto en el mismo, es conveniente adoptar medidas que permitan una efectiva coordinación entre las dependencias y servicios que tienen a su cargo tareas relacionadas con la elaboración del presupuesto y su control;

(1) Ver Digesto Administrativo nº 1984.-

Que en tal sentido, es indudable que dichas actividades y estudios deben vincularse estrechamente con las funciones que, dentro de la Secretaria de Estado de Hacienda, cumplen las Direcciones Generales de Finanzas y de Impuestos y Contribuciones en materia de política financiera y fiscal; la Contaduría General de la Nación como órgano de control interno de la hacienda pública y de la Direccion General del Servicio Civil atento la gravitación de los gastos en personal sobre el total de las erogaciones oficiales;

Que la importancia de la materia -ya señalada en los considerandos del Decreto-Ley nº 6.190/63- y la complejidad de su tratamiento, obligan a proceder por etapas, circunstancia que aconseja no innovar hasta tanto se encuentren más avanzados los referidos estudios y, en cambio, integrar la Oficina Nacional del Presupuesto en base a las dependencias citadas, sin perjuicio de que cada una de ellas mantenga su actual individualidad, estructura, características y funciones;

Que se bien entre el personal de que actualmente se dispone dentro de las dependencias que integran la Oficina, se cuenta con elementos de alta capacidad y experiencia,es evidente la necesidad de su refuerzo, el concurso de técnicos y expertos y la participación de personal de otros Ministerios, Secretarias y entidades del Estado, por lo que es procedente delegar en la Secretaría de Estado de Hacienda la facultad que acuerda al Poder Ejecutivo el artículo 5º del Decreto-Ley nº 6.190/63;

Que por otra parte el personal de que se trata debera seguir cursos o realizar seminarios con el fin de completar su especialización, lo cual se traducirá en una mayor dedicación y en el cumplimiento de horarios y condiciones que exceden las requeridas para la labor normal u ordinaria, aspecto que, debidamente ponderado, justifica un incremento adicional de retribuciones;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- La Oficina Nacional del Presupuesto se integrará con la Dirección General de Finanzas, Dirección General de Impuestos y Contribuciones, Contaduría General de la Nación y Dirección General del Servicio Civil de la Nación, de la Secretaría de Estado de Hacienda y el personal que se adscriba o contrate en las condiciones que se establecen en el presente decreto.

ARTICULO 2º.- Delégase en la Secretaría de Estado de Hacienda las facultades que confiere al Poder Ejecutivo el artículo 5º del Decreto-Ley nº 6.190/63.

La facultad de contratar únicamente podrá ejercerla cuando se trate de personal que por su condición de profesional, técnico o experto, resulte necesario para la realización de los estudios o trabajos a que se refieren los considerandos del presente decreto, siendo asimismo condición la graduación universitaria pertinente o, como mínimo, el título de perito mercantil, bachiller o equivalente de ciclo completo de enseñanza secundaria. Podrá prescindirse de dicha condición en casos especiales de personal idóneo o experto en idiomas extranjeros o traducciones. El monto de la retribución mensual podrá alcanzar hasta un máximo de sesenta mil pesos moneda nacional (m$n. 60.000).

ARTICULO 3º.- Inclúyese en el régimen del Decreto nº 9884/61 (") al personal de la Oficina Nacional del Presupuesto y dependencias que la integran y déjase sin efecto la exclusión que establece el artículo 1º de dicho decreto. Fíjase en la suma de hasta treinta mil pesos moneda nacional (m$n. 30.000), el importe establecido en el mismo.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el se

(") Ver Digesto Administrativo nº 1493.-

ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz -
Eduardo B.M. Tiscornia.-

ACTO: DECRETO - LEY Nº 8.823/63.-

MATERIAS: LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Hipódromos) - PATRIMONIO DEL ESTADO - TRANSFERENCIAS DE DEPENDENCIAS

Buenos Aires, 7 de octubre de 1963.-

Vistas las presentes actuaciones -expediente número 50.730/63- y teniendo en cuenta lo solicitado por la Asociación Civil Jockey Club de la Capital Federal,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Derógase el punto G del artículo 16 del Convenio aprobado por el decreto-ley nº 2.375/63 (1).

ARTICULO 2º.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, del Interior y de Defensa Nacional y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

GUIDO - J.A. Martínez de Hoz - O.G. Villegas - J. M. Astigueta - E.B. M. Tiscornia.-

(1) Ver Digesto Administrativo nº 1874.-

DIRECCION Gral. de Coordinación Administrativa - Sub. de Secretaría

ACTO: DECRETO Nº 8.824/63.-

MATERIAS: VIATICOS - MOVILIDAD - INDEMNIZACIONES - HORAS EXTRAORDINARIAS - REINTEGRO DE GASTOS

Buenos Aires, 7 de octubre de 1963.-

Visto el Decreto Nº 13.834/60 (1) mediante el cual se estableció el régimen a seguir en materia de concesión de compensaciones en concepto de viático, servicios extraordinarios e indemnizaciones, como así también en lo que respecta a reintegro de gastos y otorgamiento de órdenes de pasajes a los agentes del Estado, y

CONSIDERANDO:

Que la experiencia recogida en la aplicación de las disposiciones que integran dicho régimen, señala la necesidad de complementarlo, y sugiere asimismo la conveniencia de introducir en su texto diversas modificaciones, particularmente en cuanto se refiere a las escalas compensatorias;

Que en función de ese propósito, procede rever entre otros, el artículo 7º del precitado Decreto, correspondiente al rubro "retribución por servicios extraordinarios", que limita la percepción de ese beneficio, en lo que respecta al personal de la Clase "B", al comprendido en los Grupos V al VIII;

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1274.-

Que si bien esa limitación se justifica plenamente en cuanto concierne a los agentes que revistan en los Grupos I y II de dicha Clase, en razón de que a éste le es aplicable el suplemento por "dedicación funcional", que le obliga al cumplimiento de horas extraordinarias al margen del horario normal, no ocurre lo mismo con los incluídos en los Grupos III y IV, que al ser privados de aquel beneficio compensatorio quedan colocados en un plano de desigualdad en relación con los comprendidos en los restantes Grupos de la mencionada Clase "B";

Que se considera procedente, además ampliar el alcance de las disposiciones contenidas en el artículo 9º referido a "Ordenes de pasaje y carga", a efectos de que, cuando la periodicidad de los viajes por Ferrocarril en las zonas suburbanas lo aconseje, por resultar más económico, quede autorizada la obtención de abonos mensuales;

Por ello y de acuerdo con lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, en uso de las atribuciones que le acuerda el Decreto-Ley Nº 797/58 (*), convalidado por la Ley Nº 14.467 (+),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el texto de los artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 16º del Decreto Nº 13.834/60, en la forma de que da cuenta el siguiente detalle:

Artículo 2º.- VIATICOS - Apartado I - El viático será liquidado a los agentes comprendidos en el Escalafón General, en función de la Clase y Grupo correspondiente, y para el personal excluído de dicho cuerpo de disposiciones, con arreglo al sueldo o jornal básico, de acuerdo con la escala que se consigna en el cuadro siguiente, cuyos índi

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-
(+) Ver Digesto Administrativo Nº 609.-

ces sólo podrán ser excedidos cuando medien razones de excepción fehacientemente acreditadas, mediante un Decreto del Poder Ejecutivo que deberá dictarse con intervención de la Secretaría de Hacienda.

PERSONAL COMPRENDIDO EN EL ESCALAFON GENERAL:	Viático diario	
Clase "B" - Grupos V al VIII inclusive; "C" - Grupo III, o sus equivalentes en horario reducido y "D", "E" y "F" en todos los Grupos	m$n.	700.-
Clases "B" - Grupos I al IV y "C" - Grupos I y II, o sus equivalentes en horario reducido	"	800.-
Clase "A" - Grupos III, IV y V	"	900.-
Clase "A" - Grupos I y II	"	1.000.-
PERSONAL EXCLUIDO DEL ESCALAFON GENERAL: Sueldo o Jornal básico		
Hasta m$n. 10.000.-	"	700.-
De más de m$n. 10.000.- hasta 16.000	"	800.-
De más de m$n. 16.000.- hasta 21.000	"	900.-
De más de m$n. 21.000.-	"	1.000.-

Apartado II - Inciso j). agréguese al inciso j) el siguiente párrafo: En caso de participar de comisiones integradas por agentes escalafonados que, aún cuando circunstancialmente cumplan funciones análogas revisten en distintos niveles se le asignará el viático correspondiente al de mayor jerarquía.

Artículo 4º.- Modifícanse los índices establecidos en los incisos a), b) y c) en concepto de retribución por movilidad fija en la siguiente forma:

a) Seiscientos pesos moneda nacional (m$n.600.-) mensuales;

b) Setecientos pesos moneda nacional (m$n.700.-) mensuales;

c) Un mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000.-) mensuales.

Artículo 5º.- INDEMNIZACION POR TRASLADOS: Fíjase en la suma de cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000.-), el mínimo establecido en el inciso a) como indemnización al - personal trasladado.

Fíjase en la suma de trescientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 350.-), la indemnización establecida en el inciso b) por cada miembro de familia a cargo del agente.

Artículo 6º.- INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DEL PERSONAL COMISIONADO: Fíjase en la cantidad de hasta quince mil pesos moneda nacional (m$n. 15.000.-) la suma máxima establecida en el inciso a) para liquidar a favor de los derecho-habientes de los agentes fallecidos en concepto de gastos de ataúd.

Artículo 7º.- RETRIBUCION POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Modifícase el detalle de Clases y Grupos del Escalafón General comprendidos en las compensaciones prescriptas en este artículo: donde dice Clase "E", hasta Grupo III inclusive. Debe decir, Clase "E", todos los Grupos, y donde dice Clase "B" hasta Grupo V inclusive, debe decir, Clase "B", hasta - Grupo III, inclusive.

Modifícase el límite fijado para el personal excluído del - Escalafón General, el cual tendrá derecho a la percepción - de las horas extraordinarias mientras su retribución regular, total y permanente, no supere el importe de doce mil - pesos moneda nacional (m$n. 12.000.-) mensuales.

Artículo 8º.- GASTOS DE COMIDA: Inciso a). Fíjase en - ciento treinta pesos moneda nacional (m$n. 130.-) el importe máximo a liquidar por gastos de comida.

Artículo 9º.- ORDENES DE PASAJE Y CARGAS. Agréguese a este artículo, como inciso g), la siguiente cláusula: inciso g) podrá autorizarse la obtención de abonos mensuales a la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino, cuando la periodicidad de los viajes, por razones de economía, hagan aconsejable la adopción de ese temperamento.

Artículo 16.- Modifícase el último párrafo de este artículo el que quedará redactado en la siguiente forma: En el caso del personal incluído en el Escalafón General dicho concepto comprende a la remuneración inicial de la Clase y Grupo respectivo, al complemento asignado por escalafonamiento, premio por asistencia, bonificación especial y cualquier otra bonificación o asignación acordada como adicional de sueldo y que sufra descuento jubilatorio.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación, a sus efectos.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz
Eduardo B.M. Tiscornia

ACTO: DECRETO Nº 8.015/63.-

MATERIAS: SERVICIOS CALIFICADOS - DEDICACION FUNCIONAL - RESPONSABILIDAD JERARQUICA - PREMIO POR ASISTENCIA - BONIFICACIONES ESPECIALES - DEDICACION PROFESIONAL O TECNICA EXCLUSIVA - PRIMA DE PRODUCCION - CASA DE MONEDA - PRESUPUESTO

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1963.-

Atento las mejoras dispuestas por el Decreto-Ley Nº 4.787/63 (') que acuerda al personal de la Secretaría de Estado de Hacienda, comprendido en los alcances del decreto Nº 11.720/62 ("), y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3º del decreto Nº 11.720/62 fijaba una escala de "bonificaciones especiales" para el personal de la Casa de Moneda de la Nación, amparado por los beneficios del decreto Nº 6.482/61 (°);

Que el decreto-ley Nº 4.787/63 al disponer que el personal de los organismos comprendidos en los alcances, entre otros, del decreto Nº 11.720/62 debe percibir, a partir del 15 de junio de 1963 los importes que para el

//-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1912.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1788.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 1428.-

caso se determina, incluye también a los agentes aludidos en el considerando precedente;

Que, hasta tanto se disponga la incorporación de los créditos específicos para el gasto de que se trata, corresponde determinar que el mismo se atenderá con cargo a los créditos disponibles del presupuesto de "gastos en personal" de la citada dependencia;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Las mejoras dispuestas por el decreto-ley Nº 4.787/63 en lo que respecta al personal que revista en la Casa de Moneda de la Nación, se atenderán transitoriamente con cargo a los créditos disponibles del Inciso 7, Gastos en Personal, Items 104 y 331 del Presupuesto para el Ejercicio de 1963, de acuerdo a las escalas fijadas por ese acto de Gobierno.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz -
Eduardo B. M. Tiscornia.

ACTO: DECRETO Nº 8.869/63.-

MATERIAS: LICENCIA - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - FONDO DE COMPENSACION

Buenos Aires, 7 de octubre de 1963.

Visto el expediente Nº 40.275/963, del registro de la Secretaría de Estado de Hacienda, mediante el cual la Dirección General Impositiva plantea la situación que se le crea a aquellos funcionarios que en su jurisdicción utilizan licencias en los términos del artículo 29º del decreto Nº 8.567/61 (1), y

CONSIDERANDO:

Que el referido artículo establece que los agentes de la Administración Pública Nacional podrán obtener licencia con goce de sueldo cuando los intereses de la Nación en materia técnica, científica o profesional afín aconsejen la concurrencia o incorporación de empleados a instituciones en el extranjero o en el país;

Que el decreto Nº 1.254/60 (2), determina las normas que se deben observar para la distribución del complemento del "Fondo de Compensación" establecido por decreto Nº 7.738/58 (3) y el artículo 23º de la Ley 14.789;

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 1132.-
(3) Ver Digesto Administrativo Nº 639.-

Que el artículo 7° del citado decreto N° 1.254/60, prescribe como principio general que el aludido complemento se distribuirá exclusivamente en función de servicios efectivos prestados en dependencias de la Dirección General Impositiva, asimilando a ese carácter el del personal que se desempeña en calidad de adscripto a otras jurisdicciones, cuando la misma fuera dispuesta por acto del Poder Ejecutivo, fundado en la especialidad del agente y en la vinculación existente en las tareas a desempeñar con las que definen la actividad específica de la mencionada repartición;

Que diversos agentes de dicha Dirección General han utilizado licencia en los términos del mencionado artículo 29°, para llevar a cabo estudios que se hallan estrechamente vinculados con la labor que desarrolla la misma, habiendo sufrido importantes deducciones en la liquidación de los beneficios del citado "Fondo de Compensación" por los lapsos en que usufructuaron dicha licencia, por tratarse de una situación que no se halla contemplada en las normas vigentes sobre el particular;

Que teniendo en cuenta las circunstancias señaladas precedentemente, la Dirección General Impositiva propicia el dictado de una medida que autorice a los empleados que se encuentran en la situación comentada, a percibir el referido complemento en su totalidad, es decir, sin formular cargo alguno por los períodos en que hayan utilizado licencias de la naturaleza indicada;

Que, conforme lo expuesto, se estima procedente determinar, con carácter general, que el personal de la nombrada repartición continuará percibiendo los beneficios del "Fondo de Compensación" a que se ha hecho referencia, durante el período de licencia que se le otorgue en los términos del artículo 29° del decreto N° 8.567/61 siempre que los estudios que se lleven a cabo sean de interés para la Nación, como así también guarden estrecha vinculación y resulten de aplicación para la labor específica de la Dirección General Impositiva;

Que, asimismo, corresponde considerar en igual forma la situación de los agentes que con anterioridad al dictado del presente acto de gobierno se encontraren en la situación comentada;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Determínase que a los agentes de la Dirección General Impositiva de la Secretaría de Estado de Hacienda, durante el período que utilicen licencia en los términos del artículo 29º del decreto Nº 8.567/61, no se les efectuarán deducciones en la liquidación de los beneficios del complemento del "Fondo de Compensación" instituído por decreto Nº 7.738/58 y artículo 23º de la Ley 14.789, siempre que los estudios que se lleven a cabo sean de interés para la Nación, como así también, guarden estrecha vinculación y resulten de aplicación para la labor específica de la mencionada repartición.

ARTICULO 2º.- Establécese que la situación del personal de la citada repartición que con anterioridad a la fecha del presente decreto se encuentre en las condiciones indicadas en el mismo, deberán resolverse con arreglo a lo previsto en el artículo anterior.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz -
Eduardo B.M. Tiscornia.

ACTO: DECRETO Nº 8.438/63.-

MATERIA: OFICINA NACIONAL DEL PRESUPUESTO

Buenos Aires, 2 de octubre de 1963.-

Visto el decreto Nº 8.333/63 (') por el que se integra la Oficina Nacional del Presupuesto, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del decreto-ley Nº 6.190/63 ("), la citada Oficina debe ser dirigida por un funcionario permanente de la Secretaría de Estado de Hacienda;

Que a juicio de dicha Secretaría, es conveniente encomendar esa tarea al actual Subsecretario de la misma, contador Cayetano A. Licciardo, por cuanto reúne condiciones dadas por su experiencia durante su actuación en el cargo, en la Contaduría General de la Nación y otras dependencias de la Secretaría, como así también la especialización adquirida en el ejercicio de la docencia universitaria y su activa participación en trabajos y estudios relativos al tema;

Que razones de servicio han impedido que en su oportunidad se adopte determinación concreta, no obstante lo cual, ponderando la ventaja de mantener la orientación que surge de los considerandos del decreto-ley Nº //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1984.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1940.-

6.190/63, es conveniente hacerlo ahora, a fin de no interrumpir los trabajos de organización de la Oficina y la continuación de estudios ya iniciados;

Por ello, atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Encomiéndase la dirección de la Oficina Nacional del Presupuesto, a efectos de su organización y coordinación de los estudios respectivos, al contador Cayetano A. Licciardo (Clase 1923, L.E. 2.311.878, D.M. 19, 2a. Reg.), sin perjuicio de sus actuales funciones.

ARTICULO 2°.- Oportunamente se incluirá en el presupuesto del Anexo 52 -Secretaría de Hacienda, el cargo respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° del decreto-ley N° 6.190/63.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será firmado por el señor Ministro en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz -
Eduardo B.M.Tiscornia.

ACTO: DECRETO Nº 8.868/63.-

MATERIA: LICENCIAS

Buenos Aires, 7 de octubre de 1963.-

Visto el artículo 29 del decreto Nº 8.567/61 (') - que prevé la concesión de licencias con goce de haberes por lapsos a determinar en cada caso, cuando los intereses de la Nación en materia técnica, científica, o profesional aconsejen la concurrencia o incorporación de agentes a instituciones en el extranjero o en el país y,

CONSIDERANDO:

Que en muchos casos esta concurrencia o incorporación es por un período breve, no obstante lo cual debe ser resuelto mediante el dictado del decreto respectivo;

Que el Poder Ejecutivo ha dispuesto autorizar a los señores Ministros y Secretarios de Estado la firma de actos administrativos que por su naturaleza no tengan la relevancia que haga imprescindible su directa intervención;

Que en estas condiciones se encontrarían algunas de las licencias que se otorgan por el artículo 29 del decreto Nº 8.567/61, tales como las que se cumplen en el país y tienen una duración no superior a sesenta (60) días;

Que en estos casos, cuando la tramitación del pedido de licencia cuenta con la previa conformidad de la //-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-

Comisión Nacional de la Unesco o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, según corresponda, podría ser resuelta mediante Resolución Ministerial;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Autorízase a los Ministerios y Secretarías de Estado, para conceder las licencias que prevé el artículo 29 del decreto Nº 8.567/61, cuando el período a utilizar no sea superior a sesenta (60) días, la licencia se cumpla exclusivamente en el país y el pedido cuente con la previa conformidad de la Comisión Nacional de la Unesco o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, según corresponda.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A.Martínez de Hoz
Eduardo B.M.Tiscornia.

ACTO: RESOLUCION INTERNA N° 65/63.-

MATERIAS: ADUANA DE LA NACION - CONSEJO NACIONAL DE ADUANA - PERSONAL - DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES

Buenos Aires, 16 de octubre de 1963.-

Visto lo tratado en reunión de consejo N° 19, de fecha 16 de octubre de 1963 (Acta N° 19), y

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto N° 7.843/53 (1), el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la obligatoriedad, por parte de los agentes de la Administración Nacional que revisten en categorías superiores, de confeccionar la Declaración Jurada Patrimonial respectiva;

Que, la actividad que en el marco económico-financiero del Estado desarrolla la Aduana de la Nación, justifica de hecho que dicha exigencia se haga extensiva a todos los agentes de la Repartición, sin distinción de categorías;

Que, corresponde tratar y resolver a este Consejo conforme con la Resolución Interna N° 12 C.N.A. y en los términos de la Resolución Interna N° 35 C.N.A. y artículo 12 inc. g) del Reglamento Interno del Consejo;

Por ello,

//-

(1) Ver Digesto Administrativo N° 126.-

EL CONSEJO NACIONAL DE ADUANA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- El personal que reviste en la Aduana de la Nación, sin distinción de categorías, deberá confeccionar la Declaración Jurada Patrimonial establecida por Decreto N° 7.843/53.

Artículo 2°.- Dicha declaración deberá ser remitida a la Dirección de Administración (Departamento de Personal) - dentro del término de treinta días hábiles, en sobres blancos, con lacre cuya consistencia impida su deterioro, debiendo estar sus dimensiones comprendidas dentro de las siguientes medidas: largo 230 a 250 milímetros y ancho 120 a 160 milímetros. Asimismo, la cara externa anterior a su sobre respectivo, el declarante consignará con escritura a máquina, los siguientes datos:

a) Una leyenda que indique "Declaración Jurada Patrimonial - Resolución Interna N° 65/63 C.N.A.".

b) Apellido y nombres completos del declarante.

c) Número de Libreta de Enrolamiento o Cívica o Cédula de Identidad y Policía que la expidió.

d) Ministerio (Secretaría de Hacienda).

e) Repartición (Aduana de la Nación).

f) Cargo (Dirección o lugar en que presta servicios - Cargo).

g) Función.

h) Fecha de declaración.

i) Domicilio del declarante.

j) Firma.

Artículo 3º.- La Declaración Jurada de bienes a que se refiere la presente Resolución debe abarcar la totalidad de bienes, rentas y deudas que por sus costos, valor actual o monto, represente una cifra de importancia dentro del haber patrimonial del declarante, debiendo la misma ser lo suficientemente analítica y detallada delimitando sus rubros: 1) Casas; 2) Terrenos; 3) Inmuebles y establecimientos rurales; 4) Capitales invertidos en explotaciones comerciales, industriales, financieras, agrícolo-ganaderas, etc.; 5) Títulos, acciones, debentures, etc.; 6)Créditos hipotecarios y/o comunes, depósitos bancarios, dinero en efectivo; 7) Otros bienes, cualquiera sea su naturaleza (automóviles, joyas, semovientes, objeto de arte, etc.).

Artículo 4º.- Dentro de los rubros determinados en el artículo anterior el declarante deberá determinar en forma precisa los datos que permitan su individualización en forma fehaciente. Así, al declarar una casa, además de los datos requeridos por la presente Resolución, indicará su ubicación, citando calle, número, localidad, etc.

Al declarar un crédito hipotecario indicar nombre y apellido del deudor y la ubicación del inmueble gravado; cuando se declare inversión de capitales en industrias, comercio, etc., consignar el nombre o razón social, domicilio y ramo de la misma; lo mismo cuando se trate de deudas en que deberán indicarse nombres, apellido y domicilio del acreedor y todo dato que contribuya a ilustrar sobre lo declarado, como ser tasa de interés, carácter de la garantía si la hubiere, vencimiento, etc.

Cuando se declaren bienes tales como automóviles, motocicletas, aviones, lanchas, yates, aparatos de instrumental, joyas, etc. se especificará claramente (además de su costo de origen, etc.), marca, modelo, tipo, año de construcción, características, etc., según corresponda.

Artículo 5º.- Las declaraciones se confeccionarán en hoja de papel común y si consta de más de una foja, deberán fo-

liarse y firmarse cada una de ellas.

Artículo 6º.- Los funcionarios que ya hayan efectuado declaración jurada patrimonial, volverán a hacerla en armonía con la presente Resolución, y a los efectos de la reactualización de las mismas.

Artículo 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

Fdo. HÉCTOR ALBERTO CARTIER
Presidente

ACTO: DECRETO N° 8.870/63.-

MATERIAS: JUBILACIONES - LIMITACION DE SERVICIOS - INCOMPATIBILIDADES - RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA - PROHIBICIONES - INDEMNIZACIONES

Buenos Aires, 7 de octubre de 1963.-

Visto el Decreto nº 8.533/61 (¹) mediante el cual se fijó un período de treinta (30) días para que las distintas reparticiones del Estado propusieran o resolvieran en su caso la baja de aquellos agentes que fueran titulares de una jubilación ordinaria o prestación similar, o reunieran los extremos de edad y antigüedad para obtener tales beneficios, y

CONSIDERANDO:

Que posteriormente, por Decreto nº 9.677/61 (²), se estableció la posibilidad de mantener en sus cargos a aquellos funcionarios afectados por la precitada disposición cuyo concurso, en mérito a sus condiciones, resultara imprescindible para el normal desenvolvimiento de los servicios;

Que al amparo de esta disposición se dejaron sin efecto determinadas bajas formalizadas en los términos del citado nº 8.533/61, medida que se concretó cuando los agentes desplazados habían percibido ya la indemni

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo nº 1458.-
(²) Ver Digesto Administrativo nº 1491.-

zación y parte del anticipo jubilatorio prescriptos en los artículos 2° y 5° de este ordenamiento;

Que dicho acto, al restituir a ese personal todos los derechos inherentes a la anterior situación de revista y suspender consecuentemente la liquidación del anticipo jubilatorio plantea un caso no previsto con respecto a las sumas percibidas en ese concepto y en carácter de indemnización, cuya legitimidad podría cuestionarse en virtud de haber desaparecido la causa determinante de su otorgamiento, circunstancia que impone la necesidad de precisar el temperamento a aplicar en esos supuestos;

Que la separación del servicio de los agentes de referencia, como así también el reingreso formalizado obedecieron a actos administrativos encuadrados en normas legales vigentes, fundados en motivaciones completamente ajenas a su voluntad, por lo que no resultaría justo disponer la restitución de esas sumas, ya que ello significaría hacerlos responsables de un estado de cosas generado exclusivamente en la observancia de dichas normas;

Por ello y de acuerdo con lo propuesto por la Secretaria de Hacienda en función de las atribuciones que le confiere el Decreto-ley n° 797/58 (°) convalidado por la Ley n° 14.467 (+),

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- Considéranse de legítimo abono las sumas percibidas en concepto de indemnización y anticipo jubilatorio, de conformidad con lo estipulado en los artículos 2ª y 5° del Decreto número 8533/61, durante el término de su separación, por el personal dado de baja en función de lo

(°) Ver Digesto Administrativo n° 419.-
(+) Ver Digesto Administrativo n° 609.-

establecido en este ordenamiento y reintegrado al servicio en orden a las excepciones determinadas por el artículo 3º del Decreto nº 9.677/61.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO - José A. Martínez de Hoz -
Eduardo B. M. Tiscornia

ACTO: DECRETO - LEY Nº 8.871/63.-

MATERIAS: PRESUPUESTO - LEY DE CONTABILIDAD (Art.13)

Buenos Aires, 7 de octubre de 1963.-

Atento que el 1º de noviembre próximo se inicia el ejercicio financiero de la Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 13 de la ley de Contabilidad establece que "si al iniciarse el ejercicio no se hubiera aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia en el anterior, a los fines de la continuidad de los servicios";

Que de acuerdo con el criterio sustentado por el Tribunal de Cuentas de la Nación la disposición de referencia comprende los créditos autorizados al finalizar el ejercicio y las disposiciones legales complementarias para la ejecución de la gestión financiera anual del Estado;

Que asimismo corresponde adecuar algunas disposiciones legales incluidas en la ley de presupuesto del actual ejercicio aprobadas por Decreto-Ley Nº 10.582 (1) y su complementario Nº 10.583/62 a efectos de que la gestión de referencia pueda realizarse sin inconveniente;

//-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 1776.-

Que no es necesario incluir entre las disposiciones del presente Decreto-Ley las modificaciones de fecha que contienen algunas de las disposiciones legales antes referida pues va de suyo que la prórroga a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Contabilidad actualiza un año más las en ellas incluidas;

Que por otra parte es conveniente mantener, para el próximo ejercicio fiscal, la norma dictada por el Decreto-Ley N° 573/63 (");

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1°.- En función de lo establecido por el artículo 13 de la Ley de Contabilidad mantiénese para el ejercicio 1964 las disposiciones del Decreto-Ley N° 10.582/62 y su complementario N° 10.583/62, con sus concordantes y modificatorias.

ARTICULO 2°.- Refuérzase, a partir del 1° de noviembre de 1963, el Anexo 32 "Crédito de Emergencia" del presupuesto de la Administración Nacional en la suma de veinte mil millones de pesos moneda nacional (m$n. 20.000.000.000) cuya distribución será aprobada por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Prórrógase hasta el cierre del ejercicio 1964, la vigencia del Decreto-Ley N° 573 de fecha 23 de enero de 1963.

ARTICULO 4°.- Derógase el Decreto-Ley N° 6.769 de fecha 12 de agosto de 1963.

ARTICULO 5°.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, Defensa Nacional e Interior y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección

(") Ver Digesto Administrativo N° 1843.-

General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.

GUIDO - José A. Martínez de Hoz - José A. Astigueta - Osiris G. Villegas - Eduardo B.M. Tiscornia

ACTO: DECRETO Nº 8.991/63.-

MATERIAS: EMPRESAS DEL ESTADO - CANCELACION - DEUDAS - PAGOS

Buenos Aires, 8 de octubre de 1963.-

Visto lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley nº 11.672 complementaria permanente de Presupuesto (T.A.) y las autorizaciones contenidas en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 1963, y

CONSIDERANDO:

Que es indispensable que el Gobierno Nacional cuente con fondos suficientes para atender los compromisos que el Estado ha previsto financiar con el uso del crédito, de acuerdo con las autorizaciones legales en vigor;

Por ello, y atento lo informado por el Banco Central de la República Argentina en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional y oída la Comisión de Valores,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Previa inscripción por la Contaduría General de la Nación, el Banco Central de la República Ar-

//-

ARTICULO 5ª.- Los títulos de la presente emisión, así como su renta, gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.

ARTICULO 6ª.- La Casa de Moneda de la Nación procederá a imprimir los títulos cuya emisión se dispone por el presente decreto, según la distribución y numeración que le indique el Banco Central de la República Argentina.

Asimismo, imprimirá láminas sin numerar en las cantidades y oportunidades que le indique el Banco Central de la República Argentina, destinadas a reemplazar los títulos perdidos, robados o inutilizados en los casos previstos por el Código de Comercio y previa numeración, para sustituir a otros de la misma emisión y de distinto valor nominal, por importe equivalente.

Mientras dure la impresión de los valores, el Banco Central de la República Argentina podrá extender títulos provisionales que serán canjeados oportunamente por los definitivos.

En caso de que razones de fuerza mayor impidan a la Casa de Moneda poder cumplir con la impresión de los títulos en los plazos previstos, la Secretaría de Hacienda, queda facultada para autorizar al Banco Central de la República Argentina a fin de que disponga la realización de dicho trabajo en empresas gráficas privadas.

ARTICULO 7ª.- La Casa de Moneda de la Nación procederá a imprimir los registros numéricos respectivos y estará encargada de conservar, con intervención del Banco Central de la República Argentina, las planchas utilizadas en la impresión de los títulos.

ARTICULO 8ª.- El Banco Central de la República Argentina comunicará a la Secretaría de Estado de Hacienda, a la Contaduría General de la Nación y las Bolsas de Comercio del país, la distribución y la numeración de los títulos que entregue a la circulación.

ARTICULO 9º.- Los casos de pérdida, robo o inutilización de títulos o cupones serán regidos por las disposiciones del Código de Comercio.
ARTICULO 10.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 11.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz -
Eduardo B.M. Tiscornia.-

ACTO: DECRETO Nº 9.040/63.-

MATERIAS: LICENCIAS - PREMIO POR ASISTENCIA

Buenos Aires, 10 de octubre de 1963.

Visto el decreto Nº 9.252/60 (¹), que aprueba el Régimen de Compensaciones para el Personal de la Administración Nacional, en el que se encuentra una compensación en concepto de "premio por asistencia" y,

CONSIDERANDO:

Que para hacerse acreedor a su percepción es necesario dar cumplimiento a determinadas condiciones enumeradas en el artículo 4º, apartado III, del mismo;

Que a su vez en el inciso b) se consignan las licencias no deducibles, posteriormente ampliadas por decreto Nº 9627/61 (") y decreto Nº 3476/63 (º), no estando consideradas las licencias con goce de sueldo acordadas con sujeción al artículo 29 del decreto Nº 8567/61 (=) para realizar estudios o trabajos en materia técnica, científica o profesional;

Que al respecto no puede desconocerse el carácter especialísimo, de excepción, que reviste este tipo de licencia, si se consideran los requisitos que deben cubrirse para su concesión, entre los que figura la pre-

//-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 1216.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 1508.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 1900.-
(=) Ver Digesto Administrativo Nº 1461.-

vía intervención de los organismos técnicos en la materia -Comisión Nacional de la Unesco o Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, según corresponda-, la obligatoriedad para el beneficiario de permanecer tres (3) años como mínimo en su cargo una vez reintegrado, y la presentación a la autoridad superior del organismo de un trabajo sobre la materia abordada;

Que las exigencias apuntadas hacen que el agente no se encuentre totalmente desvinculado de la Administración Pública, máxime si se tiene en cuenta que durante el tiempo que dura la licencia trabaja o adquiere conocimientos que resultarán de interés nacional;

Por ello, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- Agréguese al artículo 4° - apartado III - inciso c) del Régimen de Compensaciones aprobado por decreto N° 9252/60, lo siguiente: 6°) Licencias con goce de sueldo encuadradas en el artículo 29 del decreto N° 8567/61.

ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz (h)
Eduardo B.M. Tiscornia.

ACTO: DECRETO Nº 9.051/63.-

MATERIAS: SUELDO - GASTOS DE REPRESENTACION

Buenos Aires, 10 de octubre de 1963.-

Atento la conveniencia de fijar las remuneraciones de los señores Subsecretarios de los Ministerios y/o Secretarias de Estado en consonancia con las establecidas para los funcionarios superiores de la Administración Nacional,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- A partir del próximo ejercicio fiscal los señores Subsecretarios de los Ministerios y Secretarías de Estado percibirán como sueldo una suma igual a las tres cuartas partes de la que perciban por igual concepto los señores Ministros y Secretarios de Estado, y, en carácter de gastos de representación, la misma que corresponda a dichos funcionarios.

ARTICULO 2ª.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos.-

GUIDO - José A. Martínez de Hoz
Eduardo B.M.Tiscornia.-

ACTO: DECRETO-LEY Nº 9.279/63.-

MATERIAS: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - SUELDO - COMPENSACIONES - CONCEJO DELIBERANTE

Buenos Aires, 11 de octubre de 1963.-

Visto el expediente nº 21.232/63, por el que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires solicita se extienda a esa Administración el sistema de actualización y adecuación automática de las compensaciones que habrán de percibir las nuevas autoridades en virtud de lo dispuesto por el decreto-ley 5.535/63 (") para el orden nacional, y

CONSIDERANDO:

Que en el presente caso se dan las mismas razones que justificaron el dictado del decreto-ley citado, circunstancia que habla por sí sola de la necesidad de aplicar idéntido criterio en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;

Que para tener solucionado el problema para las próximas autoridades, procede fijar la compensación que habrán de percibir el Intendente Municipal y los Secretarios del Departamento Ejecutivo, por una parte y resolver por la otra, las retribuciones de los integrantes del H. Concejo Deliberante;

//-

(") Ver Digesto Administrativo nº 1934.-

Que para este último caso, el problema no puede resolverse sin dejar de considerar la situación especial de dicho Cuerpo frente a órganos deliberativos de importancia esencial a cuyos integrantes, por su estructura, el desempeño del mandato popular les ocasiona mayores gastos y sin embargo no gozan de compensaciones superiores a las que perciben los ediles de la Ciudad de Buenos Aires;

Que resulta equitativo, en esta ocasión introducir la corrección que permita armonizar todos los aspectos en juego;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- A partir del próximo ejercicio fiscal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las compensaciones de sus autoridades superiores serán las que se establecen en este decreto.

ARTICULO 2º.- El Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires percibirá una compensación, igual a la que por todo concepto corresponda a los Ministros y Secretarios de Estado.

ARTICULO 3º.- Los Secretarios del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires percibirán como sueldo las tres cuartas partes de la suma que corresponda al Intendente Municipal y en carácter de gastos de representación la misma proporción sobre los que resulten para dicho funcionario.

ARTICULO 4º.- Substitúyese el Art. 2º de la Ley nº 11.740, modificado por el artículo 1º de la Ley nº 15.278, por el siguiente:

//-

"Las funciones de miembros del Concejo tienen el ca-
"rácter de carga pública de la que nadie puede excusar-
"se bajo multa de cincuenta mil pesos moneda nacional ($
"50.000 m/n.).

"Los miembros del Concejo Deliberante percibirá, a-
"demás, para un sueldo equivalente al 55% de la compensa-
"ción que por todo concepto perciba el Intendente Munici-
"pal.

"El Presidente del H. Concejo Deliberante percibirá,
"además, para gastos de representación la misma suma que
"por dicho concepto corresponda a los Secretarios del De-
"partamento Ejecutivo".

ARTICULO 5º.- Los dos secretarios del Concejo Deliberante percibirán iguales retribuciones que las que por todo concepto reciban los miembros de dicho Cuerpo.

ARTICULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior y de Defensa Nacional.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

GUIDO - Osiris G. Villegas - José M. Astigueta.-

ACTO: RESOLUCION Nº 9.121/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL (Reglamento)

Buenos Aires, 25 de octubre de 1963.-

Visto lo solicitado por la Dirección General de Obra Social en el sentido de que se dejen sin efecto por el término de sesenta días los plazos establecidos en el artículo 16 de la resolución nº 7.078/57 (+), y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo informado por el referido organismo, existen solicitudes de afiliación presentadas con posterioridad al vencimiento establecido, en la resolución mencionada, con respecto a las cuales se ha acreditado que numerosos afiliados de la Obra Social no han tomado debido conocimiento de tal circunstancia dentro del plazo previsto en el recordado pronunciamiento;

Que, con la medida requerida, se evitaría la intranquilidad que experimentan numerosos agentes que no han pedido a tiempo la afiliación de sus familiares;

Que si bien en la inscripción que ahora se determina deben entenderse implícitamente comprendidos los casos establecidos en el artículo 18 de la referida medida, es conveniente dejar expresamente aclarado dicho tratamiento en la presente oportunidad;

Por ello y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 17 del decreto nº 21.644/56 (º), //-

(+) Ver Digesto Administrativo nº 176.-
(º) Ver Digesto Administrativo nº 110.-

EL SECRETARIO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1ª.- Facúltase a la Dirección General de Obra Social para suspender por el término de sesenta días a partir de la fecha, los términos y condiciones fijados por los artículos 16 y 18 de la resolución nº 7.078/57, debiéndose prestar en forma inmediata a partir de su inscripción, los servicios sociales a los afiliados cuya registración se encuentre en trámite o se tramite durante la vigencia de la presente.

2ª.- Comuníquese, tómese conocimiento por donde corresponda y archívese.-

Fdo. CARLOS A. GARCIA TUDERO

ACTO: RESOLUCION Nº 29/63.-

MATERIAS: REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS - OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1963

Visto la experiencia obtenida en la tramitación de solicitudes y posterior emisión de certificados de capacidad para participar en licitaciones, que la práctica ha demostrado y con el único propósito de evitar erróneas interpretaciones por parte de los inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas;

EL CONSEJO DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS
R E S U E L V E :

1ª.- A partir del día 1ª de noviembre de 1963, los inscriptos en el expresado Registro Nacional deberán ajustarse a las normas siguientes, para solicitar certificados de capacidad:

a) Las respectivas solicitudes deberán ser presentadas con no menos de dos (2) días hábiles laborables administrativos anteriores a la de la fecha de la licitación que se desee concurrir, para el caso de inscriptos cuyas capacidades de ejecución anual se hallen actualizadas.

//-

Transcurrido ese lapso, todo trámite que se realice en tal sentido será rechazado, no dándose curso a la respectiva solicitud.

b) Las empresas que no tuvieran su capacidad de ejecución actualizada, cuya gestión debe efectuarse dentro del plazo máximo de cinco (5) meses a contar de la fecha de cierre del ejercicio económico-financiero, no podrán solicitar certificados de capacidad sin cumplir con dicho requisito. A tal fin deberán presentar la documentación respectiva perfectamente en regla (planillas de Máximos Importes, Obras en Ejecución y Balance General y Plantel y Equipo), con no menos de cinco (5) días hábiles laborables administrativos, anteriores a la fecha de la licitación que deseen intervenir.

c) El formulario de"Obras en Ejecución" que es indispensable anexar a cada solicitud, con los compromisos en pie, públicos como de carácter privado, deberá confeccionarse a la fecha de la respectiva solicitud.

Si no hubiera transcurrido más de un (1) mes de la última declaración de obras en ejecución presentada y de no haberse incrementado los compromisos con la contratación de nuevos trabajos del carácter de los mencionados anteriormente, podrá dejarse establecido, por escrito tal circunstancia, al dorso de la solicitud, con fecha y firma autorizada de la empresa, sin cumplir con el requisito de agregación del formulario mencionado.

2ª.- Déjese constancia en Actas; solicítese la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República

Argentina; dése amplia publicidad y difusión y fecho; por la Secretaría Ejecutiva, cúmplase y archívese.-

Leopoldo R. Fernández - Edgardo Martínez - Enrique L. Banch - Alberto J. Aberastain - Enrique A. Conte Grand - S. Casimiro Cibrián - Oscar Terrevazzi - Jorge Fernández Barrio.-

ACTO: RESOLUCION GENERAL Nº 932/63.-

MATERIAS: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - IMPUESTO A LOS REDITOS - AGENTES DE RETENCION

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1963.-

Visto las disposiciones contenidas en el artículo 62, inciso ñ) de la Ley número 11.682 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), relativas a la deducción de "Las sumas invertidas en la suscripción directa de acciones de cooperativas eléctricas y de otras empresas que sean declaradas de interés nacional por el Poder Ejecutivo"; y

CONSIDERANDO:

Que el régimen de tributación actualmente estructurado para las rentas derivadas del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, propende sustancialmente a conjugar en manos del agente de retención, todos aquellos conceptos claros y simples que hacen en esencia a la real determinación de la materia imponible y, consiguientemente, a una cabal retención en la fuente del impuesto a los réditos cuyo ingreso precede;

Que frente a la franquicia que consagra la norma del aludido artículo 62, inciso ñ) de la ley, resulta incuestionable que su cómputo directo por parte del agente de retención constituye un efectivo aporte al cometido expuesto, al obviar la presentación de declaraciones juradas por parte de los contribuyentes que hubieren realiza

//4

do esa clase de inversiones, en procura de exteriorizar la incidencia o crédito fiscal que en cada caso de las mismas deriva;

Que en virtud de ello resulta procedente autorizar a los agentes de retención que paguen réditos comprendidos en los incisos a), d) y penúltimo párrafo del artículo 60 de la Ley 11.682 (t.o. en 1960 y sus modificaciones), a computar, además de las deducciones a que se refiere el artículo 155 de su reglamentación las inherentes a inversiones en suscripción directa de acciones de cooperativas eléctricas y de otras empresas que sean declaradas de interés nacional por el Poder Ejecutivo;

Por ello y en uso de las facultades que le confieren los artículos 8° y 31 de la Ley 11.682 (t.o. en 1960 y sus modificaciones).

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

R E S U E L V E :

1ª.- Los agentes de retención que paguen réditos comprendidos en los incisos a), d) y penúltimo párrafo del artículo sesenta de la Ley 11.682 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones), deducirán de las remuneraciones, además de los conceptos a que se refieren el artículo 155 de la reglamentación de dicha ley y la Resolución General n° 660 (R) del 24 de octubre de 1960, las sumas invertidas por los empleados en la suscripción directa de acciones de cooperativas eléctricas y de otras empresas que sean declaradas de interés nacional por el Poder Ejecutivo.

2ª.- A ese efecto, los beneficiarios de tales réditos requerirán de dichas entidades un certificado por el que se acredite el monto invertido en la suscripción directa de las acciones, indicándose en el mismo el número y fecha del decreto por el que se asigna a la emisora carácter de empresa de interés nacional.

//-

Dicho certificado deberá ser presentado al agente de retención, el que lo retendrá como justificativo de la deducción practicada.

3ª.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.-

Fdo. GREGORIO ANDRES BALLESTEROS

Centro de Documentación e Información

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
Presidencia de la Nación

Este documento fue digitalizado por el
Centro de Documentación e Información
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Ciudad Autónoma de Bs. As. 2016

http://cdi.mecon.gob.ar/